



LA SOCIEDAD DERROTADA

El desorden mexicano
del fin de siglo

Sergio Zermeno

Prólogo de Alain Touraine





siglo veintiuno editores, s.a. de c.v.

CERRO DEL AGUA 248, DELEGACION COYOACAN, 04310, MEXICO, D.F.

siglo xxi editores argentina, s.a.

LAVALLE 1634 PISO 11-A C-1048AAN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

primera edición, 1996

tercera edición, 2001

© siglo xxi editores, s.a. de c.v.

en coedición con el

© instituto de investigaciones sociales de la unam

ISBN 968-23-2009-7

derechos reservados conforme a la ley

impreso y hecho en México/printed and made in Mexico

ÍNDICE

PREFACIO, <i>por</i> ALAIN TOURAINE	vii
AGRADECIMIENTOS	I
1. PRESENTACIÓN	3
PRIMERA PARTE: DESIDENTIDAD Y DESORDEN	
2. MODERNIZACIÓN Y MODERNIDAD	11
3. DE LOS SESENTA A LOS NOVENTA: LA SOCIEDAD CIVIL MEXICANA	14
4. LAS FUENTES DEL DESORDEN SOCIAL	23
5. DESIDENTIDAD Y DESORDEN	28
6. FIN DEL ORDEN: TAMBIÉN EN LOS CONCEPTOS	37
7. DESARTICULACIÓN DELIBERADA	46
8. DESPOBLAMIENTO DE LO PÚBLICO	60
SEGUNDA PARTE: ESTADO Y POLÍTICA	
9. EL REGRESO DE LOS LIDERAZGOS PERSONALIZADOS	69
10. LOS ORÍGENES SOCIALES DE UNA CULTURA ESTATAL	73
11. EL ESTADO FUERTE	79
12. EL ESTADO POPULAR NACIONAL	84
13. EL ESTADO CONTRADICTORIO: LA DOBLE LÓGICA POPULISMO-DESARROLLISMO	87
14. EL ESTADO AUTORITARIO DE LA GLOBALIZACIÓN POLARIZANTE (¿TRÁNSITO A LA DEMOCRACIA?)	90
15. LOS INTELLECTUALES Y LA BUROPOLÍTICA	96
16. LA IDEOLOGÍA DEL NEOLIBERALISMO DEPENDIENTE	104
17. REVOLUCIÓN, CONCERTACIÓN E IDENTIDAD	115
18. LOS INTELLECTUALES, EL ORDEN Y EL DESORDEN	120
19. DÉFICIT FISCAL O DESBALANCE CON LA NATURALEZA?	124
20. EL PARTIDO Y EL ESTADO	126
21. EL CARDENISMO	129
22. ATOMIZACIÓN Y FUGACIDAD DE LAS IDENTIDADES	133
23. LA DICTADURA PERFECTA	135
24. ¿UN CONTRATO SOCIAL PARA LOS MEXICANOS?	145
TERCERA PARTE: ACCIÓN POLÍTICA Y CONDUCTAS COLECTIVAS	
25. ¿LA SOCIEDAD QUE SE ORGANIZA?	157
26. EL LEVANTAMIENTO ZAPATISTA	159

27. LA CUESTIÓN DE LA TIERRA EN CHIAPAS	164
28. <i>MANY MEXICOS</i>	167
29. CHIAPAS, LO LOCAL Y LO NACIONAL	171
30. EZLN: DEL MOVIMIENTO SOCIAL A LA GUERRA DE GUERRILLAS	173
31. ¿TAMBIÉN DESDE EL ZAPATISMO?	177
32. AUTONOMISTAS Y GLOBALISTAS: LA NUEVA LUCHA PREMARXISTA	184
33. LA CUARTA DECLARACIÓN DE LA SELVA Y EL FUTURO DE LA OPOSICIÓN EN MÉXICO	191
34. LOS TRABAJOS DE HÉRCULES	210
35. ¿ORDEN O DESORDEN?	213
36. DE SEDESOL A SEDENA: LA GENERACIÓN DEL CAOS	216
37. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS	219
BIBLIOGRAFÍA	233

PREFACIO

ALAIN TOURAINE

Al terminar la década perdida de los años ochenta, América Latina vivió algunos años de esperanza económica y política. Durante esos años (1990-1994), la idea dominante del pensamiento latinoamericano fue la de la transición. El regreso de los capitales extranjeros y, en consecuencia, cierto alivio de los efectos de la deuda externa, una tasa de desarrollo con frecuencia elevada, la caída de las dictaduras militares en el Cono Sur, al igual que la idea norteamericana de crear una vasta zona continental de libre comercio, parecían mostrar que América Latina, liberada tanto del populismo como del autoritarismo militar antipopulista, se inscribiría en el modelo que algunos anunciaban como único: economía liberal y globalizada, democracia parlamentaria y tolerancia cultural.

Es verdad que numerosos sociólogos durante este periodo, desde Pablo González Casanova hasta Fernando Calderón o Eugenio Tironi, más allá de sus diferencias analíticas, han expresado puntos de vista mucho más pesimistas y han opuesto a la teoría de la transición lo que llamaron un análisis de la crisis e incluso de la decadencia. Pero no se escuchó a los sociólogos, pues la atención fue monopolizada por el discurso de los economistas entusiasmados con la apertura internacional de la economía y por dirigentes políticos que hacían un llamado, en México sobre todo, a una modernización política que terminaría con los restos degradados del sistema anterior.

En medio de este clima, en términos generales optimista, estalló la crisis económica mexicana rápidamente seguida por una crisis política, y ambas adoptaron formas extremas y dramáticas. Al mismo tiempo descubrimos que Colombia, detrás de su prolongado crecimiento económico, en realidad escondía una plena descomposición social y política, mientras las revueltas de Caracas revelaban el agotamiento de una sociedad que jamás supo transformar el oro del petróleo en desarrollo nacional.

En pocos meses el clima económico, político e intelectual del

continente cambió. Esta mutación brutal y el remplazo de la confianza por la angustia han vuelto a sacar a la luz la obra de Sergio Zermeño. Éste, que había aportado la explicación más interesante de la crisis de 1968 en México, pareció después quedar aislado, en parte como consecuencia de su participación en acciones sindicales en la UNAM que crearon más confusión que renovación de ideas y que resultaron más defensivas que innovadoras. El libro que vamos a leer presenta de manera renovada los trabajos sustentados por el autor en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París con los que obtuvo su "habilitación para dirigir investigaciones" (título que ha remplazado al antiguo *doctorat ès-Lettres*), y demuestra que Sergio Zermeño, más temprano y de manera más profunda que la mayor parte de los sociólogos, ha abordado frontalmente las causas, las formas y las consecuencias de la crisis fundamental que abate a México y al conjunto del continente latinoamericano.

Si dejamos de lado las expresiones deliberadamente polémicas, me parece que la reflexión de Zermeño es muy abierta, no dogmática, al extremo de situarnos algunas veces ante posibilidades de interpretación difíciles. Pero algunas de las interrogantes ante las que nos coloca este libro no demuestran la debilidad de un pensamiento sino, por el contrario, la necesidad y la extrema dificultad de proponer un análisis coherente y en consecuencia la dificultad de contribuir a lo que con razón anhela Sergio Zermeño: la reconstrucción de actores sociales en un país que los ha hecho desaparecer cada vez más a medida que se ha ido imponiendo la política neoliberal.

Comencemos con la interrogación central: ¿cuál es la naturaleza de la crisis? En efecto, en más de una ocasión Zermeño denuncia a la política neoliberal de haber destruido a las pequeñas empresas que trabajan para el mercado doméstico, al movimiento sindical, a una gran parte del campesinado e incluso a la intelligentsia de izquierda.

Pero no resulta difícil proponer otras interpretaciones, si no necesariamente opuestas, por lo menos de una tonalidad diferente. En todo el mundo y no solamente en América Latina, podemos observar el agotamiento, a partir de los años sesenta y sobre todo setenta, de aquellos estados movilizados que habían desempeñado el papel principal durante el periodo de reconstrucción nacional después del fin de la segunda guerra mundial, estados democráticos o no, comunistas o socialdemócratas, nacional-populares o nacio-

nalistas poscoloniales. En todas partes la movilización global, a la vez económica, social y nacional, se fue degradando bajo los efectos de la burocratización, el clientelismo, la corrupción, la consolidación de los privilegios adquiridos y la ineficacia inherente al proteccionismo económico. En América Latina en particular, asistimos en esa época a la desaceleración del crecimiento e incluso al estancamiento del Cono Sur, y vimos cómo los regímenes nacional-populares eran desbordados por un populismo revolucionario que trajo consigo el regreso de los golpes de Estado militares en Brasil, después en Argentina, y algunos años más tarde en Chile, en Uruguay y una vez más en Argentina. En México después de una última tentativa nacional-popular dirigida por el presidente Echeverría, la llegada de los recursos derivados del petróleo trajo consigo una profunda corrupción del régimen mientras, en su momento, el presidente De la Madrid se empeñó en destruir desde arriba el poder del PRI apoyado en una joven tecnocracia; dicha política sería llevada al extremo por el presidente Salinas, tanto hacia el neoliberalismo, como hacia la presidencialización del régimen y la destrucción del PRI.

A estas dos explicaciones agreguemos una tercera a la que siempre he dado tanta importancia como a las anteriores: la extrema debilidad de los actores sociales en economías duales en las que el sector informal no deja de crecer y provoca una emigración masiva tanto en México como en América Central y en el Caribe. El continente entero parece estar constantemente dominado por la separación entre grupos revolucionarios —que hablan en nombre de los excluidos, que recurren a la violencia y se debilitan por escisiones internas, ideológicas o tácticas— y las "masas" populares heterónomas, manipuladas por líderes y partidos políticos, o incluso, como en la tradición boliviana o en el mismo México, por dirigentes sindicales que son más bien actores del sistema político que animadores de movimientos sociales. ¿Cómo no sorprenderse por el hecho de que durante la década perdida, mientras se deterioraba gravemente la situación de las clases populares, los movimientos sociales hayan sido tan débiles y la confianza depositada en los movimientos urbanos en Santiago, en Buenos Aires, en Brasil e incluso en México después del terremoto de 1985, se haya desvanecido, al tiempo que perdían influencia las comunidades eclesiales de base en Brasil y las diferentes expresiones de la Teología de la Liberación?

No basta decir que las causas económicas, políticas y sociales de la crisis son tan interdependientes que necesariamente se acumulan desatando una crisis global. Esta idea es incluso peligrosa, puesto que conduce a conclusiones contrarias a la realidad observable. Y es que si la crisis es global, la única respuesta posible es la revolución. Conclusión a la que llegaron Sendero Luminoso en Perú y las guerrillas en Guatemala, que generaron reacciones autoritarias brutales y un extremo debilitamiento de las fuerzas populares.

Es necesario que el observador le dé prioridad a uno de los elementos del análisis y a partir de ahí piense cuáles son sus consecuencias para la acción social y política, verificando, en la medida de lo posible, sus hipótesis al compararlas con la realidad observable. Formulemos entonces tres estrategias posibles para el análisis y la acción:

- la primera da prioridad a la globalización de la economía y a la destrucción de las categorías económicas creadas por la sustitución de importaciones. Esto conduce a la exigencia de una nueva política nacionalista que se apoya en una tradición que fue particularmente fuerte en Brasil y en México;
- la segunda da prioridad a la democratización y más precisamente a la construcción de un sistema político representativo. Ésta es la vía que Chile privilegió, y el principal éxito del presidente Aylwin fue el haber reincorporado al sistema democrático a una gran parte de la derecha pinochetista lo mismo que a la gran mayoría de la izquierda gracias a la concertación, al tiempo que el partido comunista y la extrema izquierda perdían mucha de su influencia;
- la tercera busca ante todo la construcción de movimientos sociales que escapen por igual al aislamiento de las guerrillas de tipo colombiano y a la heteronomía frente a los dirigentes políticos que, de manera significativa, ha dominado en la historia mexicana.

Es evidente que no existe respuesta simple y clara a esta interrogante; y sin embargo es indispensable elegir el elemento estratégico central del análisis si queremos ir más allá de la simple descripción o de una generalización que cree más confusión que claridad. No es fácil identificar la respuesta de Sergio Zermeno, pero él aporta, me parece, elementos indispensables de análisis y en esa medida nos ayuda en esta elección tan decisiva como difícil.

Yo personalmente propongo la siguiente respuesta: la prioridad está en la construcción de un sistema político democrático y éste no puede existir sin la transformación de los excluidos y de las víctimas en movimientos activos que busquen *ante todo* una transformación radical del sistema político, es decir, la creación de una democracia representativa. Esta respuesta combina así los factores de análisis segundo y tercero, pero dándole el lugar central al segundo, el que concierne al sistema político.

La anterior se opone a aquella otra respuesta que otorga un papel central a las iniciativas del capitalismo internacional y en consecuencia a la necesidad de reforzar al Estado nacional.

Al formular estas dos posiciones opuestas -aunque tanto la una como la otra coherentes y alejadas de los llamamientos irresponsables ya sea a la "base", a la revolución o a la guerrilla- no creo ceder a los debates que agitan la vida intelectual y política de mi país, Francia. Pero estoy convencido de que uno de los efectos de la globalización es que nos obliga a analizar a todos los países del mundo con los mismos instrumentos generales de análisis, lo que evidentemente no nos exime de estudiar cada situación particular. Tomemos como ejemplo lo que se hizo a principios de siglo: frente a la realidad y a la temática del imperialismo, que tenía más o menos el mismo contenido que lo que hoy llamamos globalización, los marxistas, y en particular Lenin, desarrollaron análisis coherentes en relación tanto con los países capitalistas centrales como con los países colonizados. De manera análoga -lo que no implica ninguna continuidad ideológica-, observo que en todos los países se presenta la disyuntiva entre lo que en Francia llamamos los republicanos y los demócratas. Los republicanos son aquellos que apelan al Estado y a la nación en contra del capitalismo internacional y las leyes del mercado. Los demócratas son aquellos que hacen un llamado a una movilización social que sea capaz de abrir el sistema político para la defensa de las categorías explotadas, excluidas o en decadencia.

La razón principal por la cual yo me ubico en el campo de los demócratas y por la cual emito un juicio muy negativo sobre las tesis republicanas, es porque al dársele prioridad a la defensa del Estado, tanto en América Latina como en Europa occidental, se protege ante todo a los grupos centrales ligados a las actividades económicas subvencionadas, o a las categorías sociales protegidas por los estatus profesionales garantizados por el propio Estado.

Esto se traduce en una fragmentación creciente de la sociedad entre un vértice internacionalizado, un centro protegido por el Estado y una base abandonada al fracaso, a la descomposición y a la pobreza. Sergio Zermeño habla con mucha fuerza del México roto y tiene razón al no confundirlo con el México marginado de las comunidades que participan poco en la vida económica nacional. Porque comparto su análisis llego a la conclusión de que el objetivo principal es la transformación de actores en descomposición en actores capaces de formular reivindicaciones. El peligro aquí es el de caer en la trampa en que se han desgastado los movimientos de base mexicanos de los años setenta: el sectarismo revolucionario, el aislamiento y la incapacidad de oponer resistencia ante las iniciativas del Estado, ya se trate de la represión violenta, de la corrupción o del neopopulismo de Pronasol.

Las dos posiciones sintéticas que acabo de oponer entre sí, debaten en torno a muchísimos problemas, pero principalmente en torno al papel de los partidos políticos. Una y otra, me parece, son hostiles a los partidos. Los republicanos, debido a que en Francia creen en el Estado y en América Latina en el neopopulismo (dirigido a menudo por ideólogos neomarxistas más políticos que sociales); los demócratas porque denuncian, con justificada razón, la colusión entre los partidos, el Estado y un sistema seudorreformista de control de la población por parte de las fuerzas económicas dirigentes.

Aquí de nuevo hay que correr el riesgo de tomar posición claramente. La comparación entre los países de América Latina me parece demostrar que el reordenamiento económico y político ha podido realizarse ahí donde el antiguo sistema nacional-popular o sus formas degradadas habían sido liquidados, donde la separación entre lo político, lo económico y lo social había sido mejor lograda, a menudo, pero no siempre, inmediatamente después de crisis políticas dramáticas y de un largo periodo de violencia ejercida por el Estado, como fue particularmente el caso chileno.

México, Colombia, Venezuela, Ecuador, bajo formas muy diferentes, no han eliminado todavía sus sistemas políticos en ruinas. La prioridad está en este punto: todo aquello que puede convocar a un nuevo populismo es peligroso; por el contrario, la movilización de las fuerzas populares debe ser independiente de los partidos políticos y tender a la democratización de un sistema político que ya no tiene funciones representativas. Una acción de este tipo pue-

de fracasar, encerrarse en la confusión de los frentes populares o de las coaliciones entre grupos de base. Pero uno de los méritos de Sergio Zermeño es el de mostrarnos la gravedad de la crisis que golpea a México y que puede conducirlo al caos.

Es por ello por lo que el tema de la democratización no puede ser separado en este país del tema nacional. Y es en este punto donde coinciden las dos posiciones que hasta aquí he yuxtapuesto. El neoliberalismo impone la idea de que la economía mundial debe ser autorregulada, sin la intervención de políticas nacionales ni de demandas sociales que ya estarían suficientemente tomadas en cuenta por el juego del mercado. Esta afirmación debe ser rechazada tajantemente. Una economía no regulada por intervenciones sociales y políticas no es una economía libre, es una economía salvaje. En Europa nos tomó un siglo a partir de la invención de la máquina de vapor introducir un mínimo de intervención pública y sindical en el ámbito del trabajo, y en consecuencia nuestro siglo XIX se caracterizó por la miseria obrera y la crisis urbana. ¿Quién puede desear que la globalización signifique la reproducción en el plano mundial de la proletarización europea del siglo XIX o de la violencia antipopular que fue ejercida en la Unión Soviética?

La conciencia nacional es fuerte en México y desde hace más de cien años se ha nutrido de sentimientos antiimperialistas. La confluencia de la protesta de los excluidos, de la voluntad democrática y de la conciencia nacional es lo único que puede crear la dinámica política que hará compatibles la apertura internacional de la economía y la posibilidad de recrear formas nacionales de integración social gracias a la lucha contra las desigualdades y la exclusión crecientes.

A Marina y a Leonora

AGRADECIMIENTOS

No hubiera podido llevar a término el presente libro sin el valioso apoyo de las siguientes personas e instituciones. En primer lugar y muy especialmente quiero agradecer el cuidado con que el profesor Daniel Pecaute revisó durante varios años los documentos que fueron conformando el volumen. No estoy seguro de haber logrado fundamentar y ordenar mis ideas y argumentos con el rigor con que siempre me lo sugirió, y aunque la actual versión ha ganado infinitamente gracias a su paciencia, nunca sentí haberlo convencido del todo con mis ideas sobre la sociedad mexicana; me quedo con la sensación de dejar una polémica inacabada y con un rico futuro. Igualmente, han sido para mí de gran ayuda los valiosos comentarios de Yvon Le Bot, Alain Touraine, Julio Moguel, Claude Bataillon, George Couffignal, Isabel Yépez, Frédéric Debuyst, Horst Kurnitzky, Neil Harvey, Alberto Olvera, John Bailey, Héctor Díaz-Polanco, Paulo Krischke, Pilar Gaitán, Manuel Antonio Garretón y Pierre Michel Rosner.

Quiero agradecer a Marina Fe Pastor lo que desde hace mucho tiempo se ha convertido en unos aparentemente "ligeros" comentarios durante nuestros desayunos; comentarios que siempre terminaban por replantear de manera devastadora lo pensado y lo escrito por mí en esos días.

Mi colega Aurelio Cuevas ha sido muy paciente ante lo que se me va ocurriendo y que siempre quiero hacer pasar por hipótesis originales. Él regresa cuidadosamente sobre esas ocurrencias, se detiene, recuerda que eso ya fue dicho mucho mejor por otras personas o que ha sido perfectamente refutado. Le expreso, pues, mi profundo agradecimiento por su colaboración constante.

Agradezco igualmente a María Ocos y a Alejandro Reza por la excelente corrección del manuscrito en español e igualmente a Anne de Waele y a Philippe Cheron por la maravilla de permitirme reconocer mis ideas en otro idioma.

La Fundación Fulbright me otorgó una beca para estar algunos meses, al inicio de los años noventa, en el "Program on Mexico" de la Universidad de California en Los Ángeles. Ahí pude entender

muy rápido, entre acaloradas discusiones y viajes con James Wilkie, los límites del proyecto globalizador: la desidentidad y el desorden que acechaban a un México inocentemente promotor del libre comercio. Muchas gracias a Jim y a esas instituciones.

A la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), de la UNAM, y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología les agradezco el apoyo financiero e institucional que me brindaron para ir y venir por este país tratando de entender la acción social viva. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM ha sido mi casa desde 1966, desde aquellos años en que, con mis colegas becarios, nos robábamos sus vehículos para apoyar el levantamiento estudiantil del 68. El Instituto sigue vivo, recibiendo, desde lo alto, las presiones de Seguridad Nacional, por estar en el centro de una institución neurálgica para el orden mexicano como es la UNAM y teniendo que atender, hacia abajo, las demandas de una sociedad en crisis y en descomposición. Pero su vocación social languidece o se refugia en el estudio de "la transición pactada": desde que estalló el alzamiento zapatista, el 1 de enero de 1994, sólo se ha llevado a cabo un acto para discutir públicamente ese evento que ha conmovido la "historicidad" de los mexicanos: fue con motivo de una visita de Alain Touraine hacia finales de 1995, en la que Pablo González Casanova presentó un documento, en torno a las causas probables del conflicto chiapaneco. Sea como sea, estoy agradecido de seguir perteneciendo a esa familia y ya tendremos tiempo para recomponer nuestras afinidades en los difíciles momentos que se nos avecinan.

1. PRESENTACIÓN

El hecho de que nosotros hayamos decidido confiar nuestra vida y libertad en el lugar del diálogo, a las ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES es porque hemos visto en ellas el futuro al que aspiramos. Un futuro en el que la sociedad civil con su fuerza de justicia verdadera haga innecesarias no sólo las guerras sino también los ejércitos, y un futuro en el que los gobiernos, cualesquiera que sea su tendencia política, tengan por encima de ellos la vigilancia constante y severa de *una sociedad civil libre y democrática*.

Carta del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a las ONG, 20 de febrero de 1994.

El contenido de este epígrafe ha sido repetido en muchos otros comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y hay que tomarlo con seriedad. En este libro nos proponemos evaluar con todo cuidado las verdaderas potencialidades de esa sociedad civil en la que los zapatistas, y curiosamente muchos otros grupos de mexicanos, ven una esperanza de redención para el país y para la democracia en México, comenzando por los grupos indígenas que se sienten al borde del aniquilamiento por su marginación, por su pobreza extrema, por su declarada inutilidad frente a la globalización y el TLC, y que han preferido la muerte violenta antes que la inanición. Todo esto nos exige reflexionar, porque mientras ellos ven en los ciudadanos organizados de la sociedad civil una esperanza futura, la ciudadanía mexicana, los sectores mejor integrados a la modernidad, vimos en el levantamiento chiapaneco también una esperanza de cambio, de relajamiento de la dominación estatal, de participación de la sociedad civil. ¡Qué paradoja!

Una enseñanza que nos ha dejado el neoliberalismo es que las mismas políticas económicas han tenido resultados diferentes según la herencia social y política de las naciones en donde han sido

aplicadas (referentes fundamentales que el neoliberalismo tendió siempre a despreciar).

Pasado el *shock* del ajuste de los años ochenta y la reestructuración subsecuente, y ante resultados tan disímolos en cada caso, sentimos la necesidad de regresar a los referentes básicos de las ciencias del hombre: los efectos sociales, humanos y políticos de la globalización no han sido tan desfavorables en las sociedades latinoamericanas de modernización temprana como Chile, Argentina o Uruguay, territorios vacíos desde el origen, con alta inmigración, alta urbanización y bajo mestizaje (a los que podríamos agregar, de acuerdo con esta última característica, los casos de Colombia y Costa Rica), como en aquellas sociedades de modernización tardía y deficiente que coinciden con territorios poblados por fuertes culturas indígenas, hoy demográficamente desbalanceadas (México, Guatemala, Perú, Bolivia, Ecuador...).

No se está afirmando, con esto, que sólo las culturas de origen europeo y sus emigrantes han tenido la cualidad de generar actores sociales robustos capaces de dinamizar las fuerzas de la industrialización, la ciencia y la técnica, porque lo cierto es que también Japón, Corea y Taiwán lo han logrado. Pero lo que sí se está sugiriendo es que ahí donde los procesos de modernización no se apoyan en los agentes sociales ni los fortalecen, los resultados por momentos halagüeños de tales procesos no logran una continuidad en el tiempo (Venezuela y Ecuador, a pesar de las inversiones públicas permitidas por la renta petrolera, no han sido capaces de generar esos agentes dinámicos en lo social, y México parece incluso dismantelarlos despiadadamente detrás de su tan publicitada inserción en la economía norteamericana).

Así que la combinación de un Estado autoritario o, sin ir tan lejos, de un Estado rector y con recursos, con una política neoliberal ortodoxa, no es suficiente si no presupone y fomenta el robustecimiento de lo social, de la "densidad" social (asunto que precisamente intentaremos poner en claro en este ensayo). La lista de los casos exitosos de la inserción transnacional con Japón, Corea, Chile, Taiwán, España y, más discretamente, Uruguay, Colombia, Portugal, Costa Rica etc., le confieren a estas afirmaciones cierto respaldo.¹ Claro está que en la lista anterior está confundida,

¹ Sin afán demostrativo, pues estamos tratando de fenómenos de larga duración,

por una parte, la acción desde el Estado (autoritario e interventor, propio de los cuatro primeros ejemplos), y por otra, el grado de modernidad social, de densidad de los actores en el plano de la sociedad, que caracteriza a toda la lista.

De manera que aquellos analistas que han establecido recientemente que el éxito del neoliberalismo dependiente es mayor cuando se acompaña con un Estado autoritario, tienen razón solamente a medias. Viene al caso recordar que lo mismo vale para los países que llevaron adelante su industrialización, se modernizaron y se insertaron transnacionalmente en la llamada primera periferia del capitalismo: la "revolución desde lo alto" efectuada por el Estado alemán condujo rápidamente al capitalismo sólo en combinación con una clase industrial, unos sindicatos, una pequeña burguesía y unas capas asalariadas en ascenso constante; y lo mismo habría que decir de Italia, incluso si la presencia del Estado autoritario fue meramente pasajera. Hoy nos queda claro que la vía soviética basa su fracaso en la destrucción sistemática, aunque nunca acabada, de los actores e instituciones intermedios, en la destruc-

viene al caso recordar algunos datos sobre el desempeño de los denominados ejemplos latinoamericanos exitosos: el producto interno bruto per cápita de Chile creció acumuladamente entre 1981-1990 12%, y entre 1991-1993, 18%. Colombia había crecido per cápita 18% de 1981 a 1990 y 4.8% de 1991 a 1993. Uruguay lo hizo 10.7% entre 1991 y 1993, aunque en los ochenta había caído 2.8%. Costa Rica creció 7.4% de 1991 a 1993, aunque había caído 5.8% en los ochenta. Argentina creció, durante 1991-1993, años de aplicación intensiva del ajuste, 21% (a pesar de que la década perdida 1981-1990 la había hecho decrecer 20%).

En el otro extremo tenemos al Perú con un PNB per cápita negativo de -29% entre 1981 y 1990 y -0.5% entre 1991-1993; a México, que perdió 6.4% durante 1981-1990 y resultó nulo entre 1991 y 1994, volviendo a ser negativo en -7% en 1995; a Bolivia que había perdido 21.2% en los ochenta y sólo recuperó 3.2% de 1991 a 1993. Lo mismo Ecuador: -6.6% entre 1981 y 1990 y 2.9% de 1991 a 1993. En contraste, entre 1980 y 1991 el promedio anual de crecimiento del PNB per cápita en Corea del Sur fue de 8.7%, en Hong Kong de 5.6% y en Singapur de 5.3% (datos tomados de Roberto Korzeniewics [1994], "The deepening differentiation of states, enterprises, and households in Latin America" [proyecto], Univ. of Maryland). En el otro plano, el de las instituciones políticas, resulta ilustrativo que mientras el promedio de "volatilidad electoral" (cambio en las preferencias partidistas) en los países occidentales europeos es del 8%, en América Latina alcanza el 30%, pero países como el Perú llegan al 54% y el Brasil al 41% (Andreas Schedler, 1993, "Under- and over-institutionalization" [proyecto], Institute of Advanced Studies, Viena).

ción de ese tejido denso de lo social, y podemos incluir en este fenómeno y con diferentes tonalidades a los países bajo su dominación.

Un Estado fuerte de origen ancestral, como el mexicano, aunque se mostró durante un periodo (1985-1995) aparentemente muy eficaz al integrar su *economía* a la globalización, a la larga resultó nefasto al desarticular violentamente el tejido social intermedio, de por sí endeble; es decir, al alejar a sectores mayoritarios de su *sociedad* de los estándares occidentales en lo referente a niveles de vida, justicia social y conductas democráticas basadas en el fortalecimiento de la ciudadanía. En casos como éste, la propensión hacia la desorganización generalizada o, para hacer frente a ella, la propensión hacia el regreso de los liderazgos personalizados y del verticalismo manipulador (gracias al control de los medios masivos de comunicación y las elecciones especialmente) parece espectacular y los analistas comienzan a coincidir en que no estamos frente a un hecho pasajero, producto de la inestabilidad generada por un cambio rápido de modelo, sino que parece más bien tratarse de un fenómeno creciente de desordenamiento en lo político, y exclusión y debilitamiento en lo social, que es inherente al propio modelo globalizador cuando se aplica, como en un círculo vicioso, en sociedades con extrema desarticulación.

No es evidente que los ejemplos aludidos de globalización relativamente exitosa mantengan su ritmo, ya que la competencia puede ser feroz debido a la entrada de nuevos países al mercado mundial; pero si hemos de creer a economistas como Álvaro Díaz, a politólogos como Norbert Lechner o a sociólogos como Manuel Antonio Garretón o Eugenio Tironi, es un hecho que una sociedad como la chilena está fortaleciendo a su empresariado medio y, sobre todo, está fomentando entre sus sectores integrados una mentalidad empresarial inclinada hacia la innovación y hacia la búsqueda de "nichos" competitivos nacionales y extranjeros. E igualmente sería cierto que si bien la idea despectiva de "democracias delegativas" (O'Donnell, 1992) ha sido empleada para analizar este ejemplo, no deja de ser palpable que las instituciones políticas chilenas están logrando continuidad e, incluso, que las organizaciones, partidos y líderes políticos son más o menos los mismos y llevan los mismos nombres hoy que en la primera mitad de nuestro siglo, por no decir desde el siglo pasado. Las estadísticas nos muestran incluso que el modelo chileno estaría siendo capaz de incorporar,

aunque lentamente, a los sectores excluidos o, digamos, a agregados que se encuentran viviendo en la pobreza y en la extrema pobreza.²

² Véase Álvaro Díaz, "Tendencias de la reestructuración económica y social en América Latina", ponencia presentada en la conferencia "Social change in Latin America: Toward the year 2000", University of Maryland, abril de 1994, en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, 1994.

PRIMERA PARTE

DESIDENTIDAD Y DESORDEN

2. MODERNIZACIÓN Y MODERNIDAD

Lo que aquí trataremos de mostrar es por qué el caso mexicano se está distanciando con respecto al paradigma exitoso antes referido. Trataremos de poner en claro que la integración transnacional ha representado un severo desmantelamiento de esos actores colectivos con cierta consistencia que los países con más fuerte mestizaje de la América Latina habían venido construyendo, con muchas dificultades, durante el proceso de urbanización e industrialización entre 1940 y 1980 (etapa sustitutiva de importaciones). En otras palabras: lo que a partir de los años ochenta se llama en México modernización (definida como globalización y competitividad transnacional) ha resultado un ataque furibundo contra los actores de nuestra *modernidad*: ¿modernización contra modernidad?

En tal contexto, nuestra globalización se ha caracterizado ante todo por una destrucción sistemática de los más destacados actores de la sociedad civil, ya se trate del empresariado de la etapa sustitutiva de importaciones, de las capas medias de asalariados públicos, del proletariado, de los sectores intermedios –especialmente de la burguesía mediana y pequeña–, sin olvidar, en fin, los estragos a las estructuras sociales más sólidas del medio campesino (aunque no se trate ya de actores exclusivos de la modernidad). Ha significado, junto con ello, la destrucción de las instituciones y de los espacios de intermediación entre esos actores sociales y el Estado: sindicatos, organizaciones gremiales, partidos, universidades, medios de comunicación autónomos e identidades de lo social básico como las asociaciones restringidas, los movimientos sociales, etcétera.

Mientras que el proceso de industrialización clásico se hizo en medio del desordenamiento del campesinado y la anomia de los sectores miserables de las grandes ciudades, pero con el ascenso de los actores *sociales* de la modernidad (burguesía, proletariado, pequeña burguesía, sectores asalariados...), el proceso de “modernización” de la globalización subordinada en las sociedades mestizas está implicando el desmantelamiento de los actores modernos en favor de un núcleo reducido y poderosísimo de empresas trans-

nacionales asociadas a las cúpulas del poder político estatal y en medio de la desorganización y pauperización crecientes que hoy caracterizan ya a siete de cada diez latinoamericanos.

La crítica central al Tratado de Libre Comercio y a la integración globalizante que lo respalda es, pues, que constituye un *disolvente poderosísimo de lo social*: de las identidades colectivas y los espacios de interacción comunicativa y de formación crítica de lo público. En lo fundamental esta pérdida de lo público no está ligada a la atomización en torno al consumidor individualista-posesivo propia de las sociedades centrales, sino a la incultura y la miseria masificadas con formas organizativas verticalizadas. La disolvenencia de la sociedad se explica aquí, y de manera mucho más radical que en los países desarrollados, por la conjunción de: a] una creciente masificación y pauperización producto de los cambios acelerados del nuevo modelo; b] un desmantelamiento acelerado de los actores de la sociedad civil, particularmente de los actores de la modernidad; c] un refugio en la vida privada por parte de los sectores integrados al consumo y a la modernización, convencidos ideológicamente de que la culpa de la crisis de la época vino de las intervenciones centralizadas y la vida republicana (populismos, socialismos, estados de bienestar); y, en fin, d] una acción deliberada desde los aparatos estatales que, conscientes de la precariedad del orden en esta situación de cambio acelerado y masificación, actúan en todos los frentes posibles para desmantelar identidades colectivas inconvenientes, ya se trate de gremios, partidos, organizaciones sociales y políticas o de universidades, medios de comunicación, etcétera.

Hay sin embargo un asunto que vuelve sumamente ambigua la discusión latinoamericana y mexicana en torno a estas cuestiones. Sucede que al mismo tiempo que constatamos esta situación palpable de desmantelamiento social y pauperización crecientes, encontramos una importante corriente de pensamiento que busca demostrar, con argumentos también atendibles, que a pesar de todo estamos *transitando* hacia mejores formas democráticas e incluso estamos *consolidando* comportamientos, instituciones y prácticas cada vez más democráticas. Esta teorización se asocia, como si se tratara de un mismo fenómeno, con el fin de las dictaduras del Mediterráneo europeo (Portugal, España y Grecia); con la retirada de los regímenes militares de América del Sur (Brasil, Argentina, Chile, Uruguay); y refuerza su argumentación haciendo

referencia a las transformaciones de los países del Este europeo con el fin de los autoritarismos estatales y de los partidos únicos apoyados por la URSS.

En este libro propondremos algunos elementos para entender cómo es posible que ambas argumentaciones puedan coexistir e incluso en qué punto ambas visiones pueden ser complementarias. Intentaremos razonar sobre los mecanismos que han permitido que regímenes autoritarios hayan podido ser sustituidos por formas más democráticas (al menos en lo que respecta a los mecanismos formales de la representación), en un periodo de reajuste económico caracterizado por una creciente desigualdad social; ¿cómo se mantiene un orden basado en una *democracia política* cuando la creciente desigualdad nos aleja de la *democracia social*?

3. DE LOS SESENTA A LOS NOVENTA: LA SOCIEDAD CIVIL MEXICANA

Nos parece que la apreciación del zapatismo, citada en el epígrafe inicial de este trabajo, constituye un buen punto de partida. Comencemos entonces preguntándonos por la sociedad civil mexicana con una perspectiva un poco más amplia, por ejemplo a partir del dramático movimiento estudiantil del 68 cuyo cuarto de siglo estábamos conmemorando cuando nos despertó el México profundo.

Creo que la siguiente idea puede guiarnos: los años próximos al 68, los sesenta y los setenta, nos presentaron un panorama sociopolítico en el que los actores de nuestra modernidad vivieron su mayor embarnecimiento, o digamos, su menor debilidad. En efecto, situándonos al margen de la moda posmoderna, nos parece pertinente afirmar que en esos dos decenios México vio surgir los movimientos obreros de mayor autonomía, las protestas con más consistencia venidas de las clases medias (el 68 en su centro), y las mayores afrentas al vértice estatal desde los fortalecidos grupos burgueses nacionales y regionales.

Sin pretender hablar de causalidad, ni de "agudización de contradicciones", lo cierto es que el movimiento ferrocarrilero de fines de los cincuenta, con sus presos políticos (Vallejo) reivindicados por el 68 estudiantil, expresa la misma necesidad de autonomía que la Tendencia Democrática de los electricistas con Rafael Galván y que el vigoroso sindicalismo independiente de los setenta; de igual forma el movimiento del magisterio con Otón Salazar reivindicaría la autonomía organizativa y política que caracterizara al movimiento médico del 65, a los movimientos estudiantiles a lo largo de aquel decenio y al sindicalismo universitario de trabajadores y académicos que fuera la nota preponderante de los setenta; qué decir, en fin, de la toma de distancia antiestatal y la casi confrontación que el empresariado y la derecha escenificaron en contra del presidente Luis Echeverría (1970-1976) a mediados de los setenta y que hicieron posible aquellos encabezados como: "Los empresarios frente al Estado" o incluso "Los empresarios en el Estado".

Es cierto que en muchas ocasiones el discurso político-ideológico de estos movimientos ocultaba su manifestación más importante: el embarnecimiento de los actores colectivos *sociales*, la mayor densidad societal, digamos, en un país cultural e históricamente estatal. En el 68 coexisten, tensionadas, dos orientaciones: la culturalista societal, alimentada por el mayo francés, la revuelta generacional, la liberación sexual y el antiburocratismo y antiautoritarismo de los movimientos juveniles de los países desarrollados, a través de la música y el cine, por un lado y, por el otro, una manifestación más vertical, propiamente política, preocupada por la organización, las representaciones legítimas, las alianzas estratégicas con campesinos y obreros, la conformación del Consejo Nacional de Huelga (CNH) y sus comisiones en multiplicación, el politburó ante la inminencia de la represión y, en fin, todo aquello que "politizaba" al movimiento y que por momentos lo hacía aparecer tan piramidal como a su adversario (a ello cooperaba, sin duda, nuestra cultura "estatista" y el marxismo-leninismo que constituía, sobre todo en aquel momento, la corriente hegemónica en las carreras sociales y humanísticas universitarias).

Pues bien, lo que aquí afirmamos es que el fortalecimiento social que se vivió en aquellos dos decenios, nuestro mejor acercamiento a la modernidad, digamos, y del que el movimiento estudiantil fue la manifestación mejor lograda, sería totalmente modificado a lo largo de los años ochenta y noventa. Nuestra modernización salvaje, podría afirmarse, está acabando con nuestra endeble modernidad. Tenemos así un México modernizador, el *México transnacional*, llamémoslo así; junto a él, un *México moderno* en desmantelamiento; más abajo, en términos de niveles de ingreso y oportunidades de participación, se extiende enorme un México que hemos llamado el *México roto* y que vamos a describir más adelante; y tenemos, en fin, nuestro *México profundo*, bien analizado y bien descrito por Guillermo Bonfil, el México que se rebeló en Chiapas echando mano de sus raíces para confrontar un futuro de mayor descomposición sabiendo que nada de esto le interesa al México transnacional, de no ser su propio cadáver: su desaparición. Regresaremos sobre este esquema en la parte tercera. Ahora detengámonos en lo referente a nuestra modernidad y veamos cómo el 68 se expandió sobre la sociedad mexicana fortaleciendo su independencia frente al Estado, aunque ya sin cabeza ni unidad.

Si dejamos de lado a la guerrilla de los setenta por haber sido

cortada de tajo en los últimos años del echeverriismo, como nos lo han recordado Carlos Montemayor y Aguilar Camín,¹ dos fueron las derivaciones del movimiento estudiantil:

1] La mejor conocida y la que tuvo mayor visibilidad fue naturalmente la sindicalista. Desde el inicio de su campaña presidencial, Luis Echeverría entró en fricciones con la dirección de la CTM, Fidel Velázquez, y ello abrió un espacio muy valioso para los sindicatos que buscaban independencia frente a la pesada pirámide corporativa del cetemismo. Comenzaron seis años de fomento a la insurgencia sindical con énfasis en los electricistas y en los lastimados centros de educación superior, con la UNAM al frente.²

Viene al caso recordar que la "forma" sindicalista de hacer política fue una modalidad impuesta desde lo alto más que una elección de las dirigencias político-académicas surgidas del 68. En efecto, en el año 1971 los presos políticos al ser liberados manifestaron su interés por crear organizaciones y partidos políticos. En ese momento comenzó Heberto Castillo las primeras versiones del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y se fundó la organización revolucionaria Punto Crítico. Sin embargo, por las razones descritas, y porque el monopolio de las representaciones no permitía en aquel entonces otorgar legitimidad ni siquiera al Partido Comunista Mexicano, los espacios que *a fortiori* tenían que abrirse a la participación de aquellos convulsionados actores jóvenes quedaron restringidos a los terrenos más básicos, más societales, del sindicalismo. Sin embargo, hacia la segunda mitad de los años setenta la solera sindicalista se ve desmantelada por la represión del lopezportillismo: "La desarticulación política del movimiento electricista y el golpe represivo a otros destacamentos sociales -establece Julio Moguel- cerró el ciclo ofensivo popular de mayor envergadura que se hubiese visto en el país desde las grandes movilizaciones de finales de la década del cincuenta. A partir de 1976-1977 el movimiento popular entra en una nueva y larga etapa defensiva y de repliegue" (Moguel, 1987:26). 2] Ahora bien, la efervescencia de la acción en lo social fue más auténtica en el segundo caudal en que desbordó la olla hirviente del 68: "ir al pueblo", salir de las uni-

¹ Carlos Montemayor, *Guerra en el paraíso*, México, Diana, 1991; Héctor Aguilar Camín, *La guerra de Galio*, México, Cal y Arena, 1991.

² Los trabajadores administrativos en el STEUNAM y los académicos en el SPAUNAM y, en provincia, destacaron las universidades de Guerrero, Puebla, Zacatecas, Oaxaca y Sinaloa.

versidades para irse a vivir entre los pobres, oírlos, organizarse en torno a sus necesidades, construir el partido desde ahí abrazando la línea de masas en la forma mostrada por el maoísmo. Aunque al principio unos plantearon ir a las zonas obreras y otros sobre todo al campo (cercar las ciudades), fue sin embargo en las áreas urbanas, en las colonias populares de reciente asentamiento y en las invasiones de terrenos para vivienda, en donde encontraron una mejor respuesta.³ Desde el año 1969 la sección Ho Chi Minh en el medio obrero de la ciudad de México y la Organización Regional Compañero y Política Popular decidieron posponer la formación partidista en favor de las organizaciones de masas en provincia. Fueron fundados entonces el Comité de Defensa Popular de Durango (CDP), la Unión Ejidal Bahía de Banderas en Nayarit, el Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey con más de veinte colonias, el Frente Popular de Zacatecas, la Colonia Francisco Villa en la ciudad de Chihuahua -desde donde se organizó con electricistas y ferrocarrileros la defensa popular (CDP) en ese estado-; la Unión de Uniones en los entonces recientes asentamientos campesinos y de indígenas desplazados en Chiapas, la Coalición de Ejidos en el Valle del Yaqui, en Sinaloa y Sonora, expropiados al final del sexenio echeverriista; los ejidos de La Laguna y la zona industrial de Monclova en Coahuila; San Miguel Teotongo, y la Unión de Colonias Populares en el Valle de México. Se trató de una efervescencia de lo social, de ir a las bases, lo que no estuvo exento de una sobreideologización y sobrepolitización: estaban las corrientes más "puras" que no despegaban su enfoque de los actores "protagónicos" de la historia y de la esfera de la producción (el cerco a la ciudad desde el campo o, cuando eso resultó una utopía, el control obrero del corazón productivo bajo las directrices organizadas y centralizadas en una élite). A pesar de ello no predominó esta línea, sino la Línea de Masas (LM): una mayor descen-

³ A este respecto consúltese Óscar Núñez, *Innovaciones democrático-culturales del movimiento urbano-popular*, México, UAM, 1990; Vivienne Bennett, "Orígenes del movimiento urbano-popular mexicano: pensamiento político y organizaciones políticas clandestinas (1960-1980)", en *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, IIS-UNAM, 1993; Josiane Boucher, "La Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP)", en *Movimientos sociales, democracia emergente y sistema político en México*, Sergio Zermeño y Aurelio Cuevas (comps.), Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM, 1990; Cristine De Agostini, "Éléments pour l'histoire de l'évolution des systèmes agraires des communautés de la région chol, Chiapas, Mexique", tesis de DEA, IEDES, París, 1987.

tralización con respecto a la estructura proletaria, y la insistencia en que los movimientos basados en las colonias eran el corazón mismo de la "actividad revolucionaria" y no un complemento de ninguna esfera productiva.⁴ Así, la Organización de Izquierda Revolucionaria-Línea de Masas, al dar primacía a las organizaciones populares y a lo local por sobre la actividad partidista, se mantuvo más cerca de su perfil maoísta original (a diferencia de Línea Proletaria), y encontró sus alianzas naturales en el movimiento urbano popular, destacando su articulación con la Unión de Colonias Populares (UCP) de la capital y el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP).

Línea Proletaria, por su parte, como lo describe Fabio Barbosa (1982), se constituyó en "esa franja que dejó de ser marginal cuando sus líderes descubrieron la piedra filosofal que por décadas buscaron afanosos los grupúsculos... Descubrieron que la clave del éxito estaba basada en una mezcla de economicismo, moderación, anticharrismo que sabe el momento del repliegue y culto a la espontaneidad, habiendo logrado pequeños programas mínimos (exitosas revisiones salariales, luchas por demandas departamentales...)". Desde 1977, Línea Proletaria llegó a los comités ejecutivos de sindicatos de telefonistas y minero-metalúrgicos (destacadamente en Monclova, Las Truchas y Monterrey), y logró buenas posiciones en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas.

Concomitantemente, hacia el fin de los setenta, con el auge electoral partidista generado por la reforma política de Reyes Heróles desde 1977, se planteó inevitablemente la necesidad de desplazarse desde los movimientos locales hacia la organización de un frente que pudiera articularse, paulatinamente, con la "forma" partido (no necesariamente electoral). La Coordinadora Nacional de Movimientos Urbano Populares (Conamup) aparece en el centro de una nueva época en la que proliferan los frentes, las coaliciones, las alianzas, las coordinadoras...⁵ Surge entonces una nueva oleada

⁴ No olvidemos que la primera gran invasión para asentar colonias populares fue apenas durante el movimiento del 68 y al margen de él, en los pedregales aledaños a la UNAM.

⁵ Coordinadoras (Conamup, CNTE, CNPA, Cosina), movimientos nacionales y regionales (MRP, MAUS, Movimiento de Pueblos y Colonias del Sur del D.F.), centrales (CIOAC); asociaciones (ACG, ACNR); uniones (UPREZ, ULR, UCEZ, UIC), frentes (FNAP, FNCR, FNDESCAC), etcétera.

hacia el centro y hacia arriba que se va a ver reforzada por el terremoto de 1985 en la capital y por el ascenso del fenómeno cardenista y su poderoso magnetismo hacia la acción político-partidaria. El movimiento urbano popular, nucleado en la coordinadora nacional (Conamup), se disloca y prácticamente desaparece en esta espiral centralizadora de los ochenta. Ante ello el gran movimiento maoísta hacia lo social, del decenio anterior, se ve empujado a replegarse en lo que fueron sus bastiones más importantes del norte del país. Al organizar posteriormente el Partido del Trabajo (PT) y dirigir los importantes fondos que Salinas -vía Pronasol- les otorgaría con la condición de mantenerse deslindados del cardenismo, estos grupos intentarán defenderse, en alianza táctica con el gobierno, de lo que será característico de los últimos veinte años de nuestro siglo: el desmantelamiento de lo social, el vaciamiento hacia arriba y hacia abajo de los espacios organizativos e identitarios intermedios entre el individuo atomizado, sin identidad, y el liderazgo presidencial paternalista.

Pero regresemos a los setenta: tenemos una primera causa del desmantelamiento del tejido social de nuestra deficiente modernidad: la fuga de las vanguardias hacia las alturas, hacia los acuerdos cupulares, producto natural de la reforma política y del lopezportillismo (1976-1982), que considera que la "forma sindicato" de hacer política y la mezcla entre los universitarios y el pueblo generan una alteridad inconveniente, mientras que la "forma partido" (partidista-parlamentaria) sería mucho más acorde con la época y, fundamentalmente, fomentaría una oposición más moderada al tensionar y confrontar acción social y acción política, movimiento social y protagonismo parlamentario, base y dirigencia.⁶ Durante

⁶ En la propia UNAM la historia de los setenta es nítida a este respecto; lleva el nombre de "soberonato" y recuerda en algo el enfriamiento de las sociedades sudamericanas desde las dictaduras: desmantelar la sobrepaticipación dividiendo, primero, el sindicalismo académico del sindicalismo de los trabajadores administrativos (STEUNAM-AAPAUNAM); después, absorbiendo hacia la vida partidista nacional (PC, MAP, PMS, PRT) a una de las más húcidas camadas de políticos-intelectuales: los hijos del 68, agrupados en el Consejo Sindical desde 1973; separando, en fin, el sindicalismo de la UNAM del de las otras universidades al poner en la ilegalidad al Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios (SUNTU) como órgano centralizador. Por su parte, la SEP se abocó a la delicada tarea de condicionar el presupuesto en cada una de las universidades del país a la clara separación entre la vida académica universitaria y el entorno social popular. Viene al caso recordar algunos nombres que hacia 1974 compusieron el Consejo Sindical de Profesores de Enseñanza Media y Superior: Manuel Peimbert, Luis de la Peña, Gerardo Es-

todo el lopezportillismo (1976-1982) y parte del sexenio delamadrinista (1982-1988), en el nivel nacional y no sólo en las universidades, será muy fuerte la tensión entre participar en la política partidista legal o permanecer en la base de los movimientos. Es entonces cuando veremos, como dijimos, un reagrupamiento defensivo de los movimientos y de las luchas sociales en coordinadoras, uniones, frentes, etc.: "El Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) y el sindicalismo universitario -escribe Julio Moguel- pretenderán articular un nuevo eje social y político de convocatoria y nucleamiento de la lucha general contra el Estado. En el mismo periodo, las vertientes principales de los movimientos campesino, de posesionarios y del magisterio avanzan sobre proyectos de organización sectorial que cuajan en las conocidas coordinadoras nacionales: Plan de Ayala (CNPA), del Movimiento Urbano Popular (Conamup), y de los Trabajadores de la Educación (CNTE)... Al finalizar el año 1981, la CNTE agrupaba ya a más de cien mil maestros de toda la República y encabezaba las movilizaciones populares más numerosas y de mayor radicalidad en el periodo (Hernández Navarro, 1983); para 1982 contaba con Consejos Centrales de Lucha en Guerrero, Hidalgo, Morelos, valle de México y Chiapas..." (Moguel, 1987:30). Por su parte la CONAMUP hacia la misma época logró integrar a más de 60 organizaciones populares, distribuidas en las principales ciudades del país (Bouchier, 1990), y la CNPA logra un nucleamiento similar en lo que se refiere al movimiento campesino. Hacia el centro y hacia las alturas, repetimos, es hacia donde parecen desplazarse las manifestaciones sociopolíticas, lo que se acentuará brutalmente con las huelgas obreras del año 83, con el terremoto de 1985 en el Distrito Federal y con el cardenismo en 1988, ese poderoso motor de buropolitización, de "vaciamiento hacia arriba".

En efecto, a mediados de 1983, nos recuerda Moguel, "se abre el proceso huelguístico más extenso y significativo desarrollado en México desde que a principios de los setenta estallara el denomi-

trada, Hugo Gutiérrez Vega, Cristina Puga, Eduardo Valle, Juan Brom, Rolando Cordera, Salvador Martínez della Rocca, Juan Felipe Leal, José Woldenberg, Eleazer Morales, Juan Garzón, Octavio Rodríguez Araujo, Sergio Colmenero, Juan Manuel Lozano, Octavio Navarro, Carlos Fernández del Real, Rafael Pérez Pascual, Jorge del Valle, Ignacio Osorio, Javier Centeno, Luis González de Alba, Arnaldo Córdova, Luis Haza, Humberto Herrero, José Abarca, Rufino Perdomo, David Pantoja, Eduardo Rubio, Alfonso Vélez Pliego, Raúl Montalvo, Max Ortega, etcétera.

nado movimiento de insurgencia sindical: en mayo colocaban sus banderas rojinegras el SUTIN, el STUNAM y otros sindicatos (universitarios) de provincia agrupados en el SUNTU. En junio se iniciaban las huelgas cetemistas en Ecatepec; estallaban la huelga 184 salas cinematográficas del Distrito Federal, 510 de provincia y 19 distribuidoras de películas; trabajadores de 3 800 centros de la industria hotelera y restaurantera; 90 industrias cementeras; 10 mil trabajadores de 49 empresas en el estado de Sinaloa; los trabajadores de General Foods; los de General Motors de Ramos Arizpe; trabajadores de KSM (fábrica de pistones). En total -dato oficial seguramente corto- estallaron 560 huelgas y 900 se prorrogaban. La CTM, por su parte, informaba que habían estallado más de dos mil huelgas. En el mismo junio paran 300 mil maestros y trabajadores de la SEP, bajo la dirección de la CNTE. Convocada por esta última, el SUTIN y los sindicatos universitarios, se lleva a cabo en el D.F. la manifestación más grande de todos esos meses". El 10 de junio, como producto de la presión huelguística, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos decidía la aplicación de un aumento de emergencia promedio del 15.6% que cada sindicato debía negociar (Moguel, 1987:50).

Con esto se repliegan los sindicatos cetemistas dejando solo y al descubierto a un frente ofensivo de pocos sindicatos importantes -en su mayoría los llamados independientes- y un conjunto de pequeños y medianos que van levantando sus huelgas a medida que se aplican los incrementos. Pero a finales de junio el STUNAM levanta la huelga sin obtener el incremento del cien por ciento y con sólo el 50% de salarios caídos, mientras la huelga del SUTIN era declarada inexistente por las autoridades. Para el segundo semestre de 1983 y durante 1984 y 1985, el gobierno avanzaría más confiadamente contra el sindicalismo tradicional y el independiente, particularmente en la reestructuración de los procesos de trabajo, el control de las direcciones y organismos sindicales, en la organización laboral, etc. URAMEX suspende sus actividades liquidando a sus trabajadores y con ello al SUTIN; el charrismo de Vanguardia Revolucionaria ataca frontalmente al magisterio independiente; las colonias populares en Cuernavaca, en Monterrey y en otros lugares son atacadas y perseguidas sus dirigencias; la Universidad de Guerrero y otras universidades que se reclaman democráticas y populares son controladas a través del subsidio condicionado; el municipio opositor de Juchitán es intervenido por el ejército, etc. El

balance político de la movilización social hacia finales de 1983 y en el transcurso de 1984 no podía ser más desalentador, nos recuerda Moguel, "todo nuevo intento de avance general se agota rápidamente y se impone la línea de desconcentración y repliegue. Las organizaciones sociales y de izquierda, como la CNTE, la CNPA o el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), entran en una fase de crisis que se da en cada caso bajo formas y cadencias particulares" (Moguel, 1987:60).

4. LAS FUENTES DEL DESORDEN SOCIAL

El debilitamiento de las identidades colectivas y de las intermediaciones, sin embargo, no responde sólo a un acto desde arriba, desde el autoritarismo estatal: a partir de los sesenta, el desmantelamiento de la sociedad será resentido sobre todo "desde abajo", por la masificación demográfica que, hacia el final de los setenta, modificará de manera rotunda el panorama urbano. Esta *primera fuente de desordenamiento* se enlazará dramáticamente con el total estancamiento económico de los años ochenta, la debacle petrolera y el fin de los recursos públicos y de los "préstamos dulces".

Como lo hemos establecido en otra parte,¹ quedó poco de esa sociedad y de esos actores que podríamos calificar de relativamente embarncidos, de manera que quienes tuvieron que actuar y hacer política en el nuevo panorama se encontraron con un entorno bastante desordenado, en vías de informalización y pauperización (durante los ochenta la caída del mínimo salarial fue del 40% y el crecimiento de la economía informal alcanzó a la mitad de la mano de obra). Esto significó una conmoción en un país cuyo PNB había crecido en 6% en los últimos treinta años. Y es que en general la región latinoamericana se había desarrollado con gran celeridad. Como lo han establecido algunos economistas latinoamericanos, América Latina creció, en el momento de su "despegue" (1950-1980), a una tasa de 5.5% mientras que Estados Unidos, en una etapa comparable (1870-1906), lo hizo en 4.8%.² Se trata de un impacto modernizador en la urbanización, en la industrialización, sobre una matriz social en ocasiones completamente ajena al medio europeo que sirvió de cuna al industrialismo; resultado: explosión demográfica, urbanización salvaje, degradación ecológica.

No sobra recordar a este respecto que si bien la ciudad de México, a partir de 1950, bajó de 5 a 2% su tasa anual de crecimiento

¹ Sergio Zermeño, "El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, 1989 y "La derrota de la sociedad", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 2, 1993.

² Víctor Tokman, "El imperativo de actuar. El sector informal hoy", *Nueva Sociedad*, núm. 90, Caracas, 1987.

poblacional, sus alrededores pasaron de sólo un millón de habitantes en ese mismo año a más de 7 millones en 1986, con un crecimiento anual de 10%. La sola capital aloja el 40% de los migrantes urbanos recientes del país y uno de cada cinco mexicanos vive en ella o en sus alrededores (Stoddard, 1985:28).

Algunos autores recuerdan que el desorden, el desempleo, la pobreza y el utilitarismo salvaje de "cada quien para sí mismo" que se observa hoy, particularmente en los países de alto mestizaje de América Latina, no son distintos de lo que se vivía en Nueva York en 1890, o en Londres y París en 1750, "ese mundo de que nos hablan las novelas del siglo XVIII, ese mundo de bandidos, de costureras, de prostitutas, todos empeñados en participar del dinero, del comercio".³ De manera que, según esto, no habría razones para dramatizar lo que pasa. El problema, argumentan a su vez autores como Víctor Tokman, Alejandro Portes, Lauren Benton, Emilio Klein, Jaime Mazzera, etc., es que mientras el tránsito al industrialismo europeo significó la descomposición del tejido tradicional pero con alta absorción de los polos industriales modernos que se constituían en los "talleres del mundo" y altas posibilidades de emigración trasatlántica para la población restante, en América Latina, debido a la adopción temprana de tecnologías intensivas en capital, fue muy baja la capacidad del aparato productivo moderno para absorber la mano de obra liberada desde los puntos tradicionales y magnificada por el descontrol demográfico que trajo la adopción intempestiva de la medicina sanitaria y la vacunación. Así, el tamaño relativo del sector informal, que cayó en Estados Unidos de 51% a 31% de la fuerza de trabajo entre 1900 y 1930, sólo se redujo en América Latina de 46% a 42% entre 1950 y 1980. Si tomamos en cuenta sólo las áreas urbanas, el rezago fue espectacular en el mismo periodo, pues los trabajadores informales pasaron de 13% a 22% de la PEA total en México y de 11% a 17% en Brasil (Portes y Benton, 1987:129, 115).

Agreguemos a esto que algunos países aceleran y frenan con ritmos más comprensibles: Argentina, por ejemplo, se industrializa desde muy temprano, su población es de país moderno, en el sentido europeo, y su desaceleración se fue presentando a lo largo de varios lustros desde los años sesenta. Pero en el otro extremo, en

³ Alain Touraine, 1987, "La centralidad de los marginales", *Proposiciones*, núm. 14, Santiago, p. 216.

contramos a un México arropado en la tradición y en su herencia hasta bien entrado el siglo, que en tres decenios prácticamente se muda a vivir en las ciudades, con una prole que la adopción de la medicina moderna se encarga de mantener viva y que demanda educación, vivienda, empleo, alimentación, etcétera.

A esto se agrega que, a diferencia del resto de la región, México no sólo no moderó la tendencia durante los setenta, sino que atizó la caldera del crecimiento en su flamante papel de país petrolero. La pasta que mantuvo a nuestra sociedad cohesionada en medio de este gran reacomodo combinó un sistema populista de alta participación y unas tasas de crecimiento económico que no sólo no decayeron durante los años setenta, como fue el caso en todo el resto de la región, sino que encontraron, en los dólares del *boom* petrolero y en los "préstamos dulces", el combustible para alimentar aún más la caldera de la aceleración y de los proyectos "faraónicos" necesariamente desarticuladores. Así que fue severa la sacudida que impuso el estancamiento en los ochenta y aún no logramos hacer el recuento de la *pedacería social* que dejó semejante impacto.

Segunda fuente de desordenamiento. Para una sociedad que prácticamente había mudado su población del campo a la ciudad en cuatro décadas, el impacto de toda esta masa en aceleración contra el muro del estancamiento que significaron los años ochenta fue catastrófico. No nos parece exagerado ilustrar la "pedacería social" resultante con los datos de José Luis Calva cuando nos recuerda que la creación de empleos en el país fue de sólo 1.3 millones entre 1982 y 1990, contra 1.2 millones de jóvenes que se incorporaron cada año como demandantes de trabajo (lo que hasta ese momento había creado una reserva de 8 millones de personas que no fueron absorbidas por el mercado de trabajo), y estimar que un porcentaje cercano a la mitad estaría en Estados Unidos en forma ilegal.⁴ Ahora bien, los mismos referentes, hacia mediados del año 1995, nos dan una idea del extremo drástico en el que la velocidad del cambio ha impactado al país desordenándolo: el informe del comportamiento de la economía de la Concamin, para el primer trimestre del año 1995 señala que "el 58% de la población

⁴ José Luis Calva, *La Jornada*, 16 de noviembre de 1991.

económicamente activa (PEA) del país opera ya en la economía subterránea, y que están en riesgo de quiebra dos millones de pequeñas, medianas y micro empresas". Apunta que la PEA se sitúa en los 36 millones de personas y actualmente hay 21 millones que se encuentran en la economía informal, en tanto que en la economía formal hay 15 millones; eso da un 58% de la población activa en situación de subempleo o desempleo (*La Jornada*, 30 de mayo de 1995). En fin, hacia las mismas fechas el Grupo de Economistas Asociados (GEA) informaba que "el mercado laboral mexicano enfrenta un déficit de 19.2 millones de puestos de trabajo", cantidad que está en relación con el crecimiento de la población económicamente activa que no ha encontrado un empleo formal en los años ochenta y noventa (*idem*, 29 de mayo de 1995).

Tercera fuente de desordenamiento. Sin embargo este gran desorden no es producto solamente del descontrol demográfico, del pasaje abrupto de lo tradicional campesino a lo urbano, de la industrialización excluyente y de la crisis de estancamiento de los años ochenta. Se explica también, y cada vez más, por nuestro proceso de integración transnacional, la caída abrupta de los aranceles a partir de la entrada al GATT en 1986 y de su remate, *cuarta fuente de desordenamiento*, el más reciente impacto de estancamiento, e incluso de regresión: la debacle estruendosa del proyecto neoliberal de apertura comercial y transnacionalización con que se inauguró el año 1995.

Lo que fue la difícil construcción de una burguesía nacional en expansión durante la etapa sustitutiva de importaciones y de crecimiento hacia adentro se convirtió en lo contrario: en un proceso de modernización vuelto hacia afuera y llevado a cabo por menos de doscientas firmas transnacionales: ser competitivo en el plano mundial en menos de un sexenio o morir (destrucción en consecuencia de lo que alguna vez se llamaron clases sociales nacionales). Pero olvidemos los grandes nombres de la etapa sustitutiva; lo que resulta más dramático en este enfoque es la destrucción del empresariado intermedio: una de cada dos empresas medianas y pequeñas desaparecieron entre 1986 y 1992, demostrándose incompetentes e inviables tres de cada cinco de las restantes a partir de la crisis con que se inauguró el régimen zedillista en diciembre de 1995.

De la consistencia del otro actor fundamental de la industria poco se puede decir: reducción cuantitativa de los obreros del centro del país, desaparición *de facto* y sin protestas del derecho de huelga, migración de la gran industria al norte, incorporando a un proletariado más joven, menos escolarizado y sin tradición obrera ni organizativa y, en la maquila, crecimiento espectacular de 100 mil a un millón de obreros entre 1980 y el año 2000, cuando llegarán a representar el 33% de la población manufacturera (conformado en un 75% por mujeres, entre 15 y 25 años de edad, con bajísimos índices de sindicalización, escolaridad, nulos derechos laborales, salarios cercanos al mínimo y gran inestabilidad en el empleo).

Recordemos, en fin, que entre cinco y quince millones de campesinos podrían ser afectados en los próximos diez años dependiendo del fin de los subsidios, la entrada de granos básicos a precios muy reducidos (maíz y frijol fundamentalmente) y el grado en el que puedan hacerse efectivas las reformas hechas al artículo 27 de la Constitución mexicana. Agroindustrialización y desaparición del ejido en el norte y, en el sur, migración, autoconsumo defensivo y atraso en ejidos y comunidades sin ningún atractivo para el capital, comienzan a ser las características de la nueva etapa en el agro.

5. DESIDENTIDAD Y DESORDEN

Visto con la perspectiva de la segunda mitad del siglo XX, podríamos afirmar que México ha pasado de la gran aceleración (hasta el inicio de los ochenta) al total estancamiento durante ese decenio, para luego, nuevamente, enrolarse en la dinámica salvaje de la globalización salinista (1990-1994) y rematar exhausto en el segundo frenón inmisericorde a partir del inicio del régimen zedillista.

Sin embargo, la imagen de los dos momentos de estancamiento es engañosa, pues si bien para la economía el estancamiento se relaciona con la ausencia de cambios, con la inmovilidad, desde una óptica social los periodos de estancamiento pueden traer aparejadas transformaciones profundas, no siempre mensurables por la estadística.

En términos societales, tanto el arranque acelerado como los bruscos estancamientos son fuentes de profundas transformaciones y generan gran tensión entre economía y sociedad; es más, en el momento triunfante del neoliberalismo (1990-1994), vivimos una época, según lo establecíamos en un documento en ese entonces (Zermeño, 1991), en que la pretendida salud de la economía progresaba en relación inversa a la salud de la sociedad. La crisis de 1995 pondría de manifiesto que la tensión entre estas dos manifestaciones (economía y sociedad) tiene límites muy precisos.

Agreguemos inmediatamente que éste no es un hecho inédito: cuando los factores de la producción son empleados a fondo, como fue el caso durante la revolución industrial, los indicadores de la economía florecen mientras agonizan los hombres en las minas, las fábricas y los tugurios. También pasa esto durante los periodos de estancamiento: las agujas de la economía aparecen inmóviles o regresivas mientras enormes masas de individuos van y vienen en la geografía y alteran sus formas asociativas, tratando de protegerse contra la escasez y el desamparo. Hay incluso situaciones que combinan aceleración y estancamiento y otras que van más allá, pues ante el *doble desorden* social provocado por la combinación anterior, el actor estatal intenta poner en marcha programas de reorientación de los factores hacia el progreso, programas que en ocasiones

lo único que provocan es un impacto desordenador adicional. Ejemplos desdichados de este último tipo existen muchos y de gran relieve histórico: baste recordar al modernizador francés Turgot hacia 1780, a Limantour en el ocaso del porfiriato o al ministro de economía ruso bajo Nicolás, en la segunda década de este siglo. Pero no se trata aquí, sobre el papel, de invocar a la revolución con asociaciones simplonas, porque es obvio que son necesarios una gran variedad de factores para que los desajustes entre economía y sociedad (con el desorden y la tensión que traen aparejados), conduzcan a una confrontación violenta.

No nos perdamos pues en este zarandeo de frenos y arranques y recordemos que el impacto globalizador del salinismo, presentado modestamente como un Tratado de Libre Comercio, se puede caracterizar como el proyecto más ambicioso que gobierno alguno haya lanzado dentro del neoliberalismo latinoamericano, incluida la experiencia chilena, pues el hecho de disminuir drásticamente los aranceles y otras barreras en un país frontera con la economía más poderosa del mundo sobrepasa con mucho los efectos privatizadores y desindustrializadores provocados por un relativo libre intercambio a distancia, como ha sido el caso en los ejemplos sudamericanos (en nuestro país, hacia 1994 quedaron pocos espacios y productos "no transables", como dicen los economistas). En México, al aceptarse los términos de ese Tratado, hemos visto afectada la comercialización, la producción industrial, la agricultura, y veremos afectada la distribución poblacional (doméstica y entre naciones), los energéticos, etc., incluso si en las negociaciones se prometió no tocar algunos de estos aspectos.

Lo que queremos subrayar es que el neoliberalismo salinista exhibió los rasgos del apresuramiento: lo que en economías más equilibradas entre sí, como son las europeas, llevó veinte años y en Canadá exigió muchas precauciones, en México se acordó en tres años aunque, incluso sin esperar su aprobación, los aranceles se habían ya abatido drásticamente. Declaraciones como las de Vicente Mayo, líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), daban ya desde el año 1990 la nota del oportunismo desinformado: "tenemos un plazo perentorio de siete meses para preparar nuestra planta productiva y así competir dignamente... hay que acrecentar con urgencia los niveles de productividad en todos los centros de trabajo (pues en el) caso de que las plantas productivas vieran en peligro su existencia sería exclusivamente a partir de la falta de

competitividad y no por otra cosa" (*Excelsior*, 26 de octubre de 1990). Debió habersele explicado a estos "líderes" que si ya en 1960 la diferencia de productividad entre los dos países era de 27 a 100, entre 1982 y 1987 la productividad de los países de la OCDE creció aún una vez y media más con respecto a la de México (Hernández Laos y Velasco, 1990).¹

Pasemos a desarrollar el asunto con una cierta perspectiva histórica: ¿sobre qué tipo de sociedad fue aplicada esta revolución modernizadora? Inmediatamente habría que decir que no se trata de una sociedad adormilada en su tradicionalismo y su estaticidad. Todo lo contrario. En efecto, si el concepto de desorden social ha sido aquí empleado repetidamente es porque creemos evocar con él la imagen que mejor está caracterizando al México del último tercio del siglo veinte: la desarticulación, la pauperización, la desidentidad, la anomia y, en una palabra, el desorden social, son producto de cambios de ritmo violentos: aceleración en los procesos productivos, estancamiento súbito, catástrofes, intervenciones estatales drásticas, etcétera.

Desidentidad y anomia

Lo que estamos sugiriendo como un esquema alternativo al propuesto por el neoliberalismo, que hoy parece reinar sin contrapeso en el oeste, en el este y en el sur, es la idea-fuerza venida de la sociología, la antropología y la psicología de las colectividades en torno al desorden social. En donde las corrientes neoliberales creen fundar un nuevo orden basado en las fuerzas del mercado, el libre intercambio internacional, la reducción de la participación estatal en la economía y la desaparición de todas las fuerzas corporativas (sindicatos, uniones y movimientos sociales, identidades tradicio-

¹ "En industrias específicas como la madera y sus productos, y en productos de hule y plástico, la productividad de México no llega al 20% de la alcanzada en Estados Unidos. En otros rubros como la producción de ropa, zapatos y productos de cuero, y en industrias de minerales no metálicos como el cemento o similares, y en maquinaria eléctrica, los niveles medios de productividad de nuestras manufacturas son relativamente mayores, en la medida en que representan poco más de 40% de los niveles alcanzados en Estados Unidos. Estas diferencias podrían dar quizás una idea del tipo de especialización que cabría esperar de la firma del T.L.C con Canadá y Estados Unidos, afirmaban Madison y van Ark, 1988 (citado en Hernández Laos, 1991).

nales, organizaciones, corrientes y partidos políticos con bases sociales activas, etc.), es posible realizar una lectura alternativa y mostrar que incluso si los objetivos neoliberales pudieran cumplirse (relanzar la economía), los beneficios que de ahí derivaran no harían variar en nada las condiciones inhumanas en que ya transcurre la vida de tres de cada cuatro habitantes de México o de América Latina. Estas condiciones estarían caracterizadas, como lo están ahora, por la destrucción de las identidades colectivas, la pauperización, la atomización, la polarización del ingreso y de los valores culturales y, en el extremo, el desorden anómico (extrañeza, ruptura de vínculos afectivos e incapacidad de nombrar el entorno social y valorativo).

"La anomia es una situación extrema asociada a los procesos modernizadores que desarraigan a los individuos, los arrancan de sus tierras o de su cultura imponiéndoles la vida en ambientes totalmente extraños y sin pasado..." (Paris, 1990). Si como dice Paul Berger (1967), "la más importante función de la sociedad es nombrar... el hombre está congénitamente compelido a imponer orden significante sobre la realidad". De hecho, no es por la pobreza o la crisis industrial y financiera por lo que aumentan los divorcios, el alcoholismo, los delitos, los asesinatos o el suicidio, podemos afirmar interpretando a Durkheim (1951), sino por las perturbaciones severas al orden colectivo, cuando el individuo pierde los límites morales compartidos socialmente. La separación de la sociedad y el encierro en sí mismo pueden conducir a la pérdida del significado, a no nombrar, "que es la pesadilla por excelencia que sumerge al individuo en el mundo del desorden, el sinsentido y la locura... A la inversa, la existencia en un mundo significante, nombrado, puede ser un objetivo buscado con los más altos sacrificios y sufrimientos, incluso con el costo de la propia vida si el individuo cree que esto tiene un significado nombrado" (nómico) (Berger, 1967; citado en Habermas, 1973).²

² Recordemos aquí un ejemplo a este respecto, relativo a la falta de interacción entre padres e hijos en Santa Úrsula, México, D.F. Nos dice Marianne Bar-Din: "no hay socialización antes de que el niño alcance la edad escolar reglamentaria... Los niños que crecen en esos desordenados hogares, en esos cuartos donde nadie les habla o los escucha, han desarrollado un poderoso mecanismo de defensa, una desatención selectiva que los aísla de las experiencias externas, desagradables. Logran ignorar su entorno para no ser más confundidos... Los niños no parecen sufrir por el caos físico que los rodea. No sufren por esa causa dado que NO LA VEN... Quedó claro que uno de los problemas más graves en la interacción padre

Pensamos entonces que, por su fuerza sociológica (social-humana), el enfoque a partir del desorden, y en el extremo la anomia y la deshumanización, constituye una alternativa analítica y una orientación para la sociedad global, mientras que la polémica en torno al sector informal, la economía subterránea, la descentralización industrial (maquila y subcontratación), etc., no hacen más que cuestionar-para-ajustar las temáticas contenidas en el propio modelo (economicista-tecnocrático) del neoliberalismo (volveremos más adelante a este punto).

En consonancia con las ideas del español Ramón Fernández Durán, "el actual modelo productivo, económico y social, basado en la lógica del crecimiento y la acumulación, genera en su evolución un orden aparente -cimentado sobre crecientes desigualdades-, que engendra a su vez un desorden creciente de índole interna (económica y social) y externa (ambiental), al disolver y absorber estructuras previas que tenían un mayor grado de orden interno y una relación más equilibrada con el medio... Al contrario de los procesos de creación y evolución de la vida sobre el planeta, que son capaces de crear orden a partir de la energía solar que les llega (contrarrestando así la tendencia global del Universo hacia el desorden), el modelo vigente contribuye de forma *acelerada* a la creación de desorden en todos los niveles, precipitando los procesos entrópicos.³

¿Acelerar o moderar la tendencia?

Si los maharajás y los faraones disponían de toda una vida para fundar ciudades y construir pirámides, al grupo gobernante que

hijo era la falta de comunicación verbal... La profunda desorganización acarreada por la pobreza extrema no permite la existencia de la familia nuclear como la conocemos, con sus fases de organización y reorganización. De hecho en vez de emplear la expresión 'familia nuclear' deberíamos utilizar la de 'familia atomizada' para seguir el léxico de los físicos que parece tan apropiado en las circunstancias presentes..." (Bar-Din, 1990:4-6, 30-31).

³ "La segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, plantea que la materia y la energía sólo pueden cambiar en un sentido, esto es, de utilizable a inutilizable, de disponible a no disponible, de ordenado a desordenado. Los seres vivos parece que son capaces de moverse en dirección contraria al proceso entrópico, pero esto es así, temporalmente, porque pueden absorber energía libre del entorno, incrementando su complejidad y organización (orden) interna. El ser hu-

encabezó Salinas se le notó a todas luces urgido por reconvertir todo; urgido por aplicarle a esta sociedad lo que en los países de origen liberal y largamente modernizados de Occidente se ha venido imponiendo en medio de una difícil correlación de fuerzas sociales y políticas, y sin haber logrado aún carta de legitimidad.

Algunos lectores acostumbrados a lo inevitable se preguntarán si todos estos devaneos no son una queja ante lo que no tiene remedio; es decir, dado que la integración de México a Estados Unidos es un hecho irreversible, un fenómeno silencioso ("silent integration"), como Clark Reynolds lo denominó, ¿cuál es la diferencia entre ir más rápido o más despacio hacia el mismo destino?

Nos vemos obligados aquí a presentar una respuesta directa y tomar una posición, a reserva de acudir a las demostraciones a lo largo del texto: desde el punto de vista societal los cambios inesperados, los desórdenes intempestivos, repercuten casi por lo regular en anomias severas; ante tales sismos intervienen actores relativamente externos tratando de amortiguar los impactos de mayor descontrol: el Estado, los partidos y las organizaciones políticas, gremiales o religiosas, los intelectuales, etc. Cuando esto no sucede y, por el contrario, tales fuerzas se suman activa, acriticamente incluso, a las corrientes desordenadoras, fuertes sobresaltos "epocales" pueden desatarse: ¿para qué recordar el jacobinismo, algunos populismos, los fascismos...? Pues bien, lo que aquí sostenemos es que hay elementos suficientes para afirmar que el Estado mexicano, hoy, no sólo no ha intentado moderar las fuerzas que están devastando nuestra sociedad y nuestra cultura sino que se unió a ellas atizándolas en un esfuerzo osado por trascender como un régimen refundador de la historia.

En efecto, el presidente De la Madrid, que nunca pisó la tierra

mano, al ser una especie con un gran desarrollo evolutivo y elevado peso necesita un gran flujo de energía para su existencia. Además, por su elevada capacidad de raciocinio, ha podido desarrollar instrumentos para poder captar o utilizar en su provecho una mayor cantidad de energía que la que le llegaba directamente del sol o la que podía consumir a través de los alimentos, donde se encuentra energía solar fijada mediante el proceso de la fotosíntesis... Sin embargo el segundo principio de la termodinámica es incompatible con el crecimiento cuantitativo indefinido, que está basado en el consumo creciente de fuentes energéticas de carácter finito, y por consiguiente con el concepto de 'Progreso' sin límite, destruyendo la idea de que la ciencia y la tecnología crean un mundo más 'ordenado', en contraposición con el mundo natural 'menos ordenado'." Ramón Fernández Durán, *La explosión del desorden*, Madrid, Fundamentos, 1993, pp. 21-22.

social mexicana, transitó de su privilegiada familia a las universidades norteamericanas y luego, por la fortuna política de sus superiores, brincó de una a otra oficina aséptica del sistema económico y financiero hasta encontrarse inesperadamente con la presidencia de la República; ese mismo recorrido siguió su pequeño grupo de jóvenes tecnócratas y, aunque la Facultad de Economía y Adolfo Oribe intentaron reeducarlos, ni un minuto perdieron en asuntos de elección popular o de conflictos sociales. En tales currículos que sólo denotan preocupación por el nuevo orden económico mundial, difícilmente cuenta la salud de la sociedad, porque simplemente en esa lógica eso no aparece, "no la ven".

Lo que en realidad aprendieron en tan prestigiadas universidades norteamericanas fue una fórmula sencillísima y la convicción de que debían aplicarla a toda costa y de la manera más ortodoxa. Dicha fórmula, que pudieron haber recibido en cursos por correspondencia (aunque no así el sofisticado entorno académico que la acompaña), se reduce a abrazar con fuerza la convicción de que el reacomodo mundial a partir de los setenta ("el más allá mundo", como veremos en capítulos posteriores), exige el abandono de las políticas sustitutivas que buscaban generar domésticamente los satisfactores para las principales necesidades nacionales: según esto, las ventajas comparativas demuestran que lo que conviene en términos contables es definir una estrategia de comercio basada en un tipo de exportaciones competitivas en el mercado mundial y capaces de atraer divisas e inversiones directas que a su vez nos permitan importar los insumos que la nueva etapa de dinamismo va a exigir (y pagar la deuda también). Para que esta receta tan sencilla funcione se requiere solamente de: a] cortar todos los subsidios, precios de garantía, etc., evitando así una competencia imperfecta y el fomento de productos no competitivos, así como las presiones inflacionarias asociadas al gasto público; b] privatizar por debajo de su valor a las empresas públicas; no nada más las deficitarias, porque de lo que se trata es de atraer a los capitales en otra época fugados, erradicar las prácticas competitivas desleales y evitar el déficit fiscal (que tendría que cubrirse con impuestos que elevan costos y generan inflación); c] mantener abatidos los salarios de manera que el capital, principalmente venido del exterior, se sienta atraído por las altas tasas de ganancia (para el buen funcionamiento de este último punto se hace necesario un correctivo: suprimir las manifestaciones corporativas sindicales y políticas

de la clase trabajadora, evitando que las presiones y, en el extremo, la huelga, malogren el buen funcionamiento del modelo); d] como una excepción (que quién sabe cuánto dure), establecer un subsidio a las exportaciones vía la exención de impuestos y aranceles, la inversión en infraestructura, las asesorías, los préstamos de dineros públicos a la iniciativa privada exportadora a bajísimas tasas de interés, etc.; e] firmar con el Norte y con el Sur acuerdos de libre comercio y derogar todas las trabas a la inversión extranjera.

Hay un axioma que sustenta todo el razonamiento en términos filosóficos y morales: para la consecución del objetivo principal (volver a crecer), se necesita dividir el proceso en dos etapas: la primera es de gran sacrificio y tutelaje estricto, al extremo del control policiaco, ya que las rupturas y la violencia espantarían a los capitales. En la segunda etapa ("el mañana desarrollo"), los beneficios del proyecto "gotearán" sobre la población menos favorecida, elevando de esta manera el nivel de vida colectivo.

Dejando de lado el problema de la validez del postulado general (el abandono de una economía acorde con las necesidades domésticas), si algo hizo muy atractiva la propuesta neoliberal es su simpleza, sobre todo porque, para publicitarla, se apoyó con imágenes aún más simplificadas y llevadas hasta el ridículo, aprovechando los acontecimientos internacionales: la ineficiencia y el alto costo de la burocracia pública y de la gestión económica estatal, la corrupción y el cohecho de las cúpulas y de toda la jerarquía sindical, los elevados precios de ciertas mercancías nacionales comparados con los de productos importados de mejor calidad, etc. Lo que se veía con horror en el modelo soviético y constituía el colmo de la dominación del imperio sobre sus satélites —que Cuba se dedicara al monocultivo del azúcar, Checoslovaquia a la metalurgia y la maquinaria, Bulgaria a la producción agrícola, Polonia a la industria naval, etc.—, en el modelo neoliberal no produce ningún resque-
mor; pero el argumento de esto último no tiene que ver con asuntos tan delicados como la autosuficiencia alimentaria o el desarrollo sustentable, sino con el hecho de corte dogmático de que en el neoliberalismo las ventajas comparativas no dependen de lo calculado en un plan central, sino dependen de la competitividad en mercados abiertos. De lo que no se dieron cuenta nuestros becarios fue de que muy pocos de los postulados del modelo serían respetados por los propios países que los pregonaban en su relación con los países más débiles, particularmente aquel de que los pro-

ductos podrán transitar libremente por las fronteras. Incluso resultaron más obedientes aún de lo que exigía el modelo, pues antes de tener algo que vender competitivamente, ya habían abierto casi al cien por ciento nuestras fronteras. Luego, los pocos productos que de toda maneras ya vendíamos con tratados o sin ellos, fueron detenidos en las fronteras americanas (atún, cemento, tomate, aguacate, varilla, acero, textiles⁴ y otros más).

Sea como fuere, el proyecto se propuso "reordenar" la economía fomentando líneas de actividad que constituyeron cambios sustanciales con respecto a lo que existía en el inicio de la década de los años ochenta (en todos los casos se privilegiaron los dos puntos neurálgicos del modelo, es decir, la exportación y la inversión preferentemente venida del extranjero). Dichas líneas de fomento han sido: 1] *el desarrollo industrial manufacturero orientado a la exportación* (con el espectacular boom de la industria automotriz); 2] *la industria maquiladora* en los estados del norte de la república; 3] *las agroindustrias de exportación* y la decadencia de la agricultura tradicional (desaparición de programas de fomento y precios de garantía e importación de productos primarios a bajísimos precios); 4] la asunción de que *la pequeña y la mediana industria se reconvertirían* en un tiempo relativamente corto logrando la competitividad de una parte y la desaparición del resto, y en fin, 5] la esperanza en que florecerían *el autoempleo y las microempresas* (la utopía de convertir a cada excluido o, digamos, a cada miembro de la economía estéril, en un empresario por su cuenta en el comercio, el espectáculo, los servicios...).

⁴ En 1991 México aceptó extender por 29 meses más el Acuerdo Multifibras por medio del cual nuestro país seguiría teniendo prácticamente cerrado el mercado de Estados Unidos para productos en los que tiene importantes ventajas competitivas: trajes de vestir de lana, pantalones, faldas, camisas, blusas, hilados de acrílico y telas de algodón (Barranco Chavarría, 1991:24).

6. FIN DEL ORDEN: TAMBIÉN EN LOS CONCEPTOS

1. *De la dependencia económica a las clases sociales*

México no es un caso aislado en esta trayectoria de desordenamiento sociopolítico. Si volteamos rápidamente hacia el marco conceptual con que las ciencias sociales han analizado a América Latina en los últimos treinta años, veremos las coincidencias: una vez que la llamada teoría de la dependencia, con Cardoso y Faletto a principios de los setenta, puso en claro que nuestras economías se desarrollaban a pesar de su creciente articulación con la economía mundial, la preocupación central se desplazó de afuera (imperialismo, dependencia...) hacia el plano doméstico, y de la economía a lo social; entró entonces la euforia por caracterizar la estructura de clases: existía la esperanza de que, con el desarrollo, se conformarían actores nacionales centrales, verdaderas clases en el sentido decimonónico europeo, y las ciencias sociales pasaron un buen rato tratando de responder a la pregunta acerca de si lo que estaba en la periferia era o llegaría a ser de la misma materia que lo que se encontraba en el centro, así como sobre la potencialidad revolucionaria de los pobres urbanos. En el fondo, una especie de patente garantizaba, en el "imaginario conceptual" de los latinoamericanos, nuestra entrada inexorable en el reino de Occidente, algo así como un proceso de modernización irrefrenable. Nos lo recuerdan conceptos tan ordenadores de la sociedad (sin duda el último grito de la modernidad europea), como lo fueron los de modo de producción, articulación de modos de producción, diacronía, sincronía, tránsito, clases fundamentales, clases subalternas, clases apoyo, gran industria, estructura, superestructura, dominancia, predominancia, etcétera.

2. *De los actores sociales a la voluntad estatal*

Sin embargo, en el pasaje de los años setenta a los ochenta cambió el énfasis y preferimos ya no hacer referencia a conceptos tan or-

denadores: muy pronto se hizo evidente que en las sociedades en tránsito, como se les llamaba, los agentes dinámicos no eran los actores en el terreno de lo social (las clases, si se quiere), sino el Estado. En este punto, Barrington Moore y Alain Touraine fueron decisivos; la discusión se desplazó entonces hacia ese terreno siguiendo tres trayectorias: la primera, y quizás también la más temprana en los setenta, fue la ligada a las concepciones ortodoxas del leninismo: conciencia exterior a la masa convertida en partido revolucionario triunfante que, apoyada en la centralidad de la clase obrera, orienta al todo social, apoderándose del instrumento dirigente privilegiado de las sociedades en vías de desarrollo capitalista: el Estado.

Las otras dos corrientes fueron concomitantes y parecen responder directamente al fracaso de este voluntarismo revolucionario y de las tendencias políticas asociadas a él, principalmente las que se referieren a la vía armada para la toma del poder.

El ascenso de las dictaduras latinoamericanas en Chile, Argentina, Uruguay, etc., fue entonces analizado desentrañando las implicaciones del neoliberalismo, las doctrinas de la seguridad nacional, la reclusión en lo privado y el congelamiento del espacio de lo público, de la participación colectiva y, particularmente, del sistema político (sindicatos, partidos, parlamentos...), bien teorizados por Guillermo O'Donnell, Manuel Antonio Garretón, Marcelo Cavarozzi, Norbert Lechner, etcétera.

En su tercera vertiente, el problema del Estado y la política encontró terreno fértil en la conceptualización gramsciana de la hegemonía. Según esta concepción, lo esencial en el problema de la hegemonía no era tanto la centralidad de la clase obrera, la acumulación de fuerzas, el partido o la guerra de movimientos en forma de asalto al poder; se trataba más bien de una reforma intelectual y moral, de una "síntesis más elevada" capaz de fundir todos los elementos clasistas, de masas, etc., en una "voluntad colectiva nacional-popular". Con esto, las concepciones latinoamericanas se olvidan de las visiones tan ordenadas de "clase" y de "infraestructura", adoptando las evocaciones menos puras de "la cultura popular", el pueblo, la nación. Sin embargo, no desaparece una serie de ordenadores conceptuales importantes: sociedad civil-sociedad política, guerra de movimientos y de posiciones, bloque histórico, clase dirigente y dominante, consenso, revolución pasiva, etcétera (Aricó, Portantiero, Mouffe, De Riz, Laclau...).

3. *Del movimiento obrero a las identidades restringidas*

También se desdibujan los actores y los escenarios si volteamos hacia esa otra gran corriente del análisis latinoamericano que se centró en los movimientos sociales: de la euforia por analizar el movimiento obrero derivamos hacia el estudio de las potencialidades revolucionarias de la masa marginal y, de ahí, nos interesamos en las manifestaciones defensivas que proliferaron durante las dictaduras militares y la crisis económica de los ochenta. Es decir, de la lucha de clases a los movimientos sociales, a las manifestaciones popular-nacionales (más a la manera sugerida en Gramsci y Touraine), para rematar en el estudio de las "identidades restringidas" en movimientos urbanos, derechos humanos, comunidades eclesiales, sindicatos, juventud, mujeres... Se trata de aquellos movimientos que desde los años setenta, en el marco de las dictaduras militares (no hay que olvidarlo), desestimaron las estructuras verticales de la política (en particular a los partidos políticos) y se propusieron trabajar en la base del pueblo, en cada manifestación social de descontento, tratando de resolver, ante los aparatos gubernamentales, las necesidades básicas y las demandas fundamentales de esas poblaciones, relativamente reducidas y bien definidas en su identidad y en la correcta definición de su adversario y de sus problemas (lo mismo daba que fuera una comunidad indígena, una alianza ejidal, un conflicto de tierras, una lucha municipal, una o varias secciones sindicales de obreros o de sectores asalariados medios, una colonia popular, etcétera).¹

¹ Lo más original de aquel cambio de planteamiento, que hemos denominado la búsqueda de la democracia a través de "identidades restringidas" o circunscritas, fue su afán por evitar las provocaciones y confrontaciones abiertas con el Estado (incluso al buscar solución a sus demandas ante las autoridades públicas); su rechazo fue claro, igualmente, hacia cualquier forma jerárquica en su interior que pudiera conducirlos al autoritarismo, al "descabezamiento" o a la corrupción, evitando cualquier tipo de publicidad o notoriedad inútil de los dirigentes o del movimiento; se buscó, de la misma manera, eludir una adscripción ideológica que generara suspicacias, rechazo o que pudiera justificar la represión (trotskista, maoísta, comunista...). Al evitar tales adscripciones ideológicas, estas movilizaciones se separaron también de planteamientos que establecían una ruptura con el lenguaje de la sociedad en que nacían y con su adversario; por el contrario, estos movimientos de base buscaron mantener un lenguaje y un terreno compartidos para la negociación. Con todo esto se trataba de lograr una continuidad en las luchas sociales, ya que la experiencia mostró que las otras formas de acción sociopolítica condujeron a la represión, la cooptación y la desintegración del actor colectivo moviliz-

Ante la fragmentación, la desarticulación y la heterogeneidad de los actores históricos, de las clases modernas y de las manifestaciones políticas en un escenario latinoamericano golpeado, al mismo tiempo, por las dictaduras y la severidad de la crisis económica, las visiones de reclusión defensiva, identidad restringida y, en una palabra, las visiones en torno a la comunidad, fueron los ordenadores éticos y conceptuales con que los latinoamericanos comenzamos a pensar nuestra realidad en el paso de los setenta a los ochenta.

Sin embargo, avanzados esos años, el asunto se vio despojado, incluso, de su dimensión humanista y solidaria para recrearse en un sombrío escenario desmedidamente negativo: a la imaginería en torno a la comunidad se le sustituyó con conceptos que derivaban de investigaciones más cercanas al medio marginal y que nos hablaban de anomia, decadencia, destructividad, desintegración, caos, negatividad, antisocialidad, deterioro... Fernando Calderón y Elizabeth Jelin se preguntaban, durante un coloquio en Porto Alegre, Brasil, en 1987, si aún era posible "pensar en un modelo teórico global de la acción social en la región a partir de la fragmentación y la heterogeneidad de los movimientos sociales, si (estábamos) ante la generación de un nuevo sistema de acción histórica y de creación de sujetos por la vía de la resignificación simbólica de identidades comunes; o si más bien (estábamos) entrando en una fase gris de racionalización de la acción social".²

do. Estos movimientos tendieron, en consecuencia, a balancear su desideologización acercándose a los métodos y contenidos cristianos de base (también protestantes), para el cambio social, o al menos aprendieron a coexistir con ellos y a establecer sus demandas en torno a problemas concretos (agua, abastecimiento, escuela, transporte...) buscando soluciones para esta colectividad en el corto plazo, y no para toda la nación dentro de veinte años. Interpretaron bien este impulso los trabajos de: E. Jelin, F. Calderón, P. Jacobi, S. Mainwaring, P. Krischke, E. Viola, A. Moisés, P. Singer, D. Slater, M. Castells, F. Weffort, F. De Oliveira, R. y F. H., Cardoso, L. Kowarick, E. Tironi, E. Valenzuela, N. Lechner, I. Scherer-Warren, G. Campero, C. Hardy, J. Martínez, F. Dubet, E. Ballón, R. Laserna, T. Evers, J. Friedman, L. Fuentes, R. Arau, A. Massolo, A. Mercado, A. Alonso, M. Concha, J. Foweraker, B. Navarro, P. Iracheta, M. Kook, A. Craig, N. Harvey, P. Haber, J. Rubin, J. Bouchier, J. M. Ramírez Saiz, M. de la Rocha, F. Pérez Arce, S. Escobar, L. Paré, L. Lomnitz, A. López Monjardín, M. Marión, M. L. Tarres, J. Tamayo, L. Romero, H. C. de Grammont, B. Canabal, A. Bartra, L. Astorga, S. Sarmiento, J. A. Cuevas, A. Ziccardi, M. Perló, M. Scheingart).

² F. Calderón y E. Jelin, *Clases y movimientos sociales en América Latina*, Buenos Aires, Estudios CEDES, 1987.

4. *¿Hacia una sociología de la decadencia? La ruta del pesimismo*

Pero Eugenio Tironi y el Instituto Sur de Chile fueron más drásticos cuando nos interrogaron sobre si no debíamos cultivar una sociología de la decadencia en sustitución de una sociología de la modernización. Llegaron a considerar que en América Latina resultaban de mayor pertinencia, hacia el fin de los años ochenta, los conceptos de inspiración durkheimiana referentes a la disolución de la cohesión social, a la desintegración de identidades intermedias y a la particularización, o digamos, al repliegue en la esfera individual y atomizada de los miembros de una sociedad: un panorama, decía Tironi, de anomia aguda, de desafección generalizada con respecto al orden social y de debilitamiento, fusión o desaparición de unidades sociales básicas como las clases, los grupos, los estratos, que dan lugar a formas delincuenciales e individuales de adaptación.³

Alain Touraine y François Dubet comparten muchas de estas preocupaciones. Touraine citaba al peruano Matos Mar coincidiendo en que las referencias anteriores estaban efectivamente asentadas en el mundo de la exclusión, el de los marginados; pero señalaba que tal referencia relativizaba apenas medianamente lo dicho, pues hablar de los excluidos es hablar de la mayoría y, en esa medida, lo marginal ha regresado como un concepto de preocupación central. Paradójicamente, debemos hacer referencia a "la centralidad de los marginados". Se trata aquí, sin embargo, de una centralidad destrozada, porque en el medio pobre y marginal latinoamericano encontramos de todo: valores y actitudes comunitarias, delincuenciales, anómicas, populistas, consumistas-integracionistas, añoranzas de pertenencia a una clase proletaria, etc. "Son -nos dice Touraine- imágenes en negativo y separadas. Esto significa que lo que sería actor social o, de manera extrema, movimientos sociales, está destrozado."⁴ Habla incluso de antimovimientos sociales.

Ahora bien, se trata de formas desintegradas de algo, por lo que se puede reimaginar un principio de unidad... intentar encontrar principios integradores, analíticos, en términos de actores y, por qué no, de movimientos sociales.

Sin duda éste es un punto nodal de ruptura en la conceptuali-

³ Eugenio Tironi, "Para una sociología de la decadencia", *Proposiciones*, núm. 12, Santiago, Sur ediciones, 1986.

⁴ Alain Touraine, "La centralidad de los marginales", *Proposiciones*, núm. 14, *op. cit.*, p. 218.

zación en los últimos veinte años, desde que el pensamiento latinoamericano en ciencias sociales adoptó como referentes indiscutidos la continuidad del desarrollo (a pesar de la dependencia), y la inexorabilidad de nuestra inserción en Occidente. En efecto, a pesar del panorama decadente, negativo y destrozado de lo social, estos autores insisten en que debemos buscar "algo" que otorgue sentido y centro ("principio de unidad") al escenario, la conformación de actores en lucha por el control del sentido histórico (historicidad, dice Touraine) de nuestras sociedades, movimientos sociales e identidades colectivas en medio del caos.

Y es que, para las ciencias sociales en general, es impensable un modelo social sin una etapa futura mejor; no se puede renunciar a la idea de sentido de la historia, porque al hacerlo se tendría que renunciar también al contenido humanista, al principio de que la historia está o debe estar orientada hacia la satisfacción de las necesidades de los hombres y hacia un orden que potencie sus cualidades más elevadas: la comunicación racional, la igualdad de oportunidades, la concordia, el incremento de la cultura y el cultivo de las artes, el cuidado del cuerpo, etcétera.

5. *Desesperanza anómica y anhelo de integración*

En medio de esta discusión entre, por un lado, la búsqueda de principios unificadores y de algún sentido, y, por otro, la fragmentación, la opacidad y el estancamiento, Fernando Calderón y Mario Dos Santos, organizaron en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, hacia el final de los ochenta, otro seminario célebre: "Modernidad y posmodernidad en América Latina", y por su parte, en la misma época y con las mismas preocupaciones, Eugenio Tironi, Javier Martínez, Guillermo Campero y el equipo del Instituto Sur de Chile convocaron a un seminario sobre "Movimientos sociales urbano populares y procesos de democratización".

Es difícil decir si hubo postulados concluyentes en Buenos Aires y en Santiago, pero digamos que ahí se puso de manifiesto el pasaje, desde una visión analítica en términos de actores y movimientos sociales, hacia otra en donde la preocupación se centró en la dificultad para denotar identidades colectivas consistentes en el tiempo, orgánicas si se quiere: una especie de desconstrucción de las endeables identidades previas (ya no digamos de clase, pero incluso

popular-nacionales, comunitarias, de género, generacionales, etc.), como desnaturalizadas por la propagación irreflexiva de la pobreza.

Se advierte una tendencia a erradicar la idea de tránsito; se rechaza que todo ese desorden sea pasajero, simples males necesarios en la ruta hacia la modernización. A esta "crisis de historicidad industrialista", como la llama Calderón, correspondería una "sociología de la decadencia" que se propone "comprender esas situaciones en su estructura funcional" (Tironi). Predomina entonces un enfoque sincrónico en las ciencias sociales, que se resiste a ser calificado como franca sociología negativa, de formas estancadas, de pérdida de sentido y que se esfuerza, paradójicamente y al mismo tiempo, por reconstruir de alguna forma (no quedaba claro cuál), los movimientos sociales y la identidad colectiva en el mundo de los excluidos, tomando como eje su anhelo de integración; los marginados no podrían ser reducidos, según esta angustia conceptual contradictoria, a una masa anómica, desintegrada de la sociedad, apenas redimible "en torno a la fe y las iglesias, con pautas de acción puramente expresivas y afectivas, sugestionable por liderazgos proféticos de cualquier signo ideológico. Lo que se observa, se argumentaba, es una lógica instrumental agudizada por los requerimientos de la sobrevivencia...". Los pobladores mostraban, según este esfuerzo desesperado por otorgar algún sentido a la pedacería, "una fuerte adhesión cultural al sistema y una incorporación ya irreversible al orden urbano al que pertenecen por más de una generación. Por ende reclaman participación, no ruptura, más apoyo del Estado, no más autonomía; acceso a la industria, no talleres de autosubsistencia; un espacio en la cultura moderna, no la reducción en el folclor".⁵

Hay pues, al mismo tiempo, en la conceptualización de Latinoamérica, una aceptación de lo estancado, de los modelos sincrónicos, pero llegados a ese punto, y aunque se enuncie repetidamente, no se quiere aceptar el segundo paso: el del relajamiento anómico, el decadente, el de la degradación humana, y, entonces, se opta por una especie de matriz estructuralista que acepta la ausencia de evolución progresiva, pero se mueve en la sincronía. En medio del estancamiento, Tironi descubre asombrosamente una estructura funcional con base en el "anhelo de integración"; y Touraine, a

⁵ Eugenio Tironi, "Pobladores e integración social", *Proposiciones*, núm. 14, p. 78.

partir de elementos de acción destrozados, encuentra nociones y fuerzas que corresponden al proceso futuro, al de los movimientos sociales europeos.⁶

Digamos francamente que, llegados a este punto, la sociología latinoamericana se encuentra en una ambigüedad, y lo que nos dará cierta luz al respecto será sin duda una adecuada interpretación de la crisis desarrollista que estamos viviendo. Así, la ambigüedad tiende a establecer un divorcio también en el seno de las ciencias sociales: los economistas, los planificadores, los científicos políticos, han visto la crisis (de los ochenta y de los noventa), como una interrupción momentánea en el camino de la modernización, mientras que en la sociología, la antropología y la psicología social tiende a predominar un registro en términos de depresión, desesperanza, ausencia de futuro. Por su parte los determinantes económicos externos se vuelven más severos, lo que lleva al primer grupo de científicos a explicaciones a partir de la deuda externa, la descapitalización, el intercambio desigual, la competitividad... un regreso de la mentalidad dependentista, en donde la pobreza aparece como falla productiva, mientras que antropólogos, sociólogos y culturólogos se concentran, azorados, en describir la pobreza como deshumanización, como deterioro de la persona humana (regreso a la barbarie); se desvanece entonces el enfoque en términos de actores sociales en lucha por orientar el sentido de la historia, para recrearse en las leyes imperativas de la economía-mundo o, en el otro extremo, en el estudio del pequeño grupo o la biografía personal.

6. *Búsqueda de integración y transición a la democracia.* *La ruta del optimismo*

El más impresionante aspecto de las ciencias sociales en América

⁶ Así también Benjamin, Horkheimer y Adorno rechazaron por medio de una "negación crítica" la historia como progreso inexorable, como visión racionalista idealista y progresiva, como ley dialéctica que funciona independientemente de las acciones humanas hacia una sociedad sin clases. Pero, a pesar de su tendencia natural hacia una "lógica de la desintegración", mantuvieron la concepción de que la historia consistía en una lucha por liberar a la conciencia de su subordinación a lo dado, una habilidad para descubrir lo nuevo a partir de las potencialidades del material presente (Susan Buck-Morss, *Origen de la dialéctica negativa*, México, Siglo XXI, 1981).

Latina desde los años ochenta ha sido, sin duda, esta separación bastante esquizofrénica, pues junto a una postura como la descrita en la "sociología de la decadencia", se ha desarrollado otra concepción radicalmente opuesta y hasta optimista que establece que el escenario regional no está yendo hacia la desintegración, la atomización y la anomia, sino hacia la integración de los excluidos en el mundo del desarrollo y el consumo, experimentándose un "tránsito a la democracia".

En efecto, hay una correlación entre los "scholars" cercanos a las instituciones gubernamentales y devotos de una sociología política muy influida por las corrientes académicas norteamericanas (centradas fuertemente en el análisis comparativo y cuantitativo de las intermediaciones institucionales: partidos, procesos electorales, parlamentarismo, sindicatos, corporaciones, instituciones de cultura y educación, medios de difusión, etc.), empeñadas en pronosticar un futuro occidental para América Latina; mientras la sociología y las disciplinas ligadas a la observancia de la comunidad, el barrio y las manifestaciones basistas, persisten en las concepciones pesimistas a pesar de la negativa de los medios de comunicación para darles publicidad (quienes viajan a Chiapas acusan al ejército mexicano de estar destruyendo a la comunidad indígena, mientras que quienes permanecen observando el proceso de las instituciones políticas nacionales acusan al Ejército Zapatista de haber interrumpido el embarnecimiento de las instituciones intermedias de la democracia, los acuerdos pactados, el perfeccionamiento del aparato electoral y la alternancia en el poder).

En este contexto es posible citar a algunos autores, cercanos a las instituciones gubernamentales y al programa Solidaridad, quienes, después de haber sido hasta los ochenta críticos radicales del modelo excluyente del desarrollo mexicano, afirman hoy que "la naturaleza productiva, creativa y solidaria de nuestra pobreza nos permite analizarla no sólo como una suma de carencias sino también como una fuente potencial para el verdadero desarrollo".⁷

Regresaremos más adelante sobre la discusión en torno al tránsito a la democracia y el problema de la pobreza; sirva este apartado para mostrar cómo los conceptos han sido fieles al desconstruido panorama social latinoamericano, aunque en ocasiones lo interpreten de manera antagónica.

⁷ Arturo Warman, "Presencia de la pobreza", *Cuadernos de Nexos*, núm. 8, marzo de 1989, p. v.

cación, cuando así conviene, para recrear la imagen de que alguien vigila los intereses ciudadanos allá arriba. En resumen, cuando tiene que ser pacífico, el desmantelamiento de las identidades colectivas se logra, como ya ha venido quedando claro, vía la atomización participativa en pequeños y efímeros núcleos de base, vía el desmantelamiento directo de los aparatos y espacios de intermediación, o vía la entronización de las dirigencias en las alturas del poder: cooptación desde lo alto que se engancha con la propensión, desde abajo, hacia la "buropolítica" (creciente influencia personalizada en espacios selectos y cerrados), de la cultura mexicana. Algunos ejemplos de esta ingeniería del desmantelamiento social serían:

1] La balcanización-entronización de las fuerzas y corrientes político-partidistas. Mencionemos dos ejemplos a este respecto: como resultado de los costosísimos compromisos de fidelidad que el salinismo le impuso al Partido Acción Nacional (PAN) como condición para reconocerle sus triunfos electorales, la dirigencia de este partido debió mostrarse tan cerca de aquel régimen y de los acuerdos palaciegos ("concertaciones"), que fue debilitado como alternativa opositora uno de los raros organismos con tradición y continuidad en la vida política mexicana; imperó lo más negativo de lo mexicano: la entrega, en sacrificio, del poder social (logrado con muchos años de cultura ciudadana en este caso), a cambio del poder para su dirigencia, así amansada y sometida al tlatoani. No se quiere decir con esto que el PAN dejó de ser una opción electoral, pues de hecho obtuvo el 27% de los votos presidenciales en 1994, favorecido por un electorado temeroso de la violencia y contrario al monopolio político priista (ganó también, a principios de 1995, las elecciones en el importantísimo estado de Jalisco y, hacia mayo, en Guanajuato, con lo que acumuló cuatro gubernaturas).² Lo que se está afirmando es que dejó de constituir un organismo de oposición al autoritarismo del Estado mexicano y a su partido para convertirse en un apéndice político de ese principio de orden autoritario; optó por el poder para el vértice, pasando a formar parte de los aparatos desmanteladores de la identidad social ("bipartidismo de Estado" se ha llamado a este fenómeno), junto con las otras "intermediaciones" altamente controladas de la pirámide co-

² Pasó de una sola gubernatura en 1991 (Baja California) a cuatro en 1995 (Jalisco, Chihuahua, Guanajuato y la ya citada). En ese mismo lapso pasó de 38 a 156 alcaldías (Carlos Castillo Peraza, discurso inaugural de la XVI Asamblea Nacional Ordinaria del PAN, marzo de 1995).

A lo anterior se agrega un fenómeno desarticulador muy característico de nuestro país pero sobredimensionado en el presente. En efecto, desde el momento en que los regímenes de la llamada "transición a la democracia" aceptan abiertamente que la reconversión, la globalización y el libre comercio exigen políticas de ajuste que implican la exclusión y pauperización de enormes masas durante una etapa que "puede ser larga", aceptan al mismo tiempo que atravesarán por periodos de inestabilidad peligrosos para el modelo en su conjunto (Brasil, Venezuela, Ecuador, Argentina). En tales condiciones, y con la certeza de que relanzar el crecimiento es el "fin" buscado a toda costa, se justifica el *actuar preventivamente desalentando, o francamente desmantelando, la constitución de identidades sociopolíticas alternativas* y de espacios públicos de interacción comunicativa que puedan volverse inmanejables o que puedan exigir del Estado compensaciones y subsidios que malogren la agilidad que el reordenamiento requiere. Ello ha empujado a exacerbar las políticas desmanteladoras, lo que en nuestro país ha significado ni más ni menos que redoblar lo que ha sido un rasgo histórico del autoritarismo mexicano: la destrucción de todo aquello que cobre alguna fuerza independiente del control desde el vértice estatal.

Ahora bien, en la medida en que la democracia política (perfeccionamiento del sistema político-electoral), se vuelve una exigencia de los organismos mundiales en la era de la globalización, el desmantelamiento desde lo alto se ha convertido en una finísima *ingeniería social*, "una ingeniería de extracción del poder social", la llama César Gillibert,¹ una especialidad de destrucción de espacios e identidades colectivas sin el empleo manifiesto de la violencia, una habilidad para desmantelar la *democracia social* manteniendo una *democracia política* cada vez más encerrada en espacios restringidos, cupulares, cernidos por el fraude electoral: un juego partidista y parlamentario hiperpublicitado por los medios de comuni-

¹ César Gillibert, *El imperio de los arcanos o los poderes invisibles*, tesis de doctorado, México, UAM-Xochimilco, 1995.

mo el Partido del Trabajo, el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol-Procampo) -que reunió al final del salinismo 300 mil comités en toda la república-, la red electrónica Televisa-Radiodifusión y junto con, en fin, el aparato de seguridad nacional y el ejército mexicano en activo, lo que terminaría por ser la característica del zedillismo.

El otro ejemplo lo constituye el propio Partido del Trabajo, promovido por el salinismo, calcando el mapa de los movimientos de inspiración maoísta de los años setenta, para contener durante un sexenio completo y con base en inversiones millonarias del erario público (pronasolismo), las inclinaciones del electorado de toda una zona del país que había votado por el cardenismo en 1988; para ello, el gobierno echó mano de aquellos mismos jóvenes que escenificaron la utopía radical-maoísta pos-68 en Zacatecas, Durango, Chihuahua y Nuevo León.

Fueron así promovidas artificialmente ésta y otras identidades partidistas, durante el sexenio de Salinas, con base en condensaciones sociales regionales o gremiales legítimas, o con base en problemas que afligen efectivamente a la ciudadanía, como es el caso de la ecología, pero buscándose sobre todo la parcelación de un electorado opositor al régimen. Si los mismos principios balcanizadores le fueran aplicados al PRI tendríamos, por ejemplo, a una Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) convertida en Partido del Trabajo (compitiendo contra el PRI), un "Partido del Norte", con los militantes priistas de Baja California, Chihuahua y Nuevo León, un partido magisterial, uno petrolero y otro cenicista para extirpar del partido oficial a sus contingentes corporativos. Agréguese en fin, que una vez parcelado así el mapa de las identidades partidistas de la oposición, el gobierno prohibió las alianzas electorales. Así pues, a través de los mecanismos de *balcanización* y de *entronización*, es decir de pulverización y/o de incorporación de las dirigencias partidistas al reino del Estado (a condición de deslindarse de sus bases y mantenerlas bajo control, como Fidel Velázquez, Francisco Hernández Juárez o Elba Esther Gordillo y la cúpula sindical lo hacen con la clase obrera), el Estado mexicano, en usufructo de nuestra cultura política, consume el rito de extracción del poder social (partidista en este caso).

2] La ingeniería electoral para el fraude se ha convertido en una especialización altamente sofisticada de extracción del poder social en este ejemplo de neoliberalismo dependiente, mestizo y de he-

rencia estatista autoritaria: se trata de montos económicos elevadísimos que no se comparan con los modestos presupuestos electorales de las democracias de Occidente y que tienen como objetivo, a] asegurar una mayoría parlamentaria a la élite gobernante permitiéndole leyes expeditas y *ad hoc*, comenzando con la propia legislación electoral (los "ingenieros" pueden incluso, por mal cálculo, llegar al horrible espectáculo del monopolio político como en 1991 o en 1994, cuando ganaron 277 de las 300 diputaciones federales); b] dedicar recursos masivos para levantar un censo político de alta precisión (credencialización constante para la elaboración de mapas de afinidad partidista y precisión domiciliaria), con fines que van más allá de lo electoral inmediato y focalizan esencialmente los puntos candentes que requieren de inversiones ("bomberazos") del programa Solidaridad (y Procampo), o, en el extremo, de la acción más drástica del aparato de "seguridad nacional" para disuadir protestas o dismantelar identidades colectivas inconvenientes, y c] provocar el desaliento y el abstencionismo cuando los ciudadanos constatan que las opciones para la renovación franca de los representantes y el voto de oposición y de verdadera alternativa están negados, no logran vencer a la ingeniería del gran poder y se encuentran reducidos exclusivamente a la oposición "leal" del Partido Acción Nacional (como cúpula y no como movimiento social panista).

3] El control de los medios de comunicación de masas, cuya propiedad fue privatizada mas no así el contenido político de sus emisiones, las cuales permanecieron bajo estricta censura del Estado a través de la compra de espacios publicitarios para las dependencias gubernamentales; la intromisión en la elección de sus directivos; la política impositiva y el veto deliberado sobre periodistas, conductores de programas radiofónicos y televisivos, etc. Para quienes se muestran dispuestos a prestigiar las políticas gubernamentales o descalificar a los que las critican, van ayudas económicas directas, programas de televisión exclusivos, inserciones pagadas de todas las instituciones federales y estatales, contratos millonarios para la producción de "obras" culturales (como sucedió en 1993, con la edición de los libros de texto gratuitos, cuando se pagaron sumas inmensas a un grupo de intelectuales afines al régimen, quienes terminaron tergiversando la historia de México al proponer una versión favorable al libre mercado y a la vocación democrática del salinismo mexicano). En el largo plazo quizás sólo han

podido escapar la revista *Proceso* y el periódico *La Jornada*, con severas embestidas... En pleno liberalismo salvaje y apertura comercial no está permitida la libre competencia informativa para las agencias televisivas: en México ya se ha vuelto motivo de hilaridad el constatar que la apertura a las firmas y a los productos internacionales es casi total, desde Mac Donald's hasta el City Bank y Petróleos Mexicanos, pero la libre competencia sobre los medios de comunicación no existe y se mantiene bajo monopolio estatal (¡qué esperanzas de que algún día compita aquí la CNN o la CBS presentando algunas noticias frescas sobre nuestro país!; ni siquiera los noticieros extranjeros por cable son permitidos durante las jornadas electorales y otros momentos decisivos de la vida de nuestro país).

4] El desmantelamiento de la universidad pública se constituyó en un renglón destacado de esta ingeniería de desconstrucción social al abatirse los presupuestos de la academia; al recortarse el número de educandos en un país en crecimiento demográfico; al ser prácticamente jubilados los grandes maestros de las humanidades y las ciencias sociales (separados de sus alumnos, sin exigir nada a cambio de su salario, invitándolos así, corruptamente, a ir en busca de otros empleos y vaciar el espacio universitario); al prestigiarse deliberadamente los centros privados cuya planta académica ha sido casi en su totalidad formada en planteles y con subsidios públicos; al ser separados los institutos (sin alumnado) con su lujosa plantilla de investigadores, de las escuelas y facultades (en donde sí se imparte cátedra); al ser otorgados estímulos económicos, premios y becas con base en la obediencia a las autoridades de la institución; al ser enfrentados todos contra todos, hasta los más prestigiados maestros, por un ínfimo trozo de estímulos monetarios, etc. Así, el presupuesto de las universidades, en otra hora autónomas, se desglosa hoy minuciosamente desde la Secretaría de Hacienda y no existe ninguna forma de destinar fondos para relacionar horizontalmente (utopía de los setenta) sapiencia universitaria con necesidades populares o de grupos sociales (el único horizontalismo que se permite a este respecto es entre los institutos de alta tecnología y la gran empresa). ¿Quién puede en estas condiciones crear una asociación para la defensa de los intereses de su gremio si no ha quedado ningún lugar intermedio, ni presupuestaria ni identitariamente...? Aclaremos que, a partir de la crisis de 1995, una cantidad de alumnos se ha visto en la inca-

pacidad de pagar las altas colegiaturas de las universidades privadas y ha vuelto sus ojos hacia la universidad pública. Ello ha generado una demanda exacerbada y, dado que el presupuesto para la educación superior se encuentra estancado o decrece, serán muy altas las probabilidades de que este espacio eleve sus requerimientos en costo de matrícula y nivel académico, de manera que la hasta hoy vilipendiada universidad pública será acaparada en un plazo más o menos corto por los alumnos provenientes de bachilleratos privados con recursos económicos y una preparación relativamente mejor. La crisis habrá convertido a la educación superior en un artículo para clases altas, inalcanzable para los sectores medios (el Plan Carpizo se habrá impuesto por otro camino).

5] No cabe duda de que el Pronasol resulta lo más nítido para ejemplificar este vaciamiento de las intermediaciones, al ligar en forma directa a la figura personalizada del presidente de la República con la diminuta y *transitoria* (sólo mientras dura la obra) asociación de ciudadanos paupérrimos allá en el comité de Solidaridad, en lo más recóndito de la sociedad atomizada, o bien, cuando así conviene, al prestigiar a tal organización, por la que se canalizan los fondos, en detrimento de tal otra, indeseable, regularmente con más tradición, mejor asentada y con más autonomía con respecto a la estructura de control gubernamental; o bien, se le entrega un tractor a un miembro no tan justificado de un grupo que había solicitado cinco, lo que muy probablemente provocará la confrontación de ese agregado de campesinos. Se pensaba que Pronasol eliminaba intermediarios corruptos que en otros momentos impedían que los dineros públicos llegaran a quienes estaban supuestamente dirigidos. Chiapas puso en entredicho esta creencia, quedando al descubierto que, con el pretexto de eliminar intermediarios, lo que Solidaridad sí ha logrado con eficiencia es desmantelar las más auténticas organizaciones intermedias de la sociedad (de la misma manera que la crítica a la corrupción de las cúpulas sindicales terminó siendo la crítica al sindicalismo y, de ahí, la crítica a cualquier asociacionismo intermedio). Esto forma parte de una misma concepción desmanteladora de las defensas sociales, de la consistencia del tejido social.

6] Un aspecto que demuestra bien hasta qué punto pudo llegar la locura globalizadora del salinismo es el que se refiere al desmantelamiento de los órdenes tradicionales de intermediación. Todos podemos estar de acuerdo en que esos viejos órdenes debían, en

cualquier esquema, ser modificados e incluso sustituidos, sobre todo si estamos hablando de las intermediaciones priistas, cencistas, de las hipercorruptas instituciones gubernamentales de crédito como el Banrural, de los comisariados ejidales, etc. El salinismo se apoyó en este sentimiento legítimo (de la misma manera que aprovechó la aversión hacia las corruptelas y verticalismos sindicales) para proceder al desmantelamiento atropellado del viejo orden y sustituirlo en sólo seis años, soberbia pretensión, por su personal mecanismo de articulación Estado-pueblo: Pronasol. Sin duda, en medio de la ignorancia tecnocrática y de la locura refundacional, pensó que sería posible sustituir todo aquel mundo de tradiciones y andamiajes seculares. En infinidad de regiones del país pudimos constatar cómo el gobierno cambió de un día para otro los tipos de cultivos, suspendió abruptamente los subsidios a la producción, hizo desaparecer instituciones enteras. El caso de La Laguna es un ejemplo entre muchos otros: ahí los préstamos focalizados del Procampo sustituyeron a mecanismos de fomento más generalizados para la producción, como los de Banrural; la apertura comercial sustituyó de golpe el algodón por maíz; las figuras centrales del orden político y social que fueron los comisariados ejidales quedaron empujadas y casi borradas por agentes que han aplicado el Procampo personalmente, etc., al extremo de que la CNC y el propio PRI vieron reducidas sus funciones ante la microfísica de Procampo y Solidaridad. Con base en esas acciones es difícil sustentar una crítica, pues a final de cuentas ¿no es en contra de todo ese armazón autoritario y corrupto contra el que luchan las fuerzas democráticas en cualquier orden social? Pero a esta discusión habrá que complementarla con dos apreciaciones críticas; primero: no fue en favor de las intermediaciones democráticas o colectivas por lo que se desmantelaba locamente la estructura tradicional sino en favor del verticalismo personalizado del tlatoani en turno, con el objeto de poder llevar más a fondo el proyecto neoliberal de globalización. Segundo: el cambio no condujo a una nueva época de reconstrucción de intermediaciones que, aceptémoslo, podría haber sido difícil como toda reconstrucción, sino que por su apresuramiento y su teoricismo, redundó en un fracaso total y, en consecuencia, en una vuelta de tuerca más del desordenamiento social. En efecto, con la crisis del año 1995 la producción del algodón volvió a ser costeable, llevando al mareado campesinado a una voltereta más, sólo que ahora, en su desorientación,

no atinaba a asirse de ningún referente crediticio o de ordenamiento social y político, tradicional o moderno (CNC, comisariado ejidal, Banrural, etc.), pues hasta los agricultores medianos, descapitalizados, habían sido barridos y en su mayoría se sumaron a El Barzón. Mientras tanto, el dinero escaseaba, y se volvía imposible para el zedillismo mantener y alimentar el nuevo invento de mil cabezas de Pronasol y Procampo.³

7] En esta ingeniería del desmantelamiento de los espacios de intermediación y de las identidades colectivas es muy importante reseñar lo acontecido con las instituciones de alta participación pública que antecedieron al reordenamiento neoliberal. Dos ejemplos vienen al caso:

Primero, el de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), que dejó de tener una intervención reguladora sobre los productos de primera necesidad -regulación que se lograba a través de los precios de garantía, el almacenamiento, el abasto y la distribución- y se vio limitada a una labor asistencialista en torno al maíz, el frijol y la leche. Luego, así limitado ese abasto, se hizo desaparecer también el instrumento de acceso a la negociación colectiva de esos productos, los "tortibonos", que se habían convertido en patrimonio político de los movimientos sociales no corporativizados. Así, para extirpar cualquier organización colectiva en torno a los productos básicos, se planeó la credencialización de los derechohabientes y de los distribuidores, de manera que se rompió y atomizó la organización popular construida para el manejo y la distribución del abasto popular. Según el proyecto la nueva tarjeta con registro electrónico, entregada a la población que demostró recibir menos de dos salarios mínimos, permitió al usuario acudir a cualquier molino y recibir diariamente un kilo gratuito de tortilla después de insertar la tarjeta en un lector óptico instalado en cada local. Por su parte el molinero, según el proyecto, podría acudir a cualquier ventanilla de banco y conectar el lector óptico a un mecanismo electrónico que contabilizaba el monto de sus ventas y le retribuía la cantidad que sería turnada, a su vez, a la Conasupo. El primer objetivo de este mecanismo consistía en hacer pasar por el sistema bancario y financiero la masa de recursos

³ Véase Hilda Hernández, *Los campesinos de La Laguna: reconversión productiva y nuevo desorden social y político*, tesis de maestría, Instituto José Ma. Luis Mora, 1995.

monetarios que en el otro esquema formaba parte del presupuesto público federal. El otro objetivo de esta estrategia, legítimo hasta cierto punto, consistía en eliminar la corrupción y el clientelismo asociado a las acciones asistencialistas del gobierno; pero el efecto principal de dichas medidas, y sin duda el objetivo velado, resultó ser la desaparición de la organización colectiva sin la cual es imposible afrontar los problemas de la comunidad en general, imaginar soluciones, presionar a las autoridades, etc.⁴ La crisis de 1995 vino a dificultar severamente esta utopía cibernética de la individualización, aunque no a eliminarla, como veremos en los siguientes párrafos.

El segundo ejemplo está dado en torno al sistema de salud pública: ¿De qué manera este ámbito de las intermediaciones entre lo social disperso y el Estado, este faldón privilegiado del Estado de bienestar, ha sido desmontado por la ingeniería desidentitaria del reajuste, sin que ello haya conducido a un desprestigio inmediato de los regímenes en turno? La estrategia ha combinado el deterioro, la masificación, la privatización de los servicios de salud, así como su focalización, su descentralización, y el establecimiento de "cuotas de recuperación" crecientes del servicio público. Desglosemos un poco: la inversión en el sector público paraestatal de salud en 1989 se encontraba 41% por debajo del monto que alcanzó en 1982 pero, sorprendentemente, el Estado anunciaba con gran publicidad que en ese periodo había aumentado en 35% el número de derechohabientes en los institutos de seguridad social⁵ (el porcentaje de derechohabientes con respecto a la población total pasó de 20% en 1965 a 34% en 1980 y a 49% en 1986).⁶ El resultado ha sido ineludible: el presupuesto por derechohabiente cayó un 44% en el IMSS y un 61% en el ISSSTE, incrementándose las dificultades y las largas esperas para acceder a los servicios médicos de segundo y tercer nivel. Esto constituyó una presión natural hacia la privatización de los servicios médicos, lo que conduciría a la "muerte lenta"⁷ del sistema público de salud: aproximadamente el 20%

⁴ A este respecto véase el excelente estudio de Adrián Gurza Lavalle, *La reestructuración de lo público: el caso de Conasupo*, México, UNAM, ENEP Acatlán, 1994.

⁵ Asa Cristina Laurell, "El proceso de privatización en salud: el caso de México", México, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, 1992, mimeografiado.

⁶ Eduardo L. Menéndez, "Continuidad y discontinuidad del modelo sanitarista", en Ignacio Almada Bay, *Salud y crisis en México*, México, Siglo XXI, 1990, p. 224.

⁷ Para un estudio comparativo del proceso de privatización en América Latina

de los derechohabientes de los institutos de seguridad social perciben más de 3.5 salarios mínimos. Así, 1.7 millones de asegurados (8 millones con sus familias) constituían, al menos hasta antes del desastre de 1995, un mercado potencial para el sector privado de servicios médicos y para las aseguradoras privadas.⁸ La tendencia durante el salinismo fue, en consecuencia, hacia el abandono de la deprimida seguridad pública por parte del grupo de seis y más salarios mínimos y, potencialmente, del 20% de los asegurados que, al retirar sus cuotas, deteriorarían aún más la seguridad social pública por ser proporcionalmente mucho más elevado el monto de sus cotizaciones (entre el 46% y el 48% de las aportaciones obrero-patronales, asegura Cristina Laurell). Son imaginables a partir de aquí, los efectos de diferenciación de la calidad entre el servicio público y el privado, comenzando por la marcada desigualdad de ingresos entre el personal médico de ambos sectores y la fuga consecuente de los mejores cuadros médicos hacia el sistema privado de salud.

Como respuesta a las severas restricciones del gasto público y a las políticas de ajuste, se tendió a concentrar (*focalizar*) los escasos recursos disponibles en los segmentos de la población más vulnerables.

Todo esto tendió a conformar lo que podríamos llamar un sistema de dos pisos, con un 5% o quizás un 10% de los mexicanos adscrito a las instituciones privadas de salud, en la parte alta y, en el piso inferior, cada vez más depauperado y disperso, el conjunto de instituciones públicas divididas a su vez entre las de seguridad social (ISSSTE, Seguro Social y DIF), y los llamados servicios públicos de "población abierta" pertenecientes a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, atendiendo a la población no asegurada de bajos re-

véase Cristina Torres, "Los procesos de privatización en los servicios de salud en América Latina: redefiniciones de la relación público-privado", Washington D.C., Programa de Desarrollo de Políticas de Salud, Organización Panamericana de la Salud, 1992: "Cuando nos aproximamos al fenómeno de la privatización en el sector social encontramos que la 'muerte lenta' aparece como la modalidad más usual y practicada en los países de la región, o por lo menos aquella que ha precedido e inspirado casi todas las políticas relacionadas con la reestructuración del sector público en materia de prestación de servicios."

⁸ Laurell, *op. cit.* Hasta hoy sólo una cuarta parte de ellos, los que perciben más de seis salarios mínimos, ha comenzado a tener acceso, a través de los seguros grupales o individuales-familiares, a los servicios privados de salud, sin renunciar en la mayoría de los casos a sus derechos y obligaciones con las instituciones públicas de seguridad social.

cursos. La peculiaridad de este último subsistema comenzó a ser el que, no perdiendo el principio de gratuidad para la atención primaria, ha instaurado de manera creciente, en lo que hace al segundo y tercer niveles, la modalidad de "cuotas de recuperación"⁹ que ya se encuentran muy por encima del salario mínimo mensual.¹⁰ Habría que agregar un sótano a nuestra arquitectura: los 10 millones de mexicanos que se encuentran al margen de cualquier servicio.

Con la crisis de 1995 las tendencias se agravaron, naturalmente, pues la disminución del número de afiliados significó una caída del 8% en las percepciones de las instituciones de seguridad social; mientras tanto se elevaba el costo de muchos de los insumos, fundamentalmente en el renglón de medicinas, lo que se vino a agudizar por la "generosidad" del gobierno federal al extender la cobertura a quienes estaban desempleados (generosidad que no fue acompañada con nuevos financiamientos para estas instituciones).¹¹ Junto a ello, debido a los recortes en el empleo, los empresarios, los sindicatos y los propios trabajadores aceleraron las jubilaciones.

En este contexto echó a andar, bajo el zedillismo, la reforma del IMSS teniendo como eje un seguro de retiro, cesantía y vejez que sustituye al sistema de fondos solidarios por uno de cuentas individualizadas, basado en cuentas de capitalización personal.¹² El mecanismo para pasar de un sistema de fondos solidarios a uno de cuentas individuales (el sistema considerado en otras experiencias el más caro y con menos beneficios), y de la administración pública a la privada, prevé el depósito de las cuotas de retiro, cesantía y vejez en las llamadas Administradoras de Fondos de Retiro (Afores), sociedades especializadas de inversión que en el corto plazo, muy seguramente, terminarán monopolizando a las clientelas y afiliándose a los grandes grupos financieros, como ocurrió en Chile. "En este sistema la cotización es conocida pero la futura pensión es incierta porque depende del nivel salarial y el tiempo de cotización de la rentabilidad del fondo y del gasto de administración" (*idem*).

⁹ Véase Cristina Torres, *op. cit.*, pp. 39-40, sobre la adopción del pago de tarifas en otras partes de América Latina.

¹⁰ Laurell, *op. cit.*, p. 16.

¹¹ Ricardo García Sáenz, "Los peligros de un SAR magnificado", *La Jornada Laboral*, 30 de noviembre de 1995.

¹² Asa Cristina Laurell, "Una contrarreforma en *fast track*", *La Jornada Laboral*, 30 de noviembre de 1995.

Laurell calcula que la nueva modalidad pondrá bajo el control del sistema financiero privado fondos del orden de 1.5% del PIB al año, que no podrán ser retirados hasta dentro de 25 o 30 años. En el lapso de un decenio se acumularía en estos fondos un 35% del PIB. Así se ve con claridad que la reforma al sistema de salud social está en realidad destinada a la salud bancaria y financiera (que fue lo que prometió, con otras palabras, el secretario de Hacienda a través de la revista *Business Week*).

Por lo demás, en los rubros de enfermedad y maternidad, los asegurados con ingresos de más de tres salarios mínimos son inducidos por razones de calidad del servicio a elegir los convenios de "reversión de cuotas", que permiten optar por los seguros y servicios privados. Pero como veíamos, si los asegurados con mejores ingresos abandonan las instituciones públicas (digamos el 30% de los cotizantes), estas instituciones perderían al menos el 45% de sus fondos. Por lo demás, la nueva legislación puede conducir al extremo de condicionar la amplitud de derechos de una persona al monto de la prima por ella cotizada: tener acceso solamente a "paquetes de salud" específicos con topes de gastos y exclusión de determinados servicios.

Es por estas razones, entre otras, por las que especialistas en el tema como Cristina Laurell y Ricardo García Sáenz consideran mal fundamentada la tesis de que la privatización va a liberar al Estado de cargas que serían absorbidas por la iniciativa privada. El estado (la sociedad) continuará absorbiendo los pasivos de las pensiones y servicios que actualmente se están cubriendo, más aquellos derivados de la ineficiencia y la especulación de las instituciones financieras si no es que de su corrupción y posible bancarrota (el actual Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR, redujo, en 1993, 13.5% y en 1994, 11.8% por debajo de Cetes y otros bonos gubernamentales).

8] Refirámonos, en fin, a uno de los más sofisticados mecanismos de la ingeniería de la desidentidad: el manejo de las estadísticas nacionales. La manera en que las estadísticas nacionales se han vuelto un secreto de Estado, particularmente en torno a la distribución de los votos¹³ y del gasto público, es un asunto ya alarmante

¹³ Se permitía que los partidos invirtieran seis millones de nuevos pesos para la campaña de gobernador en Tabasco; se encontró que el candidato priista Madrazo había gastado, en 1994, más de 250 millones de nuevos pesos).

del manejo autoritario en el neoliberalismo dependiente: resulta que los ciudadanos no tienen posibilidad, ni siquiera, de entender cuál ha sido la variación de los gastos dedicados al renglón de beneficio social entre el periodo salinista y los momentos previos, porque las series estadísticas no son continuas: lo que hace diez años se llamaba de una manera hoy se llama de otra, comprende renglones diferentes y no guarda ninguna continuidad con los agregados que se manejaban antes. Recientemente, una investigación secreta sobre el colapso del peso mexicano, ordenada por el FMI, acusaba al gobierno mexicano de impedir al personal de ese organismo el acceso a la información, así como de presionar a los autores de dicha investigación para no dar a conocer todos sus hallazgos.¹⁴ Si eso sucede en la contabilidad internacional, ¿qué no sucederá con los datos domésticos ofrecidos a la cándida opinión pública y a la obsequiosa comunidad académica y de los medios de comunicación?

Así pues, entre lo social disperso y el Estado se encuentran muchas constelaciones que sufren este embate y ello se constituye en uno de los "disolventes" más poderosos, aunque no único, de lo social. En efecto, hoy podemos establecer la hipótesis de que ha habido en México, a partir de los años ochenta, un debilitamiento palpable de los órganos y espacios de intermediación; debilitamiento del espacio público, diría otro enfoque. Enumeremos: 1] en el plano propiamente social hoy podemos constatar en México y también en América Latina la crisis generalizada de los *movimientos* y las *luchas sociales*, la destrucción de la *acción sindical* y la *prohibición de las huelgas* y otras acciones directas que buscan una mínima continuidad o identidad; 2] en el plano organizativo social con cierta institucionalización sucede lo mismo: hay una crisis de los *frentes*, *coordinadoras*, *asambleas*, *confederaciones sindicales*, *obreras*, *agrarias*, *uniones de pueblos*, *colonias*, *órganos vecinales*, *comunidades eclesiales*, etc.; 3] en los espacios institucionalizados de lo público como el *sistema escolar*, el *universitario*, el de la *cultura*, y en los *medios de comunicación* en general, también constatamos el mismo vaciamiento de la participación colectiva en aras del *eficientismo científico-técnico*, y asistimos al *desmantelamiento* de lo que alguna vez fueron los aparatos asistenciales con fuerte participación social como

¹⁴ Alain Wittom, 1994, Informe al FMI sobre la economía mexicana, citado en *La Jornada*, 23 de abril de 1995, p. 1.

el *sistema de salud*, de *abasto*, de *transporte*, de *vivienda* 4] Las instituciones propiamente políticas de la sociedad: partidos y organizaciones políticas, cúpulas sindicales, patronales, sectoriales, grupos de interés, de presión, de opinión, son también objeto de esta constante erosión premeditada. Creemos que la hipótesis sobre el debilitamiento de lo público y de nuestra defectuosa modernidad puede ser sustentada en todos estos terrenos.

8. DESPOBLAMIENTO DE LO PÚBLICO

1. *Reclusión de los integrados*

A la par del debilitamiento de lo público derivado del desorden anómico en el ancho mar de los excluidos y de los sectores depauperados, hay que reseñar un fenómeno adicional trabajando en el mismo sentido: en efecto, los sectores mejor integrados de las clases medias y altas se caracterizan, en estas sociedades, como también en las más desarrolladas, por un individualismo posesivo centrado en el consumo personalizado. Para este medio social el neoliberalismo se convirtió en una ideología que ha ido mucho más allá de lo meramente económico, mucho más allá de una simple política para salir de la crisis, constituyéndose en el instrumento moral para justificar la desigualdad social creciente, para no confrontar más, como responsabilidad propia, la pobreza generalizada, el entorno deshumanizado, gracias a la aparición de un tercer actor a quien culpar, un tercero entre los desheredados y yo: el Estado (keynesiano, populista, socialista...), que, diría esta visión, hegemonizó la etapa histórica anterior a la presente y a quien se puede acusar como el verdaderamente culpable de los vicios que hoy padecemos debido a sus errores y a su corrupción. A partir de ahora, según esto, nos toca vivir una época de reconstrucción, de penitencia, de expiación, de sacrificio que recaerá en las grandes masas por haber creído en la salida irresponsable del estatismo, del corporativismo, del anonimato comunitario. Se justifica mi reclusión en lo individual, en la familia, el pequeño grupo profesional o político, la banda, la generación escolar, la cofradía tecnoburocrática, la vuelta al trabajo como ejercicio privado, como esfuerzo de cada uno ante Dios, mientras se reconstruye la riqueza dilapidada por el patrimonialismo, por los corporativismos y por el centralismo corrupto.

Estos sectores integrados de nuestras sociedades votan y se conforman furiosos por los fraudes electorales de que requiere el neoliberalismo para cambiar las leyes mediante el mayoriteo parlamentario, pero reprueban el desbordamiento popular en tanto

heraldo de nuevos liderazgos patrimoniales, en tanto motor de desestabilización de una sensible economía internacionalizada, en realidad, de "un estado de cosas que me favorece" en tanto clase integrada al mundo moderno.

Sea como sea un fenómeno parece alarmante y nos coloca frente a la necesidad de repensar el tipo de democracia que creemos estar instaurando en América Latina: estamos asistiendo a una fragmentación de los mercados políticos de manera que los sectores con mejores ingresos, mayor cultura, mejor educación y, en una palabra, los sectores mejor integrados a la modernización parecen aprovechar, en forma mucho más intensiva que en el pasado, los canales de la política y de la vida pública en general (partidos, parlamento, medios de difusión, universidades, espacios educativos y culturales, organismos gubernamentales, etc.), mientras que los sectores menos integrados se recluyen en el desorden, la atomización, la desidentidad, la anomia, la apatía y, como en un círculo vicioso, en la falta de participación en los espacios abiertos por la referida política liberal-democrática.

2. *¿Instituciones generadoras de ciudadanía?*

Esta segmentación de los espacios de lo público, la reclusión de los sectores integrados en lo privado, así como el desorden y la dispersión en que viven dos de cada tres mexicanos, ¿nos permiten hablar, como ha interrogado el brasileño Alvaro Moises, del enraizamiento en lo social de una cultura democrática, de la generalización de una pauta de valores compartidos entre los diferentes segmentos en que se divide la población, consolidando un complejo de instituciones, procedimientos y orientaciones culturales con cierta estabilidad y capaz de alentar la participación del hombre común en los asuntos públicos?

Consolidar un complejo de instituciones, procedimientos y orientaciones que fortalezcan la ciudadanía, generar un círculo virtuoso de la moral pública no depende naturalmente de encontrar una fórmula y aplicarla; se trata de una sedimentación en lo social a lo largo del tiempo. Vuelve a servirnos en este punto nuestra división aludida al principio del libro entre sociedades latinoamericanas tempranamente modernizadas (o territorios vacíos de poblamiento), y sociedades densamente pobladas por poderosas cul-

turas ajenas, y en ocasiones contrarias, a las pautas occidentales. En otros términos: siendo el neoliberalismo un conjunto de principios generales los resultados de su aplicación son completamente diferentes de un caso a otro. En el Uruguay, por ejemplo, tenemos una densidad y una fortaleza de lo social que hizo posible, mediante un referéndum, detener la política privatizadora del gobierno de Lacalle en el primer quinquenio de los años noventa. En Chile, igualmente, la sociedad logró detener trece años de dictadura pinochetista, poner un hasta aquí a un régimen militar y neoliberal ortodoxo cuya fuerza derivó de la acción emergente ante la confrontación catastrófica de las fuerzas sociales (una situación que en España permitió una dictadura de cuarenta años). Ante la misma locura neoliberal, hay en estos ejemplos una buena dosis de autorregulación social; es esa misma capacidad de autorregulación que muestran los tenderos de la ciudad de París, por ejemplo, al impedir ser desplazados por la instalación de grandes supermercados, o la de los campesinos de ese país que aceptan importaciones agrícolas sólo después de fuertes protestas, logrando importantes indemnizaciones y tratando de conservar ante todo su organización.

Sin embargo, ante este neoliberalismo en cierta forma autorregulado contrasta el neoliberalismo salvaje de un país con sociedad históricamente débil y de poderosa cultura estatal: en 1993 fue aprobado por el congreso mexicano el Tratado de Libre Comercio sin que los legisladores tuvieran el texto completo del documento; en 1988, ante la inminencia de una derrota priista en las elecciones para presidente de la república, "se cayó" bochornosamente el sistema de cómputo electrónico (con la destacada protesta de la firma que vendía esas computadoras), y los resultados fueron dados a conocer en las semanas siguientes, distrito por distrito, debidamente "maquillados" (a las actas de cada casilla no se permitió el acceso de los partidos ni de los ciudadanos y los paquetes conteniendo esta información fueron quemados el año siguiente utilizando como pira al propio recinto parlamentario). Las mercancías extranjeras entraron al país prácticamente sin aranceles y sin que los empresarios del agro, la industria o los servicios pudieran decir nada. Fueron modificadas las leyes agrarias que decretaron el fin del reparto de la tierra, la expulsión masiva del campesinado y la concentración de la propiedad, sin que las organizaciones campesinas lograran reaccionar. Quizás el elemento que más ha debilitado la institucionalidad ciudadana, más incluso que el despliegue

de recursos públicos para llevar a Zedillo al triunfo electoral en agosto de 1994, ha sido la enorme cantidad de declaraciones contradictorias en torno al asesinato del candidato priista Luis Donald Colosio, y el secreto a voces popular, cada vez mejor respaldado por las investigaciones, de que el presidente Salinas fue el responsable directo del horroroso crimen político.

Pero una vez que el modelo neoliberal se resquebrajó en diciembre de 1994 y que las tasas bancarias e hipotecarias se cuadruplicaron a raíz de la devaluación y la búsqueda de capitales extranjeros a toda costa, el gobierno llamó a un "Pacto de Unidad de Todos los Mexicanos" firmado con el conjunto de los partidos políticos bajo la promesa de iniciar una reforma política verdadera y a fondo "para fincar, decía Zedillo, la democracia que merecemos todos los mexicanos". Aquel intento de pacto duró un día, pues el fraudulento gobernador de Tabasco decidió reprimir a los perredistas y nadie le objetó nada. Es más, se demostró más tarde que en su campaña, este personaje había invertido casi cien veces más de lo que la ley le permitía... y tampoco pasó nada.

Ocho meses más tarde el gobierno convocó por segunda vez a los partidos políticos para discutir en torno a una reforma política y electoral, pero unas horas antes de ese acontecimiento fue apresado uno de los altos dirigentes zapatistas, según lo calificó el gobierno. Esto tenía lugar al mismo tiempo que los asesores del zapatismo lograban excelentes resultados ante las delegaciones gubernamentales, al hacer aprobar sus tesis en torno al futuro de las regiones indígenas en las mesas de San Andrés Larráinzar y San Cristóbal de Las Casas. La ley del diálogo establecía que mientras éste tuviera lugar quedaban suspendidas las órdenes de aprehensión giradas desde febrero de 1995, cuando el ejército mexicano rompió la tregua e invadió la región zapatista. La opinión pública esperó largamente una explicación gubernamental sobre ese suceso, que nunca llegó (el presidente no hizo una sola declaración), pero ello tuvo como efecto perverso sobre toda la ciudadanía una nueva devaluación de alrededor de un 10% sobre el peso. Por lo demás, durante tres días la opinión pública no logró saber qué cuerpo policiaco efectuó la aprehensión, si el delito era su pertenencia al EZLN, si el asunto era la portación de armas prohibidas (de que el detenido declaró no tener conocimiento), o un gramo de cocaína que apareció en el escenario.

El caso sirve para ejemplificar la permanente erosión de los apa-

ratos generadores de ciudadanía que ha caracterizado a este neo-liberalismo salvaje: en cada uno de los ejemplos aludidos se devalúa algo mucho más importante que el peso o la estabilidad económica. Tanto en la toma de las regiones zapatistas en febrero como en la detención (y luego liberación) inexplicadas del dirigente zapatista en octubre de 1995 se puso en entredicho, gratuitamente, el principio mismo del diálogo entre fuerzas políticas en conflicto, ese expediente que constituye la última instancia ante las rupturas sociales extremas. ¿Hasta qué punto ha comenzado a rondar el fantasma del agotamiento discursivo y del nulo respeto por los acuerdos?, ¿para qué discutir, para qué firmar acuerdos que no tienen otro objetivo que dejar que el tiempo pase y la fuerza de los pocos actores sociales que aún pueden protestar se debilite? (No hay más que recordar el Congreso Universitario y el movimiento que lo precedió entre 1987 y 1990: de los pocos cambios pactados ninguno se había llevado todavía a cabo en 1996, pero el ejercicio sirvió para reforzar la labor desmanteladora de los ingenieros desconstrutores de identidades.)

“Los compañeros dicen que no tiene palabra este señor... O sea que no tiene palabra el gobierno”, fue el resumen del zapatista Moisés, refiriéndose a la inexplicable postura presidencial ante el encarcelamiento del jefe zapatista Germán y la ruptura de los acuerdos pactados en la Ley para el Diálogo...

La verdad es que las instituciones abocadas a fortalecer la confianza en el Estado de derecho, como son el sistema electoral, la figura presidencial, los aparatos encargados de reforzar la aplicación de la ley (desde magistrados hasta policías), se debilitan como *instituciones generadoras de ciudadanía*. No es que nuestro presidencialismo languidezca en favor de otras instancias institucionales, es que la arbitrariedad del Estado desgasta a la palabra y a la ley pactadas en una acumulación de desconfianzas y en ese proceso arrastra y deslegitima al sistema de procuración de la justicia, los acuerdos pactados, los resultados de los diálogos públicos, etc. Viene al caso recordar en este punto la proliferación de grupos armados de autodefensa en los poblados de los estados de la república en que los elementos de la policía son casi inexistentes y los pocos que hay se dedican a extorsionar a la población civil, como en los poblados de la montaña guerrerense, en Morelos, en la sierra poblana e hidalguense, en el estado de México, etc., con los peligros de justicia por propia mano que ello conlleva, materializado en

cantidad de linchamientos de que hemos tenido noticia recientemente.¹

Pero lo preocupante de todo esto es que surge al lado de resquebrajamiento de otras instituciones generadoras de ciudadanía: a la crisis del sistema presidencial, del sistema de procuración de justicia, del sistema de diálogo y cumplimiento de los acuerdos, del sistema del voto y de partidos se aúna la crisis de los “sistemas” que se encuentran más allá de la política y de la policía. Sucede que sobre el venerable sistema educativo, sancionado por el saber, los diplomas y las calificaciones, también ha pesado recientemente la sospecha de corrupción: no sólo la educación superior ofrece cada vez menos lugares para una sociedad en expansión demográfica y esos lugares son ocupados mayoritariamente por los hijos de las familias de mejores recursos (asunto inevitable), sino que lo que ha resultado gravísimo es que el contenido de los exámenes de admisión pudiera haber sido filtrado y vendido en las escuelas particulares, con el objetivo (más allá del buen negocio) de acelerar el repoblamiento de la universidad pública por sectores con mejores recursos económicos que terminarían pagando muy pronto por sus estudios y volviendo exclusiva la educación superior para un reducidísimo sector de “excelencia”.

Y qué decir del sistema bursátil, financiero y bancario, que genera información privilegiada para sus clientes ricos y les asegura intereses por encima del índice inflacionario (mientras mantiene a sus pequeños ahorradores por debajo de ese horizonte), para ya

¹ El 20 de mayo de 1994, 200 personas del municipio de Axochiapan, Morelos, lincharon a cuatro asaltantes que habían robado una camioneta (en el último año había habido al menos 100 robos de vehículos). El 19 de septiembre de 1994 tres secuestradores y ladrones fueron linchados después de un juicio sumario a manos de un millar de habitantes del municipio de Chalcatzingo, Morelos. El 10 de noviembre de 1995, en Xoxocotla, Morelos, los habitantes lincharon a un violador a palos y pedradas, después de un juicio en la plaza del pueblo. El 19 de noviembre, en Huitzilac, Morelos, los lugareños se enfrentaron a la policía judicial estatal, quemaron patrullas y le prendieron fuego al edificio de la corporación, como resultado de los excesos policíacos. Algo similar tuvo lugar en esos mismos días en el poblado vecino de Tres Marías. La policía se vio obligada a poner retenes en las carreteras que comunican al Distrito Federal con el estado de Morelos, intentando despistolizar a la región y capturar a narcotraficantes que serían los culpables, según se desprendía de aquella logística, del estado de violencia en aquella región. Morelos no es la única entidad donde los ciudadanos se han hecho justicia por propia mano, nos recuerda Ricardo Alemán (*La Jornada*, 28 de noviembre de 1995). Los casos se han dado en Guerrero, Nayarit, Oaxaca e Hidalgo.

no hablar del movimiento de deudores llamado el Barzón: pactar cierta cantidad como intereses por una deuda y, de la noche a la mañana, cuadruplicar los pagos por el mismo préstamo o ser embargado, porque es necesario atraer inversiones extranjeras según la lógica de un modelo económico que es totalmente ajeno a esos deudores. Recuerdo aquí el caso de una niña que llevó a Banamex 400 pesos para abrir una cuenta de ahorro y miraba desconsolada su primer informe mensual marcando 390 pesos y una lista de pagos por apertura y otros servicios, apenas unas semanas después de que el presidente dedicara su primer informe de gobierno a la importancia de fomentar el ahorro interno. Para qué recordar que el propio Banco Mundial se quejaba de un ocultamiento de las cifras (sistema informativo y estadístico), por parte del gobierno mexicano en torno a los datos de la economía doméstica, y para qué recordar, en fin, la forma en que muchos *scholars* norteamericanos se quejan de no poder seguir la evolución del gasto social de nuestro país, pues la composición del presupuesto de Pronasol no es compatible con los agregados estadísticos que prevalecían en años precedentes.

A esto agregamos el férreo control de la información por parte del aludido ministerio orwelliano de la verdad, el monopolio Televisa y Televisión Azteca, cadenas que pueden pelearse espectacularmente, incluso sirviéndose de las telenovelas, en torno a favoritismos y mecanismos corruptos de privatización, pero no pueden cambiar una coma al contenido y la orientación de las noticias políticas del país, so pena de represalias costosísimas y muy sofisticadas, como le sucedió al consorcio Televisa y a su periodista Ricardo Rocha por dar a conocer el video de la matanza de Aguas Blancas.

Es obvio, pues, que a pesar de muchos discursos (unos de buena fe intelectual, otros pagados), que insisten en el inminente tránsito a la democracia de México no nos encontramos ante un sistema de instituciones generadoras de ciudadanía. "Tengo que dar mordida diariamente a la policía, hijo, no me queda de otra. Pero ten, para que compres tu examen de ingreso a la universidad."

SEGUNDA PARTE

ESTADO Y POLÍTICA

9. EL REGRESO DE LOS LIDERAZGOS PERSONALIZADOS

Debemos recordar que cuando las intermediaciones entre lo social y lo estatal son pobres históricamente y lo son además por el cambio acelerado, el desorden anómico, la reclusión en lo privado, la segmentación de los mercados políticos así como por la acción deliberada desde el Estado para la pulverización de identidades, los miembros de una sociedad, sobre todo aquella gran mayoría que vive en la precariedad, se sienten aislados, solos, incapacitados para hacer frente a su situación por ellos mismos o por su grupo social en desintegración y apelan al líder como única esperanza para superar su situación desdichada.

Sólo en este contexto se entiende el otro gran fenómeno que hemos vivido los mexicanos y toda la región latinoamericana recientemente, y para muchos aún incomprensible: esa especie de regreso del populismo. Aquí también habrá que encontrar una conceptualización precisa para evitar empantanarnos en discusiones antiguas y para no caer inocentemente en las imágenes anatematizadas propagandísticamente por el neoliberalismo.

En efecto, este ascenso de lo popular y su liderazgo concomitante lo hemos podido observar con gran nitidez en los dos países de mayor indigenismo y mayor mestizaje: primero en el Perú, con Alan García y las dos presidencias de Fujimori (con sus autogolpes de Estado y sus actos de desaparición del poder legislativo), y, de manera casi paralela, en México, con la primera candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas y los años que le siguieron y con el "pronasolismo" salinista; pero muchos indicios nos permiten formular la hipótesis de que se trata de un fenómeno que se extiende con fuerza por toda América Latina. Alfonsín en Argentina se vio desbordado por el peronismo y Carlos Andrés Pérez hizo un regreso triunfal en Venezuela pero, como castillo de naipes, fue inmediatamente barrido por esa masa desbordada y atomizada, ante sus primeras medidas neoliberales.

El hecho es que vivimos un regreso del verticalismo en lugar de un reforzamiento de lo social, y de ello se aprovechan y lo alimentan programas del gasto público encaminados al culto de la persona-

lidad como los programas de *solidaridad* tan recomendados por el Banco Mundial y el FMI para atacar los focos peligrosos de pobreza extrema y formación de identidades y acciones, aunque sean coyunturales, en el seno de lo popular.

En consecuencia, el TLC, el proyecto globalizador y la *modernización* salvaje constituyen, como lo establecíamos al inicio de este trabajo, poderosos disolventes de la sociedad civil mexicana, de lo poco de *modernidad* que logró México durante la etapa sustitutiva de importaciones.

Como dice Tironi:

El aislamiento de los individuos y la segmentación de la sociedad en grupos primarios obliga a que sea el Estado quien centralice las relaciones sociales, en particular concentrando en sus manos las comunicaciones y las decisiones colectivas. En efecto, una sociedad atomizada, carente de grupos secundarios, de asociaciones intermedias o corporaciones, en los hechos delega su unidad a la institución estatal y está inerme frente a ella. En estas condiciones, el Estado es libre para manipular a la población sin que nada amenace su independencia; todavía más, tenderá a ganar mayor autonomía profundizando la atomización de la sociedad.¹

No son pues los movimientos y luchas sociales, los órdenes comunitarios o asociativos y tampoco el sistema político en sus manifestaciones partidistas, parlamentarias, frentistas o sindicales, las esferas de expresión sociopolítica privilegiadas en este panorama desordenado: ellos son más bien los grandes perdedores. Lo paradójico es que la vía autoritaria o, digamos, este renacimiento que vemos en tantas partes de la relación líder-masas parece estar constituyendo en la forma de integración emergente para una sociedad desmantelada, en tránsito acelerado hacia el estancamiento.² Ante el estancamiento económico y la ausencia de movilización global, prevalecen las formas de integración anómica, el retraimiento en el individuo o en el pequeño grupo, situación tan fácil y acriticamente integrable a cualquier "causa". Y es que desde el mo-

¹ Eugenio Tironi, "Para una sociología de la decadencia", *Proposiciones*, núm. 12, Santiago de Chile, Instituto Sur, 1986.

² Mejor hablar de una relación líder-masas, o popular nacional, que de populismo, pues como recuerda atinadamente Joseph Foweraker, en muchos ejemplos de América del Sur, el populismo significó fortalecimiento de órdenes intermedios de representación (partidos, sindicatos...) al lado del desorden de la crisis oligárquica. Foweraker y Craig, *Popular movements and political change in Mexico*, Boulder y Londres, Lynner Publishers, 1990.

mento en que la situación de emergencia de lo popular no tiene un correlato organizativo, sino tiende más bien a debilitar la integración de los órdenes sociales básicos y el sentimiento de pertenencia al grupo, se vuelve difícil construir o conservar los lazos comunitarios y asociativos en el medio barrial, ejidal, en las cooperativas, en las coordinadoras sindicales o urbano-populares, en las comunidades eclesiales de base o en los órganos de defensa de la calidad de la vida; rinde pocos frutos, incluso, la actividad de partidos y agrupaciones políticas y culturales llevada a cabo, con muchos esfuerzos, en el seno de las capas más precarias: el hombre fuerte, el líder máximo, "tendrá que encontrar una solución, y a él apuesto".

Más que populismo, entramos de lleno en el terreno de las teorías sobre la sociedad de masas, en las teorías de los comportamientos políticos que derivan de la atomización. Éstos, naturalmente, son muy variados dependiendo de cada tipo de conformación histórico-social y de cada tipo de orden estatal, y pueden ir desde el bien conocido desbordamiento espontáneo y masivo del orden (como el bogotazo, los pobladores de Santiago en 1983, Río y São Paulo en 1984), pasando por la masa apática y despolitizada, hasta llegar, incluso, a constituirse en bases reales de la estabilidad y de un orden "manipulado" desde un liderazgo o desde una burocracia altamente centralizada.³

Y es que, en efecto, ¿desde dónde, si no desde un Estado movilizador, sería posible articular manifestaciones que por momentos aparecen como atomización o individuación anómica, que amenazan también con explosiones espontáneas y radicales de violencia (como tantos países latinoamericanos lo ejemplifican), que se refugian, cuando aún les es posible, en la comunidad y las identidades basistas, eclesiales, indígenas o que tienden en ocasiones a ser atraídas por el individualismo consumista, antiautoritario y antinacional? ¿Será que el regreso sorprendente del espectro paternalista-autoritario va a revelarse como la única "solución" de continuidad y cohesión nacionales con cierta viabilidad, y que no nos queda

³ Pierre Birbaum, "Mobilisations, structures sociales et types d'État", *Révue Française de Sociologie*, julio-septiembre de 1983; véase también Ch. Tilly, *From mobilization to revolt*, Rading, Addison-Wesley, 1978; S. Moscovici, *L'âge des foules*, París, Fayard, 1981; Theda Skocpol, *States and social revolution*, Cambridge Univ. Press, 1979; Hannah Arendt, *Le système totalitaire*, París, Seuil, 1972; W. Kronhauser, *The politic of mass society*, Illinois, The Free Press of Glencoe, 1959.

más que optar entre el *liderazgo constructivo* que se aboque a la reorganización de las identidades intermedias y los espacios colectivos para afrontar la terrible crisis en que hemos caído; y el *liderazgo desmantelador* (neoliberal), empeñado en llevar hasta el final la derrota de la sociedad (civil), la pedacería, la atomización y la desidentidad en su obsesión por achicar el Estado, parar la inflación, reconvertir la industria, pagar la deuda y hacernos competitivos en mercados excluyentes? Qué horror haber dicho esto hace veinticinco años, pero tenemos que aceptar que hoy está en el orden del día a juzgar por el panorama que nos rodea.

Quién puede dudar de que hubiera sido mucho mejor un tipo de sociedad civil fuerte en sus organizaciones intermedias, que facilitara el engrandecimiento de la personalidad de cada individuo, la interacción en el más alto nivel de racionalidad como lo quiere Habermas o el interés colectivo de la *polis* evocado por Castoriadis; que hiciera corresponder a agregados socioeconómicos con organizaciones o partidos políticos y con ideologías o proyectos de sociedad futura, como le gustaba a Touraine evocar a la modernidad clásica; que cultivara, en resumen, unas instituciones estables tanto en lo social como en el plano de las representaciones políticas. Pero lo que ha sucedido es que no nos estamos acercando ni a una democracia asentada en una sociedad civil transnacionalizada (aunque fuera como resultado de la lucha conflictual de las clases), ni a una con predominio de la sociedad política como lo quisieran *Vuelta* o *Nexos* (partidos, parlamentos y sistemas institucionales robustos), sino que el predominio parece favorecer, en el mejor de los casos, a la lógica líder-masas o estatal-popular resultado del desorden: los mexicanos, como otros pueblos de América Latina (sobre todo los de gran contenido indígena, me atrevería a decir), estamos abonando, quizás no muy conscientemente, un campo de cultivo del verticalismo en donde la ideología del "tránsito a la democracia" podría quedar reducida a un mero mecanismo psicoanalítico de negación de un entorno que nos avasalla. Mientras eso sucede, uno de cada diez habitantes juega al ciudadano, al consumidor, al elector, y el ministerio de información (el monopolio televisivo) quiere hacer creer al resto que para allá vamos todos, ahora que dejemos atrás los sacrificios del ajuste y la globalización. También, mientras esto sucede, el presidente Zedillo no atina a interpretar su época y se consume en medio del desorden y el caos al que agrega su neoliberal e inocente "dejar pasar".

10. LOS ORÍGENES SOCIALES DE UNA CULTURA ESTATAL

A este vaciamiento de lo público y de los espacios, organismos e identidades intermedias coadyuva, en el caso de México, un rasgo muy propio de nuestra matriz de funcionamiento sociopolítico: esa propensión de las dirigencias, las élites, los representantes y la intelectualidad a ser atraídos mucho más por el vértice de la pirámide que por la base o los espacios intermedios.

La cultura política de una sociedad se forma históricamente: si por razones geográficas, étnicas, de guerras civiles o exteriores se logra perfilar un Estado poderoso junto a unos actores sociales endebles en un plazo histórico prolongado, incluso secular, como en el caso de México, esa experiencia definirá una matriz de relación entre sociedad y Estado, una cultura política que "impregna" en su conjunto a la sociedad en cuestión, no sólo a los "poseedores" del Estado, sino también a quienes están afuera y a quienes se le oponen; todo el conjunto finca sus estrategias en una misma axiología, establece objetivos de conquista y reproduce una retórica y unas formas organizativas similares, aunque se trate de bandos que se reconocen como antagónicos en la política y con ideologías particulares que se excluyen recíprocamente. En un país con un fuerte Estado ancestral, la acción política de las élites —ya sea en el gobierno o en la oposición— tiende a organizarse en torno al lugar desde donde todo parece posible (el vértice) y ese afán compartido, esa propensión buropolítica, reproduce y alimenta la matriz sociocultural históricamente formada en el autoritarismo (durante el propio movimiento del 68 los estudiantes nos dedicamos a construir una especie de soviet supremo que llevó por nombre Consejo Nacional de Huelga, tan piramidal como el adversario de quien exigíamos democracia).

Digamos que quizás el mecanismo más importante de destrucción de las identidades en el mundo de los excluidos (y en este caso, también en los otros medios) ha sido la absorción de los liderazgos hacia las alturas burocráticas de la política, lo que hemos calificado como "buropolítica".

En efecto, en sociedades como la mexicana, en donde el conflicto

y los liderazgos se generan constantemente debido a la situación de atomización y, particularmente, debido a la ausencia de identidades y organizaciones intermedias (ya sea en el plano del sistema político, en el de los movimientos sociales o en el comunitario y asociativo en general), el mecanismo privilegiado de la estabilidad y del orden consiste en la destrucción, constante también, de esas constelaciones alternativas (de esas erupciones dispersas), dividiendo, encarcelando, matando, cooptando; destrucción entonces de sistemas locales de autoridad y centralización consecuente en una burocracia altamente jerarquizada y disciplinada en torno a un jefe indiscutido.¹

¹ Desarrollemos una definición en torno al "fenómeno burocrático", exacerbado en la cultura mexicana; ¿será atrevido establecer la hipótesis de que constituye nuestro mecanismo de gobernabilidad (orden desde el Estado) más importante? Digamos, brevemente, que las identidades intermedias se desdibujan debido a un doble mecanismo reiterativo:

a) En primer lugar, por la dinámica hacia las alturas que comporta los varios pasos de la vía buropolítica y que nos permite entender que no se trata de un simple voluntarismo de las dirigencias. Estamos frente a una serie de "desplazamientos" que responden a profundos mecanismos psicológico-culturales y que son reconocibles al manifestarse en las siguientes conductas colectivas de la acción sociopolítica: primero (para comenzar por aquí), la fascinación por "una causa", cuyas bases son regularmente mal conocidas, pero que permiten el desplazamiento de la responsabilidad individual hacia algunos símbolos e imágenes mínimamente compartidos; segundo, la fascinación por el líder, el ahijamiento de una personalidad responsable por la causa, un segundo desplazamiento de las responsabilidades individuales o colectivas; tercera fascinación, perfectamente lógica: el señalamiento de cualquier disidencia como traición, de cualquier identidad intermedia y social como sospechosa: "no puede haber una tercera verdad, porque entonces yo podría estar mal al abrazar esta causa, así que las bases están sentadas para que sea barrido el terreno que hay entremedio, el que no está dentro de las jerarquías y el disciplinamiento de nosotros o de nuestro adversario (desplazamiento de la obligación de fundamentar los principios de mi conducta)"; cuarto: la fascinación por el perdón en la cúpula, por la reconciliación, una vez destruido el adversario y atomizadas o diluidas las identidades intermedias, autónomas, por la vía de la represión o el enfriamiento de las bases hacia la causa, producto del distanciamiento del liderazgo en su ascenso buropolítico (desplazamiento de las responsabilidades por parte del liderazgo triunfante al hacer compatible su proyecto con el de su adversario).

b) En esto último nos enlazamos con el otro aspecto de la desaparición de las identidades sociales intermedias: el vaciamiento hacia abajo. En efecto, las bases de una lucha social se atomizan nuevamente por la represión y/o por el alejamiento de su dirigencia hacia la buropolítica. Y es que, cuando esto último sucede, regularmente aparecen las escisiones entre las jefaturas moderadas y las radicales, entre las de base y las cupulares, etc., y cunde el desconcierto, la desmoralización, la discontinuidad de la acción social. Todo ello se facilita debido a las alianzas tan

Es quizás esta búsqueda del vértice como única opción de identidad y este vacío crónico de los espacios de intermediación lo que nos explica el funcionamiento cíclico de sociedades como la mexicana, en la que a un larguísimo período de orden asegurado por el autoritarismo de un actor central sucede un derrumbamiento casi total del Estado y del sistema político. Llegada esa ruptura, la acción directa, masiva, plebeya y en muchos casos descompuesta no cesa hasta que, debido a la lógica de la guerra y a la sucesiva eliminación de las facciones, una fuerza hegemónica instaura un nuevo orden necesariamente autoritario. Se instala un

amplias y regularmente tan disímolas de estos procesos y luchas, pues sólo acumulando fuerzas se puede confrontar a un adversario tan poderoso como es el Estado en sociedades sin vocación de democracia social. La propensión natural a las escisiones, a la disgregación, a la atomización, es entonces muy grande. Por eso se puede afirmar, adelantando ideas, que el neocardenismo pudo haber sido fuerte sólo en la medida en que hubiera devenido Estado; parece tautológico, pero es cierto: negociando y manteniéndose como oposición de largo plazo sus tendencias centrífugas, las divisiones y las reconciliaciones, son peligros enormes. Pero claro, en esta misma frase entendemos por qué la lógica de la acción mexicana tiende a la confrontación, al todo o nada, al aquí y ahora: no hay identidad sin Estado. Gramsci, en función de un contexto histórico muy específico, hizo referencia a un fenómeno similar al que aquí entendemos por buropolítica llamándolo transformismo, en "Il Risorgimento" (Antonio Gramsci, *Antología*, México, Siglo XXI, 1970, p. 486). Circunscribía el fenómeno a la separación de los intelectuales sureños de las clases subalternas. Por su parte, Lucio Kowarick nos habla, en el mismo sentido, del interés de la burocracia estatal por incrementar ciertos conflictos y demandas que le permiten una mayor influencia en espacios políticos más amplios ("The pathways to encounter: reflections on the social struggle in São Paulo", ed. D. Slater, *New social movement and the state in Latin America*, Amsterdam, CEDLA, 1985). Joseph Poweraker se ha referido a una "estrategia de institucionalización por parte del PRI-gobierno hacia las luchas populares" y con ello califica atinadamente a fenómenos que se encuentran dentro del mismo rango de los denotados por los términos transformismo, cooptación, buropolitización, etc. ("Popular movements and the Mexican political system: the linkages between popular organization and institutional changes", San Diego, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, marzo de 1989). No cabe duda, en fin, de que sistemas estatales poderosos encuentran mecanismos muy genuinos para allegarse al seno de sus burocracias los mejores elementos de una sociedad y vaciar así las fuerzas de la oposición: la dinastía Ming en China perfeccionó un sistema de exámenes que le permitía reclutar a los alumnos más inteligentes y mejor preparados de todo el imperio y todas las familias dedicaban una parte de sus recursos a la formación de algún miembro que pudiera, por la vía de esos exámenes, ingresar en los altos rangos del Estado. No cabe duda de que la UNAM sirvió para llenar esta función hasta hace muy pocos años: poco importaba la ideología que profesaran sus egresados, ellos fueron siempre los mejores y, una vez reclutados, pronto se volvieron defensores rabiosos y reproductores eficaces del poder estatal.

nuevo monopolio del poder y se aplasta, se desmantela o se integra a todos aquellos brotes de oposición, pero jamás se les acepta como un interlocutor (otro, exterior), con un espacio ganado y una continuidad asegurada.

En efecto, tradicionalmente las luchas, al no encontrar espacios o canales intermedios para hacer política y al no ser reconocidas desde su inicio debido al autoritarismo estatal, echaron mano del mayor número de alianzas en una búsqueda precipitada por acumular fuerzas, y ello las condujo al "confrontacionismo", a apostar a ganar todo o a perderlo todo, a desquiciar el orden en un incontrolable encadenamiento de malestares o a destrozarse contra el muro del Estado y su arsenal represivo; y es que más valía esto que entrar rápidamente en una dinámica de desgaste, de escisiones internas o de aniquilamiento selectivo ejercido por el tlatoani. Entonces, en México parecía operar una especie de lógica en la que un actor suicida (las luchas sociales y su dirigencia) y un actor asesino (el Estado) se enfrentaban convirtiendo en catástrofe casi irremediable los momentos en que se manifestaba la acción directa de la sociedad (el 68 es el ejemplo más espectacular de esto a pesar de la modernidad de sus actores).

Aquí es preciso subrayar una diferencia importante con el resto de América Latina, porque si bien es cierto que en la región en su conjunto la etapa popular nacional fue un momento de gran participación de la sociedad en la política, también hay que poner en claro que, a diferencia de México, no fue enmarcada por una distribución que colocara al Estado como un actor hegemónico en aquel proceso. No hay que perder de vista la diferencia de México a este respecto so pena de no distinguir las formas más ricas del quehacer político y del autoritarismo en un país de origen estatal.² Por eso hemos podido afirmar que nuestro país llegó a la etapa

² Que sirva este apartado para establecer algunas precisiones con respecto a la idea de Marcelo Cavarozzi de una "Matriz Estado-céntrica", como característica de una etapa histórica ("Politics: a key for the long term in Latin America", en W. C. Smith, C. H. Acuña y E. A. Gamarra, eds., *Latin American political economy in the age of neoliberal reform*, New Brunswick, Transaction Books, 1994), que habría marcado a la América Latina en su conjunto durante la larga etapa entre la crisis de las oligarquías y la instauración de las políticas neoliberales, el retiro del Estado y las políticas llamadas del ajuste. Quedará claro, según pensamos, que no es lo mismo la noción de matriz Estado-céntrica, que puede ser generalizable a la región en tanto formas de intervención estatal en la sociedad y en la economía, que la noción de un Estado históricamente fuerte.

popular nacional o al llamado populismo con dos situaciones a favor: a] la oligarquía primario-exportadora había sido derrotada y, b] el Estado se había convertido, a diferencia de todos los otros países latinoamericanos, en un actor hegemónico indiscutible, no sólo por haber acumulado poder más que cualquier otro actor en la escena sino, y ahí está lo importante, por su función dirigente por excelencia (agente del cambio desarrollista y destructor del orden pasado).

Lo que habría que retener, entonces, es lo siguiente: en América Latina, en el Cono Sur y básicamente en Brasil se vivió desde muy temprano el fin del Estado populista, esa forma del Estado y de la política que consistía en dar cabida ampliamente y al mismo tiempo a las demandas de los grupos industrializadores, de los sectores medios, de la clase trabajadora y de las masas populares.

Todos conocemos las razones que hicieron de la etapa sustitutiva un espejismo y cómo Brasil desde 1964, Chile en 1973 y Argentina y Uruguay de forma drástica ya más avanzados los años setenta, tuvieron que dar por cancelada esa etapa de participación y enfriar por los métodos más brutales a la enorme olla pública que eran los partidos, el parlamento, los sindicatos, los gremios, etc. En una palabra, se tuvo que congelar el espacio de la política y el de las instituciones de la participación pública e inaugurar lo que se conoció como los regímenes burocrático-autoritarios, para emplear la terminología de O'Donnell, Cavarozzi, Garretón, etc. Esos regímenes se basaron en un rechazo profundo de todo lo que fuera participación y organización populares y construyeron una imagen según la cual el Estado debe ser un aparato más restringido, eficiente, ajeno a los gastos de beneficio social, a las instituciones elefanteásicas del periodo populista, a la participación estatal en la economía, etc. Concomitantemente, en lugar de las amplias identidades socioocupacionales y de las organizaciones políticas o sindicales correlativas, las formas de la participación política tendieron, durante la etapa burocrático-autoritaria, a buscar canales más restringidos y basistas: la democracia como identidad restringida o circunscrita.

Un indicio de esto es el que en México hayamos vivido una etapa populista o popular nacional tan prolongada (hasta entrados los años ochenta). Por lo mismo ese retraso nos colocó, a su vez, ante un cambio extremadamente repentino en lo referente a los espacios, las formas y los contenidos del quehacer político en nuestro país.

Pero detengámonos un poco en este ejemplo *raro* de reparto sociopolítico entre sociedad civil y Estado de manera que luego podamos entender con mayor perspectiva por qué el populismo mexicano logró una prolongación tan extraordinaria; por qué su decretado fin no parece tan obvio y nos obliga a buscar nuevas conceptualizaciones para entender el aludido regreso de los liderazgos personalizados y la nueva función política de lo popular.

11. EL ESTADO FUERTE

Planteémoslo de la siguiente manera: hasta antes de su etapa propiamente industrial, los años cincuenta, México fue conformado por tres grandes influjos que poco tienen que ver con la historia democrático-burguesa clásica, con la historia de las hegemonías burguesas o proletarias de la Europa Central y Occidental, o con la propia historia latinoamericana: primero, por un volcán plebeyo dispuesto a estallar ante la mínima fisura del orden, es decir, por una lógica popular y masiva; segundo, por un secular estado de guerra interna y externa, real o potencial, y tercero, derivado de los anteriores y piedra de toque de nuestra matriz sociopolítica, por una constante erosión del poder de sus clases superiores. El primero y el segundo factores nos empujan a recordar, aunque sea en forma de un listado, la gran magnitud y reiteración de los movimientos armados y el intenso involucramiento en ellos de las masas populares: recordemos cómo la sangrienta guerra de independencia no tuvo paralelo en América Latina, generando la consecuente huida de los capitales españoles, la manera en que las guerras de reconquista española mantuvieron activada la movilización popular, la pérdida de Texas en 1836 y de los estados del norte doce años más tarde, la guerra entre liberales y conservadores que hizo crisis en 1857, seguida por la guerra con España, Inglaterra y Francia al ordenar Juárez la suspensión del pago por deudas al exterior; guerra en fin, que de ahí se derivó, contra el emperador Maximiliano en los años sesenta y, después del reposo porfirista, vuelta a la carga desde el diez hasta el treinta (con la Revolución, las luchas de facciones militares y la Cristiada), para caer exhaustos en el medio siglo del autoritarismo institucionalizado.

Concomitantemente, varias sangrías sufrirían las clases altas de este país (el clero como parte de ellas), prensadas entre el desbordamiento plebeyo atizado por las guerras civiles y exteriores y por los estados despóticos que de ahí surgieron, producto de la lógica del más fuerte. En efecto, se trata de una historia donde, como resultado de lo anterior, sólo un Estado despótico asentado sobre su herencia guerrera fue capaz de unificar un territorio siempre

amenazado y mutilado por las grandes potencias, un territorio con una geografía abigarrada, inconexa y profundamente heterogénea que al entrar en combinación con las exigencias de los polos industriales originarios dio como resultado una economía primario-exportadora diversificada (!): desde el henequén en Yucatán hasta el cobre y las hortalizas en Sonora, pasando por la vainilla y los cafetales de Chiapas y Veracruz, el pulque y el azúcar en el altiplano, el ganado en el norte, los metales preciosos en el viejo norte, et- cetera.

Es pues una historia en que a la debilidad y a la parcelación de las clases dominantes producto de la heterogeneidad oligárquica a que estamos aludiendo, y a la destrucción constante provocada por la guerra, vinieron a sumarse las deformaciones típicas del enclave minero, cuando los empresarios locales ya no fueron capaces de asegurar los requerimientos de capital que la tecnología minera exigió en el nuevo orden mundial de fines del XIX y fueron debilitados también como clases nacionales por las compañías extranjeras. En fin, pese a lo anterior, llegó un momento en que la historia de México pareció asemejarse a la de América Latina: fue en la cúspide del porfiriato cuando el enorme auge de la economía primario-exportadora hizo renacer de las cenizas a las clases dominantes y sus grupos de punta dieron visos de dinamismo atraídos por la modernización industrial y agraria. Entonces, la alta burocracia porfirista, los llamados "científicos", herederos de la "lógica de enclave"¹ y del Estado fuerte —una clase política en vías de aburguesamiento y transformación en empresarios, pero abiertamente excluyente, puesto que de su control sobre el Estado dependía su fuente de capitalización—, entró en conflicto con otras oligarquías

¹ El proceso de formación de grupos nacionales robustos, establecieron Cardoso y Faletto, "pudo darse con mayores posibilidades de éxito en el caso de las colonias que se habían organizado como base agrícola (azúcar, café, cacao, etc.), de las economías metropolitanas. En ese tipo de colonias se constituyó una élite económica y política criolla que se apoyaba en el sistema productivo local... En las economías de enclave, los grupos económicos locales no siempre pudieron mantener su control o su predominio sobre el sector productivo y fueron desplazados... por su incapacidad para reaccionar y competir en la producción de mercancías (relacionadas con la minería) que exigían condiciones técnicas, sistemas de comercialización y capitales de gran importancia." En ciertos ejemplos las clases desplazadas de la minería por la inversión extranjera se aferraron al control del aparato estatal, puesto que de ello dependía su fuente de capitalización con el otorgamiento de permisos de explotación, exportación, etc. (Cardoso y Faletto, 1969:41-53).

en ascenso: las del norte del país, más ligadas a su carácter o a su "lógica de productores y exportadores nacionales" y cuya fuente de capitalización provenía básicamente de su quehacer económico y no de un control directo del Estado ni de las concesiones al capital extranjero.

Así, se produjo una lucha *interoligárquica* a través de la amplia alianza que esta oligarquía norteña logró concretar con algunos sectores medios ilustrados totalmente excluidos, con algunos sectores mineros del viejo norte en decadencia y los círculos políticos que ahí florecían, y con el campesinado indígena del centro, violentamente despojado de sus tierras. En fin, al prolongarse esta lucha interoligárquica los contendientes debieron recurrir cada vez más al campesinado y a los sectores populares en busca del triunfo, lo que provocó que el carácter del conflicto derivara en una guerra *antioligárquica*. Fue necesario ir demasiado lejos en las promesas a las clases populares por las exigencias propias de la correlación de fuerzas.

Al final de la lucha y como resultado natural de ésta, el campesinado quedó, a pesar de todo, organizado autónomamente pero sin ningún proyecto de sociedad global para el futuro. La derrota de los ejércitos campesinos por la casta militar triunfante y por su oficialidad proto-empresarial sólo pudo llevarse a cabo mediante el asesinato de sus líderes, pero debiendo aceptar inevitablemente las demandas populares, sin lo cual no era posible una pacificación. A partir de ahí, ya lo decíamos, se repetiría el esquema de "solución" a los movimientos y luchas sociales: a] represión a toda forma de acción opuesta al sistema imperante, sobre todo si se trata de un abierto enfrentamiento y una ruptura del orden; b] muerte (cementerio, hospital, cárcel), o cualquier forma de desmantelamiento de sus dirigencias y, c] solución a sus demandas y reincorporación en el seno del orden imperante de lo que quedó de la dirigencia opositora, pero fundamentalmente de las banderas (demandas) de esa causa. En el caso del campesinado de la Revolución mexicana sus demandas implicaron, aunque lentamente al principio, la puesta en práctica de la Constitución de 1917, donde destaca por encima de todo el desmantelamiento de la oligarquía terrateniente a través de la reforma agraria. Este último dato, aunado a la lógica de la guerra, a la anarquía y a la destrucción que imperaron en el país durante los largos años de la Revolución, así como al surgimiento de los hombres fuertes de la guerra y su manejo sobre las masas

en efervescencia, tuvo como resultado la destrucción de ese inicio de sociedad civil que México había logrado apuntalar durante su inserción periférica en el mercado mundial (el porfirismo). Las clases dominantes fueron, una vez más en nuestra historia, barridas por la marejada popular-nacional.

Ante tal panorama de atomización, que ni siquiera puede ser calificado de crisis de hegemonía de las fuerzas sociales sino más bien de profunda debilidad de la sociedad civil, vemos surgir a la casta militar triunfante como un actor indiscutido: la menos débil de las fuerzas nacionales si se quiere, pero por ello mismo dueña de una situación que le permitió —por así decirlo— hacer la historia desde arriba, lo que no sucedía por primera vez. Quizás una sociedad como la colombiana, por contraste, ayude a entender el caso mexicano: en efecto, ahí todo resultó al revés, las oligarquías regionales subsistieron con fuerza hasta el presente, la guerra exterior no fue un factor definitorio en la historia de aquel país, los sectores populares siempre se mantuvieron en un cierto encuadre gracias a la intermediación constante de los grupos regionales y todo ello redundó en déficit constantes en la constitución del Estado central. El propio síndrome de Colombia, que ha sido la violencia, siempre se ha mantenido como un factor de desordenamiento local-regional y no tanto como una amenaza de desorden generalizado nacionalmente y de derrumbe del Estado nacional.²

Obviamente es imposible profundizar en esto; el recuento sólo nos sirve para mostrar que cuando las facciones revolucionarias en pugna echaron mano de los sectores populares (campesinos y obreros), la lucha no sólo despertó el volcán plebeyo tan característico de México, sino que obligó al grupo triunfante, que poco tenía ya, después de tantos años de lucha, de grupo económico-social [clase] y mucho de casta militar [élite política dirigente], a hacer efectivas las innumerables promesas de mejoramiento del

² “Colombia —escribe Daniel Pécaut— no ha conocido nunca momentos de unión nacional en torno a un estado que asuma fuertemente la representación de la nación o en torno a un movimiento populista susceptible de dar nacimiento a la imagen de un pueblo reunificado. El predominio de las élites civiles ha impedido a los militares o a los intelectuales tomar a su cargo proyectos de construcción del Estado nacional... El dominio de las élites políticas, económicas, militares, conduce a que el régimen descansa sobre incesantes transacciones que favorecen la fragmentación de su influencia, y sobre convenciones implícitas que impiden a cada una desbordarse abiertamente hacia el campo de las otras. Un funcionamiento como éste permite, en fin, que las élites locales conserven su influencia y obliga

nivel de vida de las masas, sin lo cual era imposible su consolidación y el retorno de la paz. Así, se hizo efectiva la Constitución de 1917 y con ella se dio un primer jalón a la reforma agraria, a la vez que se puso en jaque a las compañías extranjeras, principalmente las que explotaban el petróleo.

El camino no estuvo exento de peripecias: la casta militar triunfante no sólo tuvo que destruir a su ala radical campesina, sino que también debió enfrentar ciertos intentos contrarrevolucionarios a su derecha (la guerra cristera de los *farmers* de El Bajío, amenazados por el reparto agrario), y una lucha de facciones en su seno que fue la nota dominante de los años veinte.

a las élites nacionales a negociar constantemente con ellas. Es verdad que existe una escena política nacional, pero las escenas políticas locales conservan toda su importancia. Resulta de ello una dificultad mayor para la consolidación y unificación de todas las fuerzas sociales, ya que no chocan con un poder centralizado y homogéneo, sino con poderes fluidos y geográficamente dispersos. Ahí reside una de las circunstancias susceptibles de provocar tanto la desorganización de la movilización social como el paso a la violencia generalizada: esta última participa, a la vez, de la dinámica de las transacciones entre actores que disponen de los recursos del poder —entre ellos la fuerza— y del enclaustramiento en contextos locales.” Daniel Pécaut, “Violencia y política en Colombia”, en *Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos*, Perú, Instituto Francés de Estudios Andinos e Instituto de Estudios Peruanos, 1993, p. 273.

Pero lo que importa destacar es que este episodio activó una vez más la lógica social y política mexicana: erosión y debilitamiento de las clases altas, principalmente agrarias, y fortalecimiento del actor estatal, de un principio de orden necesariamente autoritario producto de la guerra. Cuando el afluente mexicano derivó en el tumultuoso cauce popular y nacional que se abrió en la entreguerra y se ensanchó con la crisis económica mundial de los años treinta (que en América Latina llevó el nombre de populismo y en otras partes el de Frente Popular, Nacional Socialismo, etc.), nuestro país había sido largamente preparado para convertir a tal fenómeno en algo mucho más radical, mucho más nacional, mucho más popular y mucho más estatal.¹

Esto fue el cardenismo, un periodo más en la historia independiente (el cuarto) de movilización de masas, centrado en la reforma agraria integral y en la nacionalización del petróleo, que hizo tabla rasa de las oligarquías y que se encargó de supeditar, aunque sólo fuera por un tiempo, a otras fuerzas sociales que de manera titubeante intentaban reorganizarse después de la conflagración. De entre ellas, el proletariado parecía despuntar en los años veinte, asentado, hasta cierto punto, en su composición de *enclave minero* y en los transportes. Pero la nueva etapa tuvo como resultado el franco desbordamiento de su identidad clasista y sus organizaciones fueron corporativizadas por el Estado y por el partido del Estado.

¹ Enunciamos aquí, entonces, una idea muy general que podría servir de guía para una investigación subsecuente: hoy los mexicanos, en nuestra búsqueda atropellada por lograr la modernización —decíamos al principio de este trabajo—, nos alejamos *una vez más* del ideal de la modernidad, al que de hecho nunca hemos pertenecido a pesar de nuestras aproximaciones reiterativas. La pregunta es entonces por qué esa derrota cíclica de la sociedad mexicana en sus momentos de mayor robustecimiento como lo fueron la segunda mitad del siglo XVIII; el Liberalismo y la República Restaurada; los embarcados agentes socioeconómicos, incluso los de origen estatal, generados a lo largo del porfiriato; y, en el periodo más reciente, los cuatro decenios iniciados con el impulso de nuestra economía por la segunda guerra mundial y concluidos con la crisis de 1982, la década perdida, las políticas neoliberales y el libre comercio.

Se trata pues de una historia que a su paso vio renacer terciamente la pirámide popular-nacional hasta enclavarse en pleno siglo XX; de una historia que hasta el cardenismo poco tenía que ver con la democracia. Y sin embargo también se trata de una sociedad que súbitamente, en tres decenios (de los cuarenta a los setenta), se ve enfrentada de la manera más violenta al crecimiento urbano, a la industrialización, a los sectores medios democráticos-consumistas-individualistas, a una clase obrera en busca de su autonomía, a una burguesía cuyo poder económico, al entremezclarse con el capital extranjero, pareció irrefrenable y cuya organización era creciente (aunque haya quedado desahuciada como clase hegemónica integral); en fin, se trata de una sociedad que se desarticula en varias lógicas sociopolíticas que coexisten terciamente.

Aquí está lo fundamental: a pesar de que este ejemplo poco tiene que ver con una génesis cultural democrático-burguesa (ni en la cultura social ni en los órdenes políticos), a partir de los años cuarenta se generaron un desarrollo propiamente industrial-capitalista, una urbanización y en general una modernización acelerada que convirtió a México, en tres decenios, en un país que pudo calificarse, al menos hasta principios de los ochenta, de pujante desarrollo relativo.

Esto explica el calificativo de sociedades desarticuladas, es decir, sociedades que desde el punto de vista cultural, político y, en una palabra, societal, distaban mucho de poseer los atributos que sirvieron de invernadero para el fortalecimiento de los actores intermedios, la industrialización animada por ellos, etc. (siendo el carácter piramidal, autoritario, estatista y paternalista del cardenismo la mejor prueba), pero que por el simple hecho de poseer respetables dimensiones geopoblacionales (un mercado interior suficientemente amplio y en constante crecimiento en términos absolutos), pudieron industrializarse (sustituyendo importaciones) y modernizarse en forma acelerada en unas cuantas décadas (la India sería el caso más espectacular de esta no correspondencia entre sociedad y economía). Precisamente por esto se trató de un proceso profundamente desequilibrado, demográficamente explosivo (de ahí el término desarticulación), pero pese a ello se trató de un proceso efectivo en términos de desarrollo económico; y es que en el periodo monopolista del capitalismo la génesis social, cultural y política puede ser fácilmente sustituida por el capital y la tecnología acumulados a nivel mundial.

Ahora bien, si desde el punto de vista de la base productiva estas sociedades funcionan sobre una plataforma económica única, continua, que extrae excedentes de los puntos de mayor atraso canalizándolos hacia los grandes emporios del capital industrial y financiero, desde el ángulo propiamente sociopolítico y cultural tal homogeneización no es de ninguna manera evidente. En efecto, aquí, como en el caso de los países tardíamente desarrollados en el capitalismo, las fuerzas y clases sociales propias de la etapa industrial se vieron afectadas por la diversificación y la estratificación que provocó el elevado desarrollo monopolista (donde las clases altas se dividieron entre burguesías nacionales, extranjeras y asociadas, y entre monopolistas y competitivas, y otro tanto sucedió con el "estándar de vida" de la clase obrera). Pero más allá de esta característica general del desarrollo tardío-monopolista, en los países desarticulados, y en particular en el ejemplo que ahora nos ocupa, se suma un poderoso elemento que parceló de manera más radical los impulsos sociopolíticos provenientes de la sociedad civil en su relación con el Estado. Y es que el meteórico tránsito, en sólo treinta años, de una sociedad de masas rurales, piramidal, en que el Estado es el agente de cohesión represiva (agente hegemónico), a una sociedad donde aparentemente predominaba la industria y la modernización en general, nos colocó frente a una realidad necesariamente dislocada. Son pocos treinta años de modernización para enterrar una historia secular, más aún cuando se trata de un proceso industrial de baja incorporación humana como es el caso del desarrollo industrial sustitutivo de América Latina.

13. EL ESTADO CONTRADICTORIO: LA DOBLE LÓGICA POPULISMO-DESARROLLISMO

Así pues, la pirámide popular-nacional (estatal) que coronó la historia mexicana bajo el cardenismo no se limitó, durante la etapa industrializadora, a aparecer como un fenómeno en retirada, como un hecho del pasado: subsistió con fuerza en el caso mexicano asentando su extensa base en la sociedad tradicional, en el campesinado y en su patrimonialismo concomitante, pero ampliándose también al asegurar su futuro en las crecientes bolsas del pauperismo urbano, ya impresionantes desde los años setenta. Al menos en el caso de México, éstas constituyen el mayor agregado poblacional, más grande incluso que la población campesina y con tasas de crecimiento incomparablemente más altas puesto que en buena parte los pobres de la ciudad crecieron y crecen a expensas de esa población campesina. Se trata, ya lo veíamos, de amplísimos sectores que permanecerán ahí estructuralmente, en crecimiento absoluto y relativo, reproduciendo la base de masas del autoritarismo, es decir, la lógica masivo-popular: lo contrario, casi punto por punto, con respecto a lo contenido en los postulados propiamente democráticos e incluso clasistas.

Recurramos a un esquematismo "realista" tratando de precisar las características de la sociedad y el Estado de la etapa populista-desarrollista (1950-1980):

I. Lógica popular-nacional, que subsistió y se amplió como resultado de la explosión demográfica y la urbanización paupérrima; junto a ella emergió con vigor otra lógica que aquí llamamos:

II. Lógica democrático-modernizadora. Esta última estuvo compuesta, en una de sus vertientes, por:

1] las clases medias concomitantes con todo proceso urbano o de modernización: su lógica sociopolítica en tanto actores consumistas, posesivos e individualistas, fue inmediatamente antiautoritaria, pluralista, si tomamos en cuenta el marco hiperestatal en el que nacieron. Los movimientos magisteriales, médicos y estudiantiles durante los sesenta en contra del autoritarismo diazordacista, así como las reacciones contra los actos "socializantes" promovidos

por el echeverriismo en los años setenta, muestran bien su voluptuoso carácter posesivo e individualista, y, sólo en esa medida, "democrático" y pluralista.

2] Pero la otra vertiente de esta lógica de lo moderno estuvo más propiamente ligada a los actores centrales del capitalismo:

a] por una parte, nos habla del fortalecimiento de la iniciativa privada, nacional y extranjera, y de la enorme presión que el capital monopolista internacional pasó a ejercer y ha ejercido sobre las opciones del desarrollo (sin que debamos confundir ese poder económico -¿hegemonía en lo económico?- con la concepción integral de la hegemonía).

b] Por otra parte, la clase obrera también se fortificó en el proceso de industrialización sustitutiva robusteciendo su organización. Sin embargo, la gran dificultad a este respecto se manifestó desde entonces en torno a su marcada heterogeneidad, propia de todo desarrollo tardío capitalista: por un lado, tributaria del paternalismo estatal en su amplia masa poco calificada (prisionera del corporativismo sumiso al Estado, a través del partido estatal y la Confederación de Trabajadores Mexicanos, etc.); por otro lado, mimética de las actitudes de consumo culturales y políticas de los sectores integrados. Pero, en lo general, si dejamos de lado al amplio sector obrero de baja calificación, el proletariado reivindicó su inalienable derecho a la independencia frente a los aparatos corporativos controlados cupularmente, tratando de sobreponerse a la heterogeneidad que lo caracteriza en esa etapa. Sin duda los años setenta fueron el periodo que mejor convino al movimiento obrero independiente en el país.

Así pues, esta lógica democrático-clasista-modernizante [II] ha tenido en común el ser acérrima adversaria de nuestra herencia piramidal en la medida en que, por cualquier lado que se le mire, los pilares del Estado fuerte fueron claramente erosionados, durante la etapa sustitutiva, por las demandas -con signos diversos y en otro plano antagónicos- provenientes de la clase obrera, la burguesía en todas sus manifestaciones y los sectores medios.

Sin embargo lo propio del Estado en general, pero particularmente de aquel que corresponde a un país esencialmente estatal, es el imponer un orden sobre la sociedad nacional en su conjunto. En la etapa sustitutiva el Estado mexicano preservó su centralidad y pudo seguir manejando las grandes lógicas contradictorias con base en su empresa desarrollista dirigente. El principio de aquel

Estado fuerte populista desarrollista podría ser evocado como sigue:

Yo soy el agente del desarrollo nacional y del progreso y las fuerzas que impidan la consecución de mi proyecto (que es el de la nación), son reaccionarias, incluidas las reivindicaciones exageradas de la clase obrera y los puntos de acumulación excesiva del capital que pongan en peligro la continuidad del orden social sin el cual no puede llevarse adelante la empresa desarrollista. Los sacrificios que este proceso acarrea para importantes sectores obreros y campesinos se verán recompensados gracias a que el desarrollo revertirá en beneficio de México y de sus habitantes, lo que implica evitar que nuestros recursos y el producto del trabajo sean apropiados por intereses que los alejen del país.

Fue así como, gracias a este nacionalismo reciclado o nacionalismo industrialista, las dos grandes lógicas del México poscardenista (el populismo nacionalista y el desarrollismo), pudieron coexistir permitiendo que el Estado permaneciera como el agente central o hegemónico, a pesar de la lógica democrático-ciudadana (antiestatista) y sin que se pusiera en riesgo tampoco el "tesoro de masas estatal". De aquí que muchos analistas hayan calificado al Estado de esta etapa como un "Estado contradictorio".¹

¹ Miguel Basáñez, *La lucha por la hegemonía en México 1968-1980*, México, Siglo XXI, 1981; Arnaldo Córdova, *La ideología de la Revolución mexicana*, México, ERA, 1973.

14. EL ESTADO AUTORITARIO DE LA GLOBALIZACIÓN POLARIZANTE (¿TRÁNSITO A LA DEMOCRACIA?)

Sin embargo la nueva etapa de globalización de la economía planteó un problema insuperable y por ello se puede hablar del fin del populismo mexicano. Y es que hay un sector que no podría seguir formando parte de la alianza estatal y, como sucedió con los grandes hacendados de la época revolucionaria, en el nuevo modelo los obreros debieron ser expulsados, material e ideológicamente, del nuevo pacto. En efecto en nuestra época sucede que los actores mejor ligados al mundo moderno industrial (los obreros en el caso que nos ocupa), no son necesariamente los actores incluidos en el pacto para el desarrollo globalizador; no existe más un pacto de las clases fundamentales (burguesía y proletariado), para repartir, aunque fuera inequitativamente, los beneficios extraídos de la industria y de su periferia social y geográfica. En estas condiciones estamos ante una cuestión que resulta paradójica: mientras los sectores populares (campesinos y urbanos no obreros), pueden seguir siendo parte consustancial del Estado fuerte (ahora neoliberal), los sectores obreros ligados al núcleo privilegiado del nuevo modelo (a la industria de exportación: maquila, agroindustria, automotriz, petrolera, de transporte, etc.), quedan completamente excluidos desde el momento en que cualquier elevación en sus condiciones salariales resulta como arena para el engranaje del modelo exportador cuyo éxito depende de la competitividad de los productos en el mercado mundial y ésta se encuentra en función directa de los bajos costos en materia salarial.

Lo paradójico también consiste en que si bien en el interior de la empresa (la fábrica) o, digamos, en el interior del espacio productivo la clase trabajadora de la globalización deja de ser un miembro de la alianza estatal, no sucede así desde el punto de vista de su inserción en el espacio popular, en el barrio, en el poblado, etc., en donde el obrero (en tanto sujeto popular) es reconstituido como un sujeto integrante del pacto nacional. Cada vez el salario es más castigado, pero eso no impide que una cantidad de subsidios para los pobres, a la manera de solidaridad, sean entregados por

el presidente en forma casi personal y sin mediaciones organizativas. Desde esta perspectiva se puede llegar a pensar que en casos extremos y bien localizados se haría factible otorgar un subsidio disfrazado al salario en el caso de aquellas empresas conectadas con el circuito internacionalizado: bajísimos salarios pagados en la empresa (para mantener la competitividad internacional), y dineros públicos de PRONASOL, a manera de sobresueldo o subsidio a la clase obrera exportadora o, lo que es lo mismo, subsidio a las exportaciones, vía inversión directa en necesidades barriales, escolares, de abasto, transporte, etc. Pero claro, todo ello entregado como dádiva por el patriarca, presidente o tlatoani, a grupos muy circunscritos.

En esta medida el Estado, en el modelo neoliberal-dependiente, deja de ser en efecto un Estado populista, pues este último es impensable sin la clase obrera y sus corporaciones sindicales, pero ello no permite, tampoco, calificarlo como un estado antipopular. Es cierto que en términos materiales, sociológicos y humanos todo el modelo tiende a excluir y a pauperizar a una masa cada vez más extensa de la población, absoluta y relativamente hablando (en donde la clase obrera ligada al aparato exportador es pequeña), pero en términos del tipo de Estado y de régimen tiene que ser tomado muy en cuenta el hecho de que la relación líder-masas recobra una importancia que parecía en retirada hacia el fin de la etapa sustitutiva, cuando sindicatos, empresarios y clases medias, debido al exceso de demandas, pusieron en jaque la alianza populista en toda América Latina hasta destruirla con la subsecuente militarización.

En efecto resulta que el actual panorama nos presenta una relación renovada y hasta fortalecida entre el líder y las masas (lógica popular), una exclusión y una represión severa hacia la clase obrera y sus organizaciones, una amalgama entre el Estado y el gran capital internacionalizado, un desprecio total por todos los actores no reciclables de la etapa sustitutiva (*no sólo obreros sino también los empresarios no reconvertibles competitivamente, grandes, medianos o pequeños*), y un desmantelamiento acelerado de las organizaciones, instituciones o espacios de intermediación y formación de identidades colectivas entre lo social disperso y el Estado (sindicatos, coordinadoras, centrales, movimientos sociales, etc., adoptando, incluso los partidos y el parlamento, una nueva "distancia" con respecto a lo social).

En este panorama, las cúpulas del corporativismo obrero de la etapa sustitutiva pueden seguir en el interior del reducido "núcleo

duro" estatal pero sólo bajo la condición de renunciar, ahora más claramente que nunca, a cualquier tipo de defensa de sus agremiados, convirtiéndose en instrumentos de represión y aislamiento de liderazgos y acciones alternativas y en aparatos de destrucción de la identidad colectiva de sus bases.

Alguna vez se nos ocurrió calificar a este nuevo contexto como el de un "Estado de exclusión", lo que no deja de tener sentido porque denota bien la posición de exterioridad, pauperización y anomia de, sin duda, dos de cada tres mexicanos y latinoamericanos. Sin embargo, resulta una clasificación demasiado sociológica y económica, adecuada más bien para caracterizar a las dictaduras burocrático-autoritarias de los setenta y los ochenta en el Cono Sur, pero limitada para dar cuenta del Estado neoliberal y su liderazgo en su articulación reciente con el pueblo. En esta tesitura Guillermo O'Donnell ha propuesto la denominación "democracias delegadas" o "delegativas" (hacia las que estaríamos transitando), lo que es muy adecuado porque pone el énfasis en la referida destrucción de los espacios de intermediación tan propia del quehacer político neoliberal, pero que tiene el inconveniente de dar por sentado, desde el título mismo, aquello que justamente está siendo puesto en cuestión, es decir, la democracia, o la transición hacia la democracia o la consolidación democrática en México y en América Latina.

En efecto si algo caracteriza a la nueva situación es: a) una menor participación de actores en el interior de la alianza estatal o núcleo duro de la dominación; b) una pauperización y una desorganización creciente de las masas campesinas, obreras y populares y de los sectores medios, y c) la ya referida destrucción de las intermediaciones. Siendo así, para qué hablar de un tránsito a la democracia y por qué no hablar mejor de lo que es evidente: que la etapa neoliberal o de economía globalizada requiere en forma cada vez más clara de algún tipo de régimen autoritario, que todavía no sabemos cómo calificar, pero cuyo ejercicio autoritario (y no su empresa democratizadora), resulta plenamente funcional, sobre todo cuando tiene como receptáculo a un país esencialmente estatal como México. ¿Se podría hablar entonces de un *tránsito al autoritarismo* manteniendo el expediente electoral; de un "tránsito electoral al autoritarismo"? (!) El sistema electoral se vuelve, en este contexto, un asunto de alta complejidad y alto costo, una verdadera ingeniería.

Así, en el caso de América del Sur y particularmente del Cono Sur y Brasil se podría decir que partiendo de un "régimen oligárquico" se pasa a uno "popular-nacional o populista" y luego a uno que fue conocido como "burocrático-autoritario" (que fue capaz de enfriar el exceso de demandas de todos los miembros de la alianza pluriclasista de la etapa anterior), para, a partir de ahí, confluir en un momento de "tránsito a la democracia" y de pretendida "consolidación" de ésta, hasta rematar en el momento actual, aún difícil de conceptualizar con precisión, que exhibe los rasgos combinados de una "exclusión social creciente (pobreza y anomia), un regreso del liderazgo personalizado, una presencia de ciertos rasgos propios de los regímenes democráticos (elecciones, juego partidista, visibilidad parlamentaria, etc.), una destrucción sistemática de los espacios e identidades intermedias y una globalización creciente de la economía; ¿podríamos quizás calificar a la etapa actual como la de una "globalización autoritaria"? (piénsese en el exitoso caso chileno y en el "patrimonialismo neoliberal" (!) de Menem, Salinas y Fujimori).

Digamos que México corresponde en el punto de partida y de llegada con esta clasificación aunque ha podido simplificar las etapas intermedias gracias a la función central del Estado: aquí se podría establecer que, desde un régimen de "Estado fuerte oligárquico" (porfiriato), pasamos a uno "popular-nacional" (con su clímax en el cardenismo), readecuándose a continuación hacia un "Estado populista-desarrollista" (desde Alemán hasta Echeverría), para rematar en un régimen o una situación de tránsito hacia un "autoritarismo globalizador de sistema electoral controlado" (que da inicio con López Portillo en su apertura al exterior, aunque sin expulsar a nadie de la alianza estatal gracias al petróleo y los préstamos dulces) y exhibe ya su forma más terminada con el *paternalismo* salinista.

Una vez más en la historia de México, debido ahora al libre comercio, a la competencia internacional y al enorme desorden desarticulador generado por la crisis y acentuado por la globalización acelerada, parecen verse barridas las fuerzas intermedias civiles de la etapa populista desarrollista. Debilitado completamente el campo de las intermediaciones y empequeñecidos a tal grado los actores propiamente sociales legados por la etapa de industrialización nacional, se pone en evidencia que la transición a la democracia ha sido una mera cortina de humo y que lo que realmente

se avizora es la transición al autoritarismo sin actores sociales, de hecho *la derrota de la sociedad ante un Estado* promotor de los intereses económicos de un puñado de compañías aferradas a la mundialización económica: el regreso, una vez más, al ciclo mexicano de la cultura estatal, en plena etapa cibernética y de incorporación a la "economía mundo".

En esta medida, en el núcleo del Estado existe una alianza con la clase capitalista transnacionalizada, lo que podría conducir a calificarlo como un "Estado de clase", pero una calificación de este tipo haría perder de vista que no son en lo fundamental los agentes económicos en tanto agentes clasistas (o compañías transnacionales), quienes aseguran el éxito del modelo globalizador (lo que implicaría un achicamiento y casi desaparición del aparato estatal según la receta del neoliberalismo), sino que es la capacidad de fortaleza y autoridad del Estado lo que está resultando fundamental para el éxito del modelo globalizador en las sociedades de América Latina, aunque también en las sociedades exitosamente globalizadas de Asia. Claro está que esa fortaleza y autoridad se puede lograr por constelaciones histórico-sociales, como es el caso mexicano o el asiático, o por situaciones coyunturales de extrema emergencia como son el desbordamiento social incontrolado o la amenaza de guerra civil, y fue Chile el caso más nítido al respecto.

Así, el núcleo estatal duro en México, al inicio de los noventa, quedó formado por: 1] la alta burocracia-teniente del Estado: el presidente, el gabinete económico, los aparatos de seguridad del Estado (con sus ramificaciones sobre los puntos neurálgicos del aparato sindical, de las organizaciones campesinas y de algunos ámbitos sensibles de los centros de educación superior -la UNAM destacadamente); un grupo bastante compacto y pequeño-teniente del núcleo estatal, que recibe, 2] el apoyo irrestricto de las instituciones financieras internacionales (FMI, BM, Banco de Pagos Internacionales, etc.); y los gobiernos de las grandes potencias, en total acuerdo con, 3] las firmas privadas nacionales y extranjeras más competitivas transnacionalmente (tres centenares de firmas que han tenido elevadísimos ingresos durante el ajuste y la reestructuración en los últimos doce años), a lo que se suma, 4] un control casi total sobre los medios masivos de comunicación (TV y radio), con énfasis en el monopolio televisivo que se convirtió en el ministerio de información del Estado bajo apariencia privada (un "Ministerio de la Verdad" orwelliano); teniendo de su lado a, 5] los

intelectuales más lúcidos gracias a un sistema de cooptación que parece sólo fallar con los locos y los enfermos; intelectualidad reclutada desde todas las tendencias (pero curiosamente sobre todo desde la izquierda), que ha aceptado poner su inteligencia al servicio de este "núcleo duro" a cambio de un poder moderado, o nulo poder, y muchísimo prestigio, hecho posible por la publicidad en la prensa, las cámaras de televisión, los premios y tantos otros obsequios que al ser de tan bajo costo, son oro para este sector; y, en fin, 6] un acceso irrestricto, y sin rendir cuentas por parte de esta burocracia estatal, a todos los recursos de la nación, particularmente los derivados de las privatizaciones, de los préstamos internacionales y de nuestros propios impuestos, invertidos en programas de manifiesto proselitismo en favor del partido del Estado (Pronasol, Procampo, vivienda, obras públicas, etc.), y disponiendo en fin, de, 7] un aparato de seguridad e ingeniería electoral altamente centralizado, con un censo político, ciudadano por ciudadano.

Antes de analizar más concretamente cómo ha venido funcionando este nuevo enganche entre Estado y sociedad, desglosemos uno de los integrantes de este núcleo duro del sistema dominante, aquel referido a los intelectuales.

15. LOS INTELLECTUALES Y LA BUROPOLÍTICA

Importa ahora concentrarnos en la función estratégica que los intelectuales van a cumplir en el nuevo núcleo restringido o "núcleo duro" del Estado bajo la globalización autoritaria y polarizante: ese reducido número de ocupantes-aliados del aparato estatal. Analicemos pues qué cambió la relación del Estado mexicano con los intelectuales en la era del neoliberalismo incontestado (1986-1993) y del neocardenismo opositor, porque a partir de la comprensión de este aspecto se pueden desentrañar importantes mecanismos de la dominación en nuestro país. Digamos que hasta antes del estancamiento de los años ochenta, el pensamiento crítico de las generaciones de intelectuales se mantuvo fuertemente anclado en la imagería del 68: ese primer golpe a la visión armónica de nuestra modernización, que significó darnos cuenta de que el crecimiento económico no redundaba necesariamente en la disminución de las desigualdades sociales ni en una forma más democrática de participación política. Sin abandonar la idea de que el avance científico-técnico, la industrialización y el desarrollo constituían armas efectivas para atacar las grandes carencias de nuestra población, aquella juventud decidió que el problema era político, es decir, que había que abrir nuevas formas de participación democrática para influir en los aparatos de orientación del desarrollo y evitar que las decisiones sin contrapeso del autoritarismo estatal siguieran favoreciendo a la burocracia dominante, a las clases privilegiadas y a sus socios transnacionales.

Esta batalla por reorientar la tendencia histórica de nuestro país fue como un árbol cuyo crecimiento se cortó de tajo en Tlatelolco; sin embargo, su tronco, ya inevitablemente robusto y enraizado en la democracia social, floreció en tres ramajes, como veíamos al inicio de este libro, cuyo desarrollo fue desigual: primero, el de la vía radical, el de la acción directa, la confrontación revolucionaria y el asalto al poder tan caro a la izquierda mexicana y de América Latina desde la Revolución cubana hasta bien entrados los años setenta y que en nuestro país remató en la llamada "guerra secreta" en que ejército y policía aniquilaron, sin siquiera juicio sumario,

a las organizaciones guerrilleras o a cualquier agrupamiento ligeramente parecido a ellas (FLN, MAR, Enfermos, FRAP, Liga 23 de Septiembre, Unión del Pueblo, Partido de los Pobres...). Segundo: una rama menos estatista y más social a través de la cual los estudiantes regresaron a las poblaciones; una línea basista-maoísta, "ir al pueblo", que tuvo sus mejores expresiones en el interior del país, como ya quedó claro. Tercero: una línea que privilegió una ruta de democratización menos social y más orientada al poder político, sobre todo con el paso del tiempo: la conformaron, entre otros, la mayor parte de los ex presos políticos del 68 y sus núcleos fueron, durante el echeverriismo: la Organización Punto Crítico (con buena inserción en los movimientos sociales), el Partido Mexicano de los Trabajadores y el Partido Comunista; su canal de acción estelar en ese sexenio fue el medio sindical: obreros por un lado (Suterm, Sutin...) y universitarios por el otro (STEUNAM, Consejo Sindical, SPAUNAM). En algunas universidades de los estados los grupos políticos mencionados en esta tercera línea tuvieron predominancia tanto en el medio sindical como en el rectorado mismo (Puebla, Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, Oaxaca y Guerrero). Con la reforma política del lopezportillismo -resumimos lo dicho más arriba- el grueso de esta tercera corriente pasó de la acción sindical y de las universidades hacia la política partidista y parlamentaria: el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), y luego el Partido Mexicano Socialista (PMS) fueron así un espacio de coincidencia en el que los intelectuales, la izquierda y, en general, las organizaciones políticas transitaron por el parlamentarismo a lo largo de la época dorada del *boom* petrolero, hasta la década de los ochenta.

1. La vía reformista

¿Qué es lo que convirtió a esta tercera vía en la forma privilegiada de hacer política en nuestro país?; y, muy ligado con ello, ¿cómo se explica que desde ese espacio de confluencia global del pensamiento crítico del grueso de la izquierda que fue el socialismo unificado del inicio de los ochenta hayan surgido, al mismo tiempo, la intelectualidad que a partir de 1989 vistió al neoliberalismo de Salinas y la que apoyó al neocardenismo de Cuauhtémoc (esta última, asombrosamente, más raquítica)?

Con respecto a lo primero, varios elementos explican por qué esta tercera vía, reformista, partidista y parlamentaria, se convirtió en la vía privilegiada de hacer política para las generaciones a partir del 68. En el ámbito nacional se combinaron el horror del 2 de octubre, el 10 de junio de 1971 y la masacre contra la guerrilla, con las mieles de la apertura democrática, los presupuestos generosos para las universidades y la reforma política. En el plano internacional la combinación no fue muy distinta: junto al exterminio del MIR chileno, los Tupamaros, los Montoneros y otras agrupaciones revolucionarias vivimos la experiencia del eurocomunismo y el ascenso al poder de algunos partidos socialistas que en su conjunto relativizaron el papel de la clase obrera como agente central del cambio y a la *revolución* como vía privilegiada del pasaje al socialismo (aquí ejercen su influencia las revistas *Zona Abierta*, *Ruedo Ibérico*, *El Viejo Topo*, *Pasado y Presente...* y las figuras de Bozal, Claudín, Coletti, Bobbio, Paramio, Borja, Pereyra, Perry Anderson, Aricó, Portantiero, Cardoso...).

La tendencia natural de la cultura y del quehacer político en México, orientado siempre hacia la influencia en los espacios del poder estatal (nuestra "propensión buropolítica", como la hemos llamado), completa el marco explicativo en torno a esta vocación concertadora y palaciega antes que constructora de identidades basistas o, digamos, política antes que social.

Pero, en resumen, podemos estar de acuerdo en que hasta la primera mitad de la década del estancamiento, el fortalecimiento de la democracia política —la de las representaciones partidistas y parlamentarias— era inseparable del objetivo de mejoramiento de las condiciones de vida de todos los integrantes de la sociedad. Hacer política suponía apropiarse de los instrumentos de orientación global del desarrollo y demostrar que el crecimiento económico debía repercutir en la igualdad social: un "programa" *moderno*, que podemos bautizar como el de la herencia reformista del 68 y que a la larga predominó.

2. Los nuevos intelectuales y el fin de la utopía sesentera

Algo asombroso fue que la crisis de los ochenta tuvo la fuerza para hacer pedazos los postulados que integraron ese "programa". En efecto, a partir de ahí, un poco azorados, comenzamos a vivir con

la evidencia de que el sistema político o de las representaciones —el de las mediaciones entre Estado y sociedad; el partidista, parlamentario, sindical; el de los frentes y coordinadoras de lucha, etc.— no era ya capaz de influir en lo más mínimo en las orientaciones del desarrollo o, digamos, en las decisiones en torno a la administración de la crisis desarrollista y luego en las orientaciones del nuevo modelo. Pareció verse frustrada así la enorme esperanza que nos legó la vía de los "pequeños pasos", la del eurocomunismo y la reforma política. Para decirlo en otros términos: las corrientes, los partidos y los movimientos se hicieron representar en el parlamento (los aspectos formales de la democracia progresaban), pero se descubrieron incapaces de variar un ápice la política económica que desde su inicio puso en evidencia su potencial enorme de relegamiento, exclusión y desorganización social hacia crecientes agregados poblacionales. Héctor Aguilar Camín, uno de los intelectuales más influyentes de nuestro país y del gobierno salinista, daba esto por un hecho:

No creo que la democracia vaya a traer por sí misma la solución del resto de los problemas... México se puede volver mañana una sociedad democrática y tener elecciones transparentes, pero eso de ninguna manera va a crear el millón de empleos por año que el país necesita para sus jóvenes. Creo que en México durante el sexenio de Miguel de la Madrid hemos tenido una muestra de que es posible un gran castigo social con una mayor apertura política y una mayor tolerancia democrática...¹

En un planteamiento radical y partiendo de la experiencia de lamadridista y salinista podría uno preguntarse si la afirmación anterior no implica que los canales abiertos a la participación política en un país como el nuestro tuvieron y tienen como función casi única lograr que el creciente proceso de polarización y la pauperización de cada vez mayores agregados sociales se lleve a cabo pacíficamente. En otros términos, ¿podría afirmarse que la participación en los espacios de la democracia política, al ser ejercida por una serie de agentes privilegiados del mundo de los integrados —y por algunos liderazgos que se destacan desde el mundo de la exclusión—, no afecta en lo fundamental ni al "núcleo duro" de la conducción estatal, ni a la tendencia del todo social hacia la creciente polarización, pauperización y desorganización?

¹ Héctor Aguilar Camín, *Cuadernos de Nexos*, 1989.

Plantear las cosas así implica al menos dos cuestiones: a] que entre el sistema político y el núcleo duro del Estado (conducción y orientación del ajuste, de la reestructuración y de la integración transnacional en general), el neoliberalismo generó un gran vacío; b] que entre el amplio espacio del sistema político, la cultura y los medios, por un lado, y el mundo de los excluidos, por el otro, se generó también una gran desconexión. Cuando ciertos liderazgos lograron incorporarse al sistema de las representaciones los vimos perder conexión con el medio original que los impulsó, ya fuera una lucha social, una identidad de base, etc. Con muy pocas excepciones como la COCEI en Oaxaca o la Asamblea de Barrios en el D.F. (hasta antes de su división en dos corrientes), los principios de identidad circunscrita, consistente y continua, fueron en la mayoría de los casos rotos constantemente y las vanguardias se incrustaron en las alturas, en los aparatos de influencia del supuesto sistema representativo, mientras las bases se atomizaron ya sin principio unificador (aunque hay que aclarar que ésta ha sido una característica histórica de las luchas sociales en México). El propio ascenso del cardenismo durante el año 1988 generó una succión tan fuerte hacia las alturas de la política que descabezó a ciertos movimientos, una especie de "vaciamiento hacia arriba" que incrusta a las dirigencias en las diputaciones, las posiciones partidistas y la influencia en el sistema político (fue definitivamente el caso del movimiento universitario que el CEU había dirigido brillantemente en el año 1987, pero también tuvo sus efectos en las organizaciones surgidas a raíz del terremoto de 1985 y en muchas más).

Como lo planteamos en el capítulo anterior, en el neoliberalismo triunfante fueron excluidos de la alianza desarrollista los obreros, los sectores asalariados públicos y privados y todos los grupos del empresariado que no resultaron competitivos en el nuevo esquema globalizador. Sin embargo, entraron otros a desempeñar una función estratégica; entre ellos debemos contar destacadamente a los intelectuales (en un nuevo papel cualitativamente muy superior) en simbiosis con los medios de comunicación de masas. Pero para colocarse ahí, esta intelectualidad tuvo que llegar a la convicción de que la democracia política poco o nada puede hacer por la democracia social, más allá de mantener la paz pública durante el proceso de polarización social, de pauperización y pulverización de las identidades.

A todo esto hay que agregar un hecho estratégico: fue grande la urgencia por incorporar a prestigiados intelectuales al "núcleo duro", porque en el sexenio de De la Madrid se había cometido un error gravísimo que alteró el funcionamiento de la política mexicana: los modernizadores sintieron que las fuerzas tradicionales ya no contaban y forzaron la máquina al extremo de que un sector nacionalista se declaró como una tendencia específica (democratizadora) dentro del partido del Estado. Hasta ahí el asunto no era grave, son normales las tensiones entre el elitismo tecnocrático y la reacción de amplios sectores y sus liderazgos que se sienten excluidos. Pero lo que no estaba dentro de la tradición política, y hasta hoy sigue considerándose como el gran error de aquella administración, fue que cuando la escisión fue evidente no se hiciera nada para reconstruir la unidad estatal, y no se echara mano de ese otro gran mecanismo del funcionamiento político de los mexicanos: la reconciliación. Con los mecanismos históricamente tan acendrados de que dispone el Estado mexicano, llama la atención que el neocardenismo, en su momento, haya crecido al punto de volver imposible el regreso a la unidad, que no se haya ejercido con eficacia la balcanización del adversario vía la cooptación y la propensión buropolítica, etc. Y es que, como lo veremos con mayor detalle más adelante, lo que se vivió como cardenismo al final del sexenio delamadridista —y que Salinas de Gortari intentó rectificar— fue una situación que llegó al extremo de permitir, ante la soberbia y el inmovilismo presidencial, la identificación entre el mundo de los excluidos por un lado y, por otro, importantes capas de la población integrada, con el destacado ejemplo de los universitarios y estratégicos liderazgos de la oposición (liderazgos incluso institucionales como el de los petroleros). El asunto fue delicado en el delamadridismo (1982-1988), y siguió siéndolo durante todo el sexenio salinista porque en ciertos momentos y particularmente en 1988 estuvo a punto de devolver alguna identidad a los excluidos a través de un liderazgo alternativo y abrir la posibilidad de una alianza popular-radical con los sectores ilustrados. Ya el terremoto de 1985 había creado boquetones en el muro que separa a integrados y excluidos, devolviendo en cierta forma una identidad colectiva a los de afuera. También el movimiento estudiantil comenzado en 1986 apuntó en esta dirección y fue capaz de construir, más como ideología que en los hechos, un discurso en favor de las capas estudiantiles menos favorecidas y en contra

de la "excelencia" neoliberal. Pero el cardenismo fue, de plano, una marejada que confundió las aguas entre excluidos e ilustrados; de la misma manera que el levantamiento zapatista lo haría seis años después.

3. Las nuevas formas de la cooptación

Mientras el echeverriismo (1970-1976) intentó reconstruir la relación entre el Estado y los sectores ilustrados destinando fuertes inversiones públicas a las universidades y a otros importantes centros de cultura, el neoliberalismo de Salinas intentó también desactivar a la oposición intelectual y a la peligrosa alianza con lo popular, pero de manera mucho más económica, claramente dentro del principio neoliberal de no desbalancear el gasto público. Fue así como todos los salones de Palacio abrieron sus puertas a la *concertación*. El pequeño grupo de los intelectuales más destacados, profesionistas, científicos, políticos, técnicos, artistas, recibió invitaciones para esta o aquella mesa de concertación, consulta popular, consejos consultivos, presidencias de algún evento, premios nacionales, locales o regionales, y sus nombres, sus fotos o sus imágenes fueron publicadas y proyectadas en listas de plana entera, en supuestos noticieros claramente desviados hacia esa tarea y en tantos otros eventos de cultivo del prestigio y la autocontemplación. Es más, en casos destacados no sólo fueron los ilustrados objeto de la publicidad sino que se les convirtió en promotores de la misma al dotárseles de programas televisivos de alto *rating*, apoyos millonarios en publicidad para sus prestigiadas revistas, diarios enteros que ya existían o de creación expresa, contratos millonarios para la preparación de libros de texto y otras obras de la cultura, institutos dedicados al estudio y publicitación del tránsito a la democracia y la vía de los pequeños pasos (que estaría encabezando Salinas, según esto, en contra de una oposición violenta, irracional y que insistía en el fraude electoral de 1988 y en cada uno de los fraudes electorales a lo largo de aquel sexenio).

Lo cualitativamente novedoso de esta articulación entre intelectuales y Estado fue que dejaron de aparecer como figurones de prestigio al lado del régimen en turno, como había sido su función hasta entonces, para convertirse en equipos activos de la construcción de consensos en favor del salinismo, perfectamente articula-

dos a los medios electrónicos de comunicación, para ya no mencionar su influencia en todos los otros canales de articulación y conformación de la opinión pública.

Pero decíamos que todo este espacio de las representaciones y de los reconocimientos, y el sistema político en general, pudo funcionar con muy pocos recursos. Sin embargo no pudo ocultar las evidencias de ocho años de neoliberalismo y regresión económica, de manera que la drástica caída del gasto público en los renglones de salud, educación, alimentación, empleo, etc., obligó a la creación, también con gran publicidad, de algunas agencias orientadas a hacer aparecer al régimen como preocupado por la suerte de los excluidos, tal y como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial lo habían recomendado para mitigar los horrores del ajuste: se abatió el presupuesto para la salud y la seguridad social (en 30% sólo entre 1982 y 1984), pero se creó un organismo encargado de los casos de pobreza extrema encabezado por intelectuales de gran prestigio que en los primeros años del régimen quizás desempeñó sus funciones con un mínimo porcentaje de los "gastos recortados" en aquellos renglones; se repartió leche y tortibonos a precios subsidiados mientras los estantes de las tiendas Conasupo con dificultades exhibían alguna mercancía antes de ser cerrados definitivamente. El gasto para educación se redujo del 4 al 2% del PIB entre 1982 y 1986 y los profesores universitarios en este periodo vieron disminuidos sus ingresos a una tercera parte; desapareció en 1988 el CREA (institución para la atención de la juventud), ya casi exhausto por los recortes a su presupuesto y con una suma ridícula, con un intelectual de renombre y un medallista olímpico se instituyó un consejo del alto deporte y uno de la alta cultura (Conade y Conaculta), que sin ninguna duda dieron servicio a menos de uno entre mil jóvenes del medio popular. Mientras, los directores de esos dos consejos aparecían más de una vez por semana en la prensa y la televisión, en inauguraciones, actos presididos por el poder ejecutivo, recuperación de joyas antropológicas robadas, finales de copa Davis, programas dominicales conducidos por intelectuales, etcétera.

Pero la clase ilustrada que ha participado en esto, sobre todo la que forma parte del "núcleo duro de la dominación" (en un alto porcentaje formado en la militancia de izquierda), consciente o inconscientemente, necesitó un discurso que le permitiera entrar y salir de palacio por la puerta de enfrente.

16. LA IDEOLOGÍA DEL NEOLIBERALISMO DEPENDIENTE

1. *El más allá mundo (el pecado de la autonomía)*

El elemento más general de la ideología que ha acompañado a este neoliberalismo dependiente establece que no se encuentra en la voluntad de la nación la posibilidad de resolver nuestros problemas: éstos dependen de un más allá, la crisis de desarrollo es universal, formamos parte de una sola economía-mundo y tenemos que respetar el código que la rige: cualquier intento autonomista por detener la tendencia hacia la exclusión creciente de las masas y la caída de su nivel de vida conduce al aislamiento, al destierro como castigo, y redundante en la agudización de la pobreza, en la inflación, en la violencia generalizada y en la descomposición anómica. Solos no podemos nada ni debemos intentar nada. Hay aquí un elemento no extraño al de la religión que se caracteriza por dar vida a un sentimiento de respeto hacia una fuerza superior al hombre, es decir, hacia un poder trascendente.

Estableció Rolando Cordera hacia 1989:

El reacomodo mundial que se echó a andar en los setenta, y que aquí se creyó que se podría rodear gracias al petróleo y el ingreso de los grupos dirigentes, ha mostrado con suficiencia, en México, Francia o Brasil para no mencionar a Venezuela, Polonia o China que eso de mundial quiere decir para todos sin distinción de raza, religión o modo de producción, sin clemencia, aunque de su impacto puedan salir mejor librados unos que otros... Los intentos por encontrar atajos o, para decirlo técnicamente, por "relanzar" algunas economías nacionales de modo independiente, no han arrojado frutos satisfactorios y sobre todo, no han durado, aun en el caso de economías grandes y complejas, como se mostró en Francia en los primeros tiempos del primer gobierno socialista de Mitterrand... Ponerse al día, reconvertirse, modernizarse, sintonizarse con las pulsiones de una economía mundial que a la vez que unificante sigue siendo un sistema internacional de estados... supone entre otras cosas definir nacionalmente una estrategia de comercio exterior... No se puede producir todo, hay que ser selectivos, hay que buscar una integración económica nacional por vía de múltiples conexiones internacionales... Sin reconversión productiva, sin modernización de la planta industrial no hay manera

de lograr aquello... Pero esto a su vez no parece factible sin cierre de líneas de productos, o en su caso, de plantas enteras.¹

Ahora bien, el más allá-mundo es inseparable de los siguientes elementos de la ideología del liberalismo dependiente que ahora presentamos antes de cualquier comentario.

2. *El pasado-estatal (el "ayer-Estado")*

Lo que sucede en este momento y por lo que tenemos que someternos a estos sacrificios no es culpa nuestra, es culpa de una ideología irresponsable de la modernidad (socialista y capitalista) que quiso creer que desde el Estado (populista, socialista, keynesiano...) y no desde nosotros mismos (bajo nuestra responsabilidad -individual- y bajo nuestro esfuerzo), debió haberse intentado la solución de los problemas de cada ciudadano y de la colectividad.

3. *El mañana-desarrollo (no hay que intentar nada para que todo cambie)*

Hay un movimiento perpetuo que se llama progreso científico-técnico. Todo intento por salir de las reglas de la economía-mundo nos desorganiza, nos retrasa, nos subdesarrolla con respecto a ese principio de movimiento inmanente (aquí también: fuera del control de los hombres). Si hoy no intentamos cambiar las cosas y evitamos voluntarismos que alteren esa tendencia continua del progreso, si acoplamos la producción de nuestras materias primas al movimiento natural de la demanda universal y sólo nos quedamos con las industrias que sean competitivas transnacionalmente, el cambio vendrá por sí mismo mañana, pues con el crecimiento económico nos modernizaremos y nos sintonizaremos con los adelantos de la "tercera revolución científico-técnica".

Recordemos que la eficacia de esta ideología se basa en la separación entre economía y sociedad o, dicho de otra manera, en la separación entre la salud de la producción material (medida por el monto y la competitividad de las mercancías colocadas en el

¹ Rolando Cordera "Los dolores del ajuste", *Cuadernos de Nexos*, núm. 9, abril de 1989.

mercado internacional), y las condiciones de la existencia humana, las condiciones de vida de los hombres en sociedad. Ejemplos dramáticos a propósito de este divorcio entre cuentas "sanas" de la economía y condiciones de existencia social crecientemente anómica las encontramos en todas aquellas zonas de la economía intensivamente enganchadas a la competencia internacional, es decir, la *maquila* y la *agromaquila*. Sería ocioso citar la infinidad de ejemplos en donde, para acrecentar las exportaciones en busca de divisas, se industrializó el cultivo de los productos primarios de manera que importantes núcleos de campesinos pequeños se vieron echados de sus regiones y se convirtieron en jornaleros o en desempleados de barriadas urbanas o van y vienen entre esos dos medios miserables.²

Se puede establecer entonces que el intercambio en sí, la internacionalización, no es negativa. Lo criticable es que esta ideología del neoliberalismo dependiente (embebida en la contabilidad) no valore en el proceso de intercambio más que los flujos fronterizos y olvide las condiciones de vida de sus poblaciones. La modernización económica se vuelve cada vez más expropiación de grupos sociales y poblaciones enteras sin ningún control sobre los sistemas de que depende su subsistencia.³

Una falacia del modelo que aquí sólo mencionamos es la señalada por François Partant, quien nos recuerda que, bajo las pautas de consumo del capitalismo actual, si los países del Tercer Mundo se acercaran siquiera un poco a los niveles de modernización del primer mundo se produciría la destrucción casi inmediata de la biosfera y de la especie humana, pues debemos tener en cuenta que un habitante de Rwanda consume mil cien veces menos energía que un americano medio.⁴

Las falacias del modelo comenzaron a quedar al desnudo desde muy temprano, pues no nos proveyó de nada que nos explicara por qué, si a corto y a mediano plazo relanzar la economía significa

² Algo extremadamente dramático a este respecto es lo narrado por Robert Lingart, a propósito de la industrialización de la caña de azúcar en el Brasil y la expulsión de grandes masas de campesinos. *Le sucre et la faim*, París, Minit, 14 de agosto de 1989.

³ A este respecto, véase Jean Chesneaux, "La modernité monde", *Les Temps Modernes*, junio de 1988, y François Partant, *La fin du développement*, París, Maspéro, 1983.

⁴ François Partant, *op. cit.*

fehacientemente agudizar las desigualdades sociales, esto pudiera cambiar en el largo plazo, en el más-allá-mañana. De hecho, pronto caímos en cuenta de que el asunto de la igualdad social (máximo referente del humanismo junto con el cultivo de la razón, la cultura, etc.) no era un elemento intrínseco al modelo neoliberal, sino que tuvo que ser reintegrado a ese modelo como ideología.

En efecto, ¿por qué mañana, con los beneficios del desarrollo, estaríamos en un escenario menos desigual si justamente el incremento de esos beneficios ha dependido y dependerá cada vez más rabiosamente, de la eficiencia competitiva de la industria y de las materias primas en un mercado internacionalizado y esta competitividad depende, a su vez, del aumento de la productividad y de la contención salarial? Si la propia mano de obra directamente implicada en el proceso globalizador de procesos tecnológicos "de punta" no tiene capacidad organizativa para defender sus derechos laborales, ¿por qué habrían de tenerla las tres cuartas partes de los mexicanos excluidos de la economía formal? Y, en fin, si el Estado privatizara o cerrara una gran mayoría de sus empresas ¿podría hacer algo efectivo a propósito de la justicia social, cuando precisamente el éxito del modelo dependió de la no intervención del actor estatal y de la disminución de los derechos laborales heredados por el modelo anterior so pena de la desconfianza, la fuga de capitales y la desestabilización? No quedan entonces, como intervenciones estatales aceptables, más que las acciones de emergencia en situaciones extremas y circunscritas (terremotos, levantamientos populares, programas de leche y tortibonos -luego micas- para evitar el surgimiento de identidades por asociación defensiva en el medio popular, etc.); se trata de la organización sobrepublicitada de la limosna vía los comités y programas de Solidaridad.

Entendemos de esta manera por qué la lucha contra la pobreza es un elemento exterior al modelo económico neoliberal. De hecho la economía-mundo no requiere de tantos hombres, y sin embargo, al mismo tiempo, el referente a la pobreza es un elemento ético-ideológico fundamental para el funcionamiento del modelo: es indispensable mostrar que todos los pasos que se dan están encaminados exactamente a lo contrario de lo que la aplicación del modelo produce y para esto son insustituibles los intelectuales. Veamos pues este cuarto aspecto de la ideología del neoliberalismo dependiente.

4. La pobreza como virtud (el terreno de los humanistas)

La pobreza es palpable, ahí está y crece, pero el discurso del núcleo dominante habla de ella como de algo que no tiene que ver con el circuito modernizador, se trata de algo integrado en sí mismo, algo noble, positivo, una "cultura de la pobreza" aún con organicidad intrínseca que hay que enganchar cuidadosamente a la modernización, sin lastimar sus virtudes. "En la actualidad alrededor de la mitad de la población nacional (41 millones) no satisface sus necesidades esenciales y alrededor de 17 millones de ellos vive en condiciones de extrema pobreza", establecía Carlos Tello en una reunión de divulgación ideológica del PRI5 en el año 1989, mientras que Arturo Warman, en la instalación del Foro de Consulta Popular sobre la Pobreza Extrema, en la misma época, establecía que "nuestra pobreza no sólo es productiva, también es creativa e inventiva, de ella surgen productos nuevos que aprovechan recursos y conocimientos insospechados. Los mercados populares son un testimonio de esa innovación constante. Pero la inventiva y creatividad de la pobreza se manifiestan más clara y vigorosamente en el establecimiento de relaciones sociales que permiten la sobrevivencia que la estadística hace parecer imposible. El fortalecimiento de la familia como la unidad que combina con máxima eficacia y sin desperdicio los recursos y las necesidades, las redes humanas que suplen los servicios que la sociedad no puede entregar, desde el cuidado de los niños y los enfermos hasta las complejas cadenas que permiten la movilización de millones de trabajadores dentro y fuera del país; los pueblos y los barrios donde se intercambian sin lucro los recursos colectivos y donde se generan las fidelidades que otorgan identidad, seguridad y pertenencia, ilustran la creatividad de los pobres para construir relaciones humanas con un signo claro: el de la colaboración, la solidaridad en su sentido más profundo. La naturaleza productiva, creativa y solidaria de nuestra pobreza nos permite analizarla no sólo como una suma de carencias sino también como una fuente potencial para el verdadero desarrollo".⁶

Aquí hay que recordar una cosa: la pobreza no es una exterioridad

⁵ *La Jornada*, 13 de julio de 1989.

⁶ Arturo Warman, "Presencia de la pobreza", *Cuadernos de Nexos*, núm. 8, marzo de 1989, p. v.

con respecto a la esfera moderna de nuestras sociedades, algo que debiera ser asimilado a lo moderno, algo que se encuentra integrado en las identidades tradicionales (una especie de folklor). ¡Para nada! En realidad lo que hoy ayuda mejor a caracterizar la idea de la pobreza, en América Latina por lo menos, es la concepción de que

la modernización avanza simultáneamente en dos direcciones opuestas, alrededor de dos ideas antagónicas y sin embargo indisociables: hay modernidad en la prosperidad y en el éxito y hay modernidad en el fracaso, en los océanos de miseria que rodean a las bolsas de prosperidad [...] Pero lo segundo es tan moderno como lo primero y la distinción clásica entre "sociedades tradicionales" y "sociedades en vías de modernización" ha perdido toda sustancia.⁷

Debemos aclarar algo todavía más importante: esta pobreza moderna prolifera en medio de una desorganización social extrema, se acompaña y se caracteriza por su generación de formas francamente cercanas a la anomia cuando no anómicas: el empleo informal y la economía subterránea no son un semillero de empresarios populares como lo quisiera el peruano Hernando de Soto, sino que se caracterizan más bien por la nula solidaridad, la hiperjerarquización, la explotación más despiadada, la falta de formación laboral, de una disciplina, de un horario y de un lugar de trabajo compartidos, se caracterizan por la ley del más fuerte...; por su parte, la familia extensa o compuesta como modelo de la solidaridad, la protección y la preservación de los valores morales constructivos también se está convirtiendo en un estereotipo no tan fácilmente generalizable en el inmenso mar popular-urbano. Por el contrario, con gran facilidad descubrimos a la familia rota, al padre ausente o alcohólico, a la supermadre centralizadora de roles, culposa frente a los hijos (por no ofrecerles una familia como lo marcan los estereotipos televisivos: "ser o tener una madre así"), hijos que se instalan entonces fácilmente en el chantaje y que lo extienden a la sociedad, a la escuela y a las otras instituciones; alto índice de desertores escolares sobre todo en el nivel medio de la educación (según datos de la SEP, de cada mil jóvenes que terminaban la secundaria en 1981, 134 interrumpían sus estudios; en

⁷ J. Chesneaux, *op. cit.*, p. 65.

1988 esta cifra subió a 238); a la juventud popular se le quiere ver como una subcultura integrada, con una producción genuina en la música rock, en el vestido y en sus valores (como quiso pintarla el CREA), cuando en realidad se asfixia en el desempleo, en la incultura, en la represión policiaca, en la droga, en la ausencia total de opciones y, en el extremo, en la violencia y en la delincuencia. Para qué ahondar en el debilitamiento de los referentes religiosos, de la ética comunitaria, de la solidaridad barrial... Se abre pues una discusión entre la *pobreza como virtud* o la *pobreza como anomía*.

5. La paz concertada como valor supremo

Entremos al punto más delicado del discurso dominante: el que tiene que ver con la concertación, ese término que ha invadido todas las declaraciones de la vida pública de México y que de su empleo o rechazo dependen los signos "profundos" de fidelidad o adversidad al régimen. Se trata del manejo de sólo dos imágenes contrapuestas: a) por un lado, una visión de cambios paulatinos, "concertados" en el nivel de la vida institucional y de los aparatos públicos de manera de ir logrando paso a paso una modernización armoniosa de la vida política y de la economía que logre expresar en algún momento y de manera formalizada en instituciones a la pluralidad política e ideológica de nuestra sociedad; b) por otro lado, se evoca un panorama de caos, violencia, sufrimiento, hambre y desesperanza, producto de la confrontación, panorama del que ya no es necesario citar los ejemplos de El Salvador, Nicaragua, Perú y, ahora, Venezuela, Bolivia y el mismísimo Chiapas, porque la televisión los ha traído hasta nosotros con lujo de detalles.

Es una posición efectivamente maniqueísta que no difiere de ciertos planteamientos de los años setenta salvo en que lo que allá tenía signo negativo aquí lo tiene positivo y viceversa: en efecto, en ese entonces la consigna "Reforma o Revolución" colocaba a esta última como la única posición ética y políticamente aceptable y hoy, al menos en la cultura política de esta inteliguentsia dominante, resulta a la inversa: "la actitud de no aceptar diálogos con el gobierno mediante una postura de irreductible confrontación ha terminado por reducir el apoyo de algunos sectores al naciente Partido de la Revolución Democrática", decía un grupo repre-

sentativo de estos intelectuales en una crítica furibunda, de plana entera, al PRD, disfrazada de autorreflexión fraternal.⁸ "Nuestra posición -agregaban- es que antes de agotar todas las posibilidades de un cambio gradual y concertado, es por lo menos poco serio insistir en posturas catastróficas y polarizantes." Es preciso, afirmaba posteriormente este mismo grupo de intelectuales al evaluar el levantamiento chiapaneco, "asumir de una vez por todas que el cambio político y social sólo es viable mediante vías legales y reformistas".⁹

Uno de los firmantes de este documento fue desde ese entonces más explícito cuando, ya sin hablar de "Reforma o Revolución" sino de "Democracia o Revolución", estableció:

El mito revolucionario que ha permeado el pensamiento y la acción de los socialistas condiciona, en efecto, un modo preciso de percibir y practicar la política. Un modo que, con las variaciones y matices que se quiera, supone que la resolución de las contradicciones sociales pasa necesariamente por su exacerbación radical y, en consecuencia, por la polarización catastrófica de las fuerzas sociales. De ahí que esta concepción anteponga los momentos de enfrentamiento, de lucha abierta y de ruptura excluyente, menospreciando en cambio los procesos de negociación, compromiso y concertación [...]. La mayor parte de los procesos de democratización real de los estados modernos [...] ha podido ser regulada y civilizada mediante una serie de rupturas pactadas, vale decir: de reformas acordadas por la mayor parte de los actores políticos y de las fuerzas sociales [...]. La política revolucionaria, con su carga de dramatismo, de emociones exacerbadas y de espíritu extraordinario, se opone terminantemente a la política democrática: esta última exige, en efecto, desdramatizar a la política, secularizarla y racionalizarla, es decir, en una palabra, modernizarla.¹⁰

Empujando un poco más esta concepción, el porfiriato habría estado a punto de comenzar el proceso de profundización de la democracia, pero la miopía de Madero, Carranza, Zapata y Villa habría dado al traste con nuestro pasaje a la modernidad. *Nexos* y

⁸ Adrián de Garay, Roberto Gutiérrez, Esperanza Palma, Estela Serret, Luis Salazar, Rolando Cordera, Pablo Pascual, Adolfo Sánchez Rebolledo, José Woldenberg, "Crisis y perspectivas del Frente Democrático Nacional", *La Jornada*, 3 de mayo de 1989, p. 15.

⁹ "Chiapas: por una salida negociada y pacífica", Rolando Cordera, Gilberto Guevara Niebla, Pablo Pascual, Luis Salazar, Adolfo Sánchez Rebolledo, Raul Trejo, José Woldenberg, *Perfil de la Jornada*, 10 de febrero de 1994.

¹⁰ Luis Salazar, "La democracia y la idea de revolución", *Cuadernos de Nexos*, mayo de 1989, pp. VIII-IX.

Vuelta plantean lo mismo con respecto al salinismo, y Marcos habría venido a dar al traste con nuestra modernización y nuestro pasaje, que ya parecía irreversible, a la democracia:

Satanizar [a la modernización] y volverla enemigo a vencer resulta inútil, pero en ese empeño se pueden propiciar irrupciones sociopolíticas regresivas así como la interrupción de la evolución económica [...]. Una de las consecuencias más graves del alzamiento armado del EZLN es la de poner en cuestión el consenso que parecía haberse alcanzado entre todas las fuerzas políticas y sociales del país en relación a la vía pacífica y legal, tanto para promover los cambios como para tratar los conflictos que implica nuestra creciente pluralidad social.¹¹

Hagamos aquí un alto y tomemos distancia: sólo el más simplista pensamiento moderno, en tanto evolucionista y etapista, puede considerar a la historia de todas las sociedades como una sucesión que remata en un espacio racional-discursivo de interacción comunicativa, a la manera de un tipo ideal del occidente habermasiano. Fuera de esa visión idílica de la que parecemos estarnos alejando el segundo, tercero y cuarto mundos, parece más sano aceptar la idea práctica y probada por la historia universal, sobre todo de países poco occidentalizados, de que las rupturas del orden, la confrontación y la violencia como medios para hacer efectiva la voluntad ciudadana son parte consustancial de la dinámica de las sociedades y que su condena moral y discursiva no pása de ser simple retórica: los Estados Unidos de Norteamérica establecieron las bases del liberalismo democrático por la vía violenta al independizarse de Inglaterra y un siglo después lograron una verdadera cohesión nacional por medio de una guerra civil encarnizada; Inglaterra, el ejemplo del tránsito pacífico a las instituciones liberales, sólo pudo hacer valer la fuerza de su sociedad y de su parlamento mediante una revolución que terminó con la decapitación del rey.

Todo esto no debe hacernos perder de vista en ningún momento que, en efecto, los costos humanos y el sufrimiento que traen consigo estos acontecimientos son enormes, y en la gran mayoría de los casos los resultados han sido muy pobres o pudieron haberse alcanzado por medios pacíficos y por la construcción inteligente de mediaciones institucionales. En la propia América Latina, Colombia, Perú y Guatemala no han terminado de salir de guerras

intestinas que llevan más de tres lustros sin que se puedan apreciar resultados positivos o algún mejoramiento social y sí, por el contrario, una degeneración profunda de las comunidades, la violación sistemática de los derechos humanos, la presencia desgarradora de contingentes civiles, particularmente campesinos, buscando refugio ante una violencia sin sustento moral que igualmente viene de los insurrectos que de los ejércitos de los regímenes cuestionados. Se puede condenar la violencia en la historia, pero eso constituye una toma de posición moral y filosófica que no puede sobreponerse al hecho crudo de que en la historia el cambio social está casi en todos los casos hermanado a la violencia. Ahora bien, cuando al mismo tiempo de condenarse la violencia desatada por los actores sociales se reciben altas sumas de dinero para fundar institutos, impulsar revistas, animar programas de televisión, redactar tendenciosamente libros de texto gratuitos, etc., entonces no se trata ni siquiera de una posición moral o filosófica sino pura y simplemente de la producción de discursos ideológicos en favor del príncipe: buropolítica corrupta.

En el momento del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato priista a la presidencia de la República, los intelectuales orgánicos del núcleo duro dominante se sintieron en posición inmejorable para desatar su crítica furibunda ya no solamente contra el zapatismo y quienes en los hechos habían dado al traste con nuestro inminente ingreso a la modernidad globalizada sino en contra, incluso, de todos aquellos intelectuales y periodistas que se habían abocado al análisis y a la difusión de lo que sucedía en Chiapas: una hora después de la muerte biológica de Colosio, de hecho unos minutos después de que el público recibiera la trágica noticia, Octavio Paz, a través del ministerio de información (Televisa), pedía "un 'hasta aquí' a los excesos verbales e ideológicos de algunos intelectuales y periodistas" y a las "numerosas e irresponsables apologías de la violencia". Lo secundaba Aguilar Camín: "Durante tres meses asistimos en México a la consagración periodística de la violencia... es imposible desvincular el asesinato de Colosio del ambiente de prestigio y moda que dio a la violencia chiapaneca el perfil de una épica, más que de una desgracia."¹² Y terciaba Rolando Cordera: "Una vez más queda claro, trágicamente claro, que de la vio-

¹¹ "Chiapas: por una salida...", doc. cit.

¹² Héctor Aguilar Camín, *La Jornada*, 25 de marzo de 1994, p. 11.

lencia sólo vendrá violencia.”¹³ Jamás se imaginaron estos analistas del núcleo duro que quienes serían los mejores aprendices de la vía violenta serían justamente los propios tenientes del Estado, matándose entre sí y tratando de ocultar las investigaciones sobre la muerte del candidato que, con el correr del tiempo, apuntaban todas en dirección del tlatoani saliente y su séquito inmediato.

Tenemos entonces, por un lado, una imagen que asocia entre sí revolución, catástrofe, irracionalidad, violencia, sufrimiento, muerte, desorden, atraso con respecto al tiempo científico-técnico, y, por otro lado, una que asocia paz, concertación, democracia, orden, interacción comunicativa, racionalidad, modernización... Eso se llama producción de estereotipos ideológicos y dichas nociones son propias de una intelectualidad orgánica que, para optimizar su eficiencia, se declara neutral, a distancia del sistema de dominación que termina de una u otra manera por legitimar.

17. REVOLUCIÓN, CONCERTACIÓN E IDENTIDAD

En realidad cada uno de estos dos paquetes de asociación es perfectamente desdoblable: todos sabemos que tras la idea de revolución (y violencia) existen también valores sociológicos y éticamente positivos y deseables como son: movilización, reconstrucción de identidades colectivas, reconocimiento, a través de esas identidades, de una alteridad (el otro o lo otro), que impide la solución de nuestras necesidades o que genera esas necesidades. Algo más, el reconocimiento del otro y, a partir de eso, la reconstrucción de nuestra identidad no tiene por qué conducir a la confrontación total y a un final catastrófico; el surgimiento y desarrollo de los movimientos sociales lejos de la imagen de fuego, choque y muerte en un solo día que el término revolución quiere evocar, según esta intelectualidad, puede conducir también a algo muy diferente: a la recreación de identidades circunscritas, continuas, consistentes y organizadas en lo social. Circunscritas en barrios, colonias, pueblos, municipios, regiones, secciones sindicales, uniones de ejidos, etc., y esa delimitación natural y consistente de sus fronteras puede dar a estas luchas continuidad y organización (pero nada es más contrario al neoliberalismo dependiente que esta última constelación que conlleva la defensa de los derechos de lo social, la defensa de los derechos laborales, por ejemplo, verdadera arena para el engranaje globalizador defendido por estos ideólogos).

Por su parte, las nociones de paz y concertación democrática también pueden ser desdobladas y mostrarnos que tanta búsqueda de concertación y democracia política puede redundar muy fácilmente en la “buropolitización” de las dirigencias y de las corrientes y agrupaciones intelectuales, es decir, en su incrustación en las alturas, en la influencia, y en su recluimiento en espacios cerrados de promoción y publicidad construida artificialmente (desayunos, comidas, parlamentos, sets de televisión, redacciones de revistas y periódicos, oficinas de direcciones de institutos de todo tipo, auditorios para el discurso, la premiación, la “consulta” popular con invitados acarreados y escogidos...). Pero como veíamos, tal vaciamiento hacia las alturas, discúlpenos la expresión, no sólo re-

¹³ Rolando Cordera, Ángeles Mastreta y Héctor Aguilar Camín, *La Jornada*, 26 de marzo de 1994, p. 2.

dunda en la buropolitización de esos individuos sino que es la forma más eficaz de destrucción de las identidades y, en el caso de los intelectuales, se convierte en un mecanismo eficaz de producción de ideologías que al mismo tiempo que nos hablan de la exclusión y la pobreza de las masas se vuelven, precisamente, disolventes de la identidad de los excluidos, acusando a cualquier movilización y a sus dirigencias de recaídas en el populismo y la manipulación, como en el caso del cardenismo o del zapatismo (movimientos con contenido y participación fuertemente popular de manera inevitable y tan fácilmente atacables desde la confortable posición democrático-ciudadana-modernizadora-consumista-plural).

Concertación puede des-doblar, entonces, también, en buropolítica hacia las alturas por un lado y, por otro, en desidentidad colectiva en lo social, atomización, pulverización anómica, desesperanza. La pobreza es interpretada y exhibida allá arriba, pero abajo, como dice Paramio, "quien no sabe quién es, mal puede decidir qué quiere hacer con su futuro". Buropolítica arriba y desesperanza abajo son dos impulsos extremos pero que corresponden a una misma dinámica cuyo resultado eficaz es la reconstrucción permanente del dique que separa al mundo de la integración del de la exclusión y el ancho mar de la pobreza.

Si, como nos recuerda Aguilar Camín, la democracia "no resuelve por sí misma los problemas de la justicia, del atraso, del empleo o la movilidad social...", entonces a lo que debemos aspirar es a la reconstrucción de las identidades sociales y atemperar un poco la febril actividad en el terreno de la influencia en el sistema político, en el espacio de las representaciones, de eso que podemos calificar como "la democracia política" y que tan pocos beneficios trae a los excluidos como no sea la paz pura y simple mientras se destruyen sus referentes culturales, esa paz que ha acompañado a los indígenas de Chiapas durante tantos años, siglos, y que decidieron refutar el 1 de enero de 1994.

Así, ante la aceptación de que la democracia política no resuelve los problemas sociales (y menos los de las masas), hoy resulta un simple desplante de la buropolítica concertadora el siguiente párrafo de los intelectuales críticos del neocardenismo en el citado documento de 1989:

Como miembros del Partido Mexicano Socialista consideramos indispensable reivindicar una vía reformista y gradualista, que aproveche los res-

quicios más íntimos, que busque alcanzar el máximo de soluciones pactadas para lograr el cambio democrático. Eso de manera alguna conlleva a renunciar a los principios, sino reconocer la complejidad y dificultad de su realización. Y reconocer además, que el voto del 6 de julio (de 1988) fue un voto por el cambio democrático, sí, pero por un cambio pacífico, legal e institucional. No asumirlo como tal, en nombre de revolucionarismos, es dilapidar no sólo la credibilidad sino también las esperanzas de amplios sectores de ciudadanos que mostraron en aquella jornada cuán retrasadas han quedado las viejas concepciones doctrinarias.¹

Quizás hoy podemos decir que en países como los nuestros (no en España, Francia, Italia u otros países de fuerte mayoría engranada a la modernidad), la lucha por la democracia política es un asunto que concierne a minorías integradas, a regiones de mayor modernización y a representantes que incrementen su influencia al participar en medios formalizados e institucionales de la política (la elevada votación por Cuauhtémoc en 1988 fue el voto por un líder, no por la democracia representativa, y así lo demostró en los años subsecuentes el gran abstencionismo, que alcanzó el 72% del padrón en el mismo Michoacán o en Chihuahua, y triunfos priistas con sólo el 16% de los votos potenciales, como en Campeche). Mientras tanto, lo que quedó pendiente a lo largo de todo el neoliberalismo incontestado (1982-1993) fue el desarrollo de *la democracia social*, es decir, la tarea delicada, paulatina y, aquí sí, concertada, de construir y reconstruir las identidades colectivas, basistas, circunscritas, consistentes y continuas en lo social, desde donde se obtienen logros reales y duraderos, en efecto, por la vía de los pequeños pasos (pero de los pequeños pasos en la sociedad, no de los pequeños pasos dentro del Palacio Nacional).

Sin querer negar que existieron a lo largo de esos años algunos movimientos sociales, coordinadoras, frentes y otros colectivos capaces de dotarse de representaciones efectivas en el plano del sistema político (en la cámara de diputados, por ejemplo), es preciso aceptar que la gran mayoría de los actores que se desempeñaron en ese espacio de las instituciones liberales de la política, poco tuvo que ver con identidades reales en lo social y nulos esfuerzos hizo para alentarlas, comenzando porque los desayunos, las reuniones y la parafernalia buropolítica de las cámaras poco tiempo les dejó libre.

¹ "Crisis y perspectiva del Frente Democrático Nacional", doc. cit.

Pero olvidémonos del parlamento, de los partidos, de los consejos consultivos o de las corrientes de intelectuales constituidas. Lo cierto es que en el seno mismo de las instituciones más modernas del país y en las que debiéramos tener mayor esperanza para el reforzamiento de la democracia participativa, como es el caso de la universidad, las organizaciones sociales de académicos y estudiantes han sido desmanteladas y han perdido toda su continuidad ante la indiferencia de sus agremiados, como sucedió durante el Congreso de Reforma de la UNAM en el año 1990. También aquí los representantes tanto de académicos como de estudiantes se embebieron en la "concertación", en los espacios cerrados, en las comisiones (en este caso en la Comisión Organizadora del Congreso Universitario, COCU, cuyos trabajos se prolongaron por tres largos años de concertación desmanteladora, de 1987 a 1990), al extremo de que, cuando el día del Congreso finalmente llegó, la universidad no contaba con ninguna organización del personal académico fuera de las capillas cerradas de apoyo al (y fomentadas por el) rectorado. Finalmente, seis años después del Congreso, ninguno de los poquísimos acuerdos "pactados" a que ahí se llegó ha sido puesto en marcha.

Si esto pasa en el medio de los grupos integrados, entre los sectores críticos y con mejores posibilidades de participación social por su nivel educativo, y tiene lugar como resultado de una lucha social contundente, como la de la UNAM entre 1986 y 1987, ¿qué podemos esperar de medios sociales completamente inmersos en la tradición cultural y política? Quizás por ello las organizaciones eclesiales de base, impedidas por naturaleza para la buropolítica, para el ascenso hacia el vértice de la pirámide, obtienen logros remarcables en la construcción y conservación de identidades colectivas.

¿Habría que establecer la hipótesis de que en sociedades crecientemente polarizadas entre excluidos e integrados (o aún más, entre excluidos, integrados y núcleo duro de la dominación), la participación efectiva del hombre común (del pueblo y de las clases medias) en la definición de sus opciones históricas es prácticamente nula o no va más allá de ciertos momentos de activación social y autorreconocimiento colectivo en situaciones esporádicas, inconexas, discontinuas y desmantelables vía la represión, la buropolítica, la pulverización y la desidentidad? De ser cierto lo anterior no podríamos tan sencillamente criticar las salidas "desesperadas" y

violentas del tipo zapatista pues, a final de cuentas, con su ¡Ya basta! esos indígenas y su dirigencia lograron construir una identidad no tan fácilmente desmantelable por el vértice de la pirámide, en realidad un promontorio exterior a la pirámide, enfrentado a ella y sólo destruible por el aniquilamiento, maniobra que se ha dificultado gracias a la visibilidad internacional que supo darse ese movimiento (como los juchitecos del istmo de Tehuantepec lo habían logrado diez años antes).

Pero es tan difícil en nuestro país constituirse en identidad exterior y ser respetado, que la cultura política y las dirigencias y corrientes intelectuales privilegian la búsqueda del vértice, de las alturas, en donde se concentra el poder, único punto desde el que se cree posible intentar algún cambio, aunque en esa búsqueda, sin querer, se reproduzca la herencia, la negatividad que se intenta combatir. Sin embargo, cuando todo parecía ya bajo control, vía la concertación, florecieron inesperadamente las opciones alternativas, intransigentes, reivindicando posiciones basistas y popular-radicales. Cuando en el Perú todas las corrientes políticas parecían haber ocupado sus lugares en el sistema político-institucional, apareció Sendero Luminoso en ruptura total con lo que calificaron un oportunismo de los integrados con el pretexto de la modernización y la globalización del capitalismo. En México, hasta mediados de 1996 el zapatismo no ha tomado estas posiciones contrarias al sistema político, a los partidos, a las elecciones y al parlamento, pero ha sido muy crítico al respecto a juzgar por el lenguaje empleado por Marcos al culminar la visita de Cárdenas a la selva en junio de 1994 y según lo establecido en la *Cuarta declaración de la selva Lacandona*, en enero de 1996, con su rechazo a los puestos de representación y de gobierno para las dirigencias del eventual Frente Zapatista de Liberación Nacional.

18. LOS INTELLECTUALES, EL ORDEN Y EL DESORDEN

Habría que concluir este tema replanteando la tensión de los intelectuales en el México de la crisis y de la reconversión: cómo evitar que impere esa ilusión hacia todo lo que viene desde las alturas y esa incapacidad para cambiar las cosas desde las identidades sociales. Cómo encontrar una forma alternativa para el quehacer de los intelectuales que evite lo que hoy, ante la doble crisis del desarrollo económico y del socialismo, parece ser su entrega sin condiciones a los aparatos del poder público y privado, como esperanzados en que desde esos núcleos el voluntarismo intelectual y político (la ciencia, el desarrollo, la planificación...) producirán la idea genial, la orientación racional que habrá de cambiar la situación de precariedad, de racismo, de exclusión en que viven nuestros países.

Quizás lo que hay que concluir a este respecto es que no hay solución "técnica" (exterior) a los problemas sociales; que éstos sólo pueden ser afrontados realísimamente a través de la reconstrucción identitaria de las colectividades cuyas condiciones de vida pretenden ser mejoradas ¿Cómo reconstruir entonces identidades sociales sustentables (consistentes y con cierta continuidad), que permitan enfrentar esas condiciones de creciente desorganización y anomia en que se desenvuelve la vida de la mayoría de los mexicanos y sin duda de los habitantes de América Latina? ¿Cómo construir una democracia más social y menos política, más cultural y menos estatal?

¿Por qué, a partir de los años setenta, y a pesar de la herencia del 68, la vía de la incrustación en el sistema político siguió siendo más poderosa que la línea de "ir al pueblo"; o, en otro espacio, por qué la línea del fortalecimiento de los órdenes sociales y gremiales no fue el sindicalismo y el cooperativismo como identidad y defensa basista sino lo que imperó fue el sindicalismo como capatula política de las dirigencias; por qué las conductas heredadas fueron más poderosas que los discursos ideológicos contruidos por los grupos opositores a partir del 68?

Hay que dejar bien claro, en primer lugar, que nuestra herencia

de Estado fuerte, al entrar en combinación con la cultura marxista de los años setenta y ochenta, reforzó violentamente la idea de recomponer la historia desde el vértice y que quizás por ello no es tan grande la distancia que separó a la gran mayoría de los políticos-intelectuales del cardenismo de sus pares salinistas: los hemos visto ir y venir entre ambos espacios sin necesitar grandes cambios discursivos, los hemos visto surgir por igual de la izquierda. La propia intelectualidad lúcida del 68, fuertemente marcada por la idea del cambio desde el Estado, ha podido, sin gran dificultad, alimentar por igual al voluntarismo neoliberal que al voluntarismo neopopulista, sobre todo en esta época de barrimiento de las intermediaciones y regreso de los liderazgos personalizados. Claro que para la intelectualidad del TLC la maniobra es más sencilla, despojada desde el inicio de la cruz que significa hacer depender el proyecto de sociedad futura de la justicia social y de las condiciones de vida de las masas populares (asuntos, en el caso de los neoliberales, simplemente diferidos para el mañana-desarrollo y simplemente "exteriores" al modelo).

Pero hay que destacar un elemento más en este asunto de la incrustación de los intelectuales en las alturas (la burocrática), porque lleva implícito un nudo axiológico más complejo que el simple trueque de servicios intelectuales hacia el poder a cambio de beneficios personales (sin dudar de que eso esté implicado). Visto en un ángulo más amplio, hay una angustia de los intelectuales ante el nulo desarrollo de estos años que de alguna forma conlleva, como está de moda decirlo, el fin del sentido de la historia, del progreso, de la empresa de los hombres sobre la naturaleza para lograr un mejor bienestar de las colectividades. Llevado a su extremo, ello significa al mismo tiempo la derrota del intelecto, de la técnica, de la ciencia y del principio de voluntad: aceptar que se es incapaz de cambiar las cosas y darles *un nuevo orden*, progresivo, mejor, declararse incapaces de clasificarlas y, por ende, de manejarlas. Una ideología de la modernización es pues una opción más acorde con la modernidad intelectual (liberal y marxista), ante la derrota y el pesimismo que significaría aceptar que el llamado progreso no ha redundado en el beneficio de cada vez más amplios sectores de la humanidad, sino que parece concentrarse en una capa privilegiada ensanchando al agregado social que se encuentra en la pobreza extrema (incluso en Norteamérica). Difícil aceptar pues que no existe la tierra prometida por la ideología del progreso

y el desarrollo, al menos tal como la imaginó Occidente: explotando infinitamente a la naturaleza, convirtiéndola en productos transformados por la técnica.

El desorden, la anomia, la incultura, la marginalidad, la masificación, lo plebeyo y el estancamiento que acompaña a todo esto, se oponen en lo esencial al sentido del intelecto, constituyen un fracaso del orden y del progreso. Los valores más sólidos en que hemos sido formados intelectualmente (el etapismo marxista incluido de manera estelar por supuesto), se ven sacudidos por estas tendencias que niegan el delicado equilibrio requerido por la planificación, la computación (y su individualismo refugiado), la clasificación, la producción científica en general, la interacción racional en condiciones óptimas, el lenguaje codificado, las normas internacionales de intercambio comercial, la susceptibilidad de los flujos financieros

Así, la tensión intelectual crece cuando comprobamos que la sociedad retoma tendencias impredecibles, *desordenadoras*, con códigos comunicativos locales, irracionales, con núcleos familiares desorganizados, tendencias ante las que la escolaridad no puede nada y no es capaz de homogeneizar, fuerzas laborales en la informalidad creciente, espacios sociales en expansión con conductas gregarias (no solidarias necesariamente), que conllevan estructuras de liderazgo y patrimoniales opuestas al individualismo posesivo del consumo moderno.

Quizás por este contraste entre los marcos conceptuales modernos en que nos formamos (intelectuales y universitarios en general), y un futuro que responde cada vez menos a ellos, la ciencia y la técnica (la universidad) se alejan de la sociedad (y de la naturaleza) y se acercan al poder, sobre todo cuando éste promete la modernización como futuro. La sociedad a su vez, el "mundo social de la vida", se des-institucionaliza, o se institucionaliza de una manera no codificable, no computarizable, mientras que la intelectualidad moderna (las ciencias sociales, la economía, el *marketing*, la universidad toda), *se ordena*, se refugia preferentemente en ese espacio que es el medio privilegiado de los aparatos públicos y privados de la dominación: la informática, los *mass media*, el diseño

Por eso, la mayoría de los científicos y de los intelectuales de prestigio, incluidos los herederos del orden marxista, a la hora de la reforma universitaria están del lado de una universidad de "excelencia", separada de los problemas sociales, productora de alta

tecnología y, en el caso de las ciencias del hombre, se inclinan por la recreación de condiciones ideales de interacción social (asépticas incluso) y ven con horror cualquier correlación de lo popular con el *campus*. Vivimos así una reacción conservadora que liga al *campus* y a la intelectualidad con los grandes *aparatos ordenadores* (públicos y privados), y la desliga de lo popular, paupérrimo, anómico, inculto, desorganizado, desidentitario que en nuestros días, al continuar la tendencia contraccionista de la modernidad de Occidente, caracteriza cada vez con más fuerza a lo social. Es así como la clase intelectual construye la racionalización ideológica con que se abre camino hacia el poder: la buropolítica en la era neoliberal.

19. ¿DÉFICIT FISCAL O DESBALANCE CON LA NATURALEZA?

Pero al final de este recorrido, sin embargo, siempre aparece el mismo cuestionamiento: las propuestas neoliberales no son un modelo entre otros tantos. Realistamente hablando, se dice, el factor que nos llevó hacia allá fue la incapacidad cada vez mayor del Estado de bienestar en casi todo el mundo para hacer frente a las crecientes demandas de sus respectivas sociedades. El déficit fiscal a que esto condujo dejó a todos los gobiernos del mundo sin alternativa: había que reducir el gasto público y el tamaño del Estado, privatizar muchas de sus funciones, regresándolas a la competencia del mercado para que así fueran eficientes, haciendo pagar a los usuarios su costo real; no era posible seguir subsidiando mercancías y servicios por más tiempo, así fueran de utilidad pública (O'Connor, 1973).

Lo que hoy, con más perspectiva, podemos constatar, es que interpretar lo que pasaba como crisis fiscal y culpar por ello al estado de bienestar no fue un diagnóstico correcto sino sólo una forma de enfocar el problema de acuerdo con intereses particularistas, los de los grandes polos de concentración capitalista. Hoy nos damos cuenta de que si existía un déficit fiscal era porque el Estado había tenido que encargarse poco a poco de funciones mayores y más costosas, pero que lo que explicaba el asunto no era la ineficiencia del sector público (aunque muchos ejemplos efectivos de ineficiencia y corrupción entraran a la disputa y se confundieran con las verdaderas monstruosidades de las economías centralizadas o socialistas), sino un desequilibrio que superaba todos estos referentes y debía ser planteado como un desequilibrio entre sociedad y naturaleza.

En efecto, la presencia de masas crecientes de hombres, particularmente en grandes centros urbanos, así como la elevadísima demanda de supuestos satisfactores propios de la economía de consumo, tuvieron como resultado un gran impacto sobre las fuentes energéticas, acuíferas, sobre la conservación del medio ambiente, sobre la infraestructura pública, etcétera, elevando sus costos de forma muy desproporcionada.

Garantizar una red de transportes y subir mil metros el agua

que consumen los veinte millones de habitantes del Distrito Federal implica costos que no se explican por la ineficiencia del Estado de bienestar (aunque se puedan comprobar enormes ineficiencias y corrupción aquí y allá), sino por un fenómeno mucho más complejo y más neurálgico: el del agotamiento del entorno natural y de sus costos impagables de sustitución.

Ante esto el neoliberalismo planteó que fuera el mercado, el ámbito privado de la oferta y la demanda, quien se encargara de hacer frente al desbalance. Y es que, visto como crisis fiscal, todo parecía quedar arreglado: el Estado se haría más chico, se privatizarían las empresas y la competencia, sirviéndose de la ciencia y la técnica, encontraría las soluciones más eficaces y más baratas para hacer frente al nuevo desbalance.

Sin embargo, en la medida en que el problema se encuentra en los fundamentos mismos del principio de existencia social, es decir en la relación con su entorno natural, y no se reduce a un asunto de desbalance fiscal, la receta del neoliberalismo, en torno al mercado, el individuo, la empresa privada, la competencia transnacional y el avance científico-técnico, ha demostrado ser no sólo ineficiente para corregir el desbalance, sino que ha contribuido a su agravamiento aceleradamente.

Colocado el problema como desbalance profundo entre sociedad y naturaleza reaparece como perfectamente viable e incluso como una vía privilegiada el tema de la reconstrucción de las identidades colectivas sustentables y el tema de la regulación estatal de ciertos procesos que no pueden ser cubiertos por ninguna otra instancia.

Visto desde este ángulo, la legitimidad de estas temáticas deja de ser cuestionada por la ideología del neoliberalismo y es posible levantar la hipótesis de que si los intereses de las grandes empresas capitalistas y sus gobiernos estuvieron en mejor posición para generar más ágilmente una ideología (el neoliberalismo), fue por su cercanía con los centros generadores de saber. Pudieron aprovechar así el desbalance sociedad-naturaleza en su favor por la vía de la crítica al Estado, al corporativismo, a lo colectivo. Pero en una segunda oleada, ya con el balance del desorden social adicionado por el libre mercado, los temas fundamentales se plantean de otra manera: la temática es entonces cómo hacer subsistir lo comunitario con lo individual, el mercado con el Estado, la economía doméstica y su defensa con la eficacia competitiva transnacional, el desarrollo de la técnica y del comercio con la defensa del empleo...).

20. EL PARTIDO Y EL ESTADO

El fin del Estado populista, decíamos en apartados anteriores, no significa el fin de la relación populista con el Estado. El desmantelamiento de los grandes faldones corporativos y paternalistas en lugar de modernizar la articulación entre sociedad y Estado vino a provocar un vacío más en el sistema político o de las intermediciones. Y es que en medio de una relación débil con los partidos y los aparatos de gobierno, el excluido tiende a pasar, sin intermediarios, de la discusión sobre el diámetro de la toma de agua y el alumbrado público a la adhesión a Cuauhtémoc Cárdenas (o a Carlos Salinas en el momento estelar de su sexenio), sin gran argumentación. La casi nula tradición de partidos políticos y aparatos e identidades intermedias vuelve este fenómeno un acto prodigioso en el ejemplo mexicano. Podríamos decir, con el chileno Tironi, que en el medio excluido no se valora la dimensión representativa o "liberal" de la democracia, sino su aspecto participativo, sustantivo, la relación directa con quien tiene la capacidad ejecutiva. El neocardenismo hacia el fin del sexenio de De la Madrid (1982-1988), a través de un nuevo liderazgo, habría sido capaz de vaciar de contenido ritual y de centralidad al presidente y al PRI para desplazar estos atributos hacia un nuevo vértice.

En una sociedad como la mexicana, donde el conflicto y los liderazgos se generan constantemente debido a la situación de atomización, el mecanismo privilegiado de la estabilidad y el orden consiste en la destrucción, constante también, de esas constelaciones alternativas, dividiendo, encarcelando, matando o cooptando; destrucción entonces de sistemas locales de autoridad y centralización consecuente en una burocracia altamente jerarquizada y disciplinada en torno a un jefe indiscutido.

Cuando los procesos de modernización, vistos como voluntarismos de los planificadores, atentan contra estos mecanismos; cuando, además, a la represión constante y consustancial de este sistema no se asocia su contraparte indispensable que es la cooptación y se genera la exclusión también en el nivel cupular y de las élites, y cuando, en fin, todo este mecanismo se realiza en medio de una

crisis profunda de progreso, en medio de una privación popular en lo económico y en las perspectivas del futuro, las constelaciones y los órdenes alternativos florecen prodigiosamente. Es obvio que el mecanismo buropolítico fue atrofiado en el sexenio delamadrinista y que la élite tecnocrática en que se apoyó el presidencialismo encontró en el pensamiento neoliberal el pretexto perfecto para reducir a la burocracia en época de crisis, para expulsar de la alianza estatal no tanto a los amplios sectores de la baja burocracia, quienes fueron más bien refuncionalizados, sino a todos aquellos liderazgos del PRI-gobierno susceptibles de ser acusados de tener posiciones ineficientes, corporativistas, patrimoniales, populistas, populares.

Pareciera que en sólo seis años la comunicación y la continuidad perfecta que existían entre el Estado y sus partido se hubieran trastocado: la alta burocracia gobernante se dedicó a gestionar las salidas para el desarrollo económico y la crisis, mientras el partido debía encargarse del consenso. Los dos papeles contradictorios de todo Estado capitalista moderno (desarrollo económico y consenso redistributivo) comenzaron a ser portados por actores distintos: el gobierno y el partido. Esto se hizo evidente en México desde 1982 cuando el entonces candidato a la presidencia, Miguel de la Madrid, entró en contradicciones con Fidel Velázquez; y también cuando la clase política comenzó a ser diferenciada entre viejos políticos de tradición -llegados al poder por la vía del patrimonialismo y la imposición electoral- y nuevos tecnócratas sin tradición partidista pero que desplazaron al primer grupo en los más altos puestos del aparato estatal. El reacomodo del sistema político, sin embargo, no se efectuó siguiendo estas fronteras entre tecnócratas y políticos o entre nuevos equipos eficientistas del Estado compacto y viejos faldones populistas con organismos patrimoniales. El neocardenismo de Cuauhtémoc trazó la frontera en el interior mismo del partido al proclamarse al principio, tímidamente, como una "corriente democratizadora". Con ello dividió en dos a esa enorme bolsa que durante mucho tiempo fungió como sistema político: el PRI.

Desde el momento en que el partido y el gobierno (consenso y desarrollo) no redefinieron sus distancias a tiempo, se plantearon problemas insalvables: en el imaginario colectivo no resultó compatible la figura de Carlos Salinas de Gortari (secretario de Programación y Presupuesto, gran reconversor, quien desmanteló y achicó al Estado, quien cesó a decenas de miles de empleados estatales, quien mantuvo los salarios congelados, etc.), con la de un

presidente de la República. El partido se había mantenido durante todo ese sexenio como un organismo sumiso y obediente, sin lograr tomar distancia del gobierno, apoyando sus decisiones antipopulares propias del momento de crisis. Al mismo De la Madrid se le vio demasiado cerca del equipo que administró la crisis y la ideología modernizadora y no intentó jamás algún tipo de reforma estatal que colocara a un jefe de gobierno o de gabinete absorbiendo el desprestigio de las medidas antipopulares del neoliberalismo. Si alguien cumplió alguna vez este papel fue el secretario de Programación y Presupuesto, pero resulta que nombró su sucesor a ese mismo personaje, al más desprestigiado. Se fue perdiendo así legitimidad aceleradamente frente a los amplios sectores hasta llegar a la gran sorpresa de julio de 1988.

El PRI quiso seguir funcionando como correa de transmisión de la política gubernamental y como espacio de reclutamiento de la alta burocracia. Si se pudiera aceptar como hipótesis que el PRI conformaba históricamente lo fundamental del sistema político en nuestro país, entonces lo que expresa el neocardenismo no es otra cosa que la toma de distancias de una parte mayoritaria de ese sistema político con respecto a los aparatos de gobierno que administraron la crisis de los años ochenta. Es obvio, desde esta perspectiva, que fue descuidado el mecanismo privilegiado de destrucción de identidades colectivas emergentes e intermedias de integrados y excluidos que ha sido la buropolítica.

21. EL CARDENISMO

Decíamos en apartados anteriores que una invención genial de los años setenta y un hecho que reformó la dinámica sociopolítica del país fue la legitimación de los partidos y grupos de oposición y la apertura del sistema parlamentario: eso permitió que las vanguardias, en lugar de tender a la confrontación y para ello a la acumulación de fuerzas, tipo 1968 o 1958, o tantos otros sucesos de la historia mexicana, logaran con más facilidad una incrustación en las alturas y, de esa manera, se abriera con más prontitud una escisión con respecto a sus propias bases (la propensión "buropolítica" podía aprovecharse sin recurrir al trauma de la confrontación y de la represión). En esa nueva modalidad las luchas sociales tendieron a desgarrarse, más dramáticamente que nunca, entre una *acción social* (resistencia a la exclusión, a la dominación, al despojo y a la explotación en una sociedad autoritaria) y una *acción política* (búsqueda por apropiarse del Estado y ejercer su influencia en, y desde, los aparatos de poder preestablecidos), destruyéndose la integridad de la dirigencia, la relación entre partidos y movimientos, la continuidad de la acción y la consistencia de las identidades sociales.

Sólo que ahora todo esto se lograba por una vía no sangrienta y en eso consiste justamente el acierto del periodo que comienza con Reyes Heróles en 1977 y quedó prácticamente desvirtuado bajo el salinismo con las elecciones de 1991 y 1994: el bochornoso espectáculo de un partido de Estado que, utilizando todos los medios, lícitos e ilícitos, se abroga prácticamente la totalidad de las curules parlamentarias, con la expectativa de poder acoplar todas nuestras leyes a las exigencias de la globalización, del TLC en particular. Pero aclaremos una cosa: una vía pacífica no quiere decir necesariamente, y menos en este ejemplo, una vía democrática, puesto que aquí estamos hablando ni más ni menos que de la destrucción constante de las identidades sociales y de su continuidad. A partir de su apertura, decíamos, el parlamento mexicano echó a andar como un aparato más ligado a la producción de la paz que al fomento de unas bases democráticas sólidas, más ligado a la moder-

nización del autoritarismo que al robustecimiento de lo social, paradójicamente.

Hoy resulta claro que, desde su inicio, el régimen delamadridista buscó redefinir la relación entre la sociedad civil mexicana y el Estado tratando de diluir la densidad de los organismos dependientes del orden piramidal encargados de articular lo social-disperso y el vértice. Y es obvio: un sistema tan robusto en aparatos gubernamentales y burocracias para el manejo de lo público (como el heredado por nuestra historia de Estado fuerte-classes altas débiles-cooptación y corrupción sistemática de liderazgos), resultaría como un lodazal para llevar adelante el modelo económico del neoliberalismo.

Así, el régimen delamadridista pareció dispuesto a alimentar desde muy temprano un cierto robustecimiento del Partido Acción Nacional, no sólo para balancear el relativo florecimiento que mostró la izquierda gracias a la reforma política, sino principalmente para atemperar las exigencias del propio partido del Estado, es decir, la fuerza de la política tradicional y de "la política como ejercicio público", y modificar así las reglas del juego, debilitando a las grandes centrales obreras y generando más bien varios polos de poder que dispersaran y fragmentaran, entre otras cosas, la capacidad negociadora del sector laboral. Como si se tratara de destruir, de devastar los promontorios de aglutinación del poder dentro y fuera de la estructura oficial: diluir el hemisferio popular-nacional de la política. Así, frente a este aparato, el esquema original de aquel sexenio esbozaba la necesidad de fomentar una gran cantidad de cuerpos paralelos (junto a la CTM se alentó a la CROM y se le dio fuerza al Congreso del Trabajo, aunque sólo transitoriamente, para romper la primacía cetemista).

Sin embargo, en lo que hace a los espacios de intermediación partidista y parlamentaria el sexenio de De la Madrid no logró mucho pues, *primero*, el PAN resultó ser un catalizador de la oposición inesperadamente poderoso y hubo que reanimar el monopolio priista reinaugurando el fraude electoral sistemático que con los años lograría tan impresionante sofisticación; *segundo*, el terremoto del año 1985 despertó una actividad ciudadana completamente adversa a los objetivos de enfriamiento de la política que, muy por el contrario, desembocó en la creación de la Asamblea de Representantes (parlamento del D.F.), y *tercero*, muy ligado a lo anterior, el movimiento estudiantil universitario (que se opuso

enérgicamente a la elitización de la universidad pública), enganchó asombrosamente con el recalentamiento urbano-popular producido por el terremoto y ambos afluentes vigorizaron al cardenismo en ascenso (es decir, vigorizaron el caudal popular-nacional que, desde el interior del PRI, se resistía a ser suprimido), y todo eso potenció la participación de las organizaciones políticas amplificándolas quizás exageradamente.

Pero los partidos políticos, el parlamento y el juego electoral en general no se mostraron verdaderamente disfuncionales para el régimen sino hasta que sobrevino el sustazo de 1988 y, en consecuencia, no fueron tratados como espacios de alta peligrosidad sino a partir de esa fecha. Los comicios de 1991 ya mostraron la nueva cara reformada, refuncionalizada debiéramos decir, del sistema electoral: una arena censurada y prohibida para las dirigencias de la verdadera oposición, es decir, para todas aquellas formas organizativas e identitarias que amenazaran con cierta consistencia y continuidad. Naturalmente el enemigo número uno fue el Partido de la Revolución Democrática, pero no tanto por las organizaciones de izquierda que pudieran habitarlo sino sobre todo por su llamado a lo popular y a la reconstitución de identidades públicas consistentes en el ámbito tradicional, en el industrial-moderno o entre los excluidos. De la misma manera se puede afirmar que solamente una vertiente del PAN enganchó con el nuevo esquema definido desde el Estado: aquella que responde a los sectores modernos-ciudadanos-democráticos-individualistas muy característica de los estados del Norte o de los medios mejor integrados de las grandes ciudades, mientras que las manifestaciones panistas más tradicionales y que cuentan con formas organizativas e identitarias más consistentes (como sucede en Guanajuato, San Luis Potosí y Yucatán principalmente), no resultaron para nada compatibles con el esquema político neoliberal. En consecuencia, la cuestión no sería tanto definir quién se convirtió en el adversario público número uno en el nuevo esquema, sino admitir que el adversario número uno pasó a ser "lo público".

Que haya diputados en la Cámara está muy bien para este esquema, porque sin eso no se cumple con el expediente democrático que demandan las inversiones y los acuerdos internacionales; que a su vez esos diputados no representen a ningún actor social o fuerza política real sino a la ciudadanía de manera abstracta, es también indispensable para el modelo. En esta perspectiva el fraude

electoral de 1991, dejando de lado el error que significó el exagerado triunfo priista, muestra bien que desde su diseño todo el operativo estaba orientado hacia el desmantelamiento de las representaciones consistentes a quienes la marejada del 88 había dado voz pública, a los movimientos y las formas de organización alternativas ya fueran panistas, perredistas o de cualquier otra adscripción que ligaran representantes con actores colectivos en espacios públicos consistentes y continuos de organización.

Y es que el fraude, el manejo del presupuesto público con fines electorales, la prepotencia y el cinismo gubernamentales tienen la característica intrínseca de generar desánimo, apatía, alejamiento del sistema de partidos, incluso ahí donde la coyuntura electoral es altamente competida como en Chihuahua, San Luis Potosí, Tabasco, Guerrero o Guanajuato. Una decepción de esa naturaleza, la evidencia de que el voto no cuenta, provoca en el ciudadano un gran retraimiento y no lo regresa a la arena política más que como revancha, en un acto destructivo y no constitutivo de institucionalidad: el ciudadano se vuelve elector de presidentes, de todo o nada, y se olvida de la construcción de las autoridades y los organismos intermedios y hasta de los más cercanos a su vida cotidiana y regional.

22. ATOMIZACIÓN Y FUGACIDAD DE LAS IDENTIDADES

Significó una gran responsabilidad del gobierno el haber optado por la vía del cuasi-monopolio de las representaciones políticas, porque con ello se desvirtuó ese espacio de producción de la paz social que resultó ser la arena parlamentaria: ese lugar en donde las dirigencias expresan sus malestares, se sienten escuchadas y publicitadas y se separan irremediamente de las bases sociales y de las movilizaciones que les dieron impulso; ese espacio parlamentario, decíamos, que produce en quienes lo ocupan la impresión de estar yendo hacia las alturas, logrando influencia, acercándose al vértice, al oráculo de la matriz cultural de la mexicanidad. Desgastar tal espacio, que tan bien había combinado nuestra herencia con las instituciones de la modernidad, ¿no significó fomentar desde el propio Estado el regreso a las posiciones confrontacionistas?

Ahora bien, el modelo neoliberal quiso hacer surgir en "el lugar destruido de la política" un "basismo anticorporativo", quizás no en el extremo de individualismo en que lo propuso el peruano Hernando de Soto en *El otro sendero*, con la supuesta propensión empresarial de los sectores populares, pero sí ciertamente en la escala del pequeño grupo retraído y atomizado. En este sentido el régimen salinista demostró que para el neoliberalismo resultaban funcionales una serie de experiencias maoístas de los años setenta animadas por Línea Proletaria y Línea de Masas en Chiapas, Sonora, Durango, Zacatecas, Chihuahua, Nayarit, Coahuila..., experiencias que en aquel momento estuvieron orientadas a la autosuficiencia y al aislamiento productivos tan caros al maoísmo, pero que cambiaron radicalmente conforme se articularon al proyecto estatal, al grado de que el régimen llegó al extremo de exigir de ellas un enganche con la economía global. El Pronasol en sus intentos más serios aunque minoritarios quiso basar su actividad en este tipo de experiencias que privilegiaran la capacidad productiva de los agregados poblacionales (lo que es muy positivo), pero inhibiendo y parcelando su organización y su enganche más global con la política al grado de evitar la generación de cuerpos asociativos más amplios. Sin embargo, ello no fue más que una ilusión

de los modernizadores, pues ante las urgencias políticas, sobre todo al final del aquel sexenio, el propio salinismo sobrepolitizó a estas unidades atomizadas reagrupándolas con fines electorales en el Partido del Trabajo en el norte o en las ARIC-Unión de Uniones en Chiapas para contrarrestar al cardenismo en el plano nacional o al zapatismo en el estado del sur. Sin embargo, lo fundamental de Pronasol no se dio ni en torno a los proyectos productivistas ni en torno a los reagrupamientos partidistas, sino que se mantuvo, como sabemos, en agrupaciones fugaces de ciudadanos (Comités de Solidaridad) para resolver demandas populares puntuales, asociaciones pasajeras, sin continuidad ni autosuficiencia.

Los proyectos productivos locales capaces de engancharse transnacionalmente, como lo llegaron a ser los cafetaleros antes de la caída del precio de ese grano, constituyeron la utopía del salinismo, pero en los hechos, y el levantamiento chiapaneco lo puso en evidencia, enormes agregados poblacionales se vieron incapacitados para echar a andar empresas productivas costeables (sobre todo ante la acelerada apertura comercial), limitándose al mejoramiento intrascendente de algunos servicios del poblado o del barrio siempre sumisos ante el favor del patriarca. Y es que los riesgos son elevadísimos cuando una clase política se elitiza, se achica y barre de un golpe con los espacios públicos intermedios en un país esencialmente político, es decir: no esencialmente económico (de las clases poseedoras), no esencialmente ideológico-religioso, sino esencialmente estatal.

Digamos que la compleja coexistencia entre: a) regímenes democrático-electorales en, b) sociedades con desigualdades crecientes, sólo se explica por, c) la erosión deliberada de lo público (de las identidades colectivas), y que esto último se ha hecho posible gracias a la interrelación de los siguientes factores: pobreza creciente + cambio acelerado + desorden social y atomización + destrucción de las élites modernizadoras intermedias + segmentación del mercado político + tendencia en el medio popular hacia la individuación defensiva y anómica + tendencia en el medio integrado hacia el consumismo individualista posesivo, que se refugia en lo privado y que transfiere la culpa de las desigualdades al fracaso del Estado de bienestar + erosión de instituciones generadoras de ciudadanía + propensión cultural de los mexicanos hacia la burocracia política, a que los liderazgos asciendan hacia el vértice de la pirámide (hacia el lugar del Estado), descuidando e incluso actuando en detrimento de las identidades sociales.

23. LA DICTADURA PERFECTA

Regresemos ahora a la cuestión de la democracia, no tanto ya en la acepción sustantiva que hace referencia a la igualdad y al fortalecimiento de las identidades sociales básicas, sino a la cuestión de la democracia política. El resultado de las elecciones presidenciales del año 1994 es muy ilustrativo para poner a prueba la pertinencia de un enfoque en términos de tránsito a la democracia en nuestro país. El tránsito a la democracia presupone, según la teoría de moda en todo el mundo, que las sociedades, tanto en el Este europeo como en los países del Mediterráneo y en América Latina, estarían siendo capaces de retomar la conducción de sus orientaciones históricas de manos de estados autoritarios, es decir, de agentes estatales que habían monopolizado esas orientaciones. Significa que ciudadanos y actores sociales, gracias al fortalecimiento de un sistema de instituciones políticas intermedias (partidos, parlamento, poder judicial y hasta estructuras educativas y de comunicación social), estarían siendo fortalecidos, de manera que el poder de decisión, en el momento anterior concentrado en los tenientes del Estado, pasaría a los actores y a las instituciones de la democracia y sería sancionado a través del sistema electoral (de preferencia a partir de la alternancia en el poder de las corrientes políticas predominantes).

¿Es hacia allá hacia donde está yendo nuestro país? Los resultados y los mecanismos electorales podrían permitirnos otra lectura. Lo que los comicios pusieron en evidencia fue la incapacidad de las corrientes democrático-ciudadanas y social-populares, activadas de manera espectacular en el año 1994, para hacer valer su presencia frente al verticalismo del Estado mexicano. Las cosas funcionaron de una manera tal que lo que resultó fortalecido no fue la horizontalidad social sino la verticalidad estatal, exactamente lo contrario de un tránsito a la democracia.

Mientras en sociedades como la chilena el enganche globalizador trajo aparejado el renacimiento de las instituciones democráticas, fortaleciendo a los partidos políticos y embarneciendo al empresario pequeño y mediano, en México la adopción del nuevo mo-

delo de desarrollo ha redundado en el debilitamiento de los actores empresariales y en general de todos los actores sociales (obreros, sindicatos, organizaciones agrarias y campesinas, universidades...). ¿Qué hacemos los mexicanos para que lo que se nos acerca lo convirtamos en un concentrado de poder en el vértice?

Recordemos un poco los datos para entender mejor a qué nos estamos refiriendo: el PRI obtuvo en las elecciones de agosto de 1994, 278 diputados de mayoría; el PAN, 17; el PRD, 5. Estos datos difícilmente pueden ser interpretados como un paso más en nuestro tránsito a la democracia. Aceptando que es inexacto asociar el peso que cada partido tiene en el parlamento con la expresividad política de una sociedad, no deja de ser cierto que la función central de los procesos electorales es el fortalecimiento de la institucionalidad política y, visto así, aquellas elecciones fueron justamente en el sentido contrario. Las voces que según este resultado se habrían quedado calladas o en sordina en la institución liberal-democrática por excelencia son dos: la de la ciudadanía propiamente dicha y la del "sótano social" que apenas atina a darse una identidad y que ya de todos modos se autodenominaba "los sin voz". Pero el resultado de las elecciones de los gobiernos estatales durante el año 1995 ha sido tan favorable al PAN que pone en evidencia el tamaño del fraude en la elección presidencial de 1994. A pesar de todo, la responsabilidad de haber optado, en aquel momento, por el "carro completo" es muy grande porque si teníamos ya de por sí la violencia política como realidad y como amenaza, con este cierre monopólico de las intermediaciones y los espacios de expresión política, particularmente para el PRD, las cosas pudieron haber ido mucho peor. Quizás por eso hubo embarazo del partido ganador y las fiestas priistas se hicieron en tertulias privadas. Ahora bien, un hecho es insalvable: el partido de Estado le ganó tres a uno al partido social-popular. Sin embargo, todos sentimos la necesidad imperiosa de desentrañar ese 50%-17%. Ni al candidato panista se le escapó mencionarlo al darnos a conocer su precipitado retiro de la política: "el triunfo del PRI se dio en condiciones profundamente injustas e inequitativas". Y es que, en efecto:

1] Cómo competir con una legislación electoral hecha para balcanizar a la oposición: se crearon partidos títtere o "paleros" y se prohibieron las alianzas entre fuerzas políticas registradas. Se creó, ya lo anotábamos, un denominado Partido del Trabajo con un presupuesto electoral varias veces superior a lo que gastó toda la opo-

sición, destinado a arrancarle al PRD las bases populares organizadas del norte del país. Es como si al lado del partido del Estado (PRI) se hubiera organizado un millonario partido de la clase obrera coincidente con su Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), y en lugar del octagenario Fidel Velázquez, se nombrara como su candidato presidencial a una joven y atractiva lideresa. Sin duda el partido del Estado hubiera perdido el 5% de sus votos, por mencionar una cifra mínima. ¿Y qué hubiera pasado si a los militantes priistas de Nuevo León, Chihuahua y Coahuila les otorgamos el registro como Partido del Norte? Pues a lo mejor el partido del Estado pierde otro 5% de los votos y el PAN un buen 20% de los suyos. En esa lógica podría también haberse creado un partido magisterial, uno petrolero y uno cenecista, para extirpar del partido oficial a su solera corporativa; y todo ello dentro de la misma lógica pulverizante con que se decretó que habría un partido ecologista, uno que explotara la imagen del viejo Cárdenas (Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, PFCRN), contra la del hijo del General, sin contar el ya referido Partido del Trabajo (destinado a aglutinar, mediante inmensas sumas "pronasoleras", lo que fue la utopía maoísta de la juventud radical del 68 en Zacatecas, Durango, Chihuahua y Nuevo León). Quedaron en consecuencia prohibidas las alianzas entre fuerzas políticas.

2] ¿Cómo habrían cambiado las cosas si los fondos gubernamentales hubieran sido rigurosamente vigilados por organismos independientes para evitar su canalización hacia el partido del Estado y sus comparsas? O, dicho de otra manera: ¿qué hubiera pasado si el Tribunal Federal Electoral persiguiera efectivamente las denuncias en torno al empleo fraudulento de los impuestos, el fondo de contingencia, etc.? (incluyéndose aquí, destacadamente, la entrega de fondos a través de los programas Pronasol y Procampo condicionados al resultado electoral). Pues tal vez se le hubieran restado otros poquitos puntos porcentuales al partido del Estado (¿otros 5% quizás?).

3] ¿En qué porcentaje hubieran variado las elecciones si la televisión y la radio no hubieran actuado como un ministerio de información del Estado y su partido y no hubieran podido asociar a la figura de Cuauhtémoc Cárdenas (y hasta a la idea misma del cambio) con la desinstitucionalidad y, en el extremo, con la vía violenta y el zapatismo? (Mucho me temo que este rubro sí hubiera ido más allá del 5%.)

4] Ocioso sería repasar la larga lista de pequeños porcentajes en favor del PRI durante la jornada electoral (padrón rasurado, tacos de votos, ratón loco...), hasta la composición final de los votos en las urnas y luego, a partir de ahí, el conteo, la suma y la locura cibernética.

Lo que importa subrayar ahora es que mediante este control del aparato electoral desde el Estado se desfiguró el mapa político y social de los mexicanos. Más precisamente se buscó, *en un primer momento*, desaparecer la expresión organizada del México social-popular, hacerlo trizas, atomizarlo al extremo de que se nos olvide que existió como fuerza articulada. Así, y empleando a fondo los medios de comunicación y monetarios, grabarnos en la mente que a partir de 1994 viviríamos un bipartidismo moderno PRI-PAN (con un pequeño promontorio allá, olvidado, intensamente financiado para su autodestrucción que se llama izquierda, incluido el zapatismo selvático). La producción en serie de pobres generada por el neoliberalismo, parias sin identidad, se distribuiría entre uno u otro de los partidos "triunfadores" (¿la alternancia?), según cuál tenga más vasos de leche para repartir a la masa paupérrima, aterrizada por la violencia de los medios y la de los delincuentes en cada esquina, en cada vado.

Pero en un *segundo momento*, ya con el zedillismo en el poder, con la crisis económica a todo vapor y con el PRD disminuido, el Partido Acción Nacional entendió que la cercanía que había mantenido a las posiciones gubernamentales (resumidas en el término "concertaciones"), era incosteable, y que las mayores posibilidades para convertir el descontento producto de la crisis en votos a su favor, exigían una toma de distancia con respecto al zedillismo. Por su parte el zedillismo tuvo que cambiar también la estrategia y balancear el ascenso panista mediante una alianza velada y seguramente transitoria con el PRD, un reconocimiento al menos retórico de su espacio sociopolítico y un congelamiento de la labor desmanteladora del gobierno hacia esa constelación sociopolítica.

¿Sería posible prever, sin embargo, un *tercer momento* en que ya demostrada la fortaleza electoral del PAN, éste y el PRI se distribuyan la geografía electoral del país e incluso vayan al extremo de una cierta alternancia en este o aquel punto? Tal escenario futuro permitiría que, en efecto, el núcleo duro de la dominación y el México integrado, sin abandonar el modelo de desarrollo transnacional y excluyente, establecieran un sistema político pertrechado contra

los embates de la verdadera oposición: la del panismo social y la que afloró en el movimiento social-popular que conocemos como cardenismo.

Pero, ¿será posible en verdad borrar la expresión política organizada de los mexicanos que no caben en el TLC? Si bien es claro que el 50% de los compatriotas que forman el piso social-popular se extiende por toda la república (nada más hay que ver la imagen urbana de las ciudades fronterizas de la maquila), lo cierto es que en los estados fuertemente poblados y mestizos del sur (Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Morelos), el PRD superó, incluso en las condiciones electorales descritas, el 30% de la votación, mientras que en los estados de la franja fronteriza no se despegó mucho del 5%. El PAN, por su parte, en estos últimos estados superó con facilidad el 30 y hasta el 40 por ciento.

Digamos en resumen que existen tres identidades sociopolíticas definidas en el país: 1] la del partido de Estado (la del centro en el doble sentido), mezcla violenta de supermillonarios, de tenientes del Estado, de monopolios cibernéticos de la comunicación, de intelectuales aburridos de la marginalidad de la academia y de la crítica, de cacicazgos de todo tipo apoyados por el vértice, de mexicanos empobrecidos y de pobres muy pobres pronasolizados hasta la ignominia; 2] la del partido de la ciudadanía, urbano, norteno, *farmer*, consumista, en búsqueda del fortalecimiento de las instituciones liberal-democráticas, beneficiario también del voto del miedo, y con una dirigencia que tiende a aliarse al partido de Estado y una base que se aferra a lo social, más proclive a identificarse horizontalmente con los mexicanos; y tenemos en fin, 3] el más atacado y, en algún momento, mayoritario partido social-popular, que arraiga en la pobreza urbana aún organizada de alguna manera, la que no acaba de estar irremediadamente rota, que arraiga también, fuertemente, en lo campesino, étnico, sureño, que recibe apoyo de la clase media ilustrada y de otros sectores de nuestra modernidad golpeados por la modernización salvaje (obreros, empresarios pequeños y medios no competitivos, burócratas inservibles, etcétera).

Por todas las razones mencionadas, Diego Fernández de Cevallos, el candidato democrático-ciudadano del opositor Partido Acción Nacional (PAN), habló de las oportunidades injustas y profundamente inequitativas y el candidato social-popular Cuauhtémoc Cárdenas (PRD), aceptó que se había equivocado de táctica al pensar

que al Estado y su partido podría ganárseles en condiciones tan desiguales, declarando no querer competir más en el terreno electoral, mientras no hubiera modificaciones sustanciales.

Al lado de esta corriente, en el seno del PRD se fortaleció una postura que consideró que todo el aparataje descrito podría ser reformado abriendo un *diálogo* con los demás partidos políticos y con el gobierno, en primer lugar, y en segundo término, con organizaciones y personalidades de influencia y con la sociedad civil organizada (mencionaban al Episcopado, al Consejo Coordinador Empresarial, a la Confederación de Cámaras Industriales, a la Confederación de Cámaras de Comercio, a la Confederación Patronal de la República Mexicana, al Grupo San Ángel, compuesto por connotados intelectuales y políticos de todas las tendencias, a la Alianza Cívica para la Observación Electoral en 1994, y a otras instancias de *influencia*).

Sin duda la corriente negociadora del PRD fue poco explícita para hacerle entender al conjunto de las fuerzas de esa organización y al país cuál sería el método para separar a esos siameses de un solo corazón que son el PRI y el Estado. Y es que la operación se había demostrado imposible a pesar de las reformas electorales y de la dinámica que precedió los comicios presidenciales del mes de agosto, de manera que el llamado a negociar una reforma electoral más, cuando aún no se concluía ni siquiera la lista de fraudes de la elección presidencial, puso en gran tensión, al punto de la ruptura, a las corrientes democráticas del país: se amplió entonces la distancia entre las cúpulas del PRD y los notables, por un lado, y por otro, la base social-popular e incluso popular-radical del espectro amplio de fuerzas democráticas (en donde ahora participaba activamente el indigenismo), que iban más allá y eran más complejas que el PRD y el zapatismo, como quedó claro a lo largo de aquel año.¹

¹ Vamos a mencionar aquellas organizaciones ligadas al indigenismo que se destacaron por su gran activismo en los años 1994 y 1995: Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC, Chiapas), Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Frente Independiente de Pueblos Indios (FIPI), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Oaxaca), Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Asociaciones Regionales de Interés Colectivo-Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC-Chiapas), Organización Purépecha (Michoacán), Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI, Oaxaca), Unión de Campesinos Emiliano Zapata (UCEZ), Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Organización Popular Emiliano Za-

Lo que ha acontecido podría interpretarse como un tránsito hacia un autoritarismo tan sofisticado que ya está siendo capaz de reproducirse, como afirmábamos, por la vía electoral. Quedó claro en esas elecciones que el núcleo duro del sistema estatal se ha vuelto una coraza impenetrable.

Ahora bien, cuando todo lo anterior se genera en una sociedad en la que grupos poblacionales cada vez más amplios caen en la extrema pobreza, en el desorden y en la destrucción de los referentes culturales (por lo que se ha caracterizado particularmente la base de votantes priistas), el terreno está abonado para que el verticalismo autoritario se reproduzca de una manera altamente sofisticada, al extremo de que, en efecto, podría hablarse de "una dictadura perfecta". "No hay fuerzas inmanentes que guíen a las nuevas democracias hacia formas institucionalizadas y representativas -establece Guillermo O'Donnell-. En el largo plazo las llamadas nuevas democracias pueden dividirse entre las que siguen el satisfactorio curso hacia una mayor institucionalización, y aquellas regresivas, que vuelven pura y simplemente al autoritarismo."²

Así pues, si bien se corrobora la afirmación algo simplista pero fuertemente respaldada por los autoritarismos del siglo XX, de que a mayor embrutecimiento colectivo (en educación, cultura, autoestima, alimentación, hábitat...), mayor manipulación, lo cierto es también que no es tanto a la pobreza en sí misma a lo que se está haciendo alusión, pues la pobreza indígena ha demostrado no ser obstáculo para que los referentes culturales y la identidad colectiva puedan ser reconstruidos con rapidez, cuando éstos no han sido completamente devastados, como en algunas regiones del centro, sur y sureste del país con predominio campesino indígena (las bases sociales del zapatismo o las de los zapotecas del istmo de Tehuantepec, por ejemplo).

Es entonces la combinación de la pobreza más el desorden del

patá (OPEZ), Coordinadora Nacional de Organizaciones Sociales Independientes (CNOSI), Consejo Tradicional de los Pueblos Indígenas de Sonora, Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (Veracruz), Coordinadora de Organizaciones Campesinas del Estado de Chiapas (COCECH), Asamblea Estatal Democrática de Oaxaca, Servicios para el Desarrollo (Hidalgo), Asamblea Zapoteca y Chinteca de la Sierra de Oaxaca, Consejo Nacional de los Pueblos Indios (CNPI), Solidaridad Campesino-Magisterial (SOCAMA), etcétera.

² Guillermo O'Donnell, "The State, democratization, and some conceptual problems", Smith, Acuña y Gamarra, *American political economy in the age of neoliberal reform*, New Brunswick, Transaction Publishers, 1994.

entorno social (desde la familia hasta el barrio, desde el pueblo hasta las inmensas zonas paupérrimas en las megalópolis), lo que se ha vuelto campo de cultivo por excelencia para la manipulación desde el vértice estatal; campo de cultivo en el que desgraciadamente se encuentran inmersos la mayoría de los mexicanos. ¿Cuál era la opción de recambio electoral en 1994 para esas amplias masas del "México roto" si conocen de manera tan incierta una opción alternativa y difícilmente tienen una herencia que defender o, consecuentemente, un proyecto de sociedad futura? Votar por el PRI no significó votar por un partido, sino por un espectro que es el "orden" mexicano, coronado por el *tlatoani*.

El mayor peligro, pero lo más buscado por el autoritarismo de Estado parece ser, en consecuencia, el desmantelamiento y la atomización de la identidad social-popular del perredismo, para pasar a un juego aparentemente muy democrático de los *integrados*, hecho con base en el PRI, el PAN (su expresión concertacionista), y algunas otras agrupaciones de notables, pero quitándole toda posibilidad de expresión coordinada a los excluidos, al México roto.

Este último parece ser el rasgo que está caracterizando a las sociedades altamente mestizadas de América Latina bajo la era neoliberal: una distribución sociopolítica que tiende a dividir a los habitantes en integrados y excluidos, en donde la "democracia delegativa" se revela como la forma de participación para los primeros, mientras que para los excluidos están destinados mecanismos de ingeniería social altamente sofisticados, tendientes a llevar hasta sus últimas consecuencias la atomización, el desmantelamiento de sus organizaciones y la desidentidad en medio del desorden.

Cuando hacia mediados de 1995, vemos aparecer junto a Vicente Fox a Porfirio Muñoz Ledo, y éstos a su vez coinciden con Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea, Elba Esther Gordillo, Demetrio Sodi, Adolfo Aguilar, Jesús González Shmall, José Agustín Ortiz Pinchetti, Santiago Creel, Graco Ramírez, Manuel Camacho, Sergio Aguayo, Luz Rosales, etc., en la necesidad de fortalecer un centro político y en la búsqueda de un cambio sin rupturas, nos queda claro que nos encontramos ante la posibilidad de una "transición pactada" entre grupos, fracciones partidistas y corrientes de influencia (élites políticas que son las que cuentan en una cultura estatal como la nuestra). Se trata, quién lo duda, de un pacto entre "integrados" para evitar ya sea la fujimorización del país (el predominio de los aparatos coercitivos con la supresión de las inter-

mediaciones partidistas y parlamentarias), o bien la ingobernabilidad, producto del desbordamiento popular (levantamientos generalizados o violencia delincuencia ciega). Es una transición pactada entre grupos de influencia, una condensación que puede pasar a gobernar al país por encima de sus diferentes orígenes partidistas; nadie puede estar realmente en contra de que este pacto de élites nos gobierne.

Pero hay fuerzas que no pueden entrar en esta alianza y seríamos simplistas tratando de criticar su presencia. No podemos negar que estamos ante la inminencia, también legítima, qué duda cabe, de una condensación social-popular, como decíamos, que iría desde Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador con su Alianza Democrática Nacional (ADN), hasta el zapatismo devenido fuerza política con su Movimiento de Liberación Nacional, pasando por una gama de corrientes políticas fuertemente ancladas, aquí sí, en movimientos y luchas sociales (desde Ruta 100 hasta el despertar campesino-indígena). ¿Qué hacer con ese ancho mar de excluidos que se hacen representar aquí y allá, muchas veces clientelar o populistamente (este país produce cada vez menos ciudadanos), si no reconocerlo en su existencia y otorgarle su legitimidad? Es una condensación distinta y legítima porque sabe perfectamente que el pacto del centro político será incapaz de modificar los términos fundamentales del modelo de desarrollo histórico vigente, que permanecerá dependiendo de las exigencias de la economía transnacionalizada y de los postulados neoliberales de participación sociopolítica. ¿Con qué argumentos podemos exigirle a los actores del ancho mar social-popular y a los que intentan organizarlos que renuncien a sus demandas y a sus *movilizaciones*, convencerlos de que "el cambio político y social sólo es viable mediante vías legales y reformistas"? La élite que pone en el centro de sus preocupaciones la preservación del orden democrático no tiene más razón que los líderes que apoyan sus argumentos en la proliferación del desempleo y en la violencia cotidiana del hambre, la delincuencia y las enfermedades.

Por lo demás, es una inocencia pensar que al *tlatoani* de Aztlán se le vence con una alianza de fuerzas de los integrados (a veces sólo individuos notables). Sin movilización social, sin espacios públicos amplios, la política se vuelve cerrada y cupular, campo de cultivo privilegiado para nuestra proclividad buropolítica. En Polonia, por ejemplo, el tránsito a la democracia exigió de importan-

tes y prolongadas movilizaciones, no confrontacionistas, es cierto, y lejos de la idea de la acumulación ciega de fuerzas. Es más sano, pues, el reconocimiento de que existen hoy en México, al menos, estas dos condensaciones sociopolíticas evidentes (la del centro-democrático y la social-popular, además del PRI-PAN), y que la transición sólo será posible estableciendo puentes entre ellas, reconociendo cada una a la otra en su espacio legítimo (volveremos sobre este tema en la parte tercera).

24. ¿UN CONTRATO SOCIAL PARA LOS MEXICANOS?

Dos declaraciones políticas en la primera semana del año 1995, una de Ernesto Zedillo el día 3 de enero y otra de Cuauhtémoc Cárdenas el día 6, prefiguraron con nitidez el escenario y los actores que caracterizarían a la política en la etapa terminal de este modelo de desarrollo.

En el primer documento Ernesto Zedillo explicó a la nación su programa emergente para confrontar la crisis, y en su parte medular estableció: "Estoy convencido de que la superación de la emergencia económica debe estar acompañada de un avance sustantivo, inmediato y plenamente participativo para construir la democracia que todos los mexicanos anhelamos..."

Y es que a medida que las instituciones gubernamentales y la prensa internacional explicitaron las características económicas de dicho plan de emergencia, nos quedó claro que se trataba de uno de los experimentos neoliberales más draconianos de que se tuviera memoria: privatización (desnacionalización debiéramos decir) de plantas eléctricas, satélites, telefonía, carreteras, aeropuertos, bancos, puertos y exploración, extracción y procesamiento del petróleo (a pesar de declaraciones contradictorias en este último ramo, tratando de llevar adelante subrepticamente un proceso que la opinión pública está repudiando). Aclaremos desde ya que los gobiernos militares de Sudamérica que estuvieron en posibilidad de aplicar el modelo neoliberal por la vía de un *shock* autoritario, vertical, en un marco de supresión de la participación ciudadana y del sistema de intermediaciones institucionales, no llegaron al extremo de perder el control gubernamental (y por supuesto nacional) de los recursos naturales estratégicos (el cobre nunca dejó de ser propiedad del gobierno chileno, y viene al caso anotar que los gobiernos militares han sido extremadamente sensibles a los riesgos de una pérdida tal de control estratégico).

¿Cómo entonces debemos interpretar una propuesta en la que el modelo neoliberal sería llevado al extremo de la ortodoxia (desnacionalización del patrimonio del país en una búsqueda ciega de divisas anunciada a gritos en el extranjero como inminente des-

plome salarial, es decir, como paraíso de ganancias con estabilidad inflacionaria), y todo ello al lado de un supuesto perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas mediante una apertura política "inmediata y plenamente participativa"? La pregunta no es retórica a pesar del cinismo presidencial.

Decía Zedillo en su discurso de inicio del año 1995, y lo reafirmaba su llamado al Pacto de Unidad de Todos los Mexicanos: "Hoy convoco a todos los partidos políticos, a todos los sectores sociales, e incluso a quienes se han inconformado apartándose de la vida institucional, para que de inmediato iniciemos la discusión franca, abierta, respetuosa e intensa de todos los temas que pueden contribuir a fincar la democracia que merecemos los mexicanos..." Aquí, el modelo económico aparece divorciado más fuertemente que nunca del modelo de participación social y política: se hace una invitación a discutir el tipo de sociedad y el tipo de orden político sólo dentro de los marcos de un modelo económico dado, un imperativo que está fuera de discusión pues fue pactado con los más poderosos intereses financieros internacionales desde el primer mes del régimen (diciembre de 1994). Se invita a los inconformes a discutir de democracia, pero temas como el control nacional o no de los recursos estratégicos, el de la velocidad (demencial) de la integración transnacional, el de las compensaciones a los actores perjudicados por estas precipitadas aperturas o el de la depreciación constante de los salarios (sin la cual no somos competitivos) no están en la agenda (hasta este extremo ha podido llegar la ideología de la transición pactada).

Y es que cada vez que los acuerdos entre la oposición y el gobierno han avanzado, fuerzas "no controladas por el Presidente" (según declaraciones del propio gobierno), han hecho retroceder la reforma política y electoral más allá de su punto de partida sexual:

Demostrado el fraude electoral del PRI en Tabasco, el gobernador ilegítimo decide reprimir a los militantes del PRD y acusa legalmente al presidente de la República de intromisión en los asuntos de su estado. Echa a andar entonces una querrela legal que se vuelve interminable mientras Zedillo se autopromueve como el más respetuoso defensor del federalismo.

Luego vino la masacre en donde perdieron la vida 14 perredistas en Aguas Blancas, Guerrero. De no ser por la "sorprendente" desobediencia de Televisa, y el peligro de que se volviera un caso

ejemplar internacionalmente, el asunto hubiera podido pasar como otro ejemplo del respeto presidencial y de la Procuraduría General de la República a la autonomía de los estados federados ("abdicó" entonces el gobernador Figueroa en favor de su propio partido; más precisamente: en favor de la gente de su propio equipo político).

La mesa para la negociación entre los partidos y el gobierno volvió a iniciarse al doblar el año 1996, pero al poco tiempo Bartlett, con pleno control sobre el Congreso poblano, anulaba el resultado de varias casillas que favorecían al PAN otorgándole por ese medio el municipio de Huejotzingo a su propio partido. Con ello el PAN se retiró por tiempo indefinido de la mesa de la reforma política siguiendo su propia estrategia electoral. El Presidente se proclamó respetuoso del federalismo.

Intelectuales, políticos, consejeros ciudadanos, dirigentes sociales y representantes de los partidos políticos se reunieron durante meses en el Castillo de Chapultepec hasta acordar por consenso sesenta puntos para la reforma electoral. Al día siguiente el PRI declaraba que por no haberse llevado a cabo en un espacio institucional, no se sentía obligado a impulsar esos acuerdos. El presidente Zedillo se declara respetuoso de la distancia entre el gobierno y el PRI.

Cuando leíamos los primeros resultados alentadores del diálogo en Larráinzar entre el EZLN y los representantes gubernamentales, la policía judicial detuvo y encarceló a un presunto alto mando zapatista (según versión del propio gobierno), con lo que se daba al traste con la amnistía, pues las órdenes de aprehensión debían quedar sin efecto mientras se llevaran a cabo las pláticas de paz (el Presidente simplemente guardó silencio, "respetuoso" del equilibrio de poderes). En marzo, durante el desarrollo de la segunda mesa para la paz ("Justicia y Democracia"), los representantes gubernamentales guardaban silencio frente al tema, dando a entender que con el EZLN o con sus asesores e invitados no discutiría asuntos que atañen a la reforma del sistema electoral de todos los mexicanos. Quien no guardaba silencio, a unos kilómetros solamente de la sede de aquel diálogo, era el armamento de los policías judiciales y del Ejército llevando a cabo desalojos agrarios en los que perdieron la vida al menos siete campesinos y otros tantos eran declarados desaparecidos en la semana del 20 al 27 de marzo. En el caso de Chiapas, por la presencia del zapatismo el gobierno de México no

se siente obligado a aclarar nada, ni porque el Ejército Mexicano respaldó las matanzas (por el contrario, en medio de esos sucesos Zedillo mandó a las cámaras la nueva ley de seguridad pública que facultó al Ejército Mexicano justamente para respaldar a las policías en los operativos de este tipo).

Luego vino una enésima agresión contra los pobladores de Tepoztlán, en Morelos, con saldo de un campesino muerto y varios heridos graves del Comité de Unidad de Tepoztlán, y todo eso tenía lugar el diez de abril durante la celebración de la muerte de Emiliano Zapata, en los alrededores de Chinameca, mientras el presidente Zedillo pronunciaba un discurso conmemorativo de la muerte de Emiliano. Dos días después, ante la aparición de pruebas filmadas de agresión policiaca, tomadas por un video-marchista (como en Aguas Blancas), el Presidente dirigió un "respetuoso exhorto" a las autoridades morelenses para que llevaran a cabo averiguaciones judiciales en torno a los hechos violentos.

En abril, en fin, se nos hacía saber, de nuevo con todos los reflectores, que aun sin el PAN las reformas políticas avanzaban, aunque el diálogo en Larráinzar hubiera sido sabotado. Es entonces cuando aparece un juececillo chiapaneco condenando a Javier Eloorriaga, preso político zapatista, a trece años de prisión, sin pruebas, ya que su delator nunca se volvió a presentar para confirmar sus declaraciones, y al lado de eso, en un alarde que nadie ha logrado dilucidar, el Presidente acudió a Tabasco a darle su respaldo por segunda vez al fraudulento gobernador de aquella entidad. El PAN y el PRI se volvieron a retirar de las negociaciones hacia mediados de año, dejando claro que a lo largo de su primer tercio en la presidencia Zedillo no había querido sostener sus palabras del primer mes de gobierno: "Iniciar la discusión franca y abierta para fincar la democracia que merecemos todos los mexicanos." Se puso en evidencia que la economía es terreno del presidente, en donde se le nota ágil para poner en manos de compañías extranjeras la petroquímica (dejando, con triquiñuelas, fuera de la discusión a los legisladores); sin embargo, la política -en particular la reforma política, el proceso de pacificación en Chiapas y las masacres campesinas en todo el país- parece comenzar a ser asunto de todos los presidentes municipales, caciques, juececillos o gobernadores que estén dispuestos a sabotear el proceso de democratización (con una salvedad: que no los descubra el *New York Times*).

En efecto, desde el mes de enero de 1995, ante la crisis financiera

y el préstamo internacional de alrededor de 50 mil millones de dólares, este increíble personaje firmó acuerdos que prácticamente enajenaron el control nacional sobre la riqueza petrolera; lo mismo sucedió hacia mediados del año 1996 con la venta de la industria petroquímica. A este respecto, el priismo parlamentario ha estado destinado a actuar como una aplanadora de votos en favor del Presidente sin discutir siquiera los términos de la desnacionalización.

Por las condiciones de extremo sacrificio a que la crisis general está sometiendo a amplísimos sectores de mexicanos, no sólo sectores obreros y populares sino, de manera rigurosa, a los asalariados medios y a los empresarios medianos y pequeños, ha resultado cada día más descarada la propuesta de inicio del régimen llamando a "un pacto de unidad de todos los mexicanos", esta puesta en escena formal de la democracia liberal. Hoy podemos constatar que bien entrado el segundo año de gobierno de Zedillo no se ha hecho avanzar, ni siquiera, el control ciudadano sobre los aparatos y los recursos electorales, la división de poderes, el desmantelamiento del monopolio informativo, el conocimiento de los ciudadanos sobre el gasto público, no existe una sola posibilidad para opinar sobre el modelo de desarrollo que debe seguir su país, los límites del endeudamiento, la conveniencia de desnacionalizar el control sobre los recursos estratégicos...

Las instituciones de la política en esta vuelta de tuerca de la ortodoxia neoliberal están siendo intensamente desgastadas, los ciudadanos no parecen conformarse con un espectáculo de acaloradas polémicas parlamentarias, publicitadas en extremo con el único objetivo gubernamental de ganar tiempo para una recomposición más sofisticada de los sistemas de dominación, pero sin que dichas polémicas tengan ninguna capacidad de incidir en las decisiones gubernamentales. Como señaló Weber, lo que le da importancia a un órgano parlamentario no es que discuta cosas importantes, sino que resuelva cosas importantes. Parece evidente que, por lo pronto, el Congreso no está pudiendo intervenir eficazmente en las decisiones públicas que realmente importan.

Digámoslo con toda claridad: los últimos diez años de neoliberalismo nos han mostrado la proclividad de las autoridades a sobredimensionar el escenario de las intermediaciones partidistas, parlamentarias, culturales, etc., enfocando hacia allá los reflectores televisivos y de los medios de comunicación en general, intentando mantener en las tinieblas, por contraste, lo que acontece con las

luchas y los movimientos sociales y con el simple estado de miseria y degradación de amplios sectores de mexicanos.

Quizá en algunos momentos de los años recientes, cuando se abrió la posibilidad de unas elecciones -sobre todo presidenciales- más justas y equitativas, o cuando un eventual éxito del TLC y del modelo globalizador gozaba todavía del beneficio de la duda, la opinión pública y algunas corrientes de la política nacional pensaron que había más elementos de legitimidad para llamar a fortalecer una vía de pequeños pasos concertadores en el interior de las instituciones político-electorales. Sin embargo, hoy, después del rotundo fracaso del modelo económico de la modernización salvaje, la redoblada desigualdad en las oportunidades electorales y los asesinatos en el seno de la familia revolucionaria (encubiertos por ella misma), el discurso de la transición privilegiando casi exclusivamente los espacios partidista-parlamentarios y la reforma electoral vuelve a ser una preocupación que se circunscribe por desgracia a las élites políticas, a los notables y, cuando mucho, a ese 20% que compone la sociedad de los integrados. Insistir en la transición pactada teniendo alrededor un espectáculo de represión permanente somete a las fuerzas democráticas a una tensión insostenible y, en el extremo, al rompimiento entre los dialoguistas y las luchas sociales opositoras con sus demandas sustantivas (regresaremos a este punto).

No funciona ya la "discusión franca" que propuso Zedillo, pues el cuestionamiento al que hay que responder ya no es sólo de partidos, ciudadanos y leyes electorales, sino también de movimientos cívico-sociales que exigen reformas sustantivas tanto al sistema político como al modelo económico. Hoy en Chiapas los indios y los campesinos luchan por "tierra y libertad", no sólo por sufragio efectivo; la fuerza del perredismo tabasqueño se funda en la articulación de lucha social y lucha política, y en general se puede señalar un hecho novedoso: las dirigencias de los movimientos sociales encuentran un camino tan cerrado hacia las alturas de la buropolítica que están siendo obligadas a permanecer cerca de sus bases por periodos mucho más largos o para siempre (!); en esa medida, el neoliberalismo excluyente parece estar convirtiéndose, para las dirigencias, en una especie de reeducación en el seno de las bases sociales pero, por desgracia, la distancia con los representantes parlamentarios y con las propias burocracias partidistas se ensancha.

No es hoy hacia arriba y hacia la influencia política hacia donde parecen tender los llamados de las fuerzas democráticas para afrontar la crisis (esa salida parece estar más bien fatigándose), sino hacia la sociedad misma, horizontalmente. Sin duda muchos grupos de influencia, de "notables", adentro mismo del perredismo, están constantemente pactando con el modelo antinacional y antipopular del zedillismo, reuniéndose en las alturas con corrientes que transitaron ese camino y fueron premiadas con revistas, programas televisivos y puestos de gran influencia; es lo propio de nuestra cultura política la atracción irresistible del vértice casi por encima de las consideraciones sobre quién lo ocupe. Nada sustancial va a cambiar si a las fuerzas electorales que logren el segundo lugar nacional o el de cada entidad federativa se les otorga, por ejemplo, la secretaría de Gobierno o un puesto en el gabinete de esos estados (como sucedió con la PGR, con Chiapas o con Michoacán), mientras la política económica del país consista en la apertura indiscriminada, la enajenación del patrimonio y de los recursos estratégicos, el fomento al latifundio y la depresión salarial para hacer atractiva nuestra economía al capital extranjero.

Si alguna alianza para ir hacia la democracia puede ser construida en estas condiciones deberá estar fincada en el plano social, deberá ser de contenido popular y ciudadano, capaz de cambiar el centro de gravitación de la política atrayendo a las fuerzas partidistas y parlamentarias hacia los problemas sustantivos. En esta dirección, el zapatismo hizo un llamado a la formación de un Amplio Frente Opositor, un movimiento social-popular al que se articulen organizaciones gremiales y agrupaciones ciudadanas. Las dificultades, sin embargo, para el logro de una propuesta así son enormes, como lo veremos más adelante.

El panorama actual parece ser, en efecto, muchísimo más complejo, pues innumerables corrientes en el plano social-ciudadano y en el ámbito partidista de la oposición, consideran que la política nacional no sólo debe estar preocupada por lo que sucede en torno al indigenismo y al campesinado más pobre, en torno al México profundo digamos, sino que nuestro país abarca un mosaico muy heterogéneo y complejo de problemáticas y de actores sociales y políticos. En efecto, el empresariado del campo y de las ciudades, así como los sectores medios asalariados que están siendo también, y quizás con mayor rigor, afectados por esta crisis terminal del modelo globalizador, constituyen integrantes naturales con plenos

derechos de cualquier pacto democrático o de cualquier acuerdo político nacional.

En este punto confluyamos con el segundo manifiesto a la nación mencionado al inicio de este apartado. Establecía Cárdenas, el 6 de enero de 1995: "es necesario dar un viraje radical con respecto a las políticas en curso cancelando y desarticulando toda medida tendiente a la enajenación a particulares de las áreas de la industria petrolera y eléctrica reservadas con exclusividad a la intervención y gestión del Estado". Para ello hace falta "un verdadero Pacto Democrático que involucre a trabajadores de la ciudad y del campo, a profesionistas y técnicos, a empresarios comprometidos con la producción, el empleo y la productividad, a universitarios y trabajadores de la cultura y el arte, y por otro lado, a una autoridad pública que se desempeñe con honradez, eficacia y patriotismo." Así, se vuelve imperativo "renegociar la deuda externa y los acuerdos comerciales; decretar aumentos salariales revisados trimestralmente con controles a los artículos de primera necesidad; otorgar créditos con intereses moderados para impulsar a fondo a la micro y mediana empresa reactivando la economía y el empleo; apoyar integralmente al campo reestructurando las carteras vencidas; fomentar una política de comercio que impulse a los productores nacionales para recuperar el mercado interno y elevar sus exportaciones; no transferir al pago de la deuda recursos destinados a la inversión y al gasto público, poniendo más bien en práctica un programa de obras públicas de emergencia generador de empleo; elevar los impuestos a los bienes suntuarios y a las ganancias del capital".

Es evidente que no todos los mexicanos estarán de acuerdo con una alianza que gravite esencialmente en torno a una democracia social una alianza social-popular como la presentada anteriormente y que preferirían una participación ciudadana y democrática entendida en términos más restringidos, menos amplia, más dirigida a la influencia a través del sistema de las intermediaciones institucionales, donde lo campesino-indígena o lo urbano-popular fuera relegado a un plano secundario. Se trata del México mejor integrado a los beneficios del desarrollo, a la participación ciudadana político-electoral; se trata de una manifestación ciudadana perfectamente respetable, que exigiría sin duda un espacio social, político y cultural importante, pero que no por ello estaría dispuesta a formar parte, tampoco, del pacto antinacional y excluyente a que está

llamando el pequeño grupo tecnocrático teniente del gobierno, aliado sin pudor a los organismos financieros internacionales, al gran capital nacional y extranjero, a las cúpulas del corporativismo obrero y campesino, a los partidos títere, incluida la cúpula del PAN (no el panismo, al que justamente nos estamos refiriendo), aliado, en fin, a los poseedores de los medios de comunicación de masas y a la intelectualidad entregada, cansada de llevar adelante su función crítica, rendida a cualquier proyecto, incluso al neoliberalismo ortodoxo, a cambio de reconocimiento, reflectores, influencia, dinero.

TERCERA PARTE

ACCIÓN POLÍTICA Y CONDUCTAS COLECTIVAS

25. ¿LA SOCIEDAD QUE SE ORGANIZA?

Debemos abrir ahora un paréntesis referente a los conceptos: si bien la referencia al desorden es central para la comprensión de México en este fin de siglo, con ello se está intentando una caracterización de la sociedad en su conjunto, en su funcionamiento "normal", y no en sus momentos de ruptura y en sus sobresaltos, que son naturales en todo orden social. En efecto, los movimientos o luchas sociales constituyen por su naturaleza reordenamientos instantáneos del escenario colectivo desde el momento en que establecen una identidad de los alzados, definen un adversario contra quien orientar su acción y montan una trama y unas demandas. Aunque la ruptura sea pasajera conlleva inevitablemente esa fuerza reordenadora, de manera que cuando se estudia lo social a través de sus conmociones, el método nos empuja inevitablemente a resaltar los fenómenos identitarios y hace perder de vista lo que en ocasiones denota con más fuerza el estado de un colectivo en su cotidianeidad "normal": la debilidad, la atomización, la incultura y, en el extremo, la anomia.

Así, por ejemplo, nuestros argumentos no están necesariamente en contradicción con el espíritu de un ensayo de Carlos Monsiváis que se titula *Una sociedad que se organiza*¹ en el que el autor se interesa por analizar el ascenso de algunas de las principales luchas sociales durante la década pasada: las organizaciones, identidades y solidaridades generadas a partir del terremoto de 1985 en la capital del país; la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) en Juchitán, Oaxaca; el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), en la UNAM, etc. Es lo propio de las luchas sociales y de las situaciones extraordinarias definir un oponente, luchar en contra de él y en favor de unos objetivos que cohesionan la identidad colectiva así generada y dar la impresión, en consecuencia, de una gran organización. Es lo propio también de cualquier sociedad estar viendo surgir estas situaciones aquí y allá. Pero la imagen de tales acontecimientos no debe llevarnos a caracterizar a la

¹ *Entrada libre. Crónicas de una sociedad que se organiza*, México, ERA, 1987.

sociedad global-normal con los mismos parámetros que a las situaciones de excepción en que se desarrollan las luchas sociales. Es más, de las luchas aludidas por Monsiváis, poco o nada quedó del movimiento universitario (estudiantes y académicos), a partir de 1988 cuando el CEU tuvo que optar por la "acumulación de fuerzas" con el cardenismo y algo no tan diferente ha acontecido con las organizaciones heredadas del terremoto, que también se vieron sobrepolitizadas y sufrieron escisiones producto de las luchas electorales en 1988 y en 1994 (aunque no al extremo de ver desmantelada su estructura organizativa). Aceptemos sin embargo que algunas organizaciones se alejan de este vaciamiento crónico de lo social mexicano: la COCEI de los juchitecos que desde Cosijopi, antes de la colonia, peleaba contra el vértice azteca y que hoy, a pesar de su involucramiento con el Pronasol, no ha visto debilitada su identidad regional; los sinarquistas, que desde la "Cristiada" se han peleado con el Estado central, destructor obsesivo de los pequeños propietarios agrarios, a lo que el navismo potosino no ha sido ajeno, etcétera.

Así, las organizaciones nacidas a raíz del terremoto de 1985, la Asamblea de Barrios, el CEU y el propio 88 cardenista, con su extrema "visibilidad capitalina" (el regente Camacho recibiendo los jitomatazos del enmascarado Superbarrio en pleno Zócalo del país), generaron una apariencia de gran participación en el resto del escenario nacional, una cortina de humo en realidad que nos impidió calibrar el desmantelamiento de los actores colectivos en nuestro país.

Hay pues una diferencia entre la activación en el corto plazo (su enorme potencialidad para definir a un adversario y a una identidad que aparece tan poderosa en su momento de activación coyuntural) y lo que hemos llamado el comportamiento social-normal de una sociedad.

Sea como fuere, tenemos que responder a otra "salvedad", porque lo que ha caracterizado a México desde 1994 no ha sido el desorden anómico y el desmantelamiento de los actores sociales sino la aparición de un actor colectivo bastante bien definido en el sureste que parece haber conmovido al país mucho más radicalmente que la lista de conflictos antes referida.

26. EL LEVANTAMIENTO ZAPATISTA

Ante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional políticos, intelectuales, periodistas y ciudadanos hemos expresado: 1] sorpresa-incrédula; 2] condena a la violencia; 3] conmiseración por los pobres, y 4] titubeo entre considerarlo un conflicto local o el lugar mal vigilado por el que se "coló" el malestar de esa enorme mayoría de los mexicanos convencidos de que su papel en el proyecto neoliberal nunca dejará de ser el sacrificio y la espera.

El patrón según el cual funcionamos los mexicanos cuando se rompe el orden nos enseña que es ridículo separar lo local de lo nacional; por más que la situación de los indios de Chiapas sea diferente a la de los mexicanos del norte, ello no anula el que una de nuestras soleras de comportamiento continúe siendo *la cargada*, la acumulación de fuerzas, que igual funciona para robustecer al tlatoani que para derrocar al gobierno: las clases ilustradas de San Luis Potosí, las gavillas del norte y los peones acasillados del sur se aliaron como un rayo contra el Estado central al inicio de la Revolución de 1910. Inmediatamente después del levantamiento de los zapatistas de Chiapas, las organizaciones indígenas y campesinas tomaron 50 mil hectáreas sobre las que no se ha podido encontrar una solución y reconocieron al EZLN como fuerza beligerante. Estos serios peligros para la estabilidad nacional se dieron en medio de un escenario que, desde 1988, había sido alimentado por la imposición de los gobernantes vía el fraude electoral en Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y últimamente en Tabasco, Yucatán y el propio Chiapas (sin dejar de lado la elección presidencial). No olvidemos tampoco que en los meses recientes se pueden constatar en el ambiente social muchas manifestaciones derivadas de esa otra solera del comportamiento de los mexicanos cuando se rompe el orden o se adivina su debilitamiento: *la revuelta plebeya*, que comienza naturalmente con la sorna, la fiesta callejera (el festival de rock en el escenario actual), la desobediencia, el reto, y se amplifica hacia la violencia desorganizada, los linchamientos y la destrucción pura y simple.

En nuestra sociedad no es la semejanza en la identidad de los

alzados lo que los mantiene juntos sino el compartir un mismo adversario: cuestionado éste todo pasa a ser desorden. El principio unificador de nuestra sociedad es, por extensión, estatal y no social: producto del no haber podido construir actores sociales con cierto poder, intermedios entre el Estado y los ciudadanos dispersos o las masas. Nuestras clases sociales altas, ya lo veíamos, pero también las obreras y las intermedias, han sido siempre barridas por la revuelta, la guerra, los capitales exteriores, pero sobre todo por el pavor estatal y de toda nuestra cultura a convivir con el otro y a respetarlo. Por ello seguimos siendo caldo de cultivo para los levantamientos generalizados en contra del adversario estatal compartido (sobre todo cuando da visos de antinacionalismo). No vale argumentar que eso quedó en nuestro pasado campesino: primero, porque lo que está ante nuestros ojos proviene justamente de ese pasado; segundo, porque a diario vemos el espectáculo de otras sociedades que parecían mucho más cerca de Occidente, como Yugoslavia, y cuyo principio de orden quedó hecho trizas; pero, fundamentalmente, porque nuestra modernización salvaje ha demostrado ser una destructora inclemente de nuestra modernidad inacabada, de lo que más nos asemejaba a un país moderno que no es la posesión de un teléfono celular, una videograbadora y una "personal computer" para el 1% de los mexicanos integrados, sino la presencia de un empresariado medio robusto (hoy hecho jirones por la apertura comercial, la crisis y la recesión); de grupos de trabajadores con cierta capacidad de negociación; de un campesinado con alguna organización para influir en los ritmos de la apertura comercial, los subsidios y las leyes que lo conciernen (como el campesinado francés); de un sistema informativo y de opinión con autonomía frente al Estado; y de un sistema electoral con, por lo menos, alguna credibilidad. En una entrevista anterior al primero de enero de 1994 se le preguntaba al encabezado de Gobernación si lo que estaba haciendo el régimen neoliberal no era la destrucción deliberada y sistemática de todos los espacios de intermediación, incluido el balcanizado sistema partidista, y si eso no contradecía la sabia frase de don Jesús Reyes Heróles en el sentido de que "lo que resiste apoya" (en donde él daba a entender que espacios alternativos de crítica, de identidad colectiva y de oposición son apoyo indispensable de cualquier orden político sano); que si todo aquello, se le cuestionaba, no hundía en una especie de fango a las bases del Estado. El secretario contestó que

el desdibujamiento de las intermediaciones del pasado (sindicatos, organizaciones campesinas, universidades, sistema educativo, mediaciones partidistas...), estaba siendo sustituido por formas más modernas, y puso como ejemplo a las Organizaciones No Gubernamentales y a los Comités de Solidaridad. Ya no dio tiempo para replicar que éstos eran organismos demasiado atomizados, discontinuos y pequeños en lo profundo de la organización social y que difícilmente llenarían el hueco enorme que se había generado entre ellos y el vértice...

Quizás por esto surgió en Chiapas la ruptura: el régimen, acostumbrado a gobernar con base en el control extremo de los medios de comunicación y la destrucción sistemática de los espacios, actores y organismos de identidad colectiva, se distrajo en esa tarea desmanteladora: dio por sentado que las regiones del campesinado paupérrimo, predominantemente indígenas, se encargarían de su propia demolición agobiadas por el alcoholismo, los cismas religiosos, el caciquismo con sus guardias blancas y la represión militar periódica. Olvidó que comunidades que mantienen estructuras de cohesión fuertemente ancladas en valores culturales y religiosos ancestrales -el México "profundo"- antes de aceptar su dislocación definitiva recurren a los fundamentos y los defienden de manera radical, es decir, con la vida. Así se explica, hoy, el vigoroso resurgimiento del fundamentalismo islámico, nos atrevemos a argumentar.

De acuerdo con esto y dentro de la matriz de funcionamiento de la acción sociopolítica mexicana, la ruptura que estamos viviendo parece ser inminentemente nacional y no sólo local. ¿Quién iba a imaginar que el México profundo estaría, a inicios de 1994, activando al México roto (los desechos de la modernización salvaje), despertando al México bronco (plebeyo), y amenazando con triturar al México ciudadano, el de los integrados a la modernización, el de los hijos "triunfantes" del libre comercio y el anunciado tránsito a la democracia?

El escenario chiapaneco durante el año de 1994, si hacemos abstracción hasta cierto punto de las elecciones nacionales y estatales, se planteó de la siguiente manera:

1] El gobierno resumió su postura en el punto 8 del documento "Compromisos para una paz digna en Chiapas" (presentado en marzo a los zapatistas por Manuel Camacho, representante del presidente Salinas para los diálogos de paz en la catedral de San Cris-

tóbal), en donde aceptaba que existían unas demandas justas por parte del EZLN pero que se trataba de asuntos locales, circunscritos a la cuestión indígena, y proponía solucionar esos "graves problemas agrarios" promulgando una *Ley General de las Comunidades Indígenas* que permitiera no tocar en lo absoluto las reformas hechas durante ese sexenio al artículo 27 constitucional (en las que se declara concluido el reparto agrario y se convierte a la figura del ejido en un bien mercantil enajenable dando paso a la acumulación legítima de la tierra). El EZLN por su parte se retiró a la selva para realizar una consulta en torno a los "Compromisos para una paz digna", y regresó a la visibilidad pública hacia mediados de 1994 con un *NO* rotundo a las 32 propuestas gubernamentales. Junto con esto se destinaron enormes cantidades de dinero, vía Pronasol, con vistas a apuntalar lo mejor posible la cuestionada estructura de las representaciones políticas (dar alguna legitimidad a las tan repudiadas presidencias municipales). El objetivo fue la reconstrucción desesperada de un sistema de dominación con base en a] las clases poseedoras existentes, que incluso estuvieron recibiendo una renta del gobierno mientras sus tierras fueran ocupadas, b] la estructura de las instituciones políticas tal como existe hasta ahora (presidencias municipales con dinero de Pronasol), y c] las organizaciones sociales campesinas y las llamadas organizaciones productivistas (en especial la ARIC-Unión de Uniones), que han intentado durante más de un decenio modernizar la agricultura de la región, con base en la producción cafetalera, enganchándola al mercado internacional (proyecto debilitado en los primeros años noventa por la caída mundial de los precios del café);

2] El EZLN también compitió naturalmente por inclinar a su favor las fuerzas que se encontraban en su entorno y lo logró hasta cierto punto: primeramente creó las condiciones que hicieron posible la invasión de 50 mil hectáreas, una buena parte en territorios no controlados militarmente por el zapatismo; segundo, tuvo la influencia suficiente para evitar que la Coordinadora Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC), convocada e impulsada desde el inicio del conflicto por los representantes del presidente de la República (la CEOIC contó desde enero de 1994 con más de doscientas organizaciones), fuera controlada por las corrientes oficiales (como la CNC y la ARIC-Unión de Uniones). Digamos de pasada que parece cierta la tesis según la cual las organizaciones oficiales campesinas fueron perdiendo sus bases, sobre todo las más

jóvenes, en favor de las corrientes que se plantearon la vía armada. El hecho es que cada vez con más fuerza, las organizaciones campesinas e indígenas se declararon en favor del zapatismo, y no como simpatizantes sino exigiendo el reconocimiento del EZLN como fuerza beligerante, lo que las deslindó del intento de manipulación oficialista.

En Chiapas -nos dice Neil Harvey en un excelente artículo-, el impacto real de las reformas al 27 no se expresaba en la compra masiva de las tierras, ni en una creciente asociación entre ejidatarios e inversionistas, sino en la cancelación del derecho al reparto agrario. En la selva lacandona el rezago era muy marcado. Muchos campesinos sólo tenían títulos precarios, lo que les impedía conseguir créditos y otros insumos. Entre otros factores, esta falta de seguridad contribuyó a la radicalización de muchos miembros de la ARIC Unión de Uniones, que empezaron a ver una alternativa en el EZLN. En 1991-1992, la ARIC hasta ofreció pagar por las tierras que estaban solicitando pero ni así se pudo avanzar debido a la colusión entre funcionarios y terratenientes. Esta situación prevaecía en las cañadas de Patihuitz, Avellanal y La Estrella, zonas en donde el EZLN ganó mucho apoyo. Al mismo tiempo, la cancelación del reparto agrario significa la cancelación del último recurso de trabajo para muchos campesinos...¹

¹ Neil Harvey, *op. cit.* "El EZLN -continúa Harvey- sacó a la luz pública la compleja problemática agraria en Chiapas. En el momento de las reformas al 27 constitucional existía en Chiapas un rezago de solicitudes no resueltas que representaban 3 483 expedientes de tierras y 164 resoluciones presidenciales. Este rezago representaba el 27 por ciento del total nacional. Sin embargo, según las cifras oficiales, hasta el 21 de junio de 1994 se había resuelto el 94% de este rezago en Chiapas (*La Jornada*, 14 de julio de 1994). El 46% de los expedientes recibieron fallos positivos, mientras el 53.5% fueron rechazados por falta de fincas afectables y por otras causas de improcedimiento... En los primeros cinco meses de 1994 los grupos que recibieron fallos negativos volvieron a presentar 249 nuevas solicitudes. Pero estas demandas fueron planteadas ahora en un contexto muy distinto al que prevaecía en 1992 y 1993."

Es evidente que para enderezar las abismales injusticias económicas y sociales, en un estado fundamentalmente agrario, con una clase dominante finquera y ganadera, hay que ir al tema de la reasignación de la tierra. La cuestión no es sólo que algunas propiedades sean auténticos latifundios, sino que todas contrastan con la desposesión extrema de los indios. En Chiapas el problema de la tenencia de la tierra no es tanto de ilegalidad como de injusticia, y los grandes y medianos propietarios, por más que estén dentro de la ley, no pueden vivir tranquilos con un cerco de comunidades indias oprimidas.

Casi el 30% del rezago agrario nacional se sigue concentrando en Chiapas. Poco más de 100 personas poseen el 12% de las tierras. En la entidad dominan finqueros y los grandes propietarios ganaderos, no más de 6 mil familias que detentan más de 3 millones de hectáreas –prácticamente la mitad de la superficie con la que cuenta el conjunto de la sociedad rural. Salvo escasas excepciones, la mayoría de estos finqueros han basado la obtención de sus ganancias en la sobreexplotación del trabajo rural y en métodos o formas extensivos –y de depredación– de cultivo. Y más allá del conflicto directo por la tierra, la problemática agraria de la entidad se ha complicado debido a otros factores: dotaciones empalmadas, ejecuciones existentes sólo en planos, resoluciones presidenciales sin ejecución.

La solución al problema de la tierra en Chiapas pasa, en consecuencia, por una recomposición de la estructura propietaria, que según Julio Moguel va desde el desahogo del rezago de “obvia resolución”; la simple y llana afectación de todos los latifundios (sin el recurso moroso y burocrático definido en el actual artículo 27 de la Constitución en el que se da a los propietarios –a partir de la notificación correspondiente– el plazo de un año para poner su propiedad “en pública almoneda”); la creación de un fondo de tierras para reasignarla a campesinos y comunidades formado por

¹ Este capítulo se apoya fundamentalmente en las notas de Julio Moguel en torno al problema agrario aparecidas en “Chiapas: la tierra y el poder”, Julio Moguel, Sergio Zermeño, Armando Bartra y Jorge Fernández de Sousa (1995).

la compra gubernamental a particulares, el uso de tierras ociosas y de terrenos nacionales y la expropiación de fincas donde se demuestre que siguen prevaleciendo formas acasilladas de explotación del trabajo; la redefinición de los límites de propiedad establecidos en el actual artículo 27 de la Constitución, particularmente en lo que se refiere a la propiedad ganadera –y de bosques, sin duda, por sólo mencionar lo más grosero de la Carta Magna salinista–, para acabar con el “latifundismo constitucional”, definido por la posibilidad de que un propietario pueda tener el terreno suficiente para “alimentar a 500 cabezas de ganado” y, de paso, tenga el recurso de cambiar el uso de sus tierras –a la actividad agrícola– sin que ello ponga en peligro la dimensión de sus límites propietarios; ensayar un proceso de reordenamiento territorial que, sustentado en la voluntad propia de pueblos y comunidades –lo que supone otra reforma referida a las “autonomías” y al régimen de ordenamiento político en lo municipal–, permita establecer o restablecer una relación adecuada hombre (comunidad)-tierras para efectos de organización social y productiva, y para comprometer a los sujetos sociales y productivos en la perspectiva de un desarrollo sustentable.

La propuesta gubernamental en el diálogo de San Cristóbal, en marzo de 1994, dio un pequeño paso favorable cuando reconoció que “en Chiapas no se realizó a plenitud el proceso de reforma agraria”, y cuando se reconoció la existencia de latifundios. Se avanzó sin duda cuando se habló de la constitución de un “fondo de tierras” para reparto, y de la necesidad de “integrar y proteger el patrimonio familiar en las comunidades”. Se vio actitud negociadora y de propuesta cuando se habló de la urgencia de promulgar una “ley de justicia agraria del estado”, así como de una Ley General de los Derechos de las Comunidades Indígenas. Pero todo pareció ser un contrasentido cuando tales propuestas no fueron acompañadas por la promesa o la idea del cambio constitucional, particularmente en el artículo 27 y en el 4o. (referente a la cuestión indígena), pues ello significaba, en los hechos, que no habría real reforma agraria, que se estaba pensando en asignar sólo –y por el mecanismo burocrático y excluyente– algunos “excedentes”; que el “fondo de tierras” tendría una limitada posibilidad de resolver problemas esenciales. En términos generales, la respuesta ofrecía una salida parcial o marginal a la situación agraria, particularmente al reclamo de tierras de las comunidades indígenas (de Chiapas,

aunque puede tocar a todo el resto del país), ya que si el artículo 27 constitucional permanece en sus actuales términos, las posibilidades de procedimientos dotatorios continuarán cerradas para cualquier grupo campesino, sea éste indígena o no.

Ante problemas tan delicados y demandas tan poderosas contrastan las soluciones que en el año 1994 se emprendieron, plagadas de corruptelas y en el tradicional estilo de hacer promesas dejando que el tiempo, y quizás las escisiones, se encarguen de diluir la identidad colectiva de los demandantes.

La siguiente es una reseña de la forma en que fueron empleados los recursos públicos durante el año 1994 para afrontar el problema:

Sobrepuestos en la compra de tierra, adquisición de predios sin avalúo previo, colusión entre funcionarios de gobierno y pequeños propietarios con el fin de derramar 'comisiones' para los primeros en la compra de propiedades y la venta de ranchos inexistentes, son parte de las irregularidades que han comenzado a aflorar como resultado de la política agraria seguida en 1994.²

Algunas estimaciones ubican que sólo el 10 por ciento de las 38 mil hectáreas de propiedades que se adquirieron como parte de la política seguida se relacionaron directamente con la invasión de predios, mientras el resto —señala la Unión Ganadera de Chiapas— fueron predios que no tenían vínculos directos con la problemática agraria y se basó en criterios de beneficios personales a los adquirentes, así como derrama de "comisiones" hasta de 30 por ciento a funcionarios.³

² Urrutia, Aranda y Rodríguez (1995).

³ "Hay casos extremos: dentro de las 38 mil hectáreas registradas como adquisiciones, está contabilizada la compra del rancho Los Girasoles, que no existe en todo Chiapas... La ocupación de tierras llegó a rebasar las justificadas reivindicaciones agrarias e involucró las autoinvasiones de propietarios que aprovecharon para vender 'ranchos malos a precios de ranchos productivos'... En la lista oficial de adquisiciones aparece una importante cantidad de figuras relevantes durante la administración de Absalón Castellanos como gobernador del estado. Germán Giménez, actual diputado federal, dirigente de los productores de maíz de La Fraylesca y ex líder de la GNC, vendió algunas de sus propiedades en 2 millones 120 mil nuevos pesos, con una extensión de 424 hectáreas, contabilizando dos familias... Roberto Muñoz Liévano, procurador general de Justicia del estado durante el sexenio del general Castellanos, vendió propiedades por valor superior a los 2 millones de nuevos pesos, mientras el ex rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Heberto Morales Constantino, llegó a cotizar la hectárea de su predio ubicado en el municipio de San Cristóbal de las Casas en 70 mil nuevos pesos..." Urrutia *et al.* (1995).

28. MANY MEXICOS

Desde la perspectiva zapatista, se calculó que durante 1994 eran muy bajas las expectativas de llegar a acuerdos de pacificación con un gobierno que se encontraba al término de su mandato. Reforzada por el asesinato de Colosio, la actitud del zapatismo fue de espera, al igual que la de su adversario, pensando que un nuevo régimen, sobre todo si era cardenista, les daría una gran fuerza y legitimidad. Pero incluso si el resultado electoral fuera de un empate, se encontrarían frente a un país plenamente activo y en reacomodo, muy favorable para su consolidación y su articulación con otras fuerzas opositoras. En estas condiciones la *Segunda Declaración de la Selva*, hacia mediados del año (es decir, la negativa total a aceptar los cambios reformistas a través de inversiones Pro-nasol propuestos por el presidente Salinas mediante su delegado Camacho Solís), no sorprendió a nadie, pero nos permite entender por qué los conflictos, movimientos y luchas sociales en México difícilmente se mantienen en el ámbito en el que nacen, lanzándose inmediatamente al plano de toda la nación. Y es que, al no encontrar *espacios o canales intermedios para hacer política* (lo que supone que la mediación camachista fue sumamente débil y muy mal respaldada por las acciones del presidente de la República), al echar mano del mayor número de alianzas en una búsqueda precipitada por acumular fuerzas, se apuesta a ganarlo todo o a perderlo todo, lo que conduce a desquiciar el orden en un incontrollable encadenamiento de malestares o a destrozarse contra el muro del Estado; y es que, ya lo decíamos, más vale esto que entrar rápidamente en una dinámica de desgaste, de escisiones internas o de aniquilamiento selectivo ejercido por el tlatoani: echa a andar entonces la ya citada lógica del suicida (las luchas sociales y su dirigencia) y el asesino (el Estado), la catástrofe sangrienta de la eliminación de uno u otro. Así, la guerrilla chiapaneca, más allá de la confrontación (que es la característica de toda guerra), se vio empujada a lanzarse a la acumulación de fuerzas a nivel nacional.

El asunto es que el conflicto no pudo circunscribirse a lo *local-indígena* en que lo quiso mantener el gobierno mexicano (una *Ley*

General de las Comunidades Indígenas), sino que pasó irremediablemente a plantearse como un problema *agrario-campesino* y, en esa medida, generalizable a enormes regiones del país (resultó obvio que la táctica de dilación gubernamental, de dejar morir por cansancio, no podía funcionar con una guerrilla y con las elecciones tan cerca). La cuestión es que, con el auge enorme de las invasiones de tierras, pareció que se comenzaba a vivir en el estado de Chiapas una transmutación desde una guerra entre ejércitos (uno en las ciudades mestizas, otro en la Lacandonia), hacia una guerra entre grupos sociales (los propietarios de predios y fincas apoyados por la institucionalidad gubernamental *versus* los invasores indígenas y campesinos de las tierras, apoyados por el zapatismo).

La existencia del ejército zapatista en la selva comenzó a no ser lo más significativo y, para usar una imagen, sus soldados se despojaron del paliacate y el arma larga "trasminándose" desde la selva hacia la lucha agraria. Así, reaparecerían en toda la región, y más allá, en su calidad de campesinos invasores o simplemente de invasores de palacios municipales, desde donde declararían la independencia de los municipios por ellos tomados y la autonomía indígena de esas regiones. Eso es lo que aconteció en la madrugada del 19 de diciembre (19 días después de la toma de posesión del nuevo régimen y nueve días después de que éste, a su vez, le dio posesión, bajo un operativo fuertemente militar, al nuevo gobernador chiapaneco, acusado de fraude electoral): los zapatistas se apoderaron de cerca de cuarenta municipios y con ello pusieron en claro que su movimiento no era esencialmente militar sino esencialmente social y cultural. Menos de 24 horas después, el peso se devaluaba 50%, las reservas nacionales se consumían al tiempo que el capital internacional volaba a otras regiones del globo más estables.

Para el ejército mexicano, sin embargo, esta transmutación sería más costosa, pues aunque al principio del conflicto sus acciones fueron de una elevada violencia contra la población civil indígena, en el nuevo escenario se evidenció su toma de partido por las clases poseedoras, y su complacencia hacia los desalojos violentos de las llamadas guardias blancas.

La estrategia se complicó desde que no fue posible mantener el conflicto en el ámbito indígena-local con invasiones congeladas, organizaciones campesinas divididas, soluciones "pronazolizadas" y un interlocutor acorralado (el EZLN). El "caso de excepción"

(frente al modelo globalizador) en que el gobierno neoliberal quiso convertir al conflicto chiapaneco, no pudo mantenerse circunscrito a una parte del México profundo (los indígenas del atípico estado de Chiapas), y corría el peligro de desbordarse rápidamente no sólo sobre el resto del indigenismo del país, sino sobre el México tradicional campesino (el México maicero). No se trataba más de un "caso de excepción", ya que estaríamos hablando del paso de uno a veinte millones de mexicanos.

El asunto se volvió complejo, en efecto, porque si todos estos mexicanos constituían una excepción, es decir, no podían con el TLC y, además, el país se hundía en la crisis económica debido a la devaluación, el déficit de la balanza de pagos, el desmantelamiento de la industria nacional, el endeudamiento en dólares y la imposibilidad de pagarlos, entonces lo que se ponía en jaque era el modelo mismo de la globalización.

Aquí se antoja un ejercicio de reordenamiento de las dimensiones: el indigenismo que el Estado mexicano quisiera convertir en excepción (sacarlo del libre juego de las fuerzas locales y del libre comercio mediante la prometida *Ley General de las Comunidades Indígenas*), abarcaría un poco menos de un millón de indígenas chiapanecos (el 1% de la población mexicana). El *México profundo*, con fuertes referentes culturales aún anclados de manera orgánica en la tradición indígena, contaría con unos 10 millones de habitantes. Así, el *México tradicional* (I), suma del México profundo más el *México maicero* (el de ese gran campesinado deprimido y sin competitividad), lo compondrían alrededor de 20 millones de compatriotas. En el otro extremo podríamos hablar de un *México transnacional*, aquel que ha sido capaz de conectarse competitivamente con la globalización (restando a los trabajadores de la maquila, de la industria transnacional y de la agricultura de exportación que distan mucho, por sus ingresos, de poder ser considerados como actores legítimos y participativos del país de la población consumista). Estrictamente hablando, se encontrarían enganchados de manera activa al mundo de la globalización uno de cada diez mexicanos. Naturalmente que otro 20% de compatriotas lo constituimos los hijos, que hoy vivimos en peligro, del *México moderno*, el de la etapa sustitutiva de importaciones, el de la industrialización y la urbanización en los decenios que fueron de la segunda guerra mundial a la crisis de los ochenta. Podríamos hablar así de un *México integrado* (III), compuesto por tres de cada diez

mexicanos entre transnacionalizados y modernos: empresarios competitivos y exitosos unos, en el borde de la quiebra la mayoría; estudiantes cuyo esfuerzo formativo es inverso a su futuro laboral; obreros y empleados que sufren pauperización y pérdida de derechos laborales, herencia del pasado; legiones de empleados con salario mínimo, capacitación mínima, organización mínima y escolaridad y cultura mínimas. Entre el 20% del México tradicional y el 30% del México integrado se extiende, con toda su crudeza y su desorden, el *México roto* (II), el desarraigado, el de la modernización salvaje, uno de cada dos mexicanos: los grupos sociales del modelo anterior que nunca fueron integrados por la modernidad y a los que se agregó la pedacería dejada por la "década perdida" y el *shock* neoliberal; las masas de la marginalidad urbana y del mercado informal, a los que hay que agregar los obreros de las maquiladoras y sus desordenadas familias (5% de los mexicanos para el año 2 000); así como a los jornaleros migrantes, a los habitantes de pequeñas y no tan pequeñas ciudades, que ya no son campesinos y para los que casi no hay empleo en esas economías regionales condenadas a no ser competitivas en mercados abiertos, etcétera.

29. CHIAPAS, LO LOCAL Y LO NACIONAL

No cabe duda de que Chiapas ha venido a poner en claro que tan excepcional es el *México profundo* como el *México transnacional*, y que tan iluso es querer convertir el todo hacia un extremo como hacia el otro (nada más a los miembros del equipo neoliberal se les ha ocurrido tal idea, a nadie más). "No creo que el juego del mercado de la oferta y la demanda vaya a resolver los problemas de miseria que existen, por ejemplo, en la Mixteca oaxaqueña. Ahí tiene que haber una política deliberada del gobierno", fueron palabras pronunciadas por Luis Donald Colosio, candidato priista a la presidencia de la República, en el último día de su vida.

Al aceptarse una excepción en Chiapas (o en la Mixteca), que el régimen quiere que sea del 1% pero que en realidad involucra a por lo menos uno de cada dos mexicanos en el estatus de damnificados excepcionales, ya se perfila con evidencia la catástrofe de la utopía neoliberal: ¿cómo diferenciar al México profundo del tradicional-campesino y del México roto? Parece claro que la cuestión chiapaneca nos obliga a repensar el modelo de desarrollo: tratar de ser competitivos en el mundo de la globalidad está muy bien, es más, cuanto más exitosos podamos resultar en ese esquema mejor será (conscientes de los sacrificios que ello acarrea para los obreros y obreras de la maquila, la agromaquila y otros servicios adláteres). De ahí a abrir la frontera inocentemente a los productos agrícolas básicos (maíz, frijol, carne, leche...), a los servicios y a las manufacturas producidas a escala mundial (convirtiendo a nuestros empresarios en fayucheros o solicitantes de franquicias), hay un paso muy grande si se toma en cuenta, además, que cada vez que hemos resultado competitivos en algún producto, Estados Unidos ha encontrado alguna legislación interna que limite tal éxito (cemento, acero, cerveza, tomate, aguacate, atún, transporte terrestre...). Corea, Japón, Taiwán, Malasia o Filipinas jamás abrieron sus fronteras a la importación de arroz barato de otras latitudes durante su etapa de integración transnacional, y todavía hoy se oponen a desemplear a su nutrido campesinado. Corea y Japón cerraron sus fronteras a manufacturas de mayor competitividad

durante lapsos de tiempo importantes que les permitieron reforzar esos renglones por la vía de la investigación científica en las universidades y en las empresas o, incluso, mandando a científicos a capacitarse en el exterior o trayendo a técnicos altamente capacitados en esas ramas.

Excelente carne traída del extranjero costaba la mitad, antes de la devaluación, con respecto a la carne de calidad moderada producida en Chiapas; el café -hacia el que se orientó durante años la producción de aquel estado pensando en ser exportadores mundiales- no valía la pena ni sembrarlo hacia la época en que se levantaron los zapatistas, por los bajos precios internacionales y la competencia de tantos países en el mundo que producen lo mismo. No queda otra solución en regiones como el sureste mexicano que modernizar lo tradicional, el ejido entre otras cosas, pero respetando y fortaleciendo lo social, es decir, centrando el proyecto en la gente que vive ahí, aunque eso signifique cerrar la frontera a muchos productos de mejor calidad y más baratos. Dar la apariencia de un encierro en el autoconsumo no puede ser descartado si ello permite cubrir una parte estratégica del sustento (maíz y frijol).

Regresamos así al problema del *modelo nacional* de desarrollo y en esa medida a la cuestión del *control del Estado*. En esto, de nuevo, los zapatistas del EZLN no tenían otra posibilidad que plantear desde el principio (*Primera Declaración de la Selva...*), como una cuestión central, el asunto de las elecciones y de la democracia en el país, es decir, el problema nacional-estatal, aunque con ello irremediablemente quedaron inscritos en la dinámica mexicana, la que hace imposible pensar en soluciones "técnicas" circunscritas a la región (en este caso los Altos y las Cañadas chiapanecos): es enorme la inercia que nos empuja hacia los grandes problemas, hacia los temas del modelo global de desarrollo y del tipo de Estado y de régimen que se quiere; dramática resulta la dinámica de las luchas sociales en México y éste es un ejemplo muy claro: surgiendo de lo más enraizado del indigenismo y teniendo como uno de sus objetivos la autonomía de las etnias, entra en una dinámica que la conduce a la acumulación de fuerzas en todo el país, a la lucha contra el Estado, a convertirse en un actor nacional de grandes dimensiones o ser arrinconado, empequeñecido y olvidado en la selva; es la ley de hierro de la mexicanidad: el suicida y el asesino.

30. EZLN: DEL MOVIMIENTO SOCIAL A LA GUERRA DE GUERRILLAS

El día 9 de febrero de 1995, Zedillo tomó la decisión de romper la tregua con el EZLN. Con una cierta perspectiva en el tiempo podemos rearmar los pedazos y entender por qué el presidente tomó esta medida arriesgándose incluso a pagar el costo de la radicalización social (había que ver la furia de los jóvenes al grito de "todos somos Marcos", durante las manifestaciones que sucedieron a esa desafortunada declaración), y destrozando de plano el Acuerdo Político Nacional firmado apenas en enero por todos los partidos para hacer frente a la crisis económica que estalló en diciembre de 1994 y que provocó una devaluación del peso frente al dólar de cerca del cien por ciento. El zedillismo, dijeron Cárdenas y el dirigente perredista Muñoz Ledo en aquellos actos masivos, se desdora como un régimen bipartidista de Estado: PRI-PAN. Y es que el procurador de justicia de la República, quien giró las órdenes de aprehensión contra Marcos y la dirigencia zapatista, es un miembro del partido Acción Nacional a quien Zedillo había invitado sólo 40 días antes a formar parte de su gobierno.

Setenta y dos horas después de giradas esas órdenes de aprehensión, el dispositivo se encontraba perfectamente clarificado: un diálogo y un acuerdo políticos con el zapatismo tal como se encontraban las posiciones militares entre el Ejército Zapatista y el Ejército Federal hasta el 9 de febrero de 1995 no era aceptable para el presidente Zedillo y para las Fuerzas Armadas (y seguramente tampoco lo era para las clases dominantes regionales, el empresariado nacional y las instituciones financieras nacionales e internacionales). Tal acuerdo hubiera implicado reconocer de alguna manera el control por parte de esas fuerzas sobre la mitad del territorio chiapaneco en la que se había promulgado la autonomía de los municipios indígenas y se comenzaba incluso a recaudar impuestos para el gobierno paralelo del candidato perredista a la gubernatura de Chiapas: Amado Avendaño.

En menos de cien horas de rota la tregua la situación cambió radicalmente: ahora el EZLN se encontraba replegado en el interior

de la selva Lacandona, mientras el ejército mexicano estableció su control militarizando los municipios autonomistas. Visto así el operativo pareció constituir un éxito rotundo. Sin embargo el costo no fue bajo de ninguna manera, pues el resultado que se tuvo fue la militarización de una parte del territorio mexicano y el peligro de que esas fuerzas se eternizaran ahí para asegurar que los grupos populares-campesinos-indígenas no pudieran retomar los predios y los palacios municipales. Es decir: el ejército había pasado a ser el garante del *statu quo*.

Como se ha puesto de manifiesto en otros países latinoamericanos, el control militar y la destrucción de las intermediaciones civiles acarrea costos insospechados, al tiempo que aleja la solución en torno a los problemas sociales que dieron pie a dichos levantamientos armados. En efecto, si tomamos los ejemplos de Guatemala y Perú, los otros dos países con indigenismo profundo y guerra campesina, podremos constatar (Kruijt, 1994) que en la persecución de la guerrilla los presidentes fueron convertidos prácticamente en rehenes de sus fuerzas armadas, y terminaron inevitablemente siendo asesorados por intelectuales y políticos del ejército. La sorpresiva elección del presidente Fujimori y la debilidad consecuente de su plan de gobierno, lo convirtieron en huésped del Círculo Militar.

En México, al menos hasta los primeros meses de 1995, no se había establecido una situación de guerra prolongada y la sociedad civil mexicana se mantuvo firme tratando de evitarla. Lo que no ha quedado claro es hasta dónde el gobierno del presidente Zedillo ha intentado con fuerza realmente alejarse de ese escenario. Los días que sucedieron a la ruptura unilateral de la tregua chiapaneca (y sus pretextos infundados), nos pusieron a temblar porque constituyeron *de facto* la entrega del conflicto del sureste a las fuerzas armadas y se acompañaron del desmantelamiento, o del retraimiento al menos, de los actores políticos y de la sociedad civil (comenzando por la Iglesia progresista, a juzgar por los ataques físicos y a través de los medios de comunicación al obispo Samuel Ruiz). Sin estos actores, es impensable la reconciliación y la reconstrucción. En Ayacucho, por ejemplo, la autoridad de las universidades dio paso a los comandos militares, la Iglesia católica a los liderazgos evangélicos atomizados, el sector público y la burocracia regional se desdibujó en fundaciones privadas, los grandes comerciantes en mafias coqueras y los comuneros indígenas se convirtieron en rondas campesinas autoarmadas.

Con los zapatistas arrinconados en la selva y en calidad de delincuentes (debido a la orden de aprehensión que pesó sobre ellos) y con Samuel Ruiz desvirtuado por el gobierno y los medios, no resultaba sincero el llamado del presidente Zedillo a reiniciar las negociaciones de paz, un llamado amplificado por los medios de comunicación, esperando un titubeo en algún punto para mostrar al EZ como renegado y partidario de la violencia.

Si bien es cierto que el ejército mexicano en su avance hacia la Lacandonia no atentó *de manera directa* contra la integridad física de la población civil (aunque existen claras excepciones), lo cierto es que su labor fue la destrucción sistemática de los medios de reproducción material de todas las comunidades sospechosas de simpatizar con el movimiento zapatista (que son la gran mayoría), aquellas de las que huyeron sus habitantes, con excepción de los viejos y algunos niños y mujeres. En esas comunidades fueron destruidos los utensilios domésticos, los aperos de labranza (reatas, sillas de montar, machetes, hachas, limas...), destruidos (no robados) los radios, los hornos para el pan, los molinos y, más importante aún, los granos para la inminente siembra; reventadas las tuberías, vaciados los depósitos de agua (cisternas, ollas tradicionales bajo tierra, cubetas...), etc. Entonces el ejército retiró de los poblados a sus efectivos y su alucinante tecnología bélica, para concentrarse en dos operativos complementarios: por un lado, adelantó sus columnas lo más posible ya dentro de la selva para provocar el repliegue del EZLN, pero sobre todo, como lo hace un exprimidor de limones, para extraer a la población civil que se había refugiado en la selva, a la que vimos regresar, rendida: familias enfermas, exhaustas, moralmente destruidas, atestiguando con rabia, impotencia y llanto apenado la destrucción de todos sus bienes, el fin de la reproducción campesina, la angustia de no poder sostener el ciclo vital en un medio tan adverso, la inminencia de la muerte: "nos chingó el gobierno", decían, personalizando al Ejecutivo, y rechazando las despensas Pronasol.

Junto a esto pudimos atestiguar el repoblamiento de muchas comunidades con contingentes de refugiados que habían abandonado la zona durante el primer año del conflicto y que se consideraban más afines al gobierno, grupos de desplazados totalmente dependientes del sustento gubernamental (al grado de no tener que trabajar): es decir, la creación de "aldeas estratégicas" -como fue denominada esta técnica en Vietnam y en Guatemala- cuya

más reprochable función es la de delatar a los miembros de la comunidad que son sospechosos de ser zapatistas o simpatizantes del zapatismo.

Visto en su conjunto, el operativo tiene como meta el separar a la dirigencia zapatista de la base social del zapatismo; destruir lo que fue un movimiento social, atomizando y desmoralizando a sus bases, separándolas de su inteligencia (no únicamente militar) arrinconada en la selva. Esto equivale a dismantelar una identidad colectiva plena de fuerza cultural y material, plena de esperanza -y única vía para el tan cacareado "desarrollo autosustentado"- para hacerla tributaria del tlatoani mexicana. Un movimiento social que pide a gritos durante un año que lo reconozcan en su autonomía, que manda señales desesperadas de su alta vocación sociopolítica y cultural (con moñitos blancos en los cañones de los rifles 22), es obligado, por la fuerza de "los ejércitos" del centro, a convertirse en una guerra de guerrillas, de la misma manera en que el Consejo Nacional de Huelga en el 68 fue obligado a convertirse en una cofradía de conspiradores y "delinquentes".

Si el Estado mexicano se hubiera encargado del desarrollo de Estados Unidos durante el siglo XIX, muy probablemente hubiera perseguido a los granjeros hasta quitarles todo, dispersarlos y convertirlos en pordioseros "pronasol". ¿Será que nuestra cultura no puede con la libertad del otro? Si una región no está bajo control de un enviado del centro (un presidente municipal priista chiapaneco, en el ejemplo, organizador de la sumisión y destructor de la identidad colectiva), la soberanía parece estar en peligro. Nuestra soberanía estatal no sabe convivir con la soberanía social. Qué cultura tan perversa y tan cobarde la de este orden político al que no le parece grave hipotecar el petróleo con Estados Unidos durante muchos años o para siempre -como lo han evidenciado los acuerdos internacionales para hacer frente a la crisis de 1995-, pero se aterra y manda tanques y helicópteros artillados para arrebatársela a unos indios la bandera nacional y destrozar sus medios de reproducción.

31. ¿TAMBIÉN DESDE EL ZAPATISMO?

Desde el zapatismo, ¿no se reproduce también la ley de hierro de la mexicanidad? El movimiento zapatista de los indios chiapanecos tuvo una gran repercusión en la cultura nacional y fuera de México porque era una innovación en varios sentidos: en primer lugar, se trataba de una vanguardia no foquista sino largamente implantada y compenetrada en los pueblos indios, respetuosa de aquella cultura y reconstructora de ella; fue y sigue siendo la imagen de los incluidos al servicio de la exclusión. En segundo lugar habló desde un principio de los asuntos vitales de esos pueblos; definió sus límites frente a la locura globalizadora haciendo estallar la revuelta el 1 de enero de 1994, en la fecha exacta en que entró en vigor el TLC, e inmediatamente puso a discusión el asunto de la autonomía de los pueblos indios.

Es cierto que durante todo ese tiempo no se descuidó la reorganización de los municipios de las Cañadas y la Selva, en donde los zapatistas habían marcado su territorio desde que echó a andar la amnistía, ni se descuidó tampoco la cuestión de la subsistencia e incluso la reeducación en torno a ciertos principios (como la erradicación del consumo de alcohol, por ejemplo). Es cierto, en fin, que el llamado Gobierno en Rebelión (encabezado por Amado Avendaño, candidato perredista derrotado en las elecciones gracias a un fenomenal fraude que no sorprendió a nadie) había reforzado la autonomía de las regiones y los municipios declarados autónomos (aquellos que habían quedado bajo la circunscripción zapatista desde las primeras dos semanas del conflicto). Sin embargo, como dijimos, el zapatismo decidió ampliar su radio de influencia hasta ocupar militarmente casi la mitad de los municipios del estado de Chiapas, hacia el 18 de diciembre de 1994 (lo que se asoció con la devaluación del peso 24 horas después de dicha maniobra).

¿Coincidían estas nuevas fronteras con la identidad sustentable del zapatismo? En un sentido sí, quién lo puede dudar, porque esos municipios, en especial los de los Altos de Chiapas, son abrumadoramente indígenas y profesan gran simpatía por el EZLN y, en algún grado, militan en él. Pero quizás no, desde otra perspec-

tiva, porque el zapatismo excedió los límites de sus fronteras naturales ocupando esos nuevos territorios y permitió justificar, un mes y medio más tarde, la ruptura de la tregua por parte del gobierno a partir del 9 de febrero de 1995 y su avance sobre los territorios autónomos, con el claro objetivo de separar al zapatismo social del zapatismo militar.

Veinte puntos de abasto, Centros de Acción Social, fueron estratégicamente instalados en aquellos municipios que durante el año 1994 fueron zapatistas.

Algunos líderes campesinos de estas regiones, durante una larga época cercanos al zapatismo, y con gran legitimidad entre sus bases sociales, declaraban no poder competir así: "estamos perdiendo a nuestras bases; aquéllos les dan láminas, dinero y despensas, nosotros los convocamos a marchas y plantones". Las organizaciones indígenas y campesinas del estado de Chiapas decidieron, abrumadoramente, el 27 de mayo, entablar negociaciones con el delegado del presidente de México con la esperanza de que a través de sus organizaciones se canalizaran los recursos gubernamentales a la región.

La reacción del zapatismo a esto fue fulminante: firmado por el subcomandante Marcos, en forma de misiva a la prensa nacional, pudimos leer el siguiente mensaje:

Al establecer una negociación paralela a la de San Andrés, el grupo de claudicantes que "dialogan" [con el encargado para canalizar los recursos gubernamentales], respondió con la traición a los anhelos de unidad del pueblo chiapaneco. Se encuentran desanimados por los golpes recientes que hemos sufrido unos y otros... Olvidaron que la victoria es producto de un trabajo de organización, de suma de esfuerzos..."

Los líderes agrarios se lamentaban por este veredicto y se limitaban a repetir que ellos llevaban "veinte años organizando de manera independiente a los campesinos en estas regiones y vamos a vivir y luchar aquí al menos otros tantos años".

Junto a eso, naturalmente se instauró un amedrentamiento permanente hacia los grupos no controlados: el ejército entra directamente a domicilios escogidos y conduce a los jefes de familia a la escuela o a la iglesia para interrogarlos sobre los dirigentes de la comunidad, su pertenencia al zapatismo, el abasto a las tropas en la montaña, exigiéndoles demostrar su distancia con respecto al EZLN al afiliarse a las organizaciones oficiales. No se puede hablar

de maltratos directos y torturas, pero uno puede imaginarse la situación psicológica que conlleva para esas personas y sus familias el quedar señalados de esa manera (de la "guerra de baja intensidad" son parte estas maniobras desmoralizadoras).

De manera que podemos preguntarnos ante este panorama si del lado del zapatismo armado no hay acaso también un regreso a la ley de hierro de la acción social en un país de herencia estatal como es México: por parte de los movilizados la urgencia por acumular fuerzas nacionales para derrotar al Estado nacional: la lógica suicida de destruirlo todo y ocupar ese espacio, o estrellarse contra el muro del autoritarismo; por parte del Estado, el no poder convivir con ningún promontorio, por pequeño que sea, fuera de la pirámide de Aztlán.

¿Cómo no explicitar estos temas si, como decíamos, el zapatismo surgió como un movimiento social cuya fuerza ha estado constituida por su contenido casi ciento por ciento indígena? ¿Cómo no explicitar estos temas si hoy constatamos con angustia que el zapatismo social se vacía, es desconstruido por los brazos del tlatoani y sus organizaciones y dirigencias todavía auténticas, o alguna vez auténticas, son golpeadas por las fuerzas dominantes y por el propio EZLN y esas comunidades se dividen, se confrontan en la inminencia de la guerra fratricida? Es en el referente regional y en la utopía de superar la situación de miseria indígena en donde radica la fuerza y la legitimidad del zapatismo.

En este punto entre lo local-regional y lo nacional se han generado ciertas tensiones entre organizaciones indígenas y campesinas, por un lado, y el EZLN por el otro. Ejemplifiquemos esto con la Consulta (referéndum), de agosto de 1995, por medio de la cual los zapatistas pusieron a la consideración de todos los mexicanos la posibilidad de devenir una fuerza política y hacer pasar a segundo plano su autodefinición como fuerza beligerante.

¿Realmente el pueblo de México nos espera como una fuerza política organizando la lucha a nivel nacional? (se preguntaba el subcomandante Marcos frente a la periodista Carmen Lira, a unas horas de la Consulta). Porque a eso aspiramos, prosigue, a ser una fuerza política nacional, no local... Nuestro trabajo va a terminar en la construcción de ese espacio de nuevas relaciones políticas [La Jornada, 25-26 de agosto de 1995].

El resultado de la Consulta, sin embargo, no coincidió exactamente con esta visión general, nacional, de lo que debe ser el za-

patismo: los votantes no quisieron, en un 53% (contra 37%), que el EZ, al abrazar la vía política, se uniera (¿se mezclara?), con el resto de las organizaciones políticas existentes; y algo más revelador: entre la población indígena este sentimiento fue más acentuado (60-30%). Es más, en ciertos poblados fuertemente zapatistas como Patihuitz, la asamblea de ARIC-independiente votó en forma unánime por que el EZLN no se uniera con el resto de las fuerzas políticas. Curiosamente la votación en la asamblea de las ARIC-oficiales, fuertemente controladas por el gobierno, es obvio, votó unánimemente por que sí se uniera al resto de las fuerzas políticas nacionales (Rosa Rojas, *La Jornada*, 7 de septiembre de 1995).

Incluso, en la Asamblea Nacional Indígena (expresión india de la zapatista Convención Nacional Democrática), que tuvo lugar en Oaxaca paralelamente a la Consulta, varios delegados coincidieron en que para el alto mando zapatista "está predominando el diálogo nacional", y manifestaron su extrañeza por el hecho de que el EZLN no haya incluido la demanda del "reconocimiento de los derechos de los pueblos indios" para no decir autonomía, pues agregaban que ese término parece asustar a mucha gente (*La Jornada*, 27 de agosto de 1995).

En varios momentos de este conflicto se ha planteado el asunto de "lo local y lo nacional". ¿Ser local quiere decir perderse en el olvido de las cañadas y la selva lacandona? ¿Ser fuerza nacional quiere decir lo contrario?

El zapatismo surge como una fuerza reivindicativa en torno a la pobreza y la segregación secular, hoy agudizada, de las regiones indígenas de Chiapas: se trata, ya lo apuntábamos, de la reconstrucción de una identidad social y cultural, local y regional, una moral directamente contrapuesta a la locura globalizadora y al oportunismo de las fuerzas políticas de "los integrados". Así lo expresó el propio Marcos en su extraordinario ensayo al inicio del conflicto: "El Sureste entre dos vientos..."

Muchos coincidimos en que desde esta posición el zapatismo construyó su fuerza, y los resultados de la Consulta del domingo 27 de agosto de 1995 nos lo corroboran. Es con base en esta dimensión local-regional convertida, en el extremo, en utopía redentora como se han formado grupos de apoyo al zapatismo en todas partes del mundo: desde lo local-regional, desde las cañadas y la lacandonia, el zapatismo logró una proyección universal (Héctor Díaz-Polanco, 1991; Consuelo Sánchez, 1994).

Pero quizás sucede que el EZLN ha considerado que no hay solución regional si no hay primero solución nacional, que nada se puede desde lo local, que es necesario acumular primero la mayor cantidad de fuerzas inconformes para, así, aunque sea por la vía electoral, derrotar al gobierno, a su partido, al neoliberalismo y a las fuerzas dominantes que hoy son transnacionales. Cómo no respetar esa idea y, sin embargo, cómo no recordar que con esa lógica se han perdido la casi totalidad de las luchas sociales de la historia posrevolucionaria de México.

Nos dice Marcos en su comunicado del día de la Consulta:

El iya basta! se multiplica... el ridículo golpe a los trabajadores de Ruta 100 [red de autobuses de la ciudad de México], puso a la dignidad obrera en las calles; la sordera a los reclamos democráticos del pueblo tabasqueño provocó que el Éxodo de la Dignidad del Sureste se hermanara con el del centro; el cobarde asesinato de los campesinos guerrerenses, veracruzanos e hidalguenses tendió un puente de sangre morena hasta los indígenas chiapanecos; la militarización de la capital del país recordó a los capitalinos que tienen derecho a ser ciudadanos... La complicidad gubernamental (con la banca) generó un amplio movimiento ciudadano (de deudores), El Barzón, que se resiste a ser despojado de todo lo logrado con su trabajo y esfuerzo... [*La Jornada*, 27 de julio de 1995].

Ojalá tenga razón Marcos y que toda esa acumulación de males se conjugue para lograr un cambio hacia la democracia y no hacia el desorden total o hacia la militarización de México. En septiembre de 1968 también veíamos acumularse de nuestro lado a todos los mexicanos: Topilejo y los campesinos, los ferrocarrileros de Pantaco y la clase obrera... El cambio no se produjo, perdimos la universidad, la dirigencia del movimiento fue encarcelada o muerta y las demandas gestionadas por el propio gobierno. Algo así percibimos cuando el EZLN se brincó, el 18 de diciembre, las líneas del ejército sobre las que estaba establecida la tregua. Seis semanas más tarde fue tomado todo su territorio y arrinconada su dirigencia en la selva.

Si de veras, como dice la dirigencia zapatista, la sociedad civil "tiene que participar, si no perdemos todos", entonces es indispensable recomponer el terreno para esa participación. Como lo establecieron en su reciente balance de San Cristóbal las ONG que trabajan directamente en Chiapas (Conpaz), y también los proyectos de la Universidad Autónoma Metropolitana dirigidos a esa re-

gión, lo más urgente es recrear el espacio civil en los Altos, las Cañadas y la Selva; lo primero es reconstruir la cohesión social de esas comunidades divididas y hasta enfrentadas, establecer zonas civiles en expansión, replegar a los 50 mil efectivos del ejército mexicano y su maquinaria infernal, reincorporar y disolver el zapatismo militar en el zapatismo social.

Sólo así tiene sentido el trabajo de la sociedad civil (y también de los organismos internacionales, las iglesias, las CEB, las reivindicadas organizaciones indígenas y campesinas independientes), en su manifestación concreta de organizaciones de salud, de abasto, de atracción de recursos, de educación, de derechos humanos, de apoyo a la niñez y a la mujer, etc. Sólo a partir de este trabajo arduo sobre el terreno local es como puede comenzar a plantearse el problema medular de asegurar la sustentabilidad del desarrollo con base en la reconstrucción de la identidad colectiva. Estas tareas, al ser local-regionales, producen un discurso universal altamente audible en toda la nación y más allá. Pero es indispensable que el liderazgo zapatista regrese a sus bases y las dirija, que reconstituya ahí el orden y la identidad. Creo que eso entendimos muchos al votar por que "pasaran a ser fuerza política". Sería pavoroso ver enfrascado al zapatismo en una asamblea nacional de oratoria interminable y de rebatinga por las curules.

Cómo no traer a la discusión el hecho de que ha habido otras soluciones en nuestro país y en el plano internacional, recordar, por ejemplo, que los trabajadores del astillero de Dansk en Polonia, desde la exigencia de solución para lo local, fueron capaces de sembrar un ejemplo que al ser copiado poco a poco por otras localidades terminó por derrotar al estado burocrático nacional polaco y, algo mucho más férreo incluso que nuestro decadente tla-toani, de sembrar las bases para la derrota del más poderoso Estado del orbe y su partido: el imperio soviético. En lo nacional tenemos registro de otros casos, *raras avis in terris*, es cierto, como el Comité de Defensa Popular (CDP) de Durango; o la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) en Juchitán, Oaxaca. Movimientos con más de veinte años de existencia que han sido capaces, por su poder regional, indígena, cultural, de mantener históricamente a raya al Estado central y, en los días presentes, de administrar el Pronasol ellos mismos, de resolver muchos problemas locales, de convertir calles polvorientas, verdaderos chiqueros, en algo más saludable, sin que el objetivo fuera alcanzar un desarrollo

ciego, transnacional, supeditado a los ritmos frenéticos de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo darle organicidad a lo que se desorganiza? Los ejemplos de Durango, del Centro Histórico de la Ciudad de México y el terremoto, de Juchitán... son una esperanza a este respecto. Y sin embargo inmediatamente aparece la duda de si no es una mera ilusión el oponer esta imagen de reconstrucción comunitaria a las fuerzas del control empeñadas en mantener a los excluidos, y hasta a los integrados, en la atomización, la desorganización, la inconciencia. Veamos algunos ejemplos.

32. AUTONOMISTAS Y GLOBALISTAS: LA NUEVA LUCHA PREMARXISTA

Ha sido tan fuerte y en tan corto tiempo el impacto de la globalización, tan salvaje el desordenamiento de las ocupaciones, de los asentamientos poblacionales, de los usos y las costumbres, que enormes agregados de nuestros compatriotas han expresado su decisión firme de abandonar lo que se ha impuesto desde el Estado como el proyecto nacional.

Dicho de otra manera, a partir de 1994 muchos mexicanos han expresado, por distintos medios, su deseo de refugiarse de la intemperie globalizadora, de esa especie de polvo destructivo y mortal para la salud de las sociedades, y reconstruir defensivamente alguna forma de identidad más cercana a lo local. Un rechazo decidido hacia la pérdida del control sobre el entorno, un regreso a las identidades restringidas, ahí donde aún esto es posible, como en el México ligado a las culturas profundas: "Distinguimos —han dicho recientemente los mixes— los niveles comunitario, municipal, regional, estatal y nacional... porque debe establecerse la posibilidad de que varios municipios o comunidades indígenas puedan unirse para alguna actividad concreta."

Las mesas de negociaciones de San Andrés Larráinzar sobre "Comunidad, autonomía y representación política de los pueblos indígenas" a inicios de 1996 respondieron directamente a la auto-proclamación de las regiones autónomas y nuevos municipios chiapanecos que se convirtieron a lo largo de 1994 en antecedentes ejemplares en torno a lo local-regional hasta antes de que el presidente, en febrero, diera la orden al ejército mexicano de invadir y someter al territorio que hasta entonces fue considerado como zapatista; pero incluso bajo estas adversas condiciones, con cincuenta mil efectivos de las fuerzas armadas en la región, vimos en noviembre de 1995 a los 1 500 delegados de la Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo constituirse en Concejo Municipal después de haber rechazado dos veces la celebración de elecciones municipales. El congreso estatal se negó a reconocer al Concejo, como en otras entidades, y el 3 de diciembre fueron de-

salojados de las oficinas de las ARIC, por 500 agentes judiciales y efectivos del ejército, los llamados contingentes *independientes*, principal fuerza de la nueva organización.

Fuera de Chiapas el reclamo de autonomía regional ha cobrado un vigoroso impulso: en 1993, diez municipios de la Mazateca Alta, Oaxaca, decidieron formar el Frente Único de Presidentes Municipales para evitar que se siguieran archivando sus peticiones. Lograron introducir agua potable, instalaron tiendas comunitarias, una secundaria técnica, un centro de salud, un albergue para universitarios en la capital del estado, obtuvieron fondos para proyectos productivos en granos básicos, corrales, cafecultura, etc. Desde entonces, la elección de autoridades con base en usos y costumbres no ha favorecido al PRI. En los comicios de noviembre de 1995 se provocó una balacera en Mazatlán Villa Flores en la que murió un priista. A partir de ahí, un grupo armado de 40 miembros de ese partido, apoyado por los caciques desplazados desde 1992, comunicaron al poblado de 18 mil habitantes, a lo que se agregó la presencia de un centenar de policías estatales y tres camiones con más de cien soldados de la 28 zona militar. El munícipe y el síndico fueron detenidos y separados de sus cargos por orden del Congreso estatal. La demanda de los sitiadores es que haya elecciones por vía del voto y no por la de usos y costumbres (Matilde Pérez y Víctor Ruiz, *La Jornada*, 27-29 de noviembre y Julio Moguel, 4 de diciembre). Lo que está resultando más amenazador para estas autonomías es el voto "secreto" asesorado por los ingenieros electorales, sancionado por los congresos estatales y vigilado por las fuerzas del "orden".

Sucesos muy similares están teniendo lugar en Guerrero: desde que Rubén Figueroa asumió la gubernatura en 1993, y hasta que renunció a favor del PRI, habían sido asesinados más de un centenar de miembros del PRD, 21 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra Sur, la mayoría en la matanza de Aguas Blancas. Sólo en Atoyac de Álvarez se han registrado 101 asesinatos políticos ("Guerrero, estado de terror", Red de ONG, *La Jornada*, 25 de noviembre). Veintisiete pueblos mixtecos y amuzgos situados entre la Costa Chica y la Montaña, pertenecientes a los municipios de Xochistlahuacan, Metlatónoc y Tlacoachistlahuacan, constituyeron en agosto de 1995 un Concejo Municipal en rebeldía tomando el palacio en el primero de esos poblados y luego replegándose hacia Rancho Nuevo de la Democracia, en donde han fundado grupos

de policía comunitaria que funcionan en 13 localidades y han adquirido armas y equipo por sus propios medios, empujados por la complicidad de las corporaciones policíacas con la delincuencia. Desde el inicio de su movimiento ha habido nueve asesinatos de miembros del Concejo Guerrerense 500 Años de Resistencia y del PRD, ligados a este Concejo. "De no reconocerse nuestra autonomía, han advertido, no permitiremos que haya elecciones el 6 de octubre para renovar ayuntamientos en Guerrero." Hoy se han autonombrado, para fines legales: Concejo de Pueblos Mixtecos, Tlapanecos y Negros de la Costa Chica y Montaña de Guerrero, Asociación Civil (Maribel Gutiérrez, *La Jornada*, 24-26 de noviembre de 1995 y 4 de febrero de 1996).

En otro escenario, representantes de los pueblos nahuas y huicholes de Jalisco elogiaron en febrero de 1996 la lucha que realiza el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ha permitido a los indígenas del país expresar manifiestamente su cultura y sus necesidades y reclamar la autonomía y el autogobierno, "no como los principios de una separación del Estado". Manifestaron que sus comunidades fueron separadas por las divisiones políticas de varios estados (Zacatecas, Durango, Nayarit y Jalisco), por lo que pidieron al gobierno federal estudiar reformas constitucionales a fin de dotarlos de un autogobierno y un territorio propios que no contravengan la convivencia entre los estados vecinos (Gerardo Rico, *La Jornada*, 4 de febrero de 1996).

Por su parte, organizaciones indígenas de totonacas, nahuas, huastecos, otomíes y popolucas de Veracruz, agrupadas en el Consejo Campesino Reivindicador Emiliano Zapata, demandan modificaciones a la Constitución General de la República y a las leyes secundarias que garanticen "en lo específico y sucesivo los usos y costumbres de los grupos étnicos en la impartición de justicia, difusión e impulso a su cultura, así como estímulos a sus proyectos de producción" (Manuel Enríquez, *La Jornada*, 6 de febrero de 1996).

La lista del renacimiento regional y de los horrores que se han cometido en su contra tendría que abarcar a los pueblos de la Sierra Gorda de Querétaro y Guanajuato, a la Sierra Norte de Puebla, a la Huasteca hidalguesa y potosina, etc. Recordemos solamente dos casos: primero Tepoztlán, tan familiar para los capitalinos y tan traído a nuestra memoria desde que se constituyó el Comité de Unidad de Tepoztlán (CUT) para impedir que el gobier-

no del estado, en colusión con el presidente municipal y el priismo local, enajenaran extensos territorios en favor de un megaproyecto de recreación (campo de golf, residencias de recreo, etc.); gobierno estatal e inversionistas se organizaron con el apoyo del priismo local y las "fuerzas del orden" (flamantemente reforzadas en Morelos por policías militares de la época de la Guerra Sucia de los setenta). A muy poco de iniciado el conflicto, el Congreso estatal declaró desaparecidos los poderes municipales el 29 de noviembre, una vez que Antonio Azuela (director de la Procuraduría General de Protección al Ambiente), Gabriel Cuadri (presidente del Instituto Nacional de Ecología) y la secretaria Julia Carabias, previa reunión con el presidente de la República y con el gobernador, levantaran la clausura para continuar con las obras del club de golf pues, declaró el primero de ellos, "todo es correcto porque se ha autorizado el cambio de uso del suelo"; acto seguido, el Congreso local nombró un concejo provisional que llamaría a elecciones en 30 días; el 2 de diciembre de 1995 grupos armados priistas intentaron tomar el palacio municipal y desalojar al CUT, el pueblo intervino masivamente para impedirlo y en la huida precipitada fue herido de muerte un priista en circunstancias muy poco claras, pues quienes disparaban para abrirse paso eran los propios agresores: todo estaba listo, puede uno concluir, para que diera inicio el desmantelamiento de la organización rebelde y, en efecto, ochenta órdenes de aprehensión fueron giradas contra los tepoztecas del CUT, de las cuales ya se han ejecutado cuatro, alcanzando hasta diez años de prisión uno de los detenidos. Los medios de comunicación difundieron una imagen completamente tergiversada del conflicto.

El gobierno del estado y la Comisión Electoral ordenaron que se llevaran a cabo elecciones extraordinarias ante el repudio del CUT temeroso, con toda razón, de la sofisticada y poderosa ingeniería electoral apuntalada por los "procampos", los "pronsoles", las policías, el monopolio televisivo nacional, etc., y capaz de dividir y confrontar hasta a las comunidades más cohesionadas. Curiosa manera ésta de reforzar el Estado de derecho en una entidad que ha visto en el último año más de una decena de linchamientos en distintos pueblos y en la que los pobladores se han enfrentado a judiciales corruptos organizando grupos armados de autodefensa. El 10 de abril vino la golpiza a los manifestantes tepoztecas y la muerte de uno de ellos, cuando se dirigían a Chinameca, hacienda

en donde Emiliano Zapata fue asesinado y en donde Ernesto Zedillo pronunciaba un discurso conmemorativo.

Recordemos en fin el caso de Tabasco, donde el movimiento regional corresponde bien con las fronteras de la propia entidad federativa y la imbricación es total entre movimiento social y organización política (perredista). Aquí un conflicto postelectoral más que una pertenencia étnica (aunque este componente también es poderoso), enfrenta a toda una entidad federativa con el gobierno central y hace perder legitimidad, como en los casos descritos, al sistema político, a la vía partidista y a la negociación parlamentaria, en este caso a la mismísima mesa para la reforma del Estado. Y es que desde enero de 1995, mientras la corriente perredista negociadora y de la "transición pactada" firmaba con Zedillo, y al lado de los partidos políticos, un "Pacto de Unidad con Todos los Mexicanos", grupos paramilitares y contingentes priistas desalojaban con gran violencia el plantón perredista contra el fraude electoral instalado en el zócalo de Villahermosa (el líder López Obrador, hacia mediados del año 1995, demostraría, apoyado en varios archivos, que cada voto con el que fue elegido, por pírrico margen, el priista Madrazo, tuvo un costo electoral de 800 pesos; en enero de 1996, cuando ya era claro que no habría ninguna sanción contra aquellos delitos y en la misma semana en que el secretario de Gobernación instalaba la mesa de negociaciones para la Reforma Política en la capital de la República, el perredismo tabasqueño, reuniendo a 40 mil seguidores, bloqueaba la producción de más de 40 pozos petroleros decretando a Tabasco "territorio en resistencia contra la política antipopular y entreguista de Ernesto Zedillo". Y agregaba López Obrador: "Si Pemex ya vendió petróleo por adelantado, de aquí no lo va a sacar." El movimiento está a punto de dejar atrás su contenido de protesta contra la impunidad electoral para convertirse en una lucha por la defensa de la naturaleza y la integridad ecológica y contra las imposiciones del centro del país y las exigencias de la globalización salvaje, en este caso materializadas en la explotación petrolera.

Ni en Tepoztlán, en Morelos; ni en Ocosingo u Oxchuc, en Chiapas; ni en la región de la Costa y la Montaña guerrerense; ni en infinidad de municipios oaxaqueños, se quiere que los conflictos se diriman vía elecciones extraordinarias, porque se sabe que hasta la más cohesionada de las comunidades puede ser dividida y confrontada entre sí, derrotada gracias a esta ingeniería desconstruc-

tora de la identidad colectiva, hasta ser impuesto y redoblado el orden garante del *statu quo*.

Todo esto tiene un lado positivo y uno muy negativo: el primero es, naturalmente, la reconstrucción de la fuerza comunitaria, el embarnecimiento de las identidades sociales; pero el lado negativo es sin duda el desmembramiento de la institucionalidad en áreas tan delicadas para el pacto social republicano como la procuración de la justicia y el sistema electoral.

Estos datos indican que amplios agregados poblacionales se están acercando a una visión del propio país en los desnudos términos de la dominación de clase y de la dominación transnacional. Lo más positivo parecería entonces el fortalecimiento de los órdenes intermedios en el plano social, única vía para que los colectivos hagan frente a las inmensas necesidades a que un país como el nuestro se enfrenta en este fin de siglo, derivadas de los desequilibrios demográficos, los efectos de un estancamiento que ya dura quince años y el desorden generalizado a que nos empujó el proyecto globalizador. En efecto, se está generando un nuevo piso social en México que puede conducir al desorden generalizado o puede ser la base de un orden nuevo; una lucha entre dominantes y desposeídos (no ya burgueses y proletarios que cada vez tenemos menos) está enfrentando a nuestros compatriotas, particularmente ahí en donde los agregados sociales aún logran resistir la empresa desmanteladora del neoliberalismo apelando a identidades restringidas (regionales, barriales, sindicales), y oponen alguna resistencia ante el sofisticado y poderosísimo aparato de la globalización en donde coinciden organismos, gobiernos y ejércitos internacionales, Estado nacional, partido de Estado, legislaturas, oligarquías regionales y caciquismos, intelectuales de gobierno, medios de comunicación, ingenierías electorales, instituciones de gasto público focalizado (con fines políticos) y, naturalmente, el ascenso descomunal del aparato de seguridad (de Sedesol a Sedena).

Anotemos lo siguiente, sin embargo, que se relaciona con la imagen que de México se ha proyectado a partir de 1994: el conflicto zapatista ha tenido el efecto de sobredimensionar al México indígena, con sus referentes culturales poderosos, con fuertes raíces organizativas que le permiten acantonarse defensivamente, en lo regional, por ejemplo.

No cabe duda, ya lo decíamos, de que Chiapas ha venido a poner en claro que tan excepcional es el México profundo como el México

transnacional. Pero tan iluso sería querer convertir el todo hacia un extremo como hacia el otro, pues entre el 20% del México tradicional y el 30% del México integrado se extiende, con toda su crudeza y su desorden, el México roto, el desarraigado, el de la modernización salvaje. Esta imagen del total desorden es la cara principal y cada vez más palpable de México y no la del indigenismo profundo.

33. LA CUARTA DECLARACIÓN DE LA SELVA Y EL FUTURO DE LA OPOSICIÓN EN MÉXICO

La *Cuarta Declaración de la Selva* convocó, a inicios de 1996, a

la creación de un amplio frente opositor organizado local, estatal y regionalmente [...] que crezca desde la base, desde los comités civiles, movimientos y grupos [...] cuyos integrantes no desempeñen ni aspiren a desempeñar cargos de elección popular o puestos gubernamentales [...] no aspire a la toma del poder [...] y sea de oposición auténtica al gobierno y al partido de Estado.

No cabe duda de que la característica del zapatismo ha sido, desde su origen mismo, la sorpresa y la renovación. Este llamado del EZLN a la creación de un Frente Zapatista de Liberación Nacional, junto con la carrera por la sucesión de las dirigencias perredista y panista, de cara a las elecciones de 1997, tuvieron el efecto de poner a pensar a todo el país en torno a lo que debería ser hoy, y en el futuro, la oposición en México.

No había concluido el mes de enero y ya 269 organizaciones con 1 500 delegados de 22 estados del país se habían reunido en Acapulco, creando un "Frente Amplio para la Constitución del Movimiento para la Liberación Nacional", que según declararon sería "incluyente, flexible, que incorpore a organizaciones sociales, políticas, ciudadanas, pero también a ciudadanos individuales", tratando de evitar una pesada estructura burocrática. A inicios de marzo, en Poza Rica, Veracruz, se reunieron representantes de alrededor de 70 comités civiles zapatistas para discutir a fondo cuáles debían ser las características del FZLN. En el grupo tres (Organizaciones Sociales y Participación Ciudadana) de la mesa sobre Justicia y Democracia de los diálogos para la paz en Larráinzar y San Cristóbal, presentaron sus puntos de vista y hablaron sobre las perspectivas de un Amplio Frente Opositor y sobre el contenido de la *Cuarta declaración de la Selva*, asesores e invitados del EZLN representando el Frente Cívico Potosino, el Frente Auténtico del Trabajo, el Comité de Unidad de Tepoztlán, el Movimiento Xi Nich, el Movimiento "Todos por Chihuahua", la Asamblea de Barrios,

las Experiencias de Organización Social de Jalisco, los Comités Civiles de Michoacán, el Movimiento Proletario Independiente-Ruta 100, la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo, la Región Mazateca de Oaxaca, el perredismo social de Tabasco, el Sindicato de Electricistas, la Nación Purépecha, etc. El 14 de abril en Juchitán, Oaxaca, durante la Tercera Reunión Nacional del Movimiento Urbano Popular se acordó la integración de una comisión promotora para la creación de un Amplio Frente Opositor.

Los zapatistas aclararon un poco después de lanzada la convocatoria que no había que mezclar dos propuestas: por un lado, el Frente Zapatista para la Liberación Nacional es el mecanismo por medio del cual el zapatismo se propone acatar los resultados del referéndum de 1995 en el que se le indicaba convertirse en una fuerza política; al FZLN se afiliarían ciudadanos individualmente y no organizaciones sociales o políticas ni partidos; la forma de participación sería a través de los Comités Civiles de Diálogo que enviarían sus solicitudes de registro a través de oficinas geográficamente distribuidas en la república para ser aprobadas por un comité formado por la oficialidad zapatista.

Al lado de esto se proponía, tanto por el EZLN como por otras organizaciones, la creación de un Amplio Frente Opositor en el que los zapatistas participarían como una más entre las otras tantas organizaciones sociales y políticas.

Que cada quien interponga las reservas que guste, pero un hecho es ineludible: el zapatismo hacia mediados de 1996 había desarrollado una alta capacidad de convocatoria que parecía redundar en constelaciones organizativas cada vez menos efímeras, mejor autocontenidas y autocríticas, más vueltas a lo social y menos conspirativas. Ahora bien, todo ello se ha dado en medio de un mar de malestares sociales y en un escenario de empleo sistemático de los instrumentos coercitivos: digamos que ejército y policías, con distintos uniformes o sin ellos, se estaban haciendo cargo ya sistemáticamente de las agrupaciones de compatriotas que cometen el "delito" de organizarse para hacer frente a su desdichada existencia y a las decisiones superiores que los afectan.

Todo esto quiere decir que, seamos o no simpatizantes de estas formas de hacer política, los elementos están dados para que iniciativas de rearticulación de lo social-popular proliferen (¿la sociedad se organiza en medio del caos y la represión?). El hecho es que están acudiendo a este nuevo ensayo de constelación social-

popular consejos municipales en rebeldía, regiones autónomas, sindicatos intervenidos, privatizados y en resistencia, coordinadoras estatales de maestros, uniones de vendedores, frentes amplios estatales, movimientos populares urbanos, estudiantes en defensa de la educación pública y gratuita, coordinadoras contra la desnacionalización de empresas estratégicas...

¿Alcanzará finalmente consistencia y continuidad un llamado como éste o reproducirá a la Babel de la Convención Nacional Democrática en sus sesiones extenuantes en pleito por integrar el politburó histórico (definitivo)? ¿Estaremos pasando en estas amplísimas convergencias de la "Ideología Soviet Supremo" y la hiperverbalización a la práctica dirigida a buscar soluciones para que la gente viva mejor cotidianamente y tenga más control sobre su entorno regional, local, vecinal? Quién sabe, pero nuestros movimientos y organizaciones populares están haciendo ensayos y, aunque aún se vea lejano, flota en el ambiente la urgencia de un cambio de cultura política que da sus primeros pasos, no hay que subestimarlos, con la aceptación de la propuesta intuitiva del FZLN de no ocupar puestos de representación y puestos gubernamentales ¿Qué tal si a fuerza de ensayo y error nuevas prácticas políticas echan a andar donde la academia, los políticos de salón y las teorías del individualismo y el *rational choice* no ven sino masas manipulables y autoritarismo potencial?

Sea como fuere, resulta inocente pensar que este intento de rearticulación social-popular (tanto del FZ como del Amplio Frente Opositor), podría encontrar un espacio favorable para ensayar un cambio de cultura política, si ya resulta obvio que el modelo globalizador, cuya aplicación ortodoxa en México ha sido calificada de salvaje, exige para su funcionamiento, de manera cada vez más agresiva, el desmantelamiento inmisericorde de todos aquellos promontorios o tejidos duros que en lo social se atreven a resistir la empresa de los grandes aparatos de poder mundial y nacional y de sus huestes mercenarias de intelectuales, medios de comunicación, magistrados, militares, policías, guardias blancas, caciques del partido de Estado, cándidos estudiantes de Harvard y de Yale que terminan integrando las lujosas listas de Forbes y de Almoloya... ¿Cómo se incentivan las potencialidades concertadoras y la cultura de la interacción comunicativa racional, cuando todos los intentos organizativos de la sociedad civil en el primer año de la presidencia zedillista han sido perseguidos y se cuentan por cientos los presos

políticos y por decenas los muertos (300 perredistas en los noventa)?

¿Cómo podemos exigirles a estos movimientos hacer política en nuevos términos si cuando logran organizarse con fuerza y legítimamente, como ha sido el caso del perredismo en Tabasco, se les impide gobernar y para ello se recurre a fraudes electorales multimillonarios? ¿Cómo cambiar de cultura política cuando se demuestra con documentos la magnitud del fraude y no pasa nada?

No, el neoliberalismo salvaje y ortodoxo tiene dos limitantes que impiden el tránsito a la democracia: primero, que en el grado de descomposición en que hoy se encuentra (desnuda dominación de clase), el proyecto neoliberal está obligado a dismantelar las organizaciones, movimientos e identidades colectivas que lo resisten; ya no puede cooptarlas (no tiene recursos más que para pagar la deuda), y lo vemos sustituir aceleradamente a Sedesol por Sedena. Segundo: que a diferencia de los tan traídos y llevados ejemplos sudamericanos, centroeuropeos y mediterráneos de tránsito a la democracia, en nuestro caso la fuerza autoritaria que debería pasar a una posición secundaria para dar lugar a un nuevo pacto de civilidad no sólo no se encuentra en retirada (como fue el caso del pinochetismo, el franquismo o la burocracia polaca), sino que permanece en el centro de la escena, es la dueña de la fiesta, del pastel, de los cohetes y de los sacaborrachos... y es, aun, algo más: es una fuerza dependiente de los grandes intereses nacionales y, en primer lugar, transnacionales que en su tarea de ordenar los recursos del país para su entrega a nuestros acreedores mundiales, en lugar de concertar en los conflictos se constituye en la fuente de éstos, se convierte en un agente en tránsito al autoritarismo (cibernético y legaloide donde aún puede, descarnadamente golpear donde ya no). Esto quiere decir que el actual régimen neoliberal dependiente de nuestro país está incapacitado para convocar a una alianza con la población que dice gobernar, a un pacto entre gobernantes y gobernados para hacer frente a la impresionante crisis de futuro por la que atraviesa nuestro país y que amenaza con extenderse por largas épocas.

Para la oposición, particularmente la que asienta sus bases en organizaciones, identidades y movilizaciones sociales fuertemente populares, como ha sido el caso del cardenismo y el perredismo, la tensión que esto genera es insoportable: en enero de 1995, como veíamos, mientras la corriente perredista negociadora firmaba con Zedillo, el ya mencionado "Pacto de Unidad con Todos los Mexi-

canos", grupos paramilitares y priistas desalojaban el plantón perredista contra el fraude electoral y bloqueaban la producción de más de 40 pozos petroleros decretando a Tabasco "territorio en resistencia". Al mismo tiempo pusieron en evidencia, qué duda cabe, que no los obligarían a aceptar la impunidad electoral, por más acuerdos que la dirigencia perredista lograra en los salones de negociación de la capital. "Ninguna acción relevante que se emprenda en nombre del PRD -declaraba inmediatamente Porfirio Muñoz Ledo- debe hacerse sin consultar a los órganos estatutarios."

No nada más entre la alta cúpula concertadora y los movimientos sociales que son objeto de la ingeniería dismanteladora se genera esta tensión insoportable; también en situaciones más restringidas: el Comité de Unidad de los Tepoztecos, como dijimos, después de destituir al cabildo con amplio apoyo de su comunidad, se lanzó a la lucha contra la construcción de un gigantesco club de golf residencial. El gobierno del estado y la Comisión Electoral ordenaron que se llevaran a cabo elecciones extraordinarias en la situación de cacería en la que se encontraban los dirigentes del CUT. Como si eso no importara, la fracción perredista en el Congreso de Morelos declaraba, increíblemente: "No se avizoran tranquilas las elecciones... por la represión contra el CUT, pero nosotros vamos a exigir que estos comicios sean limpios, transparentes y ejemplares, como nunca ha sucedido en Morelos... se efectuarán bajo un clima político idóneo" (*La Jornada*, 21 de enero de 1995).

Como veíamos, no se quiere, en infinidad de lugares, que los conflictos se diriman vía elecciones extraordinarias, porque se sabe que las comunidades pueden ser divididas y confrontadas entre sí.

Increíblemente el PAN, que surgió como un partido social, también ligado a organizaciones y movimientos sociales históricos, principalmente en el Bajío, en Puebla, en Yucatán (y en las grandes ciudades de los cuarenta), no está hoy sometido a una tensión semejante a la descrita, a pesar de las penurias y las vicisitudes por las que atraviesan sus potenciales y sus reales electores. Por ejemplo, la situación desesperada de los 500 mil deudores barzonistas por alguna razón se encuentra desligada y no ha sido asumida por el panismo, siendo que la correlación entre barzonistas y votantes panistas debe de ser muy alta. Muchos teóricos y partidarios de la transición pactada dicen que esto es lo correcto, que las organizaciones partidistas y las movilizaciones sociales mantengan una cierta distancia.

Ya el politólogo Guillermo O'Donnell ha llamado la atención sobre los peligros de una "democracia delegativa" (o delegada en representantes casi autónomos). Y es que esto puede generar una gran polaridad, una separación casi esquizofrénica entre una lógica electoral y de influencia de los políticos y una lógica de la acción social; aparecen entonces los comicios como un acto sin conexión con los problemas de la vida cotidiana, sobre todo entre las capas más desposeídas y desorganizadas de la población. No quiere decir que el PAN no hable de los marginados, de los pobres, de las profundas desigualdades sociales y del "humanismo universal", sino que lo hace con un discurso cada vez más global y general, no ligado a este o a aquel movimiento o lucha social viva, del presente. La dirigencia barzonista puede ser apresada y los barzonistas pueden estar siendo embargados sin que el PAN exponga sus banderas en la defensa de estas injusticias (entre otras cosas, claro está, porque el procurador general de la República es panista y su responsabilidad es enorme en la proliferación de los encarcelamientos de dirigentes sociales).

Y es que a pesar de que Felipe Calderón, quien ha sido asociado con el panismo tradicional, triunfara en marzo último al ocupar la presidencia del partido, lo cierto es que ese viejo PAN, llamado "doctrinario", ligado a las regiones (del Centro) y a su historia, ha dado paso a uno de administradores, cada vez más despojado de referentes morales y religiosos, con una base segura entre los sectores llamados de centro, modernos, individualistas (otrora) consumistas: "los bárbaros del norte", fue apodada esta corriente. Y es que estar ligado a los conflictos reales conduce casi inevitablemente a la confrontación (sobre todo en este neoliberalismo tardío y autoritario), y eso asusta a un sector importante del electorado conservador, que coincide bien con una masa de mexicanos muy desentrenados en la crítica y en el ejercicio de sus derechos y cada vez peor informados debido al monopolio de la comunicación.

Agreguemos otro elemento para entender este desempeño *cool* del panismo (a distancia de las identidades sociales vivas): todos los partidos políticos tienden a adoptar cada vez más un lenguaje centrista, porque ante la crisis de militancia, la desideologización y el descrédito de los partidos y los políticos (sobre todo en esta putrefacción mexicana), las clientelas cautivas y doctrinarias tienden a ser pequeñas y, en consecuencia, muy amplias las masas sin adscripción partidaria y sin posiciones definidas y elaboradas; ante

ellas, el discurso simple -a equidistancia de los extremos calientes y de las acciones controvertidas- más bien centrado en imágenes carismáticas, en historias personalizadas y en ágiles verbalizaciones tipo cápsula televisiva, reditúa en votos que, por lo demás, comprometen muy poco al partido que los recibe con los ciudadanos que los emiten.

Muchos analistas consideran, no sin razón, que el PAN está mejor preparado y en mejor posición que el PRD para ganar esos votos, de mantenerse a distancia de los puntos calientes de cualquier imagen relacionada con la violencia y conservando el perfil pragmático de sus objetivos en torno, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, la erradicación de la corrupción gubernamental, etc. (la "transición sin ruptura", robándole el término a Camacho Solís). Sin embargo, también es cierto que en un país tan convulsionado por la crisis que el neoliberalismo sembró (lo que no quiere decir fortaleza de la sociedad civil sino sobre todo desorden, desidentidad y anomia sociales), y tomando en cuenta que el PAN se revela como un defensor aún más ortodoxo del modelo neoliberal, privatizador y aperturista, resulta completamente correcto afirmar que, conforme este partido vaya ejerciendo el poder, su desgaste puede ser muy acelerado. A ello se agrega su desprecio hacia las estructuras tradicionales del orden social y político, así como hacia las formas basistas y defensivas generadas por la crisis, y su temor, en fin, de activar la participación ciudadana proponiendo formas nuevas de organización social. A pesar de ello, el PAN, en su evolución paulatina frente (o junto) al PRI, cuenta con un margen de tiempo holgado y a su favor y con ello contribuye a actualizar la cultura autoritaria. Así pues, si el desorden social no degenera en violencia manifiesta, el PAN cuenta con un periodo de gracia altamente estratégico, a pesar de su desgaste en la defensa empecinada del modelo neoliberal y en el ejercicio de un poder que se revela, desde ya, como un destructor de las identidades ciudadanas y de las resistencias sociales a la empresa del neoliberalismo salvaje.

¿Quiere todo esto decir que la única salida para construir una verdadera oposición en favor de la dignidad y el mejoramiento de la "calidad de la vida" de los amplios sectores, es organizando algo parecido a un frente social-popular al margen de la vida partidista y parlamentaria y al margen de las mesas de concertación de la Reforma Política? ¿Un amplio frente opositor desde la base, parafraseando a la *Cuarta Declaración* zapatista, cuyos miembros estén

ligados orgánicamente con sus bases sociales y en el extremo no desempeñen ni aspiren a desempeñar cargos de elección o de gobierno?

Éste ha sido un asunto de gran controversia a partir del llamamiento zapatista. Y es que, en efecto, para muchas organizaciones ha sido poco comprensible el asunto de la renuncia zapatista a los puestos de representación y de gobierno. ¿Por qué una organización tan bien asentada en su cultura y en su sociedad, como ha sido la COCEI en el istmo de Tehuantepec, tendría que estar de acuerdo en que la recreación de una nueva cultura política se lograría mejor abandonando sus posiciones de gobierno, posiciones con ya cerca de quince años en el cabildo de Juchitán y de otros municipios hermanos, si justamente el acceder a estos puestos les ha permitido, entre otras cosas, la recreación y el fortalecimiento de su identidad cultural, social y política así como el manejo, de manera bastante *autónoma*, de importantes presupuestos públicos (sobre todo en la época de Pronasol), con los que pudieron resolver con alguna eficacia una serie de necesidades colectivas?

Lo mismo podría decirse del Comité de Defensa Popular (CDP) de Durango, con 25 años de asentamiento en colonias populares y que se encuentra hoy en su segundo periodo al frente del cabildo de aquella ciudad. Y qué decir de la lucha del perredismo tabasqueño por la gubernatura, que ha tenido la fuerza de unir al pueblo de aquella entidad en un movimiento con consistencia organizativa y continuidad en la defensa de los recursos naturales, contra el ecocidio petrolero, por los derechos electorales, etc. El navismo en San Luis Potosí, la Asamblea de Barrios en el D.F., los municipios en rebeldía de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos vendrían a completar una lista de ejemplos en el mismo sentido; es decir, son ejemplos en donde la vanguardia política, que ocupa o aspira a ocupar posiciones de representación o gubernamentales, se encuentra perfectamente relacionada con un movimiento social con asombrosa continuidad en el tiempo; en estos ejemplos, movimiento social y representación política mantienen una organicidad.

Sin embargo, en México, hay que aceptarlo, éstos son garbanzos de a libra. Por lo regular nuestra matriz de acción social nos muestra que las luchas colectivas, después de un inicio bastante radical, pierden cohesión y consistencia y el Estado acaba dividiéndolas fácilmente por cooptación de una parte de su dirigencia, por represión, o por simple cansancio. Una acción política termina ope-

niéndose a una acción social en su seno, y los dirigentes acaban ocupando posiciones políticas de influencia, ante el resentimiento de unas bases sociales que caen en el desánimo mientras la identidad colectiva se desvanece.

De manera que cuando se dice ¡No a los puestos de elección o a los puestos gubernamentales!, se está hablando de algo muy profundo en la historia de nuestro país. No se trata, sin más ni más, de calibrar la frase con los textos de teoría política universal ni con la historia de otras sociedades, como lo ha hecho con la *Cuarta Declaración de la Selva* el grupo *Vuelta* y el grupo *Nexus*. Se está hablando de algo mucho más complejo y apenas develado intuitivamente, se habla de modificar la matriz de funcionamiento de los mexicanos. El razonar a fondo este asunto podría implicar, o conducir, al menos, hacia un cambio fundamental de nuestros valores políticos.

En la relación actual entre Estado y sociedad en México, coinciden y se refuerzan, por un lado, el viejo principio de nuestro autoritarismo consistente en no aceptar la presencia de ningún promontorio (pueblos, culturas o movimientos sociales) fuera del orden piramidal coronado por el tlatoani y, por otro lado, la urgencia de nuestro neoliberalismo tardío y autoritario de destruir aceleradamente cualquier organización de la sociedad, cualquier núcleo duro o tejido resistente que pueda oponerse a la globalización, es decir: al ejercicio de la dominación mediante la violencia por parte de un poderosísimo puñado de agentes de la técnica y el capital, así como de los ejércitos civiles y militares, domésticos y transnacionales a su servicio.

Ante este panorama, ¿cómo hablar de tránsito a la democracia si no están dadas las condiciones para establecer una relación fluida y sana entre política y sociedad, entre acción política y acción social, si no existe ruptura alguna con lo más vertical de nuestra herencia sino más bien su reforzamiento, el paso a primer plano de la seguridad (trans) nacional: policías, militares, guardias blancas, fortalecidos ante la protesta social pero también fortalecidos por el llamado desesperado de la ciudadanía para que sea perseguida la delincuencia, la corrupción, la anomia, para que sea restablecido un orden?

¿Es esto lo que sucedió en Europa o en América del Sur? En estos casos, como decíamos, el agente autoritario había sido desplazado del centro del poder pero, más importante aún, todas las

fuerzas del país estaban de acuerdo en que lo que debía fortalecerse a partir de ese momento era la primacía de los órdenes, los espacios, las asociaciones, las instituciones y los agentes capaces de "generar ciudadanía".

Retomemos aquí algunas ideas ya explicitadas: es importante poner un alto a la interpretación simplista de que la transición hacia regímenes democráticos en los países del Este, en los mediterráneos y en los de América del Sur consistió en un pacto entre poderosas fuerzas políticas y de élite llevado a cabo en espacios cerrados, más o menos al margen de la activación popular y ciudadana, como parece sugerirlo la imagen ya mencionada hasta el cansancio de los pactos de la Moncloa, en España. Ahí, "las élites políticas acertaron no tanto porque dirigieran al público cuanto porque supieron aprender de él" (Pérez Díaz, 1993): lo que despejó al rey el camino para nombrar a Suárez fue la agitación popular de la primavera de 1976, un clima de crisis que condujo al gran referéndum de diciembre (sí: referéndum); luego vinieron los partidos y el fortalecimiento de la vida electoral. Pero es fundamental tener claro que en ese país, antes, durante y después de los acuerdos en las alturas políticas, se desarrollaron vigorosas asociaciones ciudadanas en forma de áreas de convivencia, focos ciudadanos, asociaciones vecinales, centros cívicos, escuelas de participación ciudadana, asociaciones de contribuyentes, radios municipales independientes, asambleas democráticas, asociaciones juveniles, de mujeres, de ancianos, etcétera.

Se trató en general de la creación de un Tercer Sector abocado a tapar los huecos (boquetones, habría que decir en México), dejados por la economía de mercado y por la administración pública; focos ciudadanos intermedios que tuvieron su momento de mayor vigor entre el fin del franquismo y los años ochenta y que trabajaron paralelamente (a veces coordinados y a veces confrontados), con las autoridades de sus Ayuntamientos, *rehusándose en la mayoría de los casos a acceder a los puestos de gobierno* a cuyos ocupantes criticaban y reorientaban en asuntos tan diversos como la intervención en planes urbanísticos, la vivienda (caso de los chabolistas de Madrid que construyeron 400 viviendas en siete años), los medios de comunicación (exigencia de trenes en contra del uso indiscriminado del automóvil alrededor de las grandes ciudades), la ecología (limpieza de barrios y de zonas turísticas para elevar sus ingresos como trabajo pagado por el presupuesto público), la ocupación de cuar-

teles y edificios públicos sin función con el fin de crear centros educativos, juveniles, de ancianos, culturales, para atender la drogadicción, el alcoholismo, con personal pagado con el dinero de sus impuestos, etcétera.

Fue así como se logró sacar a los ayuntamientos a la calle, recuperar los valores ciudadanos, recomponer y refundar las dimensiones de los colectivos, sus fronteras territoriales, culturales, productivas, de servicios... (como dice el madrileño Tomás Villasante, 1995); en una palabra, reencontrar sus identidades colectivas sustentables. Con éxitos y fracasos, con altas y con bajas, la participación social fue la constante en la España de la reconstrucción ciudadana y electoral, desde Cataluña hasta Andalucía, desde Galicia hasta Valencia. Y no se trata de un ejemplo extremo, lo mismo podría argumentarse de la enorme activación de las comunidades cristianas en el fin del pinochetismo, y ni qué decir de la Polonia de Solidaridad.

Miembros y líderes de estos movimientos ganaron luego elecciones de alto nivel en sus países y regiones, pero ese fue el resultado de un trabajo que primero se basó en la reconstrucción de la sociedad y no en un acuerdo precipitado bajo los techos de un edificio histórico, mientras el régimen con quien se pretende llegar a tal acuerdo se caracteriza por el desmantelamiento cotidiano (digamos de tres turnos), de las identidades colectivas, desde las indígenas hasta las sindicales, las barriales, las universitarias, las de defensa de los deudores, las instituciones de salud y de abasto, las de la reconstrucción municipal, etcétera.

En ese contexto tiene sentido lo establecido en la *Cuarta Declaración de la Selva Lacandona*, porque debido a nuestra historia de país ante todo estatal y muy poco social, los mexicanos tendemos, en cualquier situación, hacia el vértice de la pirámide, hacia los puestos de influencia y de poder, tanto en la cultura del PRI como en las organizaciones de izquierda. No suena mal la creación de un frente o un amplio movimiento opositor que se proponga la reeducación de los mexicanos en el seno de la acción ciudadana, desalentando la ocupación inmediata de puestos de adulación y de reverencia, campo tan propicio para la cooptación de liderazgos y el debilitamiento consecuente de redes convivenciales.

Por lo demás, cuando la lucha partidista se desata sin bases electorales formadas en procesos sociales consistentes, tiende a convertirse en lucha de líderes efímeros (sobre todo con los presu-

puestos millonarios que el partido de Estado suele invertir en las contiendas difíciles), lo que termina por dividir a las comunidades, barrios y municipios. En esos casos, es mejor buscar las candidaturas únicas con apoyos fuertes de organizaciones ciudadanas y populares o las elecciones por la vía de usos y costumbres. Ya vendrá el momento de elegir a los grandes líderes nacionales y regionales, por lo pronto tiene razón el EZLN cuando dice: "si el quehacer político tiene como objetivo la toma del poder, qué va a pasar con el quehacer político si cambiamos esa premisa. Lo que queremos demostrar es que, si viéramos de otra forma el poder político podríamos producir otra forma de hacer política". En torno a esto, Julio Moguel escribe:

Una nueva relación entre los gobernantes y los gobernados no debe operar sólo sobre las formas de articulación de unos y otros sino en los interiores de estos continentes... los segundos tienen que (re)aprender a mandar. El factor primario y dinámico de la ecuación es, hoy por hoy, el que los gobernados aprendan y construyan sus formas e instrumentos de mandato (construidos en mucho por la autoconciencia que es, en este caso, reapropiación de valores esenciales, construcción de identidades colectivas y, por ello, de poder); la variable dependiente es -también hoy por hoy- que los gobernantes aprendan a mandar obedeciendo [*La Jornada*, 5 de febrero de 1996].

Las malas experiencias de organizaciones anteriores han dejado huella. Un objetivo sería superar ese parlamento de aspirantes a la dominación en que, en algunos momentos, se convirtió la Convención Nacional Democrática en 1994 o el Consejo Nacional de Huelga en 1968 y tantas otras organizaciones. Es infinito lo que ha avanzado el EZLN desde el 1 de enero de 1994, pero no podría decirse lo mismo de su adversario que no sabe más que de desalojos y desmantelamiento de comunidades, declaraciones de mala fe para romper el avance en las negociaciones, etcétera.

Todo esto no quiere decir que tenga que haber una plena penetración entre autoridades y organizaciones sociales en cada caso. Es más, lo regular, por lo menos en experiencias como la española, para retomar el ejemplo, es constatar un enfrentamiento constante entre cabildos y organizaciones ciudadanas, aunque también una compenetración al final de esta dinámica. Pero, claro está, en España, particularmente en los años de la apertura, no existía entre Estado y sociedad una guerra casi declarada, una ten-

sión insoportable que hiciera añicos a las fuerzas y partidos políticos. Incluso en la actualidad, el derechista (recolocado en el centro) Partido Popular, sabía que no podría ganar las elecciones si su plataforma no hubiera tomado en cuenta los intereses de las organizaciones sindicales democráticas y con alto poder de convocatoria como Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores.

¿Quiere todo ello decir que podrían quedar al margen del Amplio Frente Opositor y de las organizaciones políticas que sigan la orientación descrita, todas aquellas corrientes concertadoras y los intelectuales, personalidades e individuos que no estén incrustados en una organización social definida? Por supuesto que no: los esfuerzos concertadores en la Mesa de la Reforma Política y Electoral llevados adelante por un partido como el PRD o una de sus corrientes, independientemente de la forma en que pudieran articularse en un Amplio Frente Opositor para la Liberación Nacional (o como se llamara un ensayo de este tipo), son indispensables, deben estar ahí, construyendo propuestas y consensos. Pero una línea de acción tal, como la "transición pactada", por las razones descritas no debería erigirse como la línea correcta o la línea privilegiada de un amplio frente social-popular. Simplemente no puede ir por su lado porque el orientador fundamental de la acción no es la ocupación de los espacios de poder, así sea a través de las elecciones más limpias del mundo, sino la reconstrucción del poder social, de las identidades colectivas para el desarrollo sustentable (que no es, necesariamente, la búsqueda de la frontera tecnológica, ni de ningún tipo de acumulación), sino el equilibrio con la naturaleza, la concordia, la recreación de una cultura que fortalezca la identidad, la salud...

El ala concertadora, negociadora, verbalizadora, parlamentaria, intelectual, legislativa de un frente nacional opositor al Estado clausista y transnacional y a su partido, debe entrar y salir de la negociación según lo exija el objetivo central antes descrito.

Nos enfrentamos aquí a un problema: el de la dirección del propio Frente Zapatista de Liberación Nacional y el de la dirección del Amplio Frente Opositor. Esto reproduce en otro nivel, aunque ahora en el interior de la organización misma, el asunto de los puestos de representación, de autoridad y de gobierno.

Comencemos por lo primero: el FZLN ha anunciado, ya lo decíamos, que su organización estará constituida por Comités Civiles

de Diálogo que serán conformados por mexicanos "sin partido", afiliados individualmente, y que el reconocimiento de dichos comités será hecho por la oficialidad zapatista. Los zapatistas están en todo su derecho de buscar un espacio intermedio entre su organización militar actual y el otro extremo: una vía en donde la sociedad simplemente se autoorganiza, sin centralidad, sin jerarquías ni verticalidad, a la manera, por dar una imagen, de las juntas de vecinos en un espacio urbano. No se trata naturalmente de diluirse y desaparecer en el inmenso mar de la sociedad, pero en el polo opuesto es pertinente preguntarle a los zapatistas si la imagen de una organización que, para empezar, se llama *zapatista* (FZLN), y que ofrece como su órgano de decisión más elevado un comité constituido por una vanguardia militar (por más que lo militar sea casi nulo en la imagen de los comandantes zapatistas), tendrá la fuerza para convocar a la proliferación de comités u organizaciones de base ciudadanos, civiles, barriales, vecinales, universitarios, de artistas, etcétera. Quizás sí pero, francamente, se dibujan algunas dudas. Quizás el comité ciudadano de diálogo que pudieran formar este o aquel grupo de ciudadanos, no debería estar obligado a registrarse ante el EZLN. En ese caso, el zapatismo debería convocar a la formación de comités civiles de diálogo y sólo aquellos que tuvieran interés de trabajar directamente para la causa zapatista (entendida como apoyo directo a un movimiento social que se desarrolla desde 1994 en los Altos y las Cañadas) debieran buscar su reconocimiento formal por el EZLN. Sin embargo al zapatismo lo entendemos muchos como un movimiento que no se restringe a lo local-regional, sino que constituye una propuesta de reconstrucción moral para infinidad de espacios sociales de nuestro país e, incluso, que ha logrado proyectar mundialmente una imagen ejemplar.

Siendo así, el FZLN ganaría mucho renunciando a la idea de que una pequeña comisión militarizada se encuentre al frente de las constancias de pertenencia y de los carnets. La dirigencia zapatista debe formar parte de ese comité promotor, naturalmente, pero quizás debería aparecer al lado del grupo de mexicanos que desde lo civil ("desde la sociedad civil", les gusta decir a los zapatistas), han sabido acompañar ese conflicto, su delicado proceso y la desactivación de la guerra (muchos de ellos nombrados asesores e invitados para los diálogos de paz). Innumerables Comités Civiles de Diálogo tendrán interés en quedar enmarcados en la organiza-

ción zapatista, adoptando incluso el nombre CCD Emiliano Zapata, o Rubén Jaramillo..., pero otros podrían no quedar directamente dentro del paraguas del Ejército Zapatista e incluso actuar, ahí donde éste tenga posiciones de mando y autoridad, como contrapeso del zapatismo, a la manera en que las juntas vecinales españolas sirvieron de contrapeso y reorientación de las decisiones de los cabildos socialistas: "ya no hagamos más anfiteatros para la política en este pueblo, ahora destinemos esos recursos a sembrar árboles frutales y hortalizas, acondicionemos un criadero de truchas..."; quizás ese núcleo decida autonombrarse Comité Civil de Diálogo "La Utopía Sustentable", Región Autónoma de La Realidad, o vaya usted a saber.

No es posible eludir tampoco el tema de la relación entre organizaciones y dirigencia en lo que hace a la idea de un Amplio Frente Opositor. Lejos de la imagen vertical de un partido leninista, lo cierto es que cualquier organización, incluyendo las organizaciones políticas construidas en función de electorados ciudadanos modernos y autodenominadas "centristas" como el propio PAN, el Partido Socialista Francés o el Partido Popular español, contienen un liderazgo y una disciplina interior que les permite ordenar la entrada y la salida de sus líneas negociadoras en este o aquel punto, dependiendo de su estrategia general; y les permite hacer posible, igualmente (regresando a nuestro país), el entrar y salir a un bloque de los pozos petroleros, por ejemplo, según lo requiere esa misma estrategia general.

Ahora bien, tratándose de un Amplio Frente Opositor social-popular y en una sociedad como la nuestra en la época actual, el problema del liderazgo y de la disciplina se convierte en un tema ineludible: en un país con el dinamismo que experimentó México hasta los años ochenta, que cambió a su población del campo a las ciudades en pocos decenios (con el descontrol demográfico y el salvaje crecimiento urbano que ello implica), que ha caído en un estancamiento económico total en los últimos años, con el desmantelamiento industrial y agrícola y con el desorden socioocupacional desatado por las políticas neoliberales ante el desaprovechamiento monstruoso de su mano de obra (sobre todo de los jóvenes), con la proliferación de la miseria, el abatimiento de los niveles de escolaridad y de salud, y el aumento exponencial de la violencia y la delincuencia; en una palabra, en un país que se halla en medio de la degeneración creciente de su orden social, se requieren or-

ganizaciones sociales y políticas y un principio de autoridad y liderazgo bastante bien definidos (se postulan como oposición o como gobierno).

Decir que cada integrante de una amplia alianza popular debe actuar libremente según sus iniciativas, buscando con ello dar una imagen de gran flexibilidad, constituye un discurso seudodemocrático en la lógica electorera de ganar los votos del centro, para lo que otros partidos o agrupaciones políticas como el PAN o el Amplio Frente Camachista, podrían estar mucho mejor preparados. Constituye algo así como sembrar el desorden en medio del caos.

Cuauhtémoc Cárdenas, en contra de toda lógica y en contra de lo que indicaba su ascenso meteórico como liderazgo personalizado en 1988, hizo en 1994 una campaña de búsqueda del voto ciudadano, con un discurso democrático genérico, tratando de desdibujar incluso su personalidad carismática de mando, sin dejar sentir que sus órdenes eran obedecidas por un andamiaje organizativo eficaz. Su fraudulento adversario Salinas de Gortari había gobernado, precisamente, echando mano del liderazgo personalizado y del verticalismo, como lo habían hecho y lo harían sus homólogos Alan García y Fujimori en ese Perú también profundamente mestizo, y como lo haría Menem en Argentina y lo intentaría Carlos Andrés Pérez, Collor de Mello y tantos otros (llama la atención en esto la grisura de Zedillo pero, claro está, atado a la ortodoxia neoliberal cualquier protagonismo podría conducirlo a la tragedia de Carlos Andrés en Venezuela).

Entendamos entonces una cosa: la urgencia de reordenamiento y de liderazgo no es una solución en sí misma, pues esta figura puede ser construida, justamente, con base en una empresa desmanteladora de las identidades sociales (con el destacadísimo ejemplo de Salinas). Muy lejos de esto, el reto es cómo construir instituciones, organismos y liderazgos cuya fortaleza sea el producto, precisamente, del largo trabajo de reconstrucción de los órdenes societales; cómo hacer que ambos se fortalezcan en su dialéctica, siempre difícil. Eso implicaría una verdadera transición *social* a la democracia.

Todos quisiéramos que México estuviera efectuando este tránsito sin la intervención de ningún agente externo partidista, lideril o estatal, gracias a una sociedad civil fuerte en sus organizaciones intermedias, y que esto fuera producto de la sola dinámica de la modernización; un orden que facilitara el engrandecimiento de la

personalidad de cada individuo, la interacción en el más alto nivel de racionalidad y que cultivara, como ya decíamos, unas instituciones estables tanto en lo social como en el plano de las representaciones políticas. Pero no nos estamos acercando ni a una democracia asentada en una sociedad civil ni a una con predominio de la sociedad política (partidos, parlamentos o grandes fuerzas corporativas), sino a un desorden social generalizado.

Parece oportuno, en fin, apartar la idea de acumulación de fuerzas bajo una dirección unificada. Esa imagen de que un frente o una amplia alianza opositora tendrá éxito en la medida en que pueda colocar bajo su cobijo (y entonces bajo su disciplina) a la casi totalidad de las fuerzas sociales, populares o democráticas. Es obvio que muchos mexicanos, organizados o dispersos, no quieren estar bajo el paraguas de un frente que se llame "zapatista", de "liberación nacional" o, simplemente, "frente amplio opositor" de vocación popular (es decir, ligado a los amplios sectores menos favorecidos de la población), incluso si la gran mayoría de los mexicanos estuvieran a favor de una reconstrucción de las identidades sociales. Criticar al panismo cupular y "concertacionista" no hace desaparecer al caudal de mexicanos de los grandes centros poblacionales, moderno, en muchos casos católico, del viejo y del nuevo norte (y de los conglomerados del centro y del sur), que se encuentra en el núcleo de la definición de ciudadanía en nuestro país. Si un organismo como Alianza Cívica ha encontrado una respuesta masiva entre los mexicanos a pesar de la ingeniería desmanteladora, es porque ha apelado a este universo ciudadano medio moderno, medio consumista, medio católico, medio ilusionado por el sueño norteamericano (aunque cada vez menos). También en esta tonalidad se encuentra, aunque en los acordes altos, más bien políticos (ocupación y conducción del Estado), el Frente Amplio propuesto por Camacho Solís y el llamado grupo San Ángel; un frente capaz de agrupar a sectores provenientes del propio priismo, del panismo (como los foristas, quizás), e incluso del perredismo, ya que la sucesión en la dirigencia de este partido favoreció a la corriente más claramente social-popular, más cercana a los movimientos sociales, y no tanto a la corriente concertadora. No tiene nada de alarmante que los reacomodos políticos conduzcan en México a un mapa menos abigarrado y pluriclasista de las organizaciones políticas que heredamos de la etapa popular-nacional y de la larga vida del PRI: 1] una constelación social-popular con

sus manifestaciones y organizaciones tanto en la sociedad civil como en la política (cada plano con su autonomía y su distancia, con un PRD, por ejemplo, más preocupado por la reconstrucción social que por las concertaciones); 2] una constelación democrático-ciudadana más propia de organizaciones como Alianza Cívica en lo social y, naturalmente, el PAN en lo político (aunque compitiendo claramente por manifestaciones como el camachismo si el aparato panista no se deslinda de su fascinación por el modelo neoliberal y si insiste en mantenerse tan distante de las luchas sociales, ya no digamos populares sino incluso las de los sectores integrados); 3] un PRI en descomposición, aunque muy peligroso porque antes de morir parece estar dispuesto a convertirse en la careta "civil" de un orden autoritario y policiaco.

De la buena comprensión de estas diferencias, de estas expresiones plurales (exceptuada la última), de la inteligencia y el respeto de las organizaciones hacia esos planos, de la firmeza y el proyecto de cada liderazgo dependerá la posibilidad de que algunas de estas condensaciones, a veces más sociales, a veces más políticas, amplíen su influencia y su base de sustentación a expensas de las otras.

Pero no perdamos de vista la importancia del llamado al cambio de nuestra cultura política; ahí se encuentra lo más sugerente de las declaraciones de nuestro tiempo, y no sólo de las que vienen de la selva: decía a inicios de 1996 Enrique Calderón, uno de los miembros de la dirección colegiada de Alianza Cívica:

Lo que constituye la esencia política de Alianza Cívica y fortalece su credibilidad y autoridad moral es que se trata de un movimiento ciudadano incluyente, plural, democrático, que no aspira a obtener puestos de gobierno ni a competir electoralmente, pero sí a exigir a los gobernantes y representantes el cumplimiento estricto de sus compromisos y a orientar sus acciones de acuerdo con la voluntad de las mayorías [*La Jornada*, 3 de febrero de 1996].

Es importante romper cuanto antes la esquizofrenia entre, por un lado, corrientes negociadoras, centristas y del tránsito pactado y, por otro, corrientes radicales, antielectorales y relacionadas con la violencia; se debe restablecer esa polémica en términos de acuerdos horizontales de fuerzas preocupadas, cada una en sus espacios, por el reforzamiento de las identidades sociales, hermanar hasta donde sea posible manifestaciones populares y ciudadanas y no fomentar su confrontación: no hay un perredismo radical violento

enfrentado a un panismo electoral racional. Plantear así las cosas es reproducir la matriz gastada de la mexicanidad: nada más la pirámide es legítima, aunque ahora se pinte de azul; afuera de ella sólo hay promontorios ilegítimos, arrasables.

34. LOS TRABAJOS DE HÉRCULES

Pero tomemos distancia: ¿dónde se encuentra el zapatismo hoy, a mediados de 1996? Creo que podemos convenir en que este movimiento social se desarrolla sobre tres planos:

1] El local-regional (los Altos, las Cañadas y la Selva), de contenido fuertemente indígena y cultural, cargado de religión, iglesias, injusticia agraria, caciques y guardias blancas, centrado en la pobreza, la exclusión, la enfermedad, la destrucción de la naturaleza, el paisaje, las formas de sobrevivencia, el reto del desarrollo sustentable, la autonomía de los pueblos indios... Desde que el ejército mexicano invadió la región zapatista en febrero de 1995 ha sido difícil, si no imposible, hacer crecer al zapatismo como reconstrucción de la comunidad, como reordenamiento colectivo orientado a la autonomía alimentaria (para ya no hablar de ningún tipo de eficiencia productiva para el mercado, que en el caso del café y en otras condiciones podría ser posible). Ya lo sabemos, la invasión tuvo por objeto destruir todo y la presencia militar impidió deliberadamente que el campesinado echara a andar el ciclo agrícola, lo que ahora tiene a la región sin reservas alimentarias. Con el pretexto de la destrucción de plantíos de droga, el ejército va y viene prácticamente a todos los puntos que se propone. En el pueblo de La Realidad, por ejemplo, santuario y corazón del zapatismo, columnas artilladas de 30 o 50 unidades motorizadas, entre jeeps, tanquetas, camiones de tropa, etcétera, atraviesan una o dos veces al día, lentamente, de ida y vuelta, por el camino que parte en dos al poblado; incluso, se han detenido y han amenazado con esparcirse por los caseríos. Un poco más atrás, en las regiones menos controladas por el zapatismo, sabemos cómo las guardias blancas y las policías apoyadas por el ejército, llevan adelante desalojos aterradores por el grado de violencia y el saldo en muertos y heridos que ya conocemos. Al mismo tiempo los dineros de Pronasol y Procampo y de otros programas *ad hoc*, minan la moral de las poblaciones, las dividen, enfrentando a una serie de organizaciones que aceptan esas ayudas contra los zapatistas o los simpatizantes del zapatismo para quienes, en estas condiciones, se vuelve casi

imposible mantener las tierras o los palacios municipales ocupados. ¿Sembrar una hectárea con frutales, hortalizas, un criadero piscícola aprovechando el río cristalino de La Realidad, al lado de la hectárea que ocupa el nuevo Aguascalientes, en que se levanta el anfiteatro de la política y la vida pública? ¿Tratar de mejorar esa dieta de frijoles y tortillas? Parece imposible, se nos indica, con la proximidad del ejército y su empeño en destruirlo todo; por lo demás, también se nos explica, es una ilusión de los visitantes pensar que el trabajo comunitario es viable; de hecho, el zapatismo ha sido muy respetuoso con las comunidades al no tratar de imponerles formas organizativas extrañas. De ahí que los Aguascalientes siempre hayan sido construidos a cierta distancia de Guadalupe Tepeyac, de La Realidad, de San Miguel...

A esta visión de control y desmantelamiento del zapatismo se opone otra que dice que la conciencia de los integrantes de este movimiento tiene raíces muy profundas, largamente construidas, cuya consistencia supera con mucho el ir y venir de los soldaditos, y las cutáneas inyecciones oportunistas e inconsistentes de los programas gubernamentales. Nada más hay que ver la eficacia con que cientos de mujeres de las comunidades zapatistas fueron movilizadas y aparecieron como de la nada en el centro mismo de San Cristóbal de Las Casas al inicio del año, con objeto del Foro Indigenista Nacional. Declaramos nuestra perplejidad ante los dos escenarios descritos, el optimista y el pesimista.

2] La segunda gran manifestación del zapatismo se ha dado en el plano de la política nacional, primero con la organización de la Convención Nacional Democrática, los acercamientos y distanciamientos con el perredismo y con Cuauhtémoc y la efervescencia electoral de 1994; luego con la organización del referéndum y, finalmente, con la propuesta de la *Cuarta Declaración de la Selva*, la creación de un Frente Zapatista de Liberación Nacional y de un Amplio Frente Opositor. Aquí sin duda el balance es más sencillo, más esperanzador, aunque de más largo plazo. La formación de una organización zapatista, el reacomodo de las fuerzas progresistas, populares y democráticas en un impulso unificado, y el solo planteamiento del cambio de una cultura política desde lo estatal hacia lo societal, suena muy bien pero es un proyecto en el tiempo que también recibirá y ya está recibiendo todas las baterías de la ingeniería desmanteladora. Sea como sea, el proyecto está recibiendo el impulso de infinidad de promotores y las pavorosas di-

menciones de la crisis en que hemos entrado en este fin de siglo pueden ser favorables a este planteamiento, si el desorden y la violencia desorganizada no rebasan cualquier intento reconstitutivo.

3) La tercera y quizás la más claramente triunfadora dimensión del zapatismo de los noventa ha sido la internacional. ¿Qué es lo que los jóvenes españoles, italianos, belgas, alemanes, ven en el zapatismo? ¿Un liderazgo enigmático, la fuerza cultural del indigenismo "derrotando" con sus capuchas disímbolas a todo el poderío del imperialismo cibernético, militar, institucional, particularmente norteamericano y a sus gobiernos títeres neoliberales, aperturistas, saqueadores; un liderazgo que ha tenido la fuerza de colocar al muñeco Salinas en el exilio y evidenciar su entorno putrefacto? ¿Ven una "fuerza" que, apoyada en medios muy extraños, cibernéticos, increíblemente está siendo capaz de mantener literalmente en la raya (la que separa a La Realidad de la carretera que la cruza), a una parafernalia destructiva que podría alcanzar las dimensiones, si fuera necesario, que vimos durante la guerra de Irak? ¿Ven a un extraordinario líder con una gran legitimidad entre esas comunides indias, superando los errores del foquismo artificial de los sesenta, expresando de manera directa y eficaz entre los dos extremos culturales que son el indigenismo de la selva y la sociedad más sofisticada de las más importantes metrópolis del mundo: que la gente se está muriendo de hambre, de enfermedades, que no tiene trabajo, que se destruye su cultura, que no podemos seguir enganchados a la locura globalizadora de esta manera?

Mientras el tiempo va modelando, doblegando a veces, las manifestaciones locales y nacionales del zapatismo, vemos aparecer en el horizonte preciosos globos atrayendo la atención de las cámaras, de los medios de comunicación (Oliver Stone, Danielle Miterrand, Régis Debray, Carlos Monsiváis, Fernando del Paso...), que recorren las Cañadas y, mientras se pierden, le hacen recordar a todo el mundo, literalmente, que el zapatismo está vivo. ¿Cuántos globos más se podrán inflar ante la paciencia cínica e imperturbable del tlatoani y ante el silencio, la desmemoria y la charlatanería de sus lacayos en San Andrés Sacamchen, cuyo punto único a negociar es la rendición de los indios?

35. ¿ORDEN O DESORDEN?

Queda una pregunta final en torno a los movimientos sociales y la sociedad civil. Vemos hoy en México una gran activación de la sociedad: hay proliferación de organizaciones sociales de tamaño medio y restringido (ONG, organizaciones cívicas y electorales, grupos civil-cristianos, organismos de derechos humanos, etc.); vivimos también cotidianamente la participación intensa de la sociedad en la calle (tres marchas, cercanas a los cien mil participantes cada una, en la semana que siguió a la decisión de Zedillo de romper la tregua, e infinidad de marchas y plantones cotidianos en la ciudad de México, al extremo de haberse llegado, en 1994, al espectáculo increíble de las cien marchas en un solo día); tenemos, igualmente, el renacimiento de la participación indígena y campesina que pasó de la apatía, la desorganización y la manipulación totales (recordemos la manera en que en 1993 se aprobó la reforma al artículo 27), al reagrupamiento, la organización autónoma, el repudio a las centrales oficiales y el reordenamiento de sus demandas (no sólo en Chiapas sino en todo México florecen las organizaciones campesinas e indígenas, muchas de ellas en torno a la Convención Nacional Indígena); tenemos, en otro nivel, la rebelión de los pequeños y medianos productores agrícolas del centro y del norte del país (El Barzón), que no tienen con qué pagar a los bancos debido a la apertura indiscriminada de las fronteras y su baja competitividad frente a los productos agrícolas extranjeros y debido también a las altísimas tasas de interés que ha decretado el gobierno tratando de atraer capitales y de evitar la dolarización de los ahorros mexicanos.

En el nivel electoral, el Partido Acción Nacional cosecha triunfos en importantes plazas como Jalisco (que cuenta con Guadalajara, la segunda ciudad más importante de México), y en poderosos estados de la frontera norte (Baja California), así como en el centro *farmer* y católico del país (El Bajío). La Alianza Cívica de Observación Electoral, en fin, organiza consultas ciudadanas a la manera de plebiscitos, inesperadamente concurridas (a pesar del bloqueo de los medios de comunicación), interrogando a la ciudadanía sobre si Salinas de Gortari debe ser juzgado por sus malas y hasta

corruptas decisiones económicas, si el ejército mexicano debe parar sus acciones punitivas en Chiapas, si debemos los mexicanos aceptar el préstamo de 50 mil millones de dólares para estabilizar al mundo financiero internacional o si el EZLN debe convertirse en una fuerza política nacional ¿Acaso no son, éstos, ejemplos claros de movilización social colectiva? ¿Hasta dónde, en algunas de las acciones descritas, podemos hablar de movimientos sociales?

Se llega de esta manera a un punto en el que la discusión se torna difícil. De nuevo la pregunta es la misma: ¿la sociedad se desorganiza o la sociedad se reorganiza? Anotemos algunos elementos para una respuesta: sería inocente confundir la imagen de las cien marchas con la idea de fortalecimiento de la sociedad civil desde el momento en que detrás de esas manifestaciones no se está fortaleciendo una intermediación institucional y organizativa ni, al menos en este momento, se están robusteciendo actores sociales con cierta continuidad en el tiempo. Lo más lamentable, pero no lo más improbable, sería que ese exceso de participación sin encuadre condujera a la supresión del espacio público por la intervención de las fuerzas coercitivas.

Pero iguales reservas debemos tener en lo que se refiere a las llamadas organizaciones restringidas o circunscritas de la sociedad civil (ONG, CEB, organizaciones cívicas, de derechos humanos, ambientalistas, etc.). En los países que transitaron por dictaduras militares en el Cono Sur este tipo o, digamos, este nivel de reorganización proliferó para luego declinar en el momento en que los regímenes democráticos fueron reinstaurados y el espacio público fue reabierto. Las sociedades se refugian en niveles más restringidos y más defensivos cuando dicho espacio es monopolizado por una fuerza muy poderosa o, de plano, cuando es enfriado o suprimido autoritariamente por la fuerza represiva. (¿Será esta proliferación de las pequeñas identidades defensivas un signo de que México ha entrado, bajo el neoliberalismo, en un estadio de monopolio creciente de lo público desde el Estado, de vaciamiento de la sociedad, y que "la vida [asociativa] está en espacios más defensivos"? Así lo establecimos en los primeros apartados de este libro.)

Sin embargo, ninguno de los argumentos anteriores podría descalificar la presencia de algunas fuerzas con mayor consistencia identitaria y, en algunos casos, con mayor continuidad en el tiempo, como serían el movimiento de los pequeños empresarios agrícolas (El Barzón), y de los votantes panistas, navistas, cristianos y *farmers*

del centro y del norte del país, o el resurgimiento de las organizaciones indígenas que parecen reivindicar con increíble fuerza sus fundamentos culturales (con un potencial distinto según las condensaciones étnicas: los zapotecas del istmo de Tehuantepec son una de las más fuertes), o en fin, la actividad intensa de aquellas organizaciones con una cultura barrial de muchísimos años, que en el caso del centro de la ciudad de México vino a ser despertada por el terremoto de 1985 y que dio nacimiento a la Asamblea de Barrios y al primer personaje antineoliberal sin rostro: Superbarrio. ¿Habría que agregar a esta lista el ascenso del empresariado mediano, pequeño y hasta de los grandes empresarios de la industria mexicana aplastados por una deuda de intereses estratosféricos?

Tenemos pues varias acepciones, de calidad muy desigual, en esto que se da en llamar emergencia de la sociedad civil y de las movilizaciones sociales, y no todas redundan en el fortalecimiento de los actores colectivos en el plano de lo social, ni en más consistentes formas organizativas, ni en un sistema de intermediaciones sociopolíticas robusto. Las manifestaciones de los ciudadanos en plazas públicas son de naturaleza muy distinta con respecto a la proliferación de ONG, CEB y organizaciones ciudadanas, y éstas a su vez poco tienen que ver con la idea, aquí esbozada, según la cual entre los años sesenta y los años ochenta la modernización salvaje ha debilitado y desmantelado a los actores de nuestra modernidad inacabada. Es más, los tres niveles referidos pueden coexistir y no se contradicen con la idea de que la matriz societal mexicana (socioeconómica, política y cultural) ha otorgado una gran prioridad al actor estatal a lo largo de toda nuestra historia y se ha caracterizado, concomitantemente, por una erosión reiterativa de los actores dinamizadores de la sociedad civil (particularmente de los grupos empresariales), debido esencialmente a la presencia de un adversario nacional poderoso (Estados Unidos), y a un inevitable y recurrente desbordamiento de los sectores populares (¿plebeyos?), explicable a su vez, como en un círculo vicioso, por el debilitamiento cíclico de los actores intermedios y la ausencia de un orden asegurado en el plano social y no impuesto desde el Estado. Este último es el nivel en el que Tocqueville, Gramsci o Barrington Moore pudieron hablar, con toda legitimidad, de Estado fuerte, sociedad civil débil y todas las combinaciones posibles (en este último nivel se explica, también, la fortaleza ancestral de los zapotecas del istmo de Tehuantepec, de los cristeros y luego los sinarquistas de El Bajío, etcétera).

36. DE SEDESOL A SEDENA: LA GENERACIÓN DEL CAOS

Recapitulemos, en fin, sobre lo siguiente: los años 1994 y 1995 han estado plagados de acontecimientos espectaculares en la sociedad, la política y el Estado. No me parece que todas las épocas se hayan caracterizado por cambios tan acelerados. Según lo establecido en este ensayo, ¿cómo se explica tal activación?

Primeramente, quién lo duda, por la referida locura modernizadora: la ignorancia superlativa de una camada de jóvenes bien nacidos, que a su regreso de las universidades norteamericanas se hizo llamar "la generación del cambio" y pensaron que una nación, sobre todo este mosaico de mestizaje desigual, podría ser refundada en seis años. Creyeron que con bajar abruptamente los aranceles (la estupidez del *shock*), privatizar los bienes gubernamentales y castigar los salarios y el presupuesto público para evitar la inflación, se generarían espontáneamente empresarios capaces de competir en el plano internacional (nunca se dieron cuenta de que, al igual que ellos, todos los mexicanos, obreros y empresarios, hacemos "San Lunes", y que mal podemos competir frente a un americano medio y ni qué decir frente a un coreano (sin demérito de que en un entorno extranjero los trabajadores mexicanos han demostrado alcanzar una productividad al nivel de esos países). Los resultados fueron contundentes: el saldo negativo de la balanza comercial fue de 2 600 mdd en 1989; 11 300 en 1991 y 20 000 en 1994. El resto de la trama económica lo conocemos de memoria.

En el plano social, la locura modernizadora sí ha tenido rostro (in)humano, pues la velocidad alcanzada por el egocentrismo refundacional (hacer en 6 años lo que en Europa, más homogénea, tomó 30 o 40), se manifestó en enfermedad social, máxime cuando el supuesto polo dinamizador aceptó desde el inicio ser excluyente en favor de las 300 mayores firmas: sólo 2 millones de empleos formales se crearon en los últimos 10 años para los 12 millones de jóvenes que se incorporaron al mercado de trabajo. Guerra contra los empresarios y los trabajadores, entonces, por el desmantelamiento inmisericorde de la planta productiva, con especial saña hacia la pequeña y la mediana empresa en la ciudad y en el campo (3 de

cada 5 habrían desaparecido antes de la crisis que arrancó en diciembre de 1994); guerra contra los 20 millones de "mexicanos maiceros" (medio indígenas, medio campesinos, medio rurales, medio urbanos), del centro y del sur del país, cuya función en el TLC es prácticamente nula, como lo denunciaba la *Primera Declaración de la Selva*, porque el maíz, el frijol, el arroz, etc., que vienen del norte son infinitamente más baratos; guerra contra los salarios y los sindicatos en el sector formal, para devenir una economía maquiladora atractiva: teníamos, ya lo dijimos, 100 mil jovencitas en 1985 trabajando en las maquiladoras de la zona fronteriza, tendremos un millón en el año 2000: la tercera parte de la mano de obra nacional en la manufactura. Todo esto significa desorden, migración, urbanización salvaje, informalización, delincuencia, destrucción de los referentes básicos (familia, escuela, poblado, barrio, centro de trabajo...).

Por si lo anterior fuera poco, en el plano del sistema político —en el espacio de las intermediaciones entre la sociedad y el Estado— se resintió también la visita inmisericorde de los desmanteladores refundacionales: con el encarcelamiento de La Quina se acelera la "modernización" de las instituciones del sistema político de manera que la cúpula entera del sindicalismo corporativo pasa a retiro, a la cárcel o a formar parte del núcleo duro del aparato estatal (para la firma de los pactos), llegando a su fin en los hechos, la legislación laboral y el derecho de huelga. Igual tratamiento sufrieron las organizaciones campesinas, al extremo de no haber podido decir, hasta 1993, una sola palabra en torno a la reforma del artículo 27, el fin del reparto de la tierra y los nuevos incentivos legales para la concentración agraria. Pero el objetivo no era sólo la tan publicitada destrucción de caciquismos y charrajes, pues el embate a otros espacios de intermediación sociopolítica fue generalizado: la Conasupo y todo el sistema de abasto y de precios de garantía, el deterioro y la privatización de las instituciones de salud, la "excellentización" y achicamiento de las universidades públicas, etc. También se intentó dividir o al menos debilitar a los partidos políticos por la vía del fomento a partidos paralelos, amputando clientelas específicas (como fue el caso del PT y del PFCRN ante el PRD), y fomentando acuerdos palaciegos (lo que llevó a una escisión al panismo y a una peligrosa tensión entre dirigencia y bases sociales hastiadas de las concertaciones...). En este contexto se entiende por qué Salinas decidió gobernar apoyado casi exclusivamente en

su nuevo y personal partido político, el Pronasol, que le daba la oportunidad autocrática y populista de relacionarse con el pueblo, allá abajo, atomizado, sin mediaciones de ninguna especie. Todo esto afectó profundamente al PRI al fortalecer tres apoyos sustitutos: el Pronasol, los medios electrónicos de comunicación y la cúpula panista (para tratar con los sectores modernos no pronasolizables).

Este panorama de desorden y refundación autocrática explica la desesperación de muchísimas corrientes políticas dentro de lo que fue el *establishment*, la confrontación entre ellas, los asesinatos políticos (que se dan aquí y allá cuando proliferan los espacios de recalentamiento y alta tensión). Al nuevo "gobierno" le estalla entonces la descomposición política, económica y social, y al ser insuficientes las debilitadas intermediaciones para controlar el caos, se ve obligado a meter en el juego un nuevo apoyo, una bota di-gamos, que es el aparato de seguridad. La nueva composición de intermediaciones entre la sociedad dispersa y el "núcleo duro" de la dominación coloca (en el siguiente orden) al ejército y el aparato de seguridad, fortalecidísimos (sobran las evidencias), a los medios electrónicos de comunicación, a la cúpula panista, a un disminuido Pronasol y a un desfigurado PRI en estado de descomposición. El eje de articulación ha dejado con toda claridad de estar en torno a la política social (Pronasol), incapaz con sus limosneros recursos de hacer frente al desorden, para concentrarse en la coerción directa en los escenarios campesino, obrero, urbano-popular, etc. De Sedesol a Sedena: la generación del caos.

37. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

¿Qué es, en el fondo, lo que nos ha guiado a lo largo de este ensayo? Yo diría que la angustia al constatar la deficiencia de la regla número uno de las ciencias sociales cuando se trata de interpretar a la América mestiza y en particular al México del fin del milenio. Es decir, la poca evidencia de que estemos transitando, desde orígenes muy diversos, hacia un orden regido por la interacción comunicativa racional, la igualdad de oportunidades, la sociedad "produciéndose a sí misma" (Touraine), la mejor distribución social de los beneficios del desarrollo, el triunfo de la ciencia y la técnica sobre el entorno de enfermedad, anomia, incultura, destrucción de la naturaleza, etc. En resumen, la angustia por no poder comprobar fehacientemente que los agentes de la sociedad embarquen, como en el modelo occidental, y se vuelven capaces de limitar a las fuerzas extrasociales del orden social, como le gustaba decir a Alain Touraine, ya se trate de fuerzas estatales, de las leyes de la economía mundo con la ciencia y la técnica de su lado, o de los intereses de los gobiernos más poderosos del orbe.

La primera constatación a este respecto la hicimos de manera intuitiva los estudiantes del movimiento del 68: los sacrificios exigidos a los amplios sectores poblacionales por parte de los regímenes populistas, nacionalistas e industrializadores del México pos-revolucionario y poscardenista no parecían servir para aliviar en nada la situación de miseria e incultura en que nacían y morían esas generaciones del sacrificio, y tampoco servirían para que sus descendientes vivieran mejor. Nos pareció que quien estaba en el origen de que las cosas no fueran mejor era el Estado autoritario, piramidal, ineficaz y corrupto; en consecuencia, sería mejor que la sociedad tuviera una participación más activa en la definición de sus opciones futuras, que fuera más moderna. Sin embargo, en ningún momento pusimos en cuestión el que nuestra matriz cultural o societal pudiera estar en el origen de semejante deficiencia y, menos aún, el que el avance científico-técnico y su adopción pudieran no ser un instrumento eficaz para optimizar la producción de bienes y, por esa vía, superar la mala distribución entre

sociedad y Estado: si por algo no nos occidentalizábamos era por la mentada herencia vertical, una vez desembarzados de esa cruz, el pasaje a la modernidad sería inexorable. Viene al caso recordar la sorpresa que la sociedad chilena nos provocó a un grupo de estudiantes mexicanos de sociología cuando llegamos a Santiago de Chile en el año 1972 y descubrimos que la clase obrera y el sector laboral en general estaban organizados en partidos políticos que se expresaban con gran autonomía en un espacio público no predeterminado desde las alturas y que lo mismo sucedía con las fuerzas de la burguesía, el comercio, las oligarquías, los sectores medios, etc. Sin negar el desenlace dramático de todo aquello, lo cierto era que ahí había sociedad, algo estaba más cerca del panorama occidental al que todo debía tender.

En los años setenta, sin embargo, permaneció como un asunto ambiguo la cuestión del Estado, pues si bien los mexicanos entendíamos que uno de nuestros lastres era su presencia exagerada, lo cierto fue que no todos los enfoques se orientaban en el mismo sentido. En primer lugar estaba la poderosa herencia marxista-leninista latinoamericana que consideraba lo estatal como la palanca de aceleración sin la cual el pasaje al socialismo (o etapa subsecuente superior) resultaba imposible, y esto era así tanto en su versión leninista como, naturalmente, y más cercano a nosotros, en su versión cubana guevarista; pero en segundo lugar, ya lo apuntábamos, las ciencias sociales estaban fuertemente influidas por el pensamiento histórico a la Barrington Moore, a lo Gramsci o por el propio estructuralismo poulantziano-althusseriano (el maoísmo de alguna forma también), que consideraban que las sociedades en tránsito entre la sociedad campesina y la sociedad industrial, con excepción de los "polos originarios", habían requerido siempre del actor emergente estatal que con cierta exterioridad, "revolución por lo alto", produjera el impulso que inscribiera a esas sociedades dentro de la nueva dinámica industrial moderna (y eso era válido tanto en el pasaje al capitalismo, con los casos alemán y japonés en punta, como en el socialismo, con los paradigmas soviético y cubano).

Así que en los años setenta, y en particular en el caso de los mexicanos, se generó esa ambigüedad con respecto al peso y la función que el agente estatal debía tener: no queríamos al Estado mexicano, pero creíamos en algún tipo de agente estatal dinamizador. En el fondo naturalmente todo eso generaba una concep-

ción democrática deficiente en los integrantes de una sociedad que ya de por sí era secularmente estatal: una cultura que en la vida diaria, sindical, universitaria, campesina, doméstica, se dedicaba fundamentalmente a generar jefes y a obedecerlos. Sin embargo, y por más ambiguo que parezca, poca duda había en torno a que, por una o por otra vía, a la larga, de lo que se trataba era de completar con alguna celeridad el pasaje hacia una sociedad moderna, en donde, según esto, en realidad se confundían dos cosas: una, el pasaje de lo estatal a lo social-igualitario (la segunda secularización después de la religiosa), y otra, el triunfo de la ciencia y de la técnica como expedientes privilegiados para resolver los problemas sociales.

Al mismo tiempo aparecía un planteamiento que derivaba del anterior: las sociedades occidentales habían pasado de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones (lo que quería decir, recitando a Gramsci, que fuerzas sociales gelatinosas habían dado paso a actores sociales poderosos provistos de defensas y contra-fuerzas que terminaron por limitar el poder del Estado, de las fuerzas monárquicas, de las oligarquías...). Esto permitía que la sociedad fuera analizada desde un enfoque y un instrumental sincrónico, es decir, como una situación que ya había dejado de transitar (diacronía), y se encontraba ahora fundamentalmente reproduciendo su estructura, su nueva matriz de llegada.

Ése era más o menos el ambiente intelectual de los años setenta, pero en América Latina dos factores daban al traste con el optimismo implicado en esta "teoría de llegada" a la matriz sincrónica (conceptualizada como modo de producción en el exceso estructuralista): por un lado, la creciente marginalidad urbana que desbordaba los límites del concepto de "ejército industrial de reserva", quitando de paso toda esperanza sobre el potencial revolucionario de los pobres; y por otro, unos regímenes militares que se reproducían por todas partes enfriando a la sociedad, atomizándola y haciendo desaparecer la vida pública.

Aparece entonces una teorización esquizofrénica según la cual estos países, principalmente los de más fuerte herencia indígena y de mayor mestizaje, se estarían moviendo en dos vías simultáneamente: una que fortalecía a los actores de la modernidad (clases medias consumistas, burguesía, clase obrera), con una lógica societal, democrática y clasista; y otra vía, con una lógica popular-estatal, que potenciaba las bases sociales del autoritarismo en la me-

dida en que la proliferación de la miseria aparecía, irremediablemente, como base clientelista de manipulación desde diversos signos políticos y de verticalismo capitalizable por el vértice de la pirámide (sobre todo en un país estatal como México). Es entonces cuando encuentran espacio propuestas según las cuales estaríamos viviendo un tránsito permanente, propuestas que, en realidad, ya mostraban las deficiencias de nuestra proclividad occidentalizante.

Siendo las clases sociales, en un escenario como éste, referentes tan rígidos y tan distorsionados, encontró terreno fértil la idea de interpretar la panorámica latinoamericana a través del estudio de los movimientos sociales. Cualquiera que sea la distancia que guardemos con respecto a Occidente en términos históricos (y estructurales), lo cierto es que en determinados momentos, a veces no tan cortos, las sociedades se reordenan en torno a acciones sociales vivas que recrean identidades colectivas entre los movilizados, redefinen con claridad a los adversarios de éstos y establecen campos de conflicto ordenadores. Esos movimientos sociales y su correcta comprensión (con vistas a recrear en ellos una mejor continuidad y un embarnecimiento de los actores que los animan), surgían como un programa esperanzador. Sin embargo aparecieron dos tipos de problemas: la idea de movimiento social estrictamente hablando, tal como nos llega de las sociedades desarrolladas, tiene poco que ver con la imagen de ruptura, de cambio drástico (coyuntura violenta, revolución, pasaje definitorio hacia un nuevo orden, si se quiere), y mucho más con la idea de continuidad en el tiempo, de acción constante de colectivos organizados, de actores sociales embarnecidos que van perfeccionando, gracias a la confrontación pero también a su acción en buena medida institucionalizante, un campo concertado de acción social y de representaciones políticas. Al final de cuentas, pues, el problema que se creía superado apelando a la idea de movimientos sociales volvía a surgir transfigurado, ya que tal instrumento convenía mucho más a los escenarios "de llegada" y predominio social, que a los escenarios en tránsito, en donde los influjos "extra-sociales del orden social" eran muy poderosos; para estos últimos casos el concepto de luchas históricas pareció más conveniente, según el propio Touraine, pues acentuaba, desde el título mismo, la idea de *tránsito* hacia ese tipo de modernidad en el que, justamente, "la sociedad se produce a sí misma".

El segundo problema, mucho más patente en las sociedades al-

tamente mestizadas y de predominancia estatal como la mexicana, era que los famosos movimientos sociales que debían tener continuidad en el tiempo y tender a establecer una cierta institucionalidad, eran destrozados a cada momento, debilitándose concomitantemente el sistema de intermediaciones entre lo social y lo estatal.

Se volvió muy difícil el trabajo para los sociólogos hacia los años ochenta porque cuanto más nos empeñábamos en describir el plano básico de las relaciones sociales, más apreciábamos el estancamiento, la descomposición social y el desorden acelerado que la urbanización salvaje, la crisis económica y la transnacionalización estaban ejerciendo sobre aquellos agregados sociales crecientemente desmembrados. Como lo veíamos en el capítulo 6, fuimos al extremo de proponer la sustitución de la *sociología del desarrollo* por una *sociología de la decadencia*, es decir, una sociología del estancamiento y de la anomia. Cuanto más los sociólogos nos dirigamos en ese sentido, más nos acercábamos a una especie de antropología de la pobreza sin la esperanza de una reconstrucción de sus subculturas (como lo pretendió Oscar Lewis en *Los hijos de Sánchez*). ¿Quién iba a tener interés en una antropología desculturizada? Ni los propios integrantes del gremio; de manera que el alumnado cayó, en una universidad como la UNAM, de cerca de mil estudiantes de sociología hacia el final de los setenta a unos cincuenta al principio de los noventa (el enfriamiento hacia la UNAM contribuyó mucho a esto, no hay que dudarlo).

Y es que resulta lo más contradictorio del mundo reclamarse de una disciplina con pretensiones ordenadoras y hasta científicas y terminar describiendo el desmantelamiento, el estancamiento y hasta la regresión y la decadencia, sin poder siquiera aspirar a una arqueología: a la reconstrucción de una sociedad y su sistema cultural. O la ciencia y la técnica sirven para dar orden al entorno social y poner a la naturaleza al servicio de los hombres, o su legitimidad desaparece y su desempeño va en contra de ellas mismas (se vuelven sujetos de disrupción, de persecución).

Los sociólogos ya formados devinieron, algunos, en antropólogos (en busca de la matriz cultural de las bandas juveniles en las barriadas, por ejemplo...), pero la gran mayoría en historiadores (principalmente del Estado fuerte mexicano), o, lo que se convirtió en la gran moda, en "cientistas" políticos o politólogos. Y es que fueron estos últimos quienes tuvieron la fuerza, que se convirtió

luego en cinismo, de crear una nueva utopía de futuro: "el tránsito a la democracia".

En efecto, algunos países en el espacio occidental (en realidad los del centro de Europa donde la modernidad tuvo su cuna y otros bastante cercanos a ellos en el Mediterráneo y, por extensión migratoria, en el Cono Sur latinoamericano), dejaban atrás, hacia los años setenta y ochenta, situaciones de gran opresión derivada de armazones burocráticas, militares o partidistas. Actores sociales con algún privilegio derivado de la organización sindical, empresarial, de la educación o la cultura, etcétera, pactaron acuerdos de colaboración entre sí orientados en primer lugar a desalojar del centro de la escena a las fuerzas dictatoriales, para lo cual era necesario, en efecto, postergar las demandas de los amplios sectores menos favorecidos para generar una nueva institucionalidad o reconstruir la que ya existía con base en un tránsito pactado hacia una democracia política que pudiera, posteriormente, plantearse los problemas de la democracia sustantiva, los de la igualdad y el mejoramiento de las condiciones de vida.

Lo que apareció hacia el final de los setenta como un programa de emergencia contra las dictaduras, se convirtió en la ideología con que la ciencia política iba a recorrer, por lo menos, los decenios que restaban del siglo XX, y que terminaría siendo tan útil y compatible con el modelo neoliberal. Primero en España con Juan Linz y con Ludolfo Paramio, luego en Norteamérica con Phillip Shmitter y con Guillermo O'Donnell, haciendo la liga hacia el Cono Sur con Cardoso, Lechner, Garretón, Calderón y tantos otros, la "teoría de la transición pactada" recibió el espaldarazo de gobiernos y universidades, particularmente de las universidades norteamericanas y de la inmensa mayoría de las fundaciones, llevando a cabo proyectos en la región latinoamericana que coincidieron en sus postulados fantásticamente con grupos nacionales de influencia como Nexos y el CIDE en México, ILET y FLACSO en varios puntos del continente, CEBRAP en Brasil, etcétera.

Dos cuestiones parecen quedar ocultas por esta letanía de la transición pactada o de la "ruptura pactada", como se ha hecho llamar recientemente (intentando aparecer todavía como una propuesta de cambio y no de justificación del *statu quo*):

En primer lugar esconde una diferencia esencial: de acuerdo con el desarrollo del capitalismo en su estadio de globalización, el 80% de la población del mundo está condenado a la exclusión so-

cial, política y cultural y tal porcentaje se está ampliando. En consecuencia generar un *continuum* entre los países europeos como Polonia y Checoslovaquia (o de abrumadora inmigración europea, como Uruguay o Chile), y las sociedades profundamente desarticuladas (de alto mestizaje, demografía desbalanceada, movilidad territorial acelerada, urbanización salvaje...), significa ni más ni menos que regresar a las más elementales teorías de la modernización: las sociedades se pueden ordenar en una línea continua, las que llegan más tarde terminarán reproduciendo, con variantes, las formas económicas e institucionales de los polos originarios: la situación de España, con uno de cada cuatro habitantes en situación de exclusión y precariedad, no sería diferente, según esto, de lo que pasa en Perú o Guatemala, donde uno de cada cuatro participa en el consumo, el sistema político y la cultura; el problema es solamente de tiempos (según la teoría del tránsito), y un buen pacto entre las fuerzas sociales y políticas integradas, y hasta de élite, acortaría sin duda las distancias y los tiempos.

Increíblemente, hacia finales del siglo XX nos encontramos con una inocente, en apariencia, Teoría del Tránsito a la Modernidad o ¿qué es sino esto lo que está implicado en la noción de tránsito a la democracia, a un estadio futuro y mejor, parecido al tipo ideal europeo de representaciones políticas, vida pública, cooperación internacional con base en las ventajas comparativas, igualdad social y dominio desde la ciencia y la técnica del entorno natural en beneficio de los hombres en sociedad?

Todo eso suena muy bien sólo que, segundo ocultamiento, sus límites son los del modelo de desarrollo en que surge y que termina por justificar, es decir, los del capitalismo de la etapa de la globalización que implica que sólo algunos puntos del orbe pueden subsistir en una competencia mercantil a campo abierto, es decir, sin fronteras ni aranceles (apertura que los países más poderosos sólo respetan teóricamente) y que relega a la enorme mayoría de los hombres (cuatro de cada cinco) a la pobreza, a la destrucción de su cultura y a la exclusión. Por esto mismo no pueden llegar estos teóricos al extremo del cinismo de llamar a esta teoría "tránsito a la modernidad" limitándose a la noción de tránsito a la democracia. Y es que el problema de la exclusión es tan patente en la panorámica latinoamericana (y sin duda del Tercer y Cuarto Mundos), que las ciencias sociales han tenido que recurrir a la separación, en extremos ya injustificados, entre economía y sociedad y entre sociedad y política.

De la misma forma en que constatamos fehacientemente que en la etapa de la globalización lo que es bueno para la salud de los indicadores económicos se convierte en enfermedad para los indicadores sociales, así también, en lo que a la ciencia política se refiere, la búsqueda de la paz social, del tránsito pactado, ha podido ser presentada al margen del asunto de la igualdad social y de la erradicación de la pobreza y, lo que ya resulta alarmante, en contra incluso de esos objetivos, de lo que en el modelo de la modernidad fue concebido como la democracia sustantiva (social y política). Y es que la propuesta del pacto entre élites civilizatorias se está convirtiendo, a pesar de que sabemos que ya no vamos hacia una sociedad dentro del ideal de la modernidad, en el expediente desesperado para cerrarle el paso a los dos peligros inminentes del *statu quo*: por un lado, la amenaza del regreso de las dictaduras (y de los liderazgos personalizados en general) y la supresión de un sistema de representaciones que ya no puede con la multiplicación del desorden ("fujimorización", decimos hoy en América latina), y, por el otro lado, al peligro del desborde popular, un desborde que ya no se piensa masivo y a un mismo tiempo (imagen romántica de la revuelta popular, propia de órdenes culturales más estables), sino desarticulado y degenerativo también: descompuesto, individualizado o de pequeños grupos, de sucesos aislados y cotidianos pero constantes, en cada esquina de las barriadas y las colonias, en cada banco, en cada restaurante, en cada domicilio particular...

Así que, siendo más crudos, la propuesta de una llamada teoría del tránsito a la democracia, desde el momento en que se está llevando a cabo en una sociedad crecientemente desigual, está condenada a producir una separación entre sociedad y política: ante la desorganización y la pobreza crecientes, nos dice, opongamos pactos para la paz que permitan conservar los pocos o los muchos beneficios de los integrados, un sistema de pacificación entre integrados y excluidos en el que se evite la revuelta, y en el que cada quien se vaya haciendo cargo, bajo su responsabilidad y de acuerdo con sus medios, de su seguridad cotidiana. Y en efecto, quién lo duda, más vale todo esto que la violencia generalizada; más vale, aquí y allá, una violencia contenida, sorda, que la violencia abierta que borra de un golpe la fuerza de la cultura y de las normas, mucho más desgarradora moralmente, mucho más mortífera sin duda; más vale anomia, pobreza e incultura, que sangre, que puede ser incluso, claro está, nuestra sangre, la de los integrados que, en

estas sociedades, gozamos de amplios beneficios y, en primer lugar, de aprovechar el trabajo de los excluidos para facilitar todas nuestras actividades cotidianas, lo que se ha comenzado a traducir en cuadros domésticos como los de la India, en donde las familias con recursos disponen de choferes, cocineros y hasta de jardineros y sastres de planta cada vez más baratos o a cambio sólo del alimento.

En este marco no sólo la sociología se vuelve un recordatorio impertinente de algo que de todos modos no tiene remedio, sino que las protestas o manifestaciones que se oponen desde lo social a la exclusión en cualquiera de sus formas, son vistas como actos irracionales, como una irresponsable invocación de las dictaduras y del desbordamiento plebeyo. En ese contexto se inscriben, decíamos, declaratorias como las del grupo Nexos en torno a Chiapas, cuando postulan que: "Una de las consecuencias más graves del alzamiento armado del EZLN, es la de poner en cuestión el consenso que parecía haberse alcanzado entre todas las fuerzas políticas y sociales del país en relación a la vía pacífica y legal."¹ O bien las de Octavio Paz pidiendo "un 'hasta aquí' a los excesos verbales e ideológicos de algunos intelectuales y periodistas" y a las "numerosas e irresponsables apologías de la violencia". O en fin las de Aguilar Camín: condenando al periodismo por haber otorgado a "la violencia chiapaneca el perfil de una épica, más que de una desgracia".²

Llegamos pues a un punto medular en el que queda claro que no hay modernización posible para nuestras sociedades, al menos como nos ha sido propuesta en la ruta de los países industrializados de Occidente (con el avance ciego de la técnica y la integración transnacional obligada). Pero, sin establecer las cosas de manera tan tajante, es claro que en los próximos cien años, incluso si los cálculos modernizadores más optimistas imperaran, tendremos frente a nuestros ojos a una masa de excluidos equivalente a las cuatro quintas partes de la humanidad, y es claro, junto a esto, que esa masa de excluidos es cada vez más prescindible para el funcionamiento de los espacios y los agregados humanos enganchados al mundo globalizado del consumo y de la producción, aquel que

¹ "Chiapas: por una salida negociada y pacífica", Rolando Cordera, Gilberto Guevara Niebla, Pablo Pascual, Luis Salazar, Adolfo Sánchez Rebolledo, Raúl Trejo, José Woldenberg, *Perfil de la Jornada*, 10 de febrero, 1994.

² Héctor Aguilar Camín, *La Jornada*, 25 de marzo, 1994, p. 11.

realmente cuenta para las quinientas o las mil grandes firmas mundiales asociadas estrechamente con los organismos financieros más influyentes y con los gobiernos y los ejércitos de las grandes potencias.

Frente a un panorama así, ¡aunque sea por cien años!, es indispensable abandonar la teoría del tránsito hacia un estadio futuro mejor con base en la modernización científico-técnica en economías abiertas a la "competencia" internacional y comenzar a plantearnos las cosas con base en un modelo de doble lógica, mantener simultáneamente dos principios de racionalidad que hoy se presentan erróneamente como excluyentes uno frente a otro y que tenemos que aprender a compatibilizar: el que pasa por la modernidad y remata en la modernización salvaje llamada globalización, y el que aprovecha lo mejor de la modernidad y la técnica, establece un espacio defensivo que tiende al equilibrio y se aboca a la reconstrucción material y moral de las identidades colectivas en el ancho mar de los excluidos.

¿Cómo reconstruir un espacio semejante en el marco de las sociedades nacionales de hoy día y, sobre todo, en el marco de los estados autoritarios históricos como el mexicano? Es muy difícil; una nueva utopía en este sentido implica un cambio de plano, es decir, no establecer la lucha en los mismos espacios predeterminados y ocupados casi en su totalidad por el sistema dominante, con todos los recursos económicos y tecnológicos, nacionales e internacionales de su lado. En esa medida los acuerdos pactados entre élites sociales y políticas para lograr un sistema electoral más equitativo y mejores espacios para el embarcamiento de la democracia política, deben ser reconocidos como tareas de la mayor importancia pero sin perder de vista que son continuamente aprovechadas para justificar y fortalecer el sistema dominante y, más importante aún, sin olvidar que tales pactos establecen en la mayoría de los casos una gran tensión con los liderazgos y con los integrantes de las organizaciones y los movimientos sociales llegando al extremo de "vaciar hacia arriba" a sus vanguardias, hacerles perder contenido y abrir escisiones en el mundo de los excluidos; la batalla partidista parlamentaria, tal como se presenta hoy para los partidos social-populares como el PRD mexicano o el Partido del Trabajo brasileño, desemboca en una tensión insostenible para estas organizaciones, porque las obliga a mantener en un mismo espacio proyectos contrapuestos como son los acuerdos

pactados para la limpieza electoral, por un lado, y, por otro, las luchas sociales de los sectores más pobres que terminan a cada momento siendo masacradas por los regímenes neoliberales, crecientemente incapacitados para dar solución a esas demandas y obligados en primer lugar a mantener sus compromisos con los poderes transnacionales (en los próximos decenios, por lo pronto, o pagan la deuda o verán incautado el petróleo por Estados Unidos); las demandas de los movimientos y organizaciones sociales, frente a esto, pasan al último lugar.

Este cambio de plano cultural para enfrentar las necesidades de los excluidos y acercar, poco a poco, a los dos proyectos de vida social, no puede plantearse, pues, en términos de ocupar el lugar de quien tiene el poder nacional, tampoco por medio exclusivamente de pactos sociales, partidistas o parlamentarios de los incluidos ni, menos aún, por la vía de la confrontación armada y la toma del poder del Estado nacional, porque queda claro que la concentración de recursos del lado de la dominación transnacional no tiene hoy paralelo. Pensar, por otra parte, que un levantamiento generalizado, nacional o internacional, podría facilitar la solución de los problemas de esa enorme masa de desposeídos materiales y culturales ya no funciona más que como apocalipsis, como utopía negativa, y su solo planteamiento conduce, en efecto, a justificar el empleo exacerbado de los recursos cibernéticos de seguridad policiaca y militar desde el núcleo duro del poder.

Hablar de un cambio de plano cultural significa entonces otra cosa, significa sin duda revisar nuevamente vías de organización social abandonadas sin justificación en momentos históricos pasados, vías que no se plantean como objetivo la consecución armada, apocalíptica o parlamentaria del poder del Estado nacional; se trata de formas de solidaridad colectiva y de reconstrucción de las identidades societales, formas que sería ridículo encerrar en una definición porque dependen de infinidad de elementos propios de su entorno y de su historia. El objetivo entonces sería el desarrollo de una "ingeniería", con base en la experiencia vivida, de reconstrucción de las identidades colectivas convenientes o sustentables (en cada espacio de actividad económica, de fronteras geográficas, de herencia cultural, etc.), que establece autónomamente sus límites territoriales e identitarios (municipio, unión de ejidos, cooperativa, región étnica o culturalmente definida, universidad...).

Todo esto empuja naturalmente a revisar la idea de cooperati-

vismo en todas sus expresiones, desde las uniones de ejidos hasta las uniones barriales, pasando por los espinosos problemas de aquellas áreas de destrucción despiadada social y cultural en las periferias urbanas de las grandes ciudades, espacios llenos de resquemores, individualismo, vandalismo, lucha de todos contra todos; implica plantear el delicadísimo problema del desarrollo autosustentable, de hasta qué punto en cada unidad conviene una estrategia defensiva de cooperativas de consumo, de transporte, de preparación de alimentos, de producción para el autoconsumo, o hasta dónde hay que aprovechar, para ciertos productos, las ventajas comparativas del mercado, o incluso destinar todo a este último ámbito, etcétera.

La idea de utopía suena bien en este contexto, pero debemos recordar que está asociada a la noción de dificultad, de algo difícilmente alcanzable. Hay en todo el planteamiento, quién lo duda, una urgencia de reconstrucción de la comunidad. Esta reconstrucción está propuesta, en primer lugar, ante la degradación social, el individualismo anómico y el desmantelamiento de las solidaridades primarias en nuestros países, pero también está propuesta, inevitablemente, ante el surgimiento amplificado del sujeto consumista de alta escolaridad y gran información, propio de las sociedades desarrolladas de Occidente, y las élites del sureste asiático y de la periferia en general. De aquí surgen algunos problemas que subrayan la dificultad de la utopía en torno a la "reconstrucción de las identidades sustentables".

1] En primer lugar, ¿quién puede reconstruir o conservar espacios defensivos con límites culturales y viabilidad económica sustentable si la información de que dispone el público cada día, desde la televisión hasta la educación universitaria, niega y ataca una propuesta semejante?

2] En segundo lugar, ¿quién puede luchar contra la propia herencia cultural que traiciona a cada momento hasta a los más lúcidos dirigentes y críticos, a los constructores de las utopías posibles? Si en un extremo se vuelve difícil el ideal comunitario como resultado de la exaltación del sujeto de alto consumo mercantil, cultural e informático de las sociedades desarrolladas, en el otro extremo, la herencia cultural estatista que nos acompaña, atizada por el papel central del Estado en el ideal socialista, han vuelto confuso el itinerario para el pensamiento crítico y para las vanguardias, sobre todo en un país como México en donde la acción

social y sus dirigencias tienden inmediatamente al lugar del vértice, a ocupar el lugar del Estado nacional. Esta "propensión buropolítica", como le hemos llamado, se exacerba cuando los movilizados se dan cuenta de que solos no pueden contra el poder del tlatoani, un poder basado en la destrucción del "otro". Entonces la acción social, como lo mostramos varias veces en este texto, sirviéndonos de la imagen de "ley de hierro de la mexicanidad", tiende a la acumulación de fuerzas con otros movimientos y actores y el desenlace es siempre el mismo, un círculo vicioso: o pactan con las fuerzas del Estado o son desmanteladas por la violencia, la corrupción, las luchas intestinas (tan fáciles de provocar en alianzas tan amplias y tan poco consistentes). Pero en el otro extremo del razonamiento, las preocupaciones son también legítimas: cómo vivir en lo local, en lo regional, en los límites marcados por la identidad conveniente o sustentable, bajo el acecho perverso del poder total del señor de Aztlán y su alianza, hoy sin cortapisas, con los poderes transnacionales.

3] Tenemos en fin una tercera dificultad para la pretendida reconstrucción de las identidades sustentables: resulta que el adversario principal de los regímenes que pretenden llevar adelante las políticas globalizadoras está constituido ni más ni menos que por los grupos de "identidad dura" modernos o premodernos que van desde el sindicalismo, las cooperativas, los ejidos, las universidades, la exigencia de autonomía de los pueblos indios, las organizaciones barriales para la alimentación o el transporte, los tradicionales espacios creados por el Estado de bienestar en torno a la salud, la educación, etc. Por algo una de las más valoradas especialidades de los regímenes de la globalización es justamente la ingeniería desmanteladora, pulverizadora, de estos núcleos duros de la identidad colectiva, puesto que son los que oponen resistencias al libre tránsito de las mercancías producidas en la escala planetaria a costos irrisorios en campos de la muerte maquiladora. En esas condiciones una confrontación central de nuestra época, si no es que la confrontación principal de nuestra época, se establece entre esas fuerzas de la globalización y los intentos por mantener o reconstruir identidades colectivas sustentables. No se trata solamente, entonces, de una utopía inocente, sino de una propuesta sujeta al exterminio y a la persecución.

La idea de comunidad no tiene por qué estar asociada necesariamente con el tradicionalismo y, en el extremo, con la imagen

campesino-indígena tipo Juchitán o el zapatismo chiapaneco; es cierto que en el México roto, digamos en las extensas barriadas de las megalópolis, aceleradamente pobladas de manera heterogénea, resulta prácticamente imposible recrear una identidad compartida, pero eso no debe hacernos perder de vista la urgencia por romper la ley de hierro de la mexicanidad y construir una nueva cultura no estatal para los mexicanos.

Después de muchos años de recorrido sociológico mexicano y latinoamericano, nos encontramos ante la responsabilidad de proponer un camino paralelo y quizás alternativo al de la sociedad dominante, un camino basado en la utopía de reconstruir las "identidades sustentables" no sujetas a los ritmos de la tercera revolución científico-técnica, una preocupación por lo territorial, lo regional, lo comunitario...

BIBLIOGRAFÍA

- Acevedo, Jorge, "El nuevo papel de México en la región norteamericana: el caso de la industria automotriz", en Anguiano, *op. cit.*
- Aguilar Camín, Héctor, *La guerra de Galio*, México, Cal y Arena, 1991.
- Aguilar Zinser, Adolfo, "Los cambios en las relaciones globales México-Estados Unidos", en Anguiano, *op. cit.*
- Alba, Carlos, "La industrialización en Jalisco: evolución y perspectivas", en Guillermo de la Peña y Agustín Escobar, *Cambio regional, mercado de trabajo y vida obrera en Jalisco*, Guadalajara, El Colegio de Jalisco, 1986.
- Anguiano, Arturo (comp.), *La modernización de México*, México, UAM-Xochimilco, 1990.
- Arendt, Hannah, *Le système totalitaire*, París, Seuil, 1972.
- Arteaga, Arnulfo, "Innovación tecnológica y clase obrera en la industria automotriz", en Esthela Gutiérrez (coord.), *Testimonios de la crisis*, vol. 1, México, Siglo XXI, 1985.
- y Jordi Micheli, "El futuro del sindicalismo en la industria automotriz", *El Perfil de La Jornada*, 25 de agosto de 1986.
- y Jorge Carrillo, "Automóvil: hacia la flexibilidad productiva", *El Cotidiano*, núm. 21, enero-febrero de 1988.
- Baker, Stephen, "The magnet of growth in Mexico's North", *International Business*, 6 de julio de 1988.
- Barbosa, Fabio, "La izquierda radical en México", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 2, 1982.
- Barranco Chavarría, Alberto, "La escaramuza de los textiles", *La Jornada*, 30 de julio de 1991.
- Bar Din, Anne, 1990, ponencia inédita.
- Basáñez, Miguel, *La lucha por la hegemonía en México, 1968-1980*, México, Siglo XXI, 1981.
- Benería, Lourdes, "Subcontracting and employment dynamics in Mexico City", *The informal economy*, Baltimore y Londres, The Johns Hopkins University Press, 1989.
- Bennett, Vivianne, "Orígenes del movimiento urbano-popular mexicano: pensamiento político y organizaciones políticas clandestinas (1960-1980)", *Revista Mexicana de sociología*, núm. 3, IIS-UNAM, 1993.
- Birbaum, Pierre, "Mobilisations, structures sociales et types d'État", *Revue Française de Sociologie*, julio-septiembre de 1983.
- Boucher, Josyane, "La Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup)", en Sergio Zermeño y Aurelio Cuevas (comps.),

- Movimientos sociales, democracia emergente y sistema político en México*, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM, 1990.
- Boyer, Robert, *La flexibilité du travail*, París, La Découverte, 1986.
- Buck Morss, Susan, *Origen de la dialéctica negativa*, México, Siglo XXI, 1981.
- Bustamante, Jorge y Francisco Malagamba, *Bibliografía general sobre estudios fronterizos*, México, El Colegio de México, 1980.
- Canto, Manuel, "Las transformaciones de la cuestión gubernamental en México", en Anguiano, *op. cit.*
- Calderón, Fernando y Elizabeth Jelin, *Clases y movimientos sociales en América Latina*, Buenos Aires, Estudios CEDES, 1987.
- Calva, José Luis, "Posibles efectos de un Acuerdo de Libre Comercio México-Estados Unidos sobre el sector agropecuario mexicano", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, 1991.
- , *La Jornada*, 16 de noviembre de 1991.
- Cardoso, F.H. y E. Faletto, *Dependencia y desarrollo en América Latina*, México, Siglo XXI, 1969.
- Carrillo, Jorge, "La reconversión en la industria del automóvil", *El Cotidiano*, número especial 1, 1987.
- , "Mercados internos de trabajo ante la flexibilidad: análisis de las maquiladoras", en Bernardo González Aréchiga y José Carlos Ramírez, *Subcontratación y empresas transnacionales*, El Colegio de la Frontera Norte-Fundación Friedrich Ebert, 1990.
- y Alberto Hernández, *La industria maquiladora en México. Bibliografía, directorio e investigaciones recientes*, La Jolla, California, 1985.
- Carton de Grammont, Hubert, "El mercado de trabajo en el campo: unas reflexiones a partir de la lectura del libro *Portraits de Bahia*, de Hélène Rivière d'Arc", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 2, 1991.
- , "Algunas perspectivas del sector empresarial en el campo para el fin del siglo", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, 1991.
- Castells, Manuel y Alejandro Portes, "World underneath: the origins, dynamics and effects of informal economy", *The informal economy, op. cit.*
- Cavarozzi, Marcelo, "Politics: a key for the long term in Latin America", en W.C. Smith, C.H. Acuña y E.A. Gamarra (comps.), *Latin American political economy in the age of neoliberal reform*, New Brunswick, Transaction Books, 1994.
- Chesneaux, Jean, "La modernité monde", *Les Temps Moderns*, junio de 1988.
- Cordera, Rolando, "Los dolores del ajuste", *Cuadernos de Nexos*, núm. 9, abril de 1989.
- Córdova, Arnaldo, *La ideología de la Revolución mexicana*, México, Era, 1973.
- Corro, Salvador y Guillermo Correa, "La apertura comercial arruina ya al campo y a la industria", *Proceso*, núm. 728, 15 de octubre de 1990.
- Cortés, Fernando, "La Informalidad, comedia de equivocaciones", *Nueva Sociedad*, núm. 93, 1988.
- Cypher, James, "Mexico's export promotion policy: ¿Un nuevo patrón de

- acumulación?", VI Prof-Mex-ANUIES Symposium of U.S. and Mexican Universities, Mazatlán, Sinaloa, *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, 1991.
- De Agostini, Christine, *Éléments pour l'histoire de l'évolution des systèmes agraires des communautés de la région Chol, Chiapas, Mexique*, tesis de DEA, IEDES, París, 1987.
- De la Garza, Enrique, Raúl Corral y Javier Melgoza, "México, crisis y reconversión industrial", *Brecha*, núm. 3, 1987.
- , "Desindustrialización y reconversión en México", *El Cotidiano*, núm. 21, enero-febrero de 1988.
- , "Reconversión industrial y cambio en el patrón de relaciones laborales en México", en Anguiano, *op. cit.*
- , "Reconversión industrial y polarización del aparato productivo", en Garavito y Bolívar, *México en la década de los ochenta: la modernización en cifras*, cit.
- De Soto, Hernando, *El otro sendero: la revolución informal*, Lima, Instituto Libertad y Democracia, 1986.
- Díaz, Álvaro, "Tendencias de la reestructuración económica y social en América Latina", ponencia presentada en la conferencia "Social Change in Latin America: Toward the Year 2000", University of Maryland. En español: *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, 1994.
- Díaz-Polanco, Héctor, *Autonomía regional, la autodeterminación de los pueblos indios*, México, Siglo XXI, 1991.
- , *Etnia y nación en América Latina*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995.
- Dombois, Rainer, *La producción automotriz y el mercado de trabajo en un país en desarrollo: un estudio sobre la industria automotriz mexicana*, Internationales Institut für vergleichende Gesellschaftsforschung, Berlín, julio de 1985.
- Escobar Latapí, Agustín y Mercedes González de la Rocha, "Microindustria, informalidad y crisis en Guadalajara, 1982-1987", *Estudios Sociológicos*, vol. VI, núm. 18, 1988.
- Espinosa, María de Jesús, "Fuera de competencia mundial 25% de la planta productiva del sector textil", *La Jornada*, 4 de agosto de 1991.
- Fernández de Souza, Jorge, "Chiapas: la tierra y el poder", en colaboración con Julio Moguel, Sergio Zermeño, Armando Bartra, en *La Jornada del Campo*, 28 de marzo de 1995.
- Fernández Durán, Ramón, *La explosión del desorden*, Madrid, Fundamentos, 1993.
- Fernández-Kelly, Patricia y Anna García M., "Informalisation at the core: Hispanic women, homework and the advanced capitalist state", *The informal economy, op. cit.*
- Flenigan, James, "Mexico free-trade pact would help U.S.", *Los Angeles Times*, junio 13 de 1990.
- Foweraker, Joe y Anne Craig, *Popular movements and political change in*

- Mexico, Boulder y Londres, Lynner Publishers, 1990.
- Ganster, Paul, "Percepción de costos y beneficios de la migración mexicana en el condado de San Diego", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, 1991.
- y Alan Sweedler, 1990, "The United States-Mexican border region: security and interdependence", en Ochoa y Lorey, cit.
- Garavito, Rosa Alvina y Augusto Bolívar, *México en la década de los ochenta: la modernización en cifras*, México, UAM Azcapotzalco-El Cotidiano, 1990.
- García Mota, Víctor, *La globalización de la economía. El caso de México, sector primario*, mimeografiado, 1990.
- García Sáenz, Ricardo, "Los peligros de un SAR magnificado", *La Jornada Laboral*, 30 de noviembre de 1995.
- Garretón, Manuel Antonio (1986), "Transformación social y refundación política en el capitalismo autoritario", en Julio Labastida Martín del Campo (comp.), *Los nuevos procesos sociales y la teoría política contemporánea*, México, Siglo XXI-UNAM, 1986.
- Gillibert, César, *El imperio de los arcanos o los poderes invisibles*, tesis de doctorado, México, UAM-Xochimilco, 1995.
- González Aréchiga, Bernardo y José Carlos Ramírez, "Definición y perspectiva de la región fronteriza", *Estudios Sociológicos*, 7:23, 1990.
- , José Carlos Ramírez y Fanny Aguas Gómez, "Los servicios en la industria maquiladora y las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con E.U. y Canadá", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, 1991.
- Gordon M., David, "The global economy: new edifice or crumbling foundations?", *New Left Review*, núm. 186, marzo-abril de 1988.
- Grunwald, Joseph y Kenneth Flamm, *The global factory: foreign assembly and international trade*, Washington, D.C., The Brookings Institution, 1985.
- Guillén, Tonatiuh, *Tendencias políticas y crisis económica en tres ciudades del norte de México*, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, 1987.
- Gurza, Adrián, *La reestructuración de lo público: el caso Conasupo*, México, UNAM, ENEP Acatlán, 1994.
- Habermas, Jürgen, *Legitimation crisis*, Boston, 1973.
- Harris, Nigel, "Relaciones económicas México-Estados Unidos en el contexto mundial", en Anguiano, *op. cit.*
- Harvey, Neil, "La lucha por la tierra en Chiapas: estrategias del movimiento campesino", en Sergio Zermeño y Aurelio Cuevas (comps.), *Movimientos sociales en México*, México, UNAM, 1991.
- , "Las lecciones de Chiapas", *Ojarasca*, núm. 37, octubre de 1994.
- Hernández, Hilda, *Los campesinos de La Laguna: reconversión productiva y nuevo desorden social y político*, tesis de maestría, México, Instituto José María Luis Mora, 1995.
- Hernández Laos, Enrique y Edur Velazco, "Productividad y competitividad

- de las manufacturas mexicanas, 1960-1985", en *Comercio Exterior*, vol. 40, núm. 7, julio de 1990.
- Iglesias, Norma, "El empleo de mujeres en la industria maquiladora", *Boletín Informativo sobre Asuntos Migratorios y Fronterizos*, núms. 8-9, enero-marzo de 1983.
- , *La flor más bella de la maquiladora*, México, SEP-Cefnomex, 1985.
- Jenkins, Rhys, "La internacionalización del capital y los países semiindustrializados: el caso de la industria automotriz", en Isaac Minian (comp.), *Transnacionalización y periferia semiindustrializada II*, México, Libros del CIDE, mayo de 1984.
- Jenner, Stephan, "Maquiladoras, un panorama crítico desde la frontera", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, 1990.
- Jiménez Álvarez, Ana Victoria, Ma. Eugenia Santillán et al., "La conciencia puntada a puntada. Testimonios sobre las costureras de México", *Nueva Sociedad*, núm. 90, 1988.
- Johnston Hernández, Beatriz, "Cierre de fábricas y desempleo de mexicanos en Estados Unidos", *Proceso*, núm. 712, 25 de junio de 1990.
- Klain, Emilio y Tokman E. Víctor, "Sector informal: una forma de utilizar el trabajo como consecuencia de la manera de producir y no viceversa. A propósito del artículo de Portes y Benton", *Estudios Sociológicos*, vol. VI, núm. 16, 1988.
- Korzeniewics, Roberto, "The deepening differentiation of states, enterprises, and households in Latin America" (proyecto) University of Maryland. En español: *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 4, 1994.
- Kronhauser, W., *The politics of mass society*, Illinois, The Free Press of Glencoe, 1959.
- Kruijt, Dirk, "Guerras étnicas y cogobierno militar", *La Jornada Semanal*, 1994.
- Labastida, Julio (coord.), *Hegemonía y alternativas de cambio en América Latina* (Seminario de Morelia, 1980), México, Siglo XXI, 1985.
- Laurell, Asa Cristina, "Reestructuración productiva y salud obrera", *El Cotidiano*, núm. 20, noviembre-diciembre de 1987.
- , "El proceso de privatización en salud: el caso de México", México, UAM-Xochimilco, mimeografiado, 1992.
- , "Una contrarreforma en fast track", *La Jornada Laboral*, 30 de noviembre de 1995.
- Lautier, Bruno, "L'analyse du secteur informel en Amérique Latine: hypothèse et problèmes méthodologiques", IEDES, Université de Picardie, mimeografiado, 1983.
- Lechner, Norbert, "El debate sobre Estado y mercado", *Nueva Sociedad*, núm. 121, Caracas, septiembre-octubre de 1992.
- Lingart, Robert, *Le sucre et la faim*, París, Minuit, 1989.
- Lipietz, Alain, "De la nouvelle division internationale du travail à la crise du fordisme périphérique", CEPREMAP, Working Paper No. 8225, 1982.
- Lorey, David, "The emergence of the US border region in the twentieth

- century", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, 1991.
- Lowenthal, Abraham, *Partners in conflict. The United States and Latin America*, Baltimore y Londres, The Johns Hopkins University Press, 1988.
- Lusting, Nora, artículo aparecido en *Nexos*, núm. 128, agosto de 1988.
- Madison, A. y B. van Ark, *Comparisons of real output in manufacturing*, Working Papers, The World Bank, abril de 1988.
- Martínez Esthela, Luciano Concheiro, Luis Arturo García, Beatriz Canaval y Arturo León, "Reorganización del capital: Estado y campesinos en México", en *Anguiano*, *op. cit.*
- Martínez, Óscar, Albert E. Utton y Mario Miranda (comps.), *One border two nations: policy implications and problem's resolutions*, México, PROF-MEX-ANUIES-Host Institution, 1986.
- , "Los habitantes de la frontera México-estadounidense", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, 1991.
- Marcos (subcomandante), "Chiapas: el Sureste en dos vientos, una tormenta y una profecía", *La Jornada*, agosto de 1994.
- , entrevista con Carmen Lira, *La Jornada*, 25-26 de agosto de 1995.
- , declaración política aparecida en *La Jornada*, 27 de agosto de 1995.
- Matos Mar, José, *Desborde popular y crisis del Estado: el nuevo rostro del Perú en la década de 1980*, Serie Perú Problema núm. 21, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1984.
- Mazzera, Jaime, "Abundancia como efecto de la escasez", *Nueva Sociedad*, núm. 90, 1987.
- Menéndez, Eduardo, "Continuidad y discontinuidad del modelo sanitarista", en Ignacio Almada Bay (coord.), *Salud y crisis en México*, México, Siglo XXI, 1990.
- Moguel, Julio, *Los caminos de la izquierda*, México, Juan Pablos, 1987.
- , "Chiapas: la tierra y el poder", Julio Moguel, Sergio Zermeño, Armando Bartra y Jorge Fernández de Souza, *La Jornada del Campo*, 28 de marzo de 1995.
- Monsiváis, Carlos, *Entrada libre. Crónicas de una sociedad que se organiza*, México, Era, 1987.
- Montemayor, Carlos, *Guerra en el paraíso*, México, Diana, 1991.
- Moore, Barrington, *Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia. El señor y el campesino en la formación del mundo moderno*, Barcelona, Península, 1973.
- Moscovici, Serge, *L'âge des foules*, París, Fayard, 1981.
- Núñez, Óscar, *Innovaciones democrático-culturales del movimiento urbano-popular*, México, UAM, 1990.
- Ochoa C., Enrique y David Lorey, "U.S.-Mexico border briefings in Los Angeles and Tijuana", Readings, UCLA Program on Mexico, 1990.
- O'Connor, James, *The fiscal crisis of the state*, Nueva York, St. Martin's Press, 1973.
- O'Donnell, Guillermo, "The State, democratization, and some conceptual problems", en W.C. Smith, C.H. Acuña y E.A. Gamarra (comps.), *Latin*

- American political economy in the age of neoliberal reform*, New Brunswick, Transaction Books, 1994.
- Paris, María Dolores, *Crisis e identidades colectivas en América Latina*, México, Plaza y Valdez-UAM, 1990.
- Partant, François, *La fin du développement*, París, Maspero, 1983.
- Pastor, Robert y Jorge Castañeda, *Limits to friendship, the United States and Mexico*, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1988.
- Pécaut, Daniel, "Violencia y política en Colombia", en *Democracia, etnicidad y violencia política en los países andinos*, Perú, Instituto Francés de Estudios Andinos e Instituto de Estudios Peruanos, 1993.
- Pérez Díaz, Víctor, *La primacía de la sociedad civil*, Madrid, Alianza Editorial, 1993.
- Piore, Michel J. y Charles F. Sabel, *The second industrial divide: possibilities for prosperity*, Nueva York, Basic Books, 1984.
- Portes, Alejandro y Lauren Benton, "Desarrollo industrial y absorción laboral: una reinterpretación", *Estudios Sociológicos*, vol. V, núm. 13, 1987.
- , Manuel Castells y Lauren Benton A., *The informal economy*, *op. cit.*
- , "The policy implications of informality", *The informal economy*, *op. cit.*
- Quintero Ramírez, Cirila, "Sindicalismo subordinado e industria maquiladora en Tijuana", *Estudios Sociológicos*, núm. 21, septiembre-diciembre de 1989.
- Reynolds, Clark y Carlos Tello, *U.S.-Mexico relations. Economic and social aspects*, Stanford, California, Stanford University Press, 1983.
- Rojas, Rosa, artículo aparecido en *La Jornada*, 7 de septiembre de 1995.
- Salazar, Luis, "La democracia y la idea de revolución", *Cuadernos de Nexos*, mayo de 1989.
- Sánchez, Consuelo, *La conformación étnico-nacional en Nicaragua*, Premio Fray Bernardino de Sahagún, México, INAH, 1994.
- Sánchez, Roberto, *El medio ambiente como fuente de conflicto en la relación binacional México-Estados Unidos*, Tijuana, Colegio de la Frontera Norte, 1990.
- , "La negociación de conflictos ambientales entre México y los Estados Unidos", *Frontera Norte*, vol. 1, núm. 1, 1988.
- , "Condiciones de vida de los trabajadores de la maquiladora en Tijuana y Nogales", *Frontera Norte*, núm. 4, julio-diciembre de 1990.
- Schedler, Andreas, "Under- and over-institutionalization" (proyecto), Institute of Advanced Studies, Viena, 1993.
- Sierra, Gerónimo de, "Sobre los problemas de (in)governabilidad en el proceso de desarrollo uruguayo", en *Políticas de Estado: estrategias de mediano y largo plazo*, Montevideo, Instituto Fernando Otorgues, 1993.
- Sklair, Leslie, *Assembling for development, the maquila industry in Mexico and the United States*, Boston, UNWIN-HYMAN, 1989.
- Skocpol, Theda, *States and social revolution*, Cambridge University Press, 1979.
- Solano Flores, Mario Delfino, "La expansión de la industria maquiladora en una economía regional: un caso de enfermedad holandesa", en

- González Aréchiga y Ramírez, *op. cit.*
- Soria M., Víctor y Guillermo Farfán, "El deterioro del bienestar social y de la salud en México", en Esthela Gutiérrez Garza (coord.), *Testimonios de la crisis: los saldos del sexenio (1982-1988)*, vol. 4, México, Siglo XXI, 1990.
- Standing, Guy, 1989, "The 'British experiment': structural adjustment or accelerated decline?", *The informal economy, op. cit.*
- Stoddard R., Ellwyn, *Maquila. Assembly plants in Northern Mexico*, El Paso, The University of Texas, 1985.
- Tello M., Carlos, "El combate a la pobreza, lineamientos programáticos", *El Nacional*, 28 de septiembre de 1990.
- Tilly, Ch., *From mobilisation to revolt*, Rading, Addison-Wesley, 1978.
- Tironi, Eugenio, "Para una sociología de la decadencia", *Proposiciones*, núm. 12, Santiago de Chile, Instituto Sur, 1986.
- , "Pobladores e integración social", *Proposiciones*, núm. 14, 1987.
- Tokman, Víctor, "El imperativo de actuar. El sector informal hoy", *Nueva Sociedad*, núm. 90, Caracas, 1987.
- Toledo, Víctor M., "Modernización y reconversión ecológica", *La Jornada Semanal*, 18 de noviembre de 1990.
- Torres, Cristina, "Los procesos de privatización en los servicios de salud en América Latina: redefiniciones de la relación público-privado", Programa de Desarrollo de Políticas de Salud, Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 1992.
- Touraine, Alain, *La parole et le sang. Politique et société en Amérique Latine*, París, Éditions Odile Jacob, 1988.
- , "La centralidad de los marginales", *Proposiciones*, núm. 14, Santiago, 1987.
- Urrutia, Alonso, Jesús Aranda y Candelaria Rodríguez, en *La Jornada*, 15 de marzo de 1995.
- Venegas Aguilera, Lilia, "A veinte años de maquilar: las obreras de la industria maquiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua", México, ENAH, tesis de maestría, 1988.
- Villasante, Tomás, *Las democracias participativas. De la participación ciudadana a las alternativas de la sociedad*, Madrid, Hoac, 1995.
- Warman, Arturo, "Presencia de la pobreza", *Cuadernos de Nexos*, núm. 8, marzo de 1989.
- Whitehead, Laurence, "Prospects for a 'transition' from authoritarian rule in Mexico", en Ma. Lorena Cook, Kevin Middelbrook y Juan Molinar, *The politics restructuring*, Center for U.S.-Mexican Studies, San Diego, University of California, 1994.
- Wilkie, James, "El vendedor de retretes", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 2, 1990.
- Wittom, Alain, Informe al FMI sobre la Economía Mexicana, citado en *La Jornada*, 23 de abril de 1995.
- Zapata, Francisco, "Los dilemas de la modernización", *El Cotidiano*, núm. 21, enero-febrero de 1988.

- , "La evolución del empleo público en México", *El Cotidiano*, núm. 25, septiembre-octubre de 1988.
- Zepeda Miramontes, Eduardo, "La frontera norte y el Tratado de Libre Comercio: impacto y desarrollo", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 3, 1991.
- Zermeño, Sergio, *Imperialismo y desarrollo capitalista tardío: una crítica a la teoría de la dependencia*, México, UNAM, 1979.
- , "Hacia una democracia como identidad restringida: sociedad y política en México", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 2, 1987.
- , "El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden", *idem*, núm. 4, 1989.
- , "Los intelectuales y el Estado en la década perdida", *idem*, núm. 3, 1990.
- y Aurelio Cuevas (comps.), *Movimientos sociales, democracia emergente y sistema político en México*, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM, 1990.
- , "Desidentidad y desorden: México en la economía global y en el libre comercio", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 1, 1991.
- , "La derrota de la sociedad", *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 2, 1993.
- , "Los hijos del libre comercio", *Pretextos*, núm. 7, Lima, 1995.